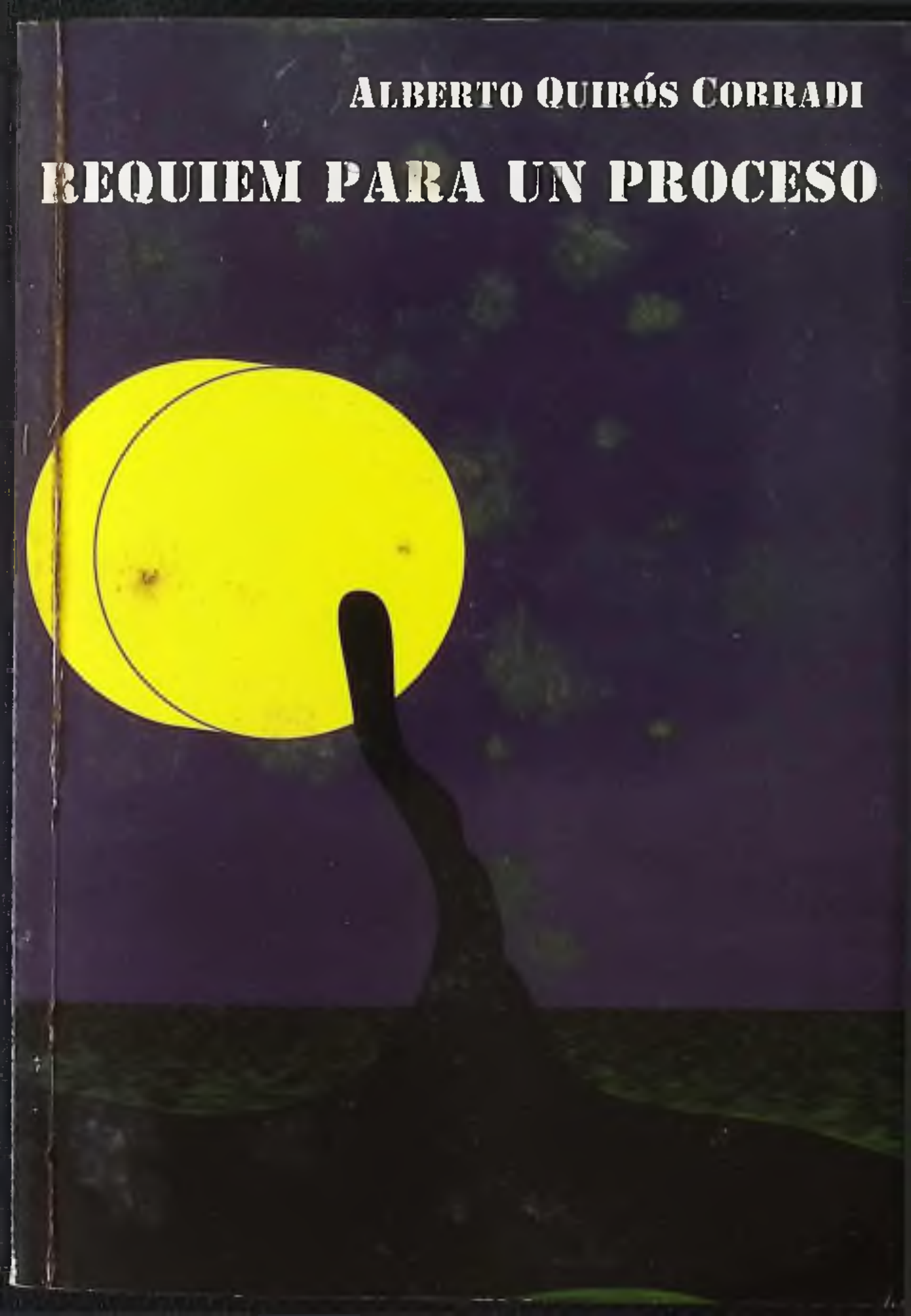
ALBERTO QUIRÓS CORRADI

REQUIEM PARA UN PROCESO



REQUIEM PARA UN PROCESO

Alberto Quirós Corradi

Agradecimiento:
Esta publicación fue posible gracias al patrocinio
del **HOTEL TAMANACO C.A.**

Copyright 1996
Diseño de la portada: Tibisay Pardo
Deposito Legal: ISBN 980-07-3635-2
Impreso en los talleres de la Editorial TEXTO **C.A.**
Printed en Venezuela

Contenido

PROLOGO ix

PETROLEO

REQUIEM PARA UN PROCESO 3
LA USURPACION DE LO PUBLICO 11
LA APERTURA PETROLERA (I) 13
LA APERTURA PETROLERA (II). *La nueva nacionalización.* 21
LA APERTURA PETROLERA (III). *Fórmulas para un Dogma.* 37
LA APERTURA PETROLERA (IV). *Cinco proposiciones concretas.* 49
«PAREDÓN DE PAPEL» Y LA APERTURA PETROLERA. 57
P.D.V.S.A. EN LA ENCRUCIJADA. *XX Aniversario.* 61

ECONOMIA

EN BUSCA DEL «NORTH» PERDIDO 73
LA PRIVATIZACION DE LA C.V.G (II) 81
LA PRIVATIZACION DEL ALUMINIO 93
LOS PROBLEMAS DE FONDO 103
LA AGENDA VENEZUELA 111
LA AGENDA VENEZUELA (II) 123
DEL CONVENIO AL CONFLICTO. *El compromiso antinflacionario.* 133
DOS RECOMENDACIONES 145
EL DES-CONTROL DE CAMBIO 153
TERNA DE OPCIONES. *El Gobierno despues del F.M.I.* 161
EL AUMENTO DE LA GASOLINA 171

POLITICA

TORNEO DE INSENSATECES 181
EL DISCURSO 191
ALEJANDRO IZAGUIRRE 201
TRANSACCIONES Y RECIPROCIDADES. *La corrupción.* 203
MI VECINO EL CULPABLE 211
LA PERTINENCIA INTELECTUAL 219
LOS PELIGROS DE LA RACIONALIDAD 227
CAMBIO DE GABINETE 235
EL GRAN ACUERDO NACIONAL 245
¿ENEMIGO DE LA PATRIA?. *El Informe del Contralor.* 253

DEMOCRACIA A LA MEDIDA (II) 265
EL OTRO LADO DE LA INTENCION 275
EL BUEN USO DEL CONFLICTO 283
EL NUEVO GABINETE 291
LA DES-ABSTENCION ELECTORAL 299
LA DES-ABSTENCION ELECTORAL (II) 307
LAS OPCIONES DEL FRACASO II 315
LAS SIN RAZONES DEL GOLPE II 325
SI VIVIERA ALLI, VOTARIA POR... 335
CARTA A RAFAEL CALDERA 343
LAS VACACIONES DE ACCION DEMOCRATICA. *Las elecciones 1995.* 351
LAS VACACIONES DE ACCION DEMOCRATICA (II) 359
LOS PREMIOS CRISIS 1995 367
1996: LA BOLA DE CRISTAL 379

INSTITUCIONES

LA NACIONALIZACION DE LA EDUCACION 393
EL «PRESS CLUB» EN COLOMBIA. *Una noche en Cartagena* 407
C.A.P. EN EL «PRESS CLUB» 419
CUBA EN LA MIRA 425

INDICE ANALITICO 431

PROLOGO

Prólogo

Alberto Quirós Corradi pertenece a esa especie casi extinta de "toeros" de la historia, como Aristóteles o Leonardo, cuando los hombres sentían que podían saberlo todo. Al descreer de su capacidad de sintetizar, de ver globalmente ese mundo cada vez más complejo, el hombre-científico cede tal potencial a poetas y sacerdotes. Divide la realidad en pedacitos y con la mayor racionalidad intenta ir al fondo de cada uno de ellos buscando con el microscopio una verdad que nunca encontrará, porque la dejó a sus espaldas.

Alberto es un ser que viene del futuro, de cuando los hombres recuperaron la capacidad de síntesis o sea el espíritu, que trasciende la realidad material. Se empeña en halar a sus compatriotas hacia una visión superior, tozuda y esforzadamente, escalón por escalón, semana tras semana. Ejercita el Oficio del Sabio, que al decir de Sto. Tomás de Aquino, sólo se hace por amor a los demás. Propone una visión integral en un país donde cada asunto es autónomo, donde no existe la síntesis natural que producen los procesos económicos, porque cada quien se alimenta independientemente de la ubre petrolera, en una conducta autista negatoria de los demás. Al no existir la trama de interdependencias que caracteriza la economía moderna –esa estructura multidimensional que impulsa el flujo cooperativo-creativo del sistema– cada agente se cierra tenazmente en su esclerosis autonomista: ministerios, universidades, empresas públicas, sindicatos, seguro social. La democracia resulta un banal simulacro limitado a lo político. El propio Estado, divorciado (enemigo) de la Nación. Según el Ministro de Educación, la mayor parte de su inmenso presupuesto autoalimenta la voraz burocracia interna (lo que no es excepción sino rigurosa regla). El horizonte se acorta, las soluciones se hacen puntuales, cada ente se amuralla en defensa de sus anquilosados privilegios. En

ese fantástico país de feudos que es la Venezuela de hoy, Alberto se empeña en tender vías de comunicación, construir puentes y derribar murallas.

No le importa que nuestra sociedad analítica vea a los "toeros" con suspicacia, porque él ha logrado volar, y desde arriba descubre perspectivas de conjunto que pocos ven. Las cosas que ve, las procesa e interpreta. Las relaciona con entendimiento e imaginación. El número de contactos en su actividad neurónica revela una formidable inteligencia, que utiliza a fondo con evidente gozo. Un hilo sutil puntea y enlaza los distintos temas, que al leerlos en conjunto conforman un tejido de sorprendente riqueza. Ese mágico hilo que cose la realidad es el petróleo.

Alberto es antes que nada petrolero. Nació petrolero, por sus venas corre petróleo. Todo lo que escribe huele a petróleo inflamable. Es petrolero en un país acomplejado, culpable de ser petrolero, donde el petróleo es maldición bendita, excremento del diablo del que todos gustosamente se alimentan. La propuesta que se lee entre líneas en toda la obra de Alberto es poderosa por lo simple: seamos un país petrolero de verdad, o sea una nación productora y no rentista, superando así paralizantes aprensiones y prejuicios. Paradójicamente, para ser un país petrolero debemos reemplazar el PetroEstado estimulador del funesto rentismo , por un Estado armónicamente asociado a una **sociedad petrolera**, signada en la producción, tejedora de la trama integradora de la Nación, recuperadora de la alegría de vivir.

El petróleo me unió a Alberto en un especie de destino común, al menos en una común obsesión:

El jueves 23 de junio de 1994, Alberto Quirós Corradi publica en su columna de El Universal un kilométrico artículo sobre la privatización de Pdvsa cuyo eje era mi ponencia de abril de 1993 al Encuentro de la Sociedad Civil en la Universidad

Católica Andrés Bello, en el que proponía repartir parte de las acciones de Pdvsa, CVG y otras empresas del Estado entre todos los venezolanos, como el único mecanismo idóneo para devolver sus fueros a la sociedad civil en un marco de equidad y eficiencia. Con mi ponencia a cuestas había recorrido y visitado muchas casas y oficinas, gubernamentales y privadas, civiles, religiosas y políticas. Despertaba gran consideración y alguna velada pena ajena aquel arquitecto hablando de petróleo y sociedad con tanto empeño y convencimiento. Mi página dominical en El Diario de Caracas machacaba sobre el mismo tema con éxito limitado a mis amigos. Aquel radiante 23 de junio Venezuela comenzó a considerar la idea con creciente respeto. Quirós le acababa de otorgar carta de credibilidad, que fue reforzando en sucesivos artículos. Economistas serios dejaron entonces el temor al ridículo, comenzando a analizar y enriquecer la propuesta que hoy está en la palestra pública.

Esta mágica metamorfosis de una idea es producto de la formidable capacidad de encantamiento de la columna de Alberto Quirós, de lo cual doy testimonio vivencial.

Quirós es cronista de una Venezuela posible, de un proyecto subyacente de país que va madurando en su espíritu y en muchos espíritus que se interconectan mediante una especie de trama inteligente de polos mutantes. A través de esa malla intelectual –la red creativa– se va tejiendo el **proyecto de país**, que de alguna manera orienta a quienes tienen la misión de concretarlo día a día. Esa red posee múltiples polos conformados por muchas personas y grupos que como estrellas centellean en la oscuridad, se opacan algunos y otros aumentan su resplandor, mientras el flujo polidireccional continúa transportando inspiración y creatividad. Quirós es uno de esos polos que siempre resplandece, que ilumina la trama en penumbra, que crea, propone, discute, critica, que alienta optimismos y rechaza desesperanzas, que recibe regaños con sabiduría y buen humor, incólume, incansable,

inagotable.

El historiador futuro deberá apelar a los artículos de Quirós –y agradecerá los libros que los componen, como el presente– para entender este intrincado proceso de gestación de la Venezuela del siglo XXI, que se viene fecundando a través de la red. Deberá saber leer entre líneas para descubrir el palpitar angustioso o esperanzador, semana por semana de esta especie de cuento fantástico que es la Venezuela de nuestro tiempo. Particularmente el 1995 que nos ocupa, año crucial, clímax de la tortuosa trama. Mientras se acentuaban los controles y el país se trancaba en medio del torbellino financiero y político que sacudió el sistema de lealtades, se gestaba creativamente y con la misma dinámica, su contraparte de apertura al mercado y a la modernización como capítulo inmediato del Proyecto. En el 96 se comienzan a sentir dolores de parto en la propia combinación de embriaguez, tormento y júbilo.

Releer los artículos de Quirós de corrido es una experiencia distinta a la lectura semanal, en la que uno participa como testigo o parte de la trama. La visión global del proceso permite al lector remontarse y descubrir ciertas claves que enlazan los distintos asuntos, constantes que se repiten, pronósticos que se cumplen o que fallan, o sea entender la historia por dentro.

Por eso aquel historiador del futuro podrá descubrir aquí la otra historia, la que se adelanta a la realidad, la de los procesos de gestación de las ideas, las reacciones, aceptaciones y rechazos culturales. El estará en mejor condición de entendimiento que nosotros porque verá la película completa y podrá verificar si efectivamente estábamos viviendo momentos de parto o si todo resultó una ilusión de preñez desvanecida con el boom petrolero.

¡Qué bueno hubiera sido tener un Quirós en la gesta independentista, que nos habría puesto en dimensión humana a Miranda, Roscio y Bolívar, en las entrelíneas de sus aconteceres!

Otra vivencia común me une entrañablemente a Alberto:

En abril de 1995, en medio de la desazón de la crisis financiera, Carlos Bernárdez, diligente presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, quizá algo frustrado por el enredo del proceso privatizador, se interesó por el tema Capitalización Popular, invitándonos a Erik Ekvall, Michael Rowan, Alberto Quirós y a mí a integrar un equipo ad-honorem donde discutir ideas, por encima de aquella fastidiosa trama que lo abrumaba ¿Dónde está la clave para salir de este embrollo? En una de las amenas y sobrias reuniones-almuerzo, (3 de mayo) Bernárdez nos conminó a proponer algo concreto e inmediato. Como si lo hubiésemos largamente preparado le propusimos: traigamos a Douglas North, el Premio Nobel asesor de Vaclav Klaus para la capitalización popular en la República Checa.

"**Hecho, Venezuela por fin encontrará su North**". La risa consecuente a la inspirada ocurrencia de Bernárdez aumentó el nivel de nuestras palpitaciones: ¿estaríamos de verdad en el momento histórico de la fecundación?

Como premonitoriamente, a través de nuestras columnas periodísticas, Alberto y yo habíamos presentado a la opinión pública la figura de North. Por otra parte, mi hijo Francisco, entusiasta seguidor de North –con quien había establecido buena relación personal durante sus estudios de Master en Economía– me había sugerido proponer su contratación como asesor. Aunque su reciente éxito como consejero de Fujimori abonaba la idea, no imaginábamos tan buena acogida.

Los acontecimientos se precipitaron. Francisco contactó a North, Ekvall lo precisó y arregló su inmediato encuentro con Bernárdez, Rowan y él mismo en Nueva York, donde se inició el cálido encuentro de North con Venezuela. Se planeó allí la ida de Ramón Espinasa y Osmel Manzano (Pdvsa) junto con mi hijo Francisco a visitarlo –según su pedido– para compenetrarse de la situación venezolana. Pasaron tres fructíferos días en su casa de vacaciones cercana al lago de Michigan.

North se interesó grandemente en el "caso" venezolano, oportunidad única para probar sus teorías. No hay otro país en el mundo contemporáneo donde se ponga tan en evidencia la importancia de lo ideológico-cultural, del sistema de incentivos y de las instituciones existentes para impulsar o frenar los procesos económicos. En nuestro caso coincidían los tres aspectos en su manifestación más negativa. Una vez identificadas las causas primarias de nuestros pesares, será posible su corrección.

La conferencia de North el 3 de agosto en el auditorio del Banco Central –pleno de principales personalidades de la vida nacional– fue de una sorprendente sencillez. Tanta que algunos se preguntaban si habría valido la pena el esfuerzo para oir "lo que ya sabemos todos los economistas". Hacer más eficiente la educación, mejorar el sistema de justicia, definir los derechos de propiedad, disminuir los costos de transacción, revisar las instituciones... las mismas denominaciones, pero ¡qué distinto el contenido! Cuando habla de derechos de propiedad (property rights) no se refiere a la propiedad física sino al fundamento del derecho (**¿A quién pertenece el petróleo?**) para diseñar y construir sabiamente el nuevo sistema en la eficiencia y la equidad. También nos ofrece los instrumentos: **hay que recrear la matriz institucional de incentivos que promueva la creación de riqueza en lugar de la distribución de la renta**.

Efectivamente, todos sabíamos de la bondad de los incentivos para el logro de objetivos puntuales, pero –excepto para el pequeño grupo de conocedores de North, que lo mantenían en secreto– descubrir la "matriz de incentivos que gobierna la sociedad" como instrumento de análisis, como herramienta de entendimiento y cambio, fue una novedad cultural, que inspiró muchos discursos y escritos posteriores. El análisis del control de cambio bajo esta óptica demostró que las aberraciones a que condujo no eran sino el producto natural (la

conducta racional de los actores) de los incentivos creados. No puede depender todo de la designación de hombres preclaros y honestos en los que la sociedad deposita su confianza. El sistema de incentivos de los políticos y gobernantes debe estar orientado en el camino correcto,premiando la toma de decisiones eficientes para el largo plazo.

El actual incentivo de los políticos conduce a maximizar la renta petrolera mientras están en el poder, aunque ello no necesariamente coincida con el interés de los ciudadanos. Su comportamiento "racional" no favorecerá la inversión de largo plazo ni la eficiencia empresarial sino la renta que permita alimentar el gasto público en su corto horizonte. Orientar los incentivos en la dirección correcta significa extender la propiedad de las empresas a los ciudadanos para que el interés de los políticos se asocie al interés a largo plazo del país. Estos aspectos constituyen el tema central de los artículos de Quirós.

En sabio gesto animador del proceso, Bernárdez cedió al Ministro de Hacienda Luis R. Matos Azocar la conducción de la relación con North, desarrollándose entre ambos una cálida y prometedora comunicación personal. Hasta el lenguaje de Matos fue influido por North (hay que cuidar los costos de transacción, revisar el sistema de incentivos) lo que permite presumir que muchas de las nuevas medidas de apertura tienen que ver con sus planteamientos, que a su vez el Ministro de Cordiplan Teodoro Petkoff, asumió con su genio y energía. Es obvio que el flamante **Programa de Participación Ciudadana** en las acciones de CANTV y las empresas de Guayana –que contempla la venta de acciones "a descuento" a los venezolanos– es producto directo de su propuesta. Días después de anunciado el programa, el Ministro de Comunicaciones, Gral. Orozco Graterol declaró cándidamente:

"Ahora sí hay que cumplir a cabalidad el contrato con CANTV, subirle la tarifa y pagarle la deuda, porque eso hará

subir sus acciones en la bolsa"

Típico producto del esquema "northiano" de incentivos. No es difícil imaginarse cómo serían hoy Edelca, Cadafe, Sidor o la propia Pdvsa de haber sido impulsadas por incentivos de este tipo.

North narró en privado su experiencia como asesor de la República Checa en materia de privatización. No se trata sólo de vender las acciones ("vouchers" negociables) muy baratas al pueblo para ampliar la base accionaria. Allí fue un error venderlas –aunque a bajísimo precio– porque se dejó afuera justamente al sector más necesitado de ayuda y clave para imbricar la sociedad a una economía en proceso acelerado de desestatificación.

"Ustedes –que no necesitan el dinero– tienen una oportunidad única de resolver sus problemas de un solo golpe, **transformando las empresas estatales en públicas o nacionales a través de la capitalización popular**, o sea distribuyendo gratuitamente las acciones a los ciudadanos. Así los políticos se pondrán automáticamente del lado de los accionistas, que son sus votantes, lo que significa promover la eficiencia y cuidar el valor de mercado de las empresas a través de su gestión gubernamental".

Las ideas de North parecieran impregnar todos los escritos de Quirós (ver **"En busca del North perdido"**, página 73) . Justamente la cuestión de **lo público y lo que es del Estado** es una constante en sus escritos, el eje articulador de su temática polifacética:

"*Ya lo dijo Adam Smith, la verdadera diferencia no está entre lo público y lo privado. La diferencia está entre lo público y lo que es del Estado. Entendiéndose como público lo que es de todos los habitantes de un país. El Petróleo es, pues, un bien público (de todos nosotros), y no un bien del Estado. El Estado tiene derecho a cobrar impuestos a las actividades públicas,*

pero no tiene derecho a "cobrar y darse el vuelto" al pretender ser el dueño de lo público y, a la vez, cobrar impuestos de regalías y otros impuestos a sus agentes operadores (las empresas del Estado) para convertirse en un Mega-Estado (Petro-Estado en nuestro caso) que puede intervenir y controlar, de hecho, mediante la usurpación de la explotación de lo público, todas las instituciones de un país" (**"Los Problemas de Fondo"**, página 103)

También, hablando de educación, en lengua petrolera:

"*Lo público es lo que es de todos y, por lo tanto, no debe ser propiedad del Estado. Así, por ejemplo, los yacimientos petroleros son un bien público, y el Estado debe normar su explotación. Pero lo que no debe es considerarlo como de su propiedad, porque eso le permite tomar decisiones sobre su utilización sin que los venezolanos se sientan de verdad propietarios del recurso. Con algo de licencia poética, podríamos decir que la educación es también un problema propiedad de todos los venezolanos. En otras palabras, es un problema nacional. Al ser un problema nacional, que es como creo yo que lo vislumbra tanto el Prof. Cárdenas como el Padre Ugalde, no se puede, entonces, reducir a un problema de la exclusiva competencia del Estado, porque eso sería caer en la trampa conceptual petrolera, donde se ha establecido que para que un recurso sea nacional tiene que ser de la propiedad del Estado. No debería ser así, ni en el petróleo, ni mucho menos en la educación. Para mi todas las escuelas que están en Venezuela y que imparten educación, son nacionales así pertenezcan unas al Estado y otras al sector privado.*" (**Requiem para un proceso,** página 3)

El proceso histórico de transformación de país productor en rentista, de origen ideológico-cultural, no sólo afectó al Estado, sino marcó a la sociedad completa y particularmente al

sector productivo privado. Los viejos capitanes de empresa cedieron el paso a la nueva generación de desmedidos "maximizadores de la renta", cuya crisis llevó al colapso y la desnacionalización a buena parte del sistema financiero y productivo. Quirós le dedica mucha atención al proceso y a sus repercusiones institucionales:

"En efecto, la naturaleza del Petro-Estado ha creado un Estado sin verdaderas instituciones, debido entre otras características, a su condición de Gran Distribuidor de la riqueza nacional, el receptor de la renta y la regalía y el recolector de los impuestos que genera el negocio de los hidrocarburos en Venezuela. Por ser un país monoproductor, esto convierte al Estado, como ya se ha dicho, en «Gran Distribuidor» de la mayor parte de la riqueza nacional y crea una sociedad que pensó que podría vivir gratis para siempre. Dentro de una sociedad que lo recibe todo del Estado, no es fácil que se desarrollen las instituciones civiles que se desarrollan en otros países, donde el sector privado y todos los ciudadanos, están acostumbrados a generar, con su trabajo, gran parte de la riqueza nacional. Ello le da la oportunidad de desarrollar instituciones fuertes y representativas que pueden negociar de frente y en igualdad de condiciones con el Gobierno, cualquiera de los aspectos de una sociedad que afecten al bien común". **(El Gran Acuerdo Nacional**, página 245)

"Y todo eso fue posible por las características de país monoproductor y rentista de Venezuela. Pero, cuando la renta -por sí sola- ya no alcanzó y el rol distributivo se quedó corto en la posesión de los recursos a distribuir, los «cuartos» vacíos de nuestra democracia se pusieron en evidencia. Se hizo manifiesta la fragilidad de nuestras instituciones, su ausencia de representatividad y -por ende- de legitimidad. Tomemos como ejemplo a Fedecámaras y a la C.T.V. Tanto la una como la otra

permitió que se diluyera su fortaleza institucional en políticas que solidificaran sus relaciones con el Estado, para obtener de este, como Gran Distribuidor, la mejor tajada. Así el liderazgo de ambos se burocratizó y en la aguda definición de un ilustre venezolano, «a Fedecámaras se la cogieron los empleados». Queriendo destacar con esto, la ausencia, de sus directivas de los verdaderos capitanes de nuestra industria y comercio." (**Democracia a la Medida**, página 265)

Con la misma inagotable inspiración, Quirós nos ofrece propuestas concretas semana tras semana sobre los más diversos y acuciantes asuntos de preocupación nacional. Siempre con la mira puesta en el cambio estructural de país rentista a país productor, propone la distribución a los venezolanos de acciones de Pdvsa o de participaciones en fondos que las contengan junto con las de otras empresas:

"*El problema nacional no es de recursos. Esos los tenemos. El problema nacional es de construir un nuevo Estado que pueda hacer más con menos en lo relacionado con el gasto público. Buscar además, fórmulas para crear mecanismos de distribución del ingreso nacional, que le lleguen a la población sin pasar primero por el peaje de la «unidad del tesoro». Si fuera necesario, distribuyéndole gratuitamente a la población acciones de P.D.V.S.A., o de Fondos Colectivos constituidos por las acciones de P.D.V.S.A. y de otras empresas, como las de Guayana, por ejemplo. Y eso sería mucho mas eficiente que continuar con un Estado propietario de los bienes públicos. Es decir, de todos nosotros.*" (**El Gran Acuerdo Nacional**, página 245)

Más adelante extiende pródigamente la propuesta a las compañías de la CVG:

"*Vender al sector privado nacional y extranjero una*

participación accionaria importante de todas las empresas públicas de Guayana. Constituir un Fondo de Inversiones Nacional con un porcentaje accionario de las empresas públicas a privatizarse y emitir certificados de participación gratuitos a todos los venezolanos. Este Fondo se administraría por expertos internacionales privados, con la presencia del Estado y el sector privado nacional, como auditores de hecho. Este instrumento financiero invertiría en Fondos de Pensiones, Programas rentables de Educación y Salud (que sí los hay), y en sectores previamente calificados por sus administradores. Colocación de otro porcentaje menor en la Bolsa de Valores de Venezuela de una serie especial de acciones de las empresas arriba mencionadas que se atomizarán para que su precio unitario fuese accesible a todos los venezolanos que trabajan y puedan ahorrar. Una parte de estas acciones se les vendería bajo condiciones especiales a los trabajadores de esas empresas. Estos también recibirían -como todo venezolano- Certificados de Participación Gratuitos en el Fondo Especial a crearse, ya descrito". (**La Agenda Venezuela II**, página 123)

Este último Fondo Especial abierto, del que participarían todos los venezolanos, constituye la típica institución "northiana" generadora de riqueza e instrumento fundamental del cambio hacia la sociedad productiva. Canalizador del ahorro nacional e imán de nuevas inversiones que diversificarán paulatinamente la cartera, reduciendo el peso del sector petróleo, se convertirá naturalmente en un efectivo Fondo de Estabilización Macroeconómica –blindado contra intromisiones políticas– resolviendo eficientemente el problema del seguro nacional contra oscilaciones del petróleo. También se constituirá en la más segura opción para los fondos mutuales y de retiro, completando el tejido integrador de la sociedad productiva.

* * *

La batalla intelectual más dura que libró Quirós en 1995 fue el debate sobre la Apertura Petrolera, cuya participación conmovió a la opinión pública. Su sana obsesión por superar el rentismo que a su juicio alimentaba la propuesta, le valió un enfrentamiento con Pdvsa en un momento particularmente delicado de la vida nacional, en el que se había logrado respaldo político prácticamente unánime. Aunque su crítica –quizá excesivamente "revolucionaria" para el momento– no produjo cambios sustanciales en el proyecto, abrió un debate que sensibilizó grandemente a la opinión pública potenciando la idea del Fondo de Inversiones Petroleras. Es sintomático que este Fondo saliera a la calle apresuradamente, sin mayor definición y limitado necesariamente a títulos de renta fija (dada la inexistencia de acciones petroleras cotizables en bolsa) lo que desvirtúa el concepto de inversión productiva, que implica riesgo empresarial. Hay que anotar sin embargo que el Presidente de Pdvsa Luis Giusti lanzó simultáneamente la propuesta –insólita para nuestra cultura política– de colocar un 15% de sus acciones en la bolsa, que significa la más precisa y devastadora carga contra el sistema rentista. Aunque el sector más recalcitrante del congreso se apresuró a cerrarle el paso a la propuesta sin abrir la discusión, se puso en evidencia la ruptura del frente ideológico-cultural estatista-rentista. Aunque Giusti no llegó a plantear la Participación Ciudadana sino de soslayo, se evidenció un gran potencial de aceptación popular a la idea. Su retirada estratégica para proteger políticamente la Apertura, permite vislumbrar una nueva ofensiva aliada al Fondo de Inversiones Petroleras. Sorprendentemente, el impreciso Fondo fue aceptado de inmediato por el estamento político, a mi modo de ver, como intento de contener las propuestas revolucionarias de Quirós:

"*Por lo tanto, a las recomendaciones que aquí hacemos para perfeccionar el Contrato de Asociación para la Apertura*

Petrolera, habría que agregarle cambios sustantivos en nuestra legislación que le devolverían a la Nación (nosotros) la propiedad de los yacimientos. Se le daría a la Nación el derecho de cobro de la «regalía» (como propietario) para su utilización en la creación de fondos especiales (educación, pensiones, salud, etc.), cuyo rendimiento serviría para beneficiar a toda la población. Se establecería además, un sistema de acceso de los ciudadanos a las acciones de nuestras empresas del Estado, para así verdaderamente nacionalizar lo que es de todos y no continuar con un sistema de estatificación comprobadamente ineficiente, donde el Estado (los pocos) usufructa los bienes nacionales (que son de todos)." (**La Apertura Petrolera II**, página 21)

El final del mismo artículo –en el que Quirós acepta su "derrota" con aparente resignación– lo pinta entero, con su humor y su optimismo intactos:

..."*- P.D.V.S.A. no invertirá en la etapa de exploración.*

- No habrá por los momentos, participación masiva del capital venezolano.

Sin embargo, se habrá logrado un buen Contrato de Asociación del Estado con la inversión extranjera. Si al mismo tiempo, la Nación venezolana, es decir, todos nosotros, habremos hecho también un buen negocio, es harina de otro costal. Yo creo que no. Me habría gustado que hubiéramos desplegado como Nación la misma habilidad política para transformar al Estado usando la Apertura como palanca para el cambio, que desplegó el Estado para negociar un buen contrato y dejar todo lo demás igual." (**La Apertura Petrolera II**, página 21)

* * *

Poco antes de escribir estas líneas el gobierno suspendió la privatización del Banco de Venezuela, a dos días de la fecha de una subasta largamente preparada y debatida. Se vendería el

100% de las acciones al mejor postor, simplemente, fuera quien fuere (Sólo se presentaron extranjeros). Los argumentos para la suspensión fueron variados: presiones políticas, amenazas judiciales, retiro de oferentes, etc. Sin embargo, no dede minimizarse la influencia del cambio de mentalidad, la nueva visión de privatización "vanguardista" anunciada anteriormente para CANTV y CVG a través del Programa de Participación Ciudadana. La venta pura y simple al viejo estilo tecnocrático, ajeno a la gente, resultaba pobre como propuesta, por lo que no logró sustento en la opinión pública ni el compromiso público del Presidente. El dinámico proceso de apertura hacia la sociedad civil no admite retroceso. El problema de Venezuela no es obtener más dinero para el Estado a través de las privatizaciones sino crear la base para transformarnos en sociedad productiva. ¡Qué mejor oportunidad para integrar a los venezolanos al hecho productivo, al ahorro y la inversión nacional! A este nivel de madurez del proceso, dificilmente se pueda "colear" una iniciativa de privatización primitiva, de "capitalismo salvaje" como la intentada. Teodoro Petkoff, con buen olfato, propuso de inmediato la colocación parcial de acciones en la bolsa para la segunda vuelta. Días antes, con su pasión característica, había señalado por TV:

"El Estado venezolano es un monstruo triturador de riqueza, torpe e ineficiente. ¿Qué son 100 millones de dólares para el Estado? Peanuts, los esfuma en un instante..."

Veamos como Quirós se había adelantado a esta interpretación:

"*«Cómo se crea riqueza en Venezuela»?. Dinero siempre tuvimos. Más del que nos pueden prestar ahora las organizaciones multilaterales. Pero somos incapaces de mirar a nuestro propio desastre. El vernáculo. Seguimos privatizando exclusivamente para enriquecer a los de afuera. No ponemos a*

nuestras riquezas, petróleo, oro, aluminio, hierro y acero al alcance de los venezolanos. Tenemos un Mercado de Capitales, medido como porcentaje del P.I.B (7,5%) más pequeño que Brasil (36,5%). México (36.1%). Argentina (12,9%). Colombia (24,0%). Perú (15,8%) y Chile con un asombroso 138,9%, mayor que los Estados Unidos (123,4%). Japón (69,8%) y Alemania (21,8%). Africa del Sur tiene 182,6%. Malasia 278,3%. Singapur 242,3%. Hong Kong 201.3%. Taiwan 105,2%. Así se construye un país. Con estímulos a las inversiones. Con dinero también, es cierto. Pero además con el ingrediente indispensable de educar a su población en la diferencia entre dinero (lo casual y temporal) y riqueza (lo permanente). Si en vez de tener dinero en el banco, a los venezolanos se nos hubiera permitido tener inversiones en las empresas que explotan los recursos del país, estas empresas no estarían quebradas, porque tendrían muchos dolientes. Los venezolanos no estaríamos quebrados porque habríamos acumulado riquezas. Los bancos no habrían quebrado porque sus carteras no hubieran estado constituidas por inversiones de humo. El país sería otro." **(La Agenda Venezuela**, página 111)

•••

"**Requiem para un proceso**" es la crónica de la agonía del antiguo régimen y la gestación de la Venezuela moderna, que se produce a través del singular mecanismo histórico de "inversión de roles" motorizador de los cambios políticos contemporáneos. La izquierda se coloca a la derecha y viceversa, para confluir en una salida "convergente" que supera creativamente los viejos esquemas. La crisis devastadora de la economía que acabamos de vivir ha sido en definitiva el feliz detonador del cambio. Por ello está surgiendo el temor, en espíritus reflexivos, de que el boom de los precios petroleros y la Apertura, creen una ilusión

de bonanza que aborte el proceso cultural de modernización aquí reseñado. A mi entender, no sólo será difícil frenar tal proceso de concientización de los venezolanos, sino que más bien podría verse reforzado por el boom: si el petróleo es de todos, ¿A dónde irá a parar la parte que ahora me toca? ¿Se repetirá lo ya vivido, o sea que quedaremos al final más pobres y endeudados? Por otra parte, la abundancia de recursos puede más bien facilitar la decisión política de democratizar la economía a través de los Fondos de Capitalización Popular puesto que el posible impacto fiscal inicial negativo quedaría compensado con los ingresos extraordinarios. El objetivo de privatizar "para obtener ingresos adicionales" sería suplantado por el de **democratizar el capital**, el cual encierra un valioso potencial político. En el próximo proceso electoral, este cuerpo de ideas sin duda creará un basamento de ofertas políticas común a todos los candidatos. ¿Cuál de ellos se atreverá a negar la Capitalización Popular como programa de gobierno? Si esto se lograra, significaría el triunfo de la sociedad civil conquistado a través de la práctica democrática. La democracia avanza en su propio ejercicio, del cual Quirós es excelente entrenador.

•••

Yo diría que North vino oportunamente a alimentar y reforzar esta corriente de opinión modernizadora que avanza intelectualmente en la "red creativa" y también en la conciencia popular. Releyendo a Quirós con la "Clave Northiana" surgen nuevas y más ricas interpretaciones, como si este pensamiento impregnara secretamente el texto. Queda uno habilitado entonces para analizar nuestra realidad político-económica, utilizando unos lentes especiales para leer, en visión multidimensional, lo que veía normalmente como un cúmulo chato de problemas, sin orden, ni prioridades. Los "lentes North-Quirós" nos ponen en evidencia que el PetroEstado, que está en la base de toda nuestra

problemática, se halla en proceso irreversible de descomposición y que nuestro destino es ser una nación petrolera de ciudadanos-personas-propietarios integrados al proceso productivo.

Por ello me permito recomendar la lectura del presente libro de Quirós en una mano, siguiendo en la otra a North como iluminador.[1] Manera algo incómoda de leer, pero muy ilustrativa de la articulación de la inteligencia criolla con la vanguardia del pensamiento económico contemporáneo. También recomendaría releerlo después de algún tiempo –conociendo el final de la trama de suspenso– para verificar la validez del esfuerzo.

Francisco Monaldi
Octubre de 1996

[1] · Particularmente su Discurso de aceptación del Premio Nobel ante la Real Academia de Suecia y el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico (Fondo de Cultura Económica, 1990)

LA APERTURA PETROLERA
REQUIEM PARA UN PROCESO

REQUIEM PARA UN PROCESO

Cuando este artículo sea publicado se habrá aprobado el convenio macro que regulará la llamada Apertura Petrolera.

De esa experiencia nos deben quedar algunas lecciones para la historia futura de los procesos políticos y sociales del país.

Entre ellas:

El Estatismo. A pesar de que se le concederá un mínimo de participación en la empresa de producción de 65% al capital privado, se insistió y se logró el control del Estado sobre la operación y la política petrolera (aunque hay algunas dudas legales sobre la forma de hacerlo). Esto no es un juicio de valores. Es un hecho. Hubo momentos en los cuales se llegó a sugerir que el Estado podría ejercer control sobre las operaciones petroleras que se abrirán próximamente al capital privado, aun sin participación accionaria directa en las nuevas empresas de producción a formarse. El mundo político que se rige más por apariencias que por realidades eliminó esa posibilidad y obligó al Estado a través de P.D.V.S.A. y sus filiales, a tener por lo menos 1% del capital accionario en la empresa de producción. Aunque desde el punto de vista de ejercer el control, el mecanismo propuesto por P.D.V.S.A. funcionaría aun sin su presencia accionaria, era importante para el mundo político «verse» allí.

Pero eso no es grave. Lo grave es que en el ejercicio de esa potestad de control, el Estado trató con desmesurado desdén al capital nacional, lo cual demuestra, sin lugar a dudas, que para el estamento político, el capital privado nacional es tan extranjero como el capital que viene de afuera, y así hay que tratarlo. Es decir, que para cierto sector político mayoritario, es «**justo**» darle al capital extranjero el mismo tratamiento que se le da al capital nacional privado. Pero no es «**justo**» darle al capital

nacional privado el mismo tratamiento que se le da al capital del Estado. Esta posición es sorprendente, sobre todo si, como en Venezuela, el capital del Estado proviene -casi en su totalidad- del aporte de todos los venezolanos a través de la renta petrolera, de la cual -como es demostrable- el Estado se siente, sin derecho, propietario (los propietarios somos todos los venezolanos).

El Capital Nacional. Desde el primer borrador que conoció el Congreso Nacional se hizo evidente que la Apertura parcialmente privatizadora de P.D.V.S.A. no era para el capital nacional. En sus diferentes cláusulas el convenio propuesto se refería constantemente a las «casas matrices» de los licitantes potenciales. No era pues a González & Compañía a quien se referían esas líneas del convenio, ni tampoco y mucho menos se estaba preparando el terreno para una nueva y popular «Mito Juan». Desde el comienzo del proceso, y aun habiendo culminado el mismo, se ha **desestimulado** la participación nacional privada en el proceso de exploración. El propio Presidente de P.D.V.S.A., en declaraciones que se le atribuyen, acaba de decir que si el fuera asesor de alguna empresa venezolana no le recomendaría invertir su dinero en la fase exploratoria de la Apertura. La pregunta es entonces ¿en qué fase del proceso de Apertura va a invertir el capital privado nacional?. Me refiero, por supuesto, al gran capital para la inversión y no a los pequeños ahorristas nacionales, sobre los cuales hablaremos después. Si por recomendación de las autoridades de P.D.V.S.A. el gran capital privado nacional no debe invertir en la fase exploratoria, y la fase de producción ya está comprometida, 65% para el inversionista extranjero y hasta un 35% como una opción para P.D.V.S.A. ¿dónde está, entonces, repito, la oportunidad para que inviertan en este proceso las empresas venezolanas de ingeniería y servicios, las grandes empresas nacionales y el capital de venezolanos honestos en el exterior?. La expresión «discriminación de hecho» viene a la mente, aunque no haya sido esa la intención. Sin embargo, mientras esto sucede con el

capital privado nacional, se le presenta a los inversionistas extranjeros el proceso de Apertura incluyendo, por supuesto, la fase exploratoria, como una inversión atractiva que compite favorablemente con ofertas de participación petrolera hechas por gobiernos de otras latitudes. Entre otras razones por la alta prospectividad de nuestros lotes a explorar. Prospectividad que se dice y dicen, hace a nuestra aventura exploratoria, combinada con las condiciones ofrecidas en la etapa de producción, un paquete tan atractivo que parece que ya hay un número importante de empresas extranjeras listas para participar en la licitación. De manera que si el paquete integral es tan atractivo como lo demuestra el aparente interés de las trasnacionales del petróleo, no veo la lógica, entonces, de recomendarle al capital nacional privado que no participe en un negocio, en el cual está dispuesta a participar una muestra importante de las empresas internacionales petroleras más destacadas del mundo. Lo cual me lleva a otra consideración ¿porqué no participa P.D.V.S.A. con un porcentaje, aunque sea pequeño, del riesgo exploratorio?. Para P.D.V.S.A. esta participación sería mucho más atractiva que para el inversionista extranjero, dado que no tendría que pasarle, en caso de éxito exploratorio, a la empresa de producción del Estado, al costo, el 35% de lo invertido en exploración, ya que P.D.V.S.A. es del Estado. Y si de invertir P.D.V.S.A. en esta fase de la Apertura, como ya hemos dicho, no tendría que apartar 35% de su inversión «al costo» para que lo usufructe el Estado, ¿Porqué no se le dio al capital privado nacional esa misma ventaja?. ¿O es que lo único que es **nacional** en este país es lo que pertenece al Estado?. Las proposiciones que le hice a los dirigentes políticos del país, apuntaban en esa dirección. Veámos: Primero que se recomendara la conveniencia de que P.D.V.S.A. participara directamente en la fase de exploración por ser este un buen negocio y segundo que se entendiera que capital nacional es, sin duda, el de P.D.V.S.A., pero también, sin duda, lo es el mío y el de los venezolanos que leen estas líneas.

Pero la ausencia de estímulo no termina allí. Tampoco se consideró la posibilidad de que empresas venezolanas de ingeniería y servicios pudieran capitalizar sus trabajos y convertirse en accionistas de la Apertura. Sin embargo, las empresas extranjeras que ganen la licitación y operen los lotes licitados, de hecho estarán capitalizando su trabajo, de la misma manera que P.D.V.S.A. podrá capitalizar, al costo, en las empresas de producción, el 35% de lo **gastado** por las trasnacionales en la etapa de exploración. Además, de lo que se trataba era de un gesto visible que convenciera al socio extranjero sobre los deseos del Estado venezolano de que participaran, como **socios,** empresas venezolanas en el proceso de Apertura. Tan es así, que nada impide a cualquier empresa venezolana que preste sus servicios en este proceso, cobrar por esos servicios y proponerle al operador extranjero invertir todo o parte de lo **cobrado** en la empresa foránea para hacerse socio de ella. Nada lo impide. Pero tampoco nada lo estimula. Por lo tanto, el socio extranjero tendrá pleno derecho a preguntarse ¿qué gana con asociarse con una empresa venezolana, cuando ni siquiera el Gobierno Nacional da señales de que vería esa posibilidad con buenos ojos?.

Pero lo más importante, no es nada de lo anterior, importante como lo es. Lo más importante es que la participación de P.D.V.S.A. y el capital privado nacional en el proceso exploratorio, digamos en un 25%, en caso de éxito, como ya lo he explicado en multiples ocasiones, le dejaría en la fase de producción 49% al capital extranjero, 26% a P.D.V.S.A. (35% del 75%,fase exploratoria) más otro 25% también a P.D.V.S.A. producto de su inversión en la fase exploratoria. O algo menos, si el capital nacional privado participara directamente en el mencionado 25%. Hecho esto, si la exploración fuese exitosa, P.D.V.S.A. colocaría en el mercado, directamente o mediante fondos de dedicación específica, su participación en el 25% derivado de la fase exploratoria, en acciones especiales de la empresa de producción, a muy bajo costo, para atraer la inversión

másiva de los pequeños y medianos ahorristas nacionales (La sumatoria de todas las acciones asi vendidas siempre resultaría en una cantidad suficiente para que P.D.V.S.A. recuperara su inversión más una ganancia razonable). Así comenzaríamos a **nacionalizar** un proceso que hasta ahora sólo hemos **estatificado**. Porque **nacionales** somos todos los venezolanos que constituimos la **Nación**. El Estado es otra cosa. El Estado actúa en nombre y en representación de la Nación, pero, como ya hemos dicho, no es el **dueño** de lo nacional (lo de todos) como parece creerlo el sector político que lo maneja. Mi proposición apuntaba pues, en la dirección de que una pequeña parte de la riqueza petrolera fuese asequible a todos los venezolanos en forma directa, en virtud del derecho de propiedad que siempre hemos tenido. Expresado, de concretarse mi sugerencia, en lo tangible de unas «acciones» que representarían formalmente ese derecho de propiedad.

Le aclaro así pues, a mi amigo Luis Guisti, que mi proposición de que el capital nacional (P.D.V.S.A. más capital privado nacional) tuviera el 51% de las acciones de la empresa de producción, no fue hecha con el pretexto de establecer control sobre la operación petrolera en atención a lo estipulado en el Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. ¡No!. Fue hecha con el propósito de que entre el Estado y el sector privado nacional hubiese un monto significativo de participación accionaria que permitiera la másificación de la inversión nacional privada (los ciudadanos) en su industria petrolera. Cierto es que escogí una fórmula que resultara en que el 51% de las acciones fuese propiedad del capital nacional, pensando que, como atractivo adicional, podría darle más fuerza legal a una nueva corporación formada con esa composición de capital. Para:

- Desarrollar una estrategia de participación en la fase exploratoria por parte de P.D.V.S.A. y el capital nacional privado.
- Permitirle explícitamente al capital privado nacional que

capitalice sus servicios de ingeniería, procura de materiales y equipos y construcción, en la fase de exploración y producción.

- Darle al capital nacional privado el mismo tratamiento que se le da, no al capital extranjero, sino al capital de P.D.V.S.A. (lo nacional no debe ser menos privilegiado que lo del Estado)

En fin, todo lo que ya he repetido muchas veces, funcionaría con cualquier porcentaje de participación de P.D.V.S.A. y del capital privado nacional en la fase exploratoria. Escogí como ejemplo, como ya he dicho, el 25% de la fase exploratoria, porque con eso «mataba a dos pájaros de un solo tiro». Pero si no quisimos matar al segundo pájaro, representado por la interpretación del Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos, mal llamada de «nacionalización», hemos podido matar -por lo menos- al pájaro que -con su muerte- hubiese permitido, por primera vez en nuestra historia, una participación real, másiva y directa de los venezolanos en su industria petrolera.

P.D.: Hablando de aves, me dijo un pajarito que en una de las últimas reuniones políticas que se celebraron para discutir la fórmula final de la Apertura, alguien intentó descalificar mi tesis con el argumento de que yo la presentaba porque tenía interés personal en el proceso (por ser, según él, socio de una empresa junto con dos conocidos hombres de negocios, la cual estaría interesada en participar en la Apertura). No tengo obligación, ni de negarlo ni de confirmarlo. Pero si fuera cierto, ello no sería incompatible éticamente ni con mi proposición ni con mi posición. De una u otra forma, todo lo que un ciudadano propone para su país lo afecta a él directa o indirectamente. Lo que si es éticamente cuestionable, es que algunos que comparten la responsabilidad de **hacer** las **leyes** tengan un nivel de vida visible inexplicable por los ingresos que se le conocen, cobren comisiones, representen intereses específicos particulares y sean socios silenciosos de compañías favorecidas por su legislación.

Yo no legislo. Sólo recomiendo. Y no hay nada pecaminoso en que mis recomendaciones, de vez en cuando, coincidan con mis intereses.

Porque lo normal, en toda democracia, es que los intereses del Estado se hagan coincidir con los intereses de los ciudadanos... y no al revés.

¿Estamos?.

06 de junio 1995

LA USURPACION DE LO PUBLICO

El Estado «Privatizó» lo Nuestro.

En un foro promovido por CEDICE, Asdrúbal Baptista, tuvo una intervención magistral (fondo y forma), cuyo contenido central era recordar un pensamiento olvidado de Adam Smith. Tal como lo entendí, Smith había dicho que, realmente no tenemos por que distinguir entre lo **público** y lo **privado**. La única y verdadera distinción está entre el Estado y lo público. Entendiéndose como **público** todo los bienes y servicios de una sociedad, desarrollados por sus ciudadanos (individualidades «privadas»).

Bajo este concepto, el Estado tiene perfecto derecho a pechar impositivamente todas las actividades de lo público (lo de todos), y administrar los recursos así obtenidos para la mejor construcción del bien común, incluyendo en sus gastos, lo necesario para su propio mantenimiento (el del Estado). Pero, a lo que no tiene derecho el Estado es a convertirse en propietario de lo que es de «todos» para -entonces- generar beneficios de esa propiedad que van -después- a ser empleados para el desarrollo y mantenimiento de ese mismo Estado. De acuerdo con la definición de Smith, **eso** sería impropio (Improper).

Por lo tanto, el Estado al explotar -como propietario- los bienes públicos, para su beneficio o el de sus restringidas camarillas está, en el calificativo de Adam Smith, cometiendo un acto «impropio».

Esta confusión, entre el Estado y lo **público**, conduce no solamente a una impropia administración de lo colectivo, sino que le permite al Estado establecer un sistema de Gobierno autocrático y desconsiderado, en sus resultados, con los deseos y los derechos de los ciudadanos. Le permite, como propietario

de hecho, tratar a los venezolanos como si fueran inquilinos de una propiedad que ya no es de ellos. Además, pone las reglas del condominio y selecciona a los administradores de lo que deberían ser las propiedades públicas, como si fueran de verdad, no sólo propiedad del Estado, sino lo que es peor, propiedad del estamento político que nos gobierna.

19 de enero 1995

LA APERTURA PETROLERA (I)

La crisis mexicana, a la cual prometo no referirme más -en este trabajo- ha estimulado a mucha gente en Venezuela a restablecer mentalmente el "Paraíso de los Tontos", donde hemos vivido por muchos años. En efecto, pretenden olvidar en unos instantes los enormes progresos realizados por la nación mexicana, en la búsqueda de la modernización de su estructura productiva. Todo con el deliberado propósito de ahuyentar de Venezuela los espectros buenos del cambio posible y ratificar, mediante el dolor en cabeza ajena, su empeño en resolver los problemas de hoy mediante soluciones probadas y desacreditadas, tanto por inoperantes como por obsoletas. La crisis ajena, les sirve también para resucitar, como hemos dicho, el «Paraíso de los Tontos» descrito, por Thomas Milton en el «Paraíso Perdido», como «un limbo grande y ancho, donde habitan todos los que construyen sobre las cosas banales, sus esperanzas y ambiciones de gloria o fama permanente». Los que estimulan la falsa realidad, el error de enfoque y la superficialidad. El esfuerzo mal dirigido e improductivo. La naturaleza del castigo de los habitantes del limbo de Milton, está en recordar permanentemente lo que el castigado hubiera podido ser y no fue. Los habitantes del limbo no tienen ni siquiera la distracción del dolor físico para mitigar el sufrimiento permanente del arrepentimiento. El peor castigo de cada uno está, precisamente, en saber que sin ser verdaderamente un «pecador» no ha llegado al cielo por un simple error de juicio. Por una confusión de valores. Por haber utilizado mal la capacidad de pensar que Dios le dio al ser humano («El Paraíso de los Tontos», Alberto Quirós Corradi. «**El Diagnóstico de lo Imposible**». Ateneo de Caracas, 1986).

En este nuevo «Paraíso de los Tontos» que construimos, día a día, surgen decisiones y medidas oficiales que, para muchos,

tienen alguna afinidad con la realidad que tenemos y la esperanza que buscamos. Entre ellas, está la posibilidad de abrir la industria petrolera nacional al capital privado.

Las definiciones (El Estado no es lo público)

Aun cuando algunos de mis lectores objeten parcialmente mis definiciones, les pido que para los efectos de la discusión que quisiera plantear en este trabajo, acepten tres formas de calificar la propiedad de las empresas y de los recursos naturales:

1) **Empresas del Estado**. Por definición aquellas empresas en las cuales el Estado tiene, directamente, la mayoría de su capital y, por lo tanto, toma las decisiones gerenciales de la empresa, tanto en la estructura de su capital como en su administración y la distribución de sus beneficios (Ganancias).

2) **Recursos públicos**. Aquellos que, por su origen y distribución geográfica pertenecen a todos los venezolanos y cuya administración y propiedad no puede ni debe ser usurpada por el Estado. Dentro de esta categoría está, por supuesto, la industria petrolera nacional.

3) **Empresas privadas**. Aquellas donde el sector privado, nacional o extranjero, es dueño del capital y toma, dentro de un marco legal establecido, las decisiones administrativas y las que afectan la distribución entre sus accionistas de los beneficios generados por la empresa (Ganancias).

Vista la naturaleza de la propiedad de las empresas en esta forma habría, entonces, en el caso específico de la industria petrolera nacional que analizar en cualquier proceso de apertura, como se convierte a un bien, propiedad de una empresa del Estado en un bien público, propiedad de todos. O, por lo menos, como hacer para que participen en los beneficios de ese bien público la mayoría de sus propietarios (los venezolanos). Esto puede lograrse bajo dos enfoques: 1) La democratización y popularización de su capital para que la mayor parte de la población, donde se encuentre ese bien público, pueda ser

accionista en el mecanismo de su explotación. 2) Que el Estado diseñe un sistema de recaudación de impuestos y distribución equitativa de lo recaudado por la explotación de lo colectivo entre todos los habitantes (propietarios) del país, aunque todos los habitantes no sean accionistas directos en la actividad de explotación.

Sin embargo, pareciera que lo que está planteado hoy en el sector petrolero es pasar la operación, del Estado al sector privado , y mantener -como propiedad del Estado- los yacimientos petroleros. Un paso, exclusivamente en esa dirección, ignoraría el carácter público del recurso petrolero y, por lo tanto, regresaríamos a la vieja situación de un Estado propietario de los recursos naturales de **todos** y un sector privado encargado, por delegación del Estado, de su explotación comercial. En esta situación se restablecerían las tensiones entre un dueño del insumo, que persigue la mayor renta sobre su propiedad y un operador privado, que persigue la optimización de sus ganancias. Algunos países, como Francia, desde el siglo XVIII, resolvieron el dilema de la administración de la propiedad pública, mediante leyes que excluyen al Estado como su propietario (por ejemplo, de los minerales del sub-suelo). El Estado debe y puede, vigilar y reglamentar la explotación de lo público, pero en ningún caso, debe recibir pagos de «regalías» por esta labor normativa (La «regalía», es, por definición, un tributo al propietario). Ni debe el Estado utilizar el producto de la renta para financiar su crecimiento y desarrollar el poder de intervenir, en forma absolutista, todas las instituciones sobre las cuales descansan los equilibrios de una sociedad democrática. Tampoco es aplicable al concepto de lo público, al sistema de los Estados Unidos, donde los individuos, son los dueños de las riquezas minerales localizadas bajo la superficie de terrenos de su propiedad. Debe quedar claro, de este rápido resumen que, hay dos distorsiones posibles en la administración de los bienes públicos. Una que pretende convertir al Estado en propietario exclusivo de lo que

es de todos. Otra, que le permite a individuos, por el hecho circunstancial de ser propietarios de algunas tierras, disfrutar de las riquezas minerales, propiedad de todos. En Venezuela, el Estado no se conformó con ser el propietario, que delegaba en el sector privado la explotación de sus recursos de hidrocarburos, sino que estatificó también la operación y la explotación del petróleo, lo cual lo convirtió -aún más- en el gran usurpador de lo público. Ahora, por necesidades que poco tienen que ver con un análisis ideológico sobre el concepto de propiedad, el Estado requiere que participe, de nuevo, el sector privado en el negocio petrolero, sin cambiar -para nada- el viejo principio del propietario estatal rentista asociado con el explotador privado, que a su vez, busca la maximización de sus ganancias. Más aun, es oportuno introducir aquí otro concepto importante: El sector privado, definido en su forma más simple, no tiene nacionalidad. Por lo tanto, a menos que se establezcan algunas condiciones muy específicas para su participación en la operación de lo público, ese sector tampoco tiene calidad para, dentro del concepto de nación, administrar y explotar lo que es de todos.

Y si lo anterior es defendible dentro de los aspectos conceptuales de su argumentación, ¿Qué hacer ahora?.

Algunas sugerencias (ventaja para los propietarios)

Lamentablemente, lo afianzado de nuestras estructuras existentes de propiedad y de operación de la industria petrolera nacional y la enorme dependencia fiscal del país de los recursos generados por la explotación de nuestros hidrocarburos, no permiten suspender totalmente el sistema actual y darnos tiempo para el establecimiento de una nueva estructura. La cual, para responder de inmediato al concepto de la propiedad global de lo público, tendría que pasar por un período crítico de adaptación que podría no ser administrable, sin que se pusiera en peligro el concepto de sociedad que todavía nos une como nación. Sin embargo, lo anterior no puede ser excusa para iniciar una nueva

etapa para la explotación de nuestro petróleo, basada exclusivamente en el modelo prenacionalización, el cual excluía la posibilidad real de que los venezolanos (los dueños de lo público) participáramos directamente, no sólo en los beneficios materiales del negocio sino también, con una voz, en la administración de lo público, bastante más diversificada y amplia que la representada por el Estado, como administrador y vocero exclusivo de **su** monopolio.

Hay pues que pensar en algunos caminos para la transición:

- El primero, que es común a todas las soluciones posibles, tendría que ser una revisión de la normativa legal que regula la propiedad de nuestros hidrocarburos. Habría que preguntarse, cuál sería el régimen que mejor reflejará la naturaleza pública de la propiedad del contenido del sub-suelo. Creo que un sistema como el de los Estados Unidos tendría que descartarse de inmediato por razones sociales y técnicas que deben ser bastantes evidentes para todos. Mantener al Estado como propietario, tiene todas las desventajas conocidas del Petro-Estado. Quizás, podría establecerse sin muchas dificultades, un sistema de propiedad colectiva, normado por el Estado, dado los avanzados conocimientos técnicos y legales que existen en Venezuela en materia de hidrocarburos.

- Mientras se analiza lo anterior, no debemos tomar medidas de apertura que, en su estructuración, le añadan mayores dificultades a la conversión de los bienes estatificados en bienes públicos. Por lo tanto, hay que revisar las proposiciones actuales de Asociaciones de Riesgo Compartido y otras modalidades de asociaciones, en cuanto a su desestímulo a la participación del capital nacional. Este capital nacional está, entre otras partes, en todas las empresas de ingeniería y servicios que atienden a la industria petrolera nacional. En los particulares que podrían invertir su dinero, por ejemplo, en emisiones de acciones petroleras «populares», a través de la Bolsa Nacional de Valores. En las instituciones que administran el ahorro de lo público

mediante fondo de pensiones y similares y, finalmente, en los enormes capitales venezolanos enviados al exterior que representan -según estimados conservadores- más del doble del monto de la deuda externa del país. Para lograr esta participación del capital nacional, hay que darle no sólo estímulo en las condiciones de licitación, sino que, habría que desarrollar -también- una campaña publicitaria que informara sobre los beneficios de esta inversión y la disposición del Gobierno a estimularla. Lo cual, sería lo contrario de lo que nuestros gobiernos, han hecho -hasta ahora- que no ha sido otra cosa que una discriminación al revés. Desde el primer día de la nacionalización cuando, en materia de compensación a las empresas de capital nacional se les trató, relativamente, peor que a las concesionarias extranjeras y además, se les impidió a los venezolanos crear compañías de comercialización internacional, para la colocación de nuestros crudos y productos petroleros en el exterior. Así, se le vendió petróleo a intermediarios extranjeros como Mark Rich y Coastal State, con los cuales tuvimos algunos problemas serios, conocidos por los que estuvimos en la industria petrolera nacional. Pero no se le vendió a Rafael Tudela, ni a Martínez Bayó, ni a Humberto Peñaloza, ni a José Sagún, entre otros, que habían incursionado exitosamente en los mercados internacionales con crudos y productos de diferentes orígenes. Algunos de ellos, por años, pudieron subsistir en el negocio de la intermediación petrolera, sin contar con un solo barril de petróleo venezolano. Es hora pues, de recoger velas, y no sólo permitir, sino estimular, la participación de los venezolanos en su industria petrolera. Aclaro que esta posición, de ninguna manera, pretende desestimular la inversión extranjera en nuestra industria petrolera. Pero lo que no debe ser aceptable es que no se haga el mínimo esfuerzo por estimular la participación nacional en esta nueva coyuntura que la **necesidad** de una apertura nos ofrece. Formas existen:

- Reservar algún área de las Asociaciones de Riesgo

Compartido a la exclusiva inversión nacional.

- Dar algunas ventajas, como por ejemplo, en caso de empate en las condiciones incluidas en dos o más ofertas, favorecer al consorcio oferente que tenga mayor participación de capital nacional.

- Estimular préstamos bancarios de largo plazo a particulares para participar en el negocio petrolero.

- Ofrecer, en venta, participaciones pequeñas a particulares, mediante emisiones de acciones «especiales» de P.D.V.S.A. y/o sus filiales, a través de la Bolsa Nacional de Valores.

- Darle a los venezolanos acciones de P.D.V.S.A., que podrían servir para constituir un «pool» que garantizara la obtención de un préstamo, de bancos venezolanos, para participar en el nuevo negocio petrolero (Una variante de la proposición de Monaldi. Ver más abajo).

- Reservarle al capital venezolano una participación en las áreas que resulten productivas, eliminando el riesgo exploratorio. Esta participación, podría ser ofrecida de las acciones que se reservarán en las nuevas asociaciones de producción las empresas filiales de P.D.V.S.A. que participen en el proceso.

- La proposición de Francisco Monaldi de repartir gratuitamente 50% de las acciones de P.D.V.S.A. entre los venezolanos mayores de edad, dentro de un bien estructurado plan para proteger la propiedad de las mismas, por lo menos por un tiempo que -además- incluya la obligación de pagar impuesto sobre los dividendos y la creación de un sistema de información que eduque a los nuevos accionistas para el mejor desempeño de su recién adquirido rol. Esta podría ser la vía más expedita para rescatar la naturaleza de empresa pública de nuestra industria petrolera. Como apunta el mismo Monaldi, en el Diario de Caracas, de fecha 14/01/95, la próxima visita del Presidente de Bolivia, podría estimular una profunda e interesante discusión sobre la proposición y experiencia boliviana de un plan nacional de repartir acciones de empresas del Estado entre la población

(Además, mi estimado Monaldi, me encantaría ser el moderador del foro que usted propone. Puede ser que, como adivino son sus intenciones, me pueda convencer que el plan sugerido por usted, tiene más solidez probabilística para su éxito que lo que normalmente se asocia al concepto de utopía).

En otras actividades petroleras que no tienen el «glamour» de las Asociaciones de Riesgo Compartido, se podría también estimular la participación privada venezolana, por lo menos al comienzo, dando oportunidad a las empresas de ingeniería y servicio de aportar su trabajo, y algo más, al capital de la empresa a formarse. Pienso, al decir esto, en los «Convenios Operativos» y en las empresas mixtas a constituirse para producir y comercializar orimulsión donde, justicia es decirlo, hay señales positivas de que se está pensando en esta dirección.

Para concluir con las opciones, no puedo dejar de mencionar al mercado nacional de hidrocarburos y a la industria petroquímica como oportunidades excelentes para estimular la participación nacional en sus actividades.

Hay campo para la acción. Lo que se requiere, ahora, es que el Estado se quite el sombrero de propietario exclusivo de nuestros recursos de hidrocarburos, y se ponga el de vigilante y normalizador de la explotación de un bien público, como el petróleo, con la participación de, y para el beneficio de todos los venezolanos.

Sería un importante primer paso, para salirnos del «Paraíso de los Tontos», donde hemos vivido tanto tiempo.

19 de enero 1995

LA APERTURA PETROLERA (II)
LA NUEVA NACIONALIZACION

La Historia (Más de lo Mismo)

Ha llegado el momento de tener un verdadero debate inteligente sobre la Apertura Petrolera. El Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela y el Ejecutivo Nacional, le han presentado al Congreso un esquema de exploración y explotación de áreas no comprobadas como petroleras, a fin de determinar primero si tienen petróleo y son comercialmente explotables y segundo una metodología para establecer empresas que habiendo corrido con el riesgo exploratorio, exploten -después- los yacimientos del Estado. Algunas personas ya han hecho algunos comentarios en forma más o menos general («La Privatización de P.D.V.S.A.»; «La Apertura Petrolera»,en mi libro **Ya Dios no es venezolano**, 1995). Y otros, como Bernard Mommer, en Economía Hoy del 20-02-95, han comentado, en forma muy específica, algunas de las presuntas debilidades de la proposición M.E.M.-P.D.V.S.A.

Quisiera con este trabajo, iniciar una discusión que para mi debe estar dividida en dos partes: 1) El marco conceptual. Es decir, ¿Establece P.D.V.S.A. un marco de desarrollo económico y social diferente, donde se inserta el petróleo como un bien capaz de ayudar al desarrollo de una Venezuela distinta o, por el contrario, el marco P.D.V.S.A. afianza -aún más- al Petro-Estado en su poder de *Gran Distribuidor* de la riqueza nacional? (Más de lo Mismo). 2) Independientemente del marco conceptual ¿En sus aspectos técnicos y comerciales es la proposición de P.D.V.S.A. la más conveniente?.

Esta división es importante establecerla para obligarnos a pensar, no sólo en los beneficios económicos y técnicos que pueden derivarse de la Apertura de la industria petrolera, visto el petróleo en su condición histórica característica de generador

de recursos financieros para el Estado, para que éste decida como repartir esos ingresos, transformados en bienes y servicios a todos los ciudadanos del país. De ser ésta la única visión del rol del petróleo, dado la estructura de su propiedad (del Estado), entonces, la tarea de juzgar la conveniencia de cualquier metodología para la Apertura sería muy sencilla: buscar la manera de que el Estado, dueño de los yacimientos, reciba la mayor parte posible del «alquiler» del subsuelo y buscar al operador que, dentro de ciertas reglas claras de juego, esté dispuesto a pagar el mayor «alquiler» por el derecho de explotar ese subsuelo.

Con diferentes palabras, pero con la misma intención, ha desarrollado P.D.V.S.A. su proposición y, salvo algunas consideraciones de tipo técnico, financiero y estratégico que pudieran hacérsele, P.D.V.S.A. ha presentado un plan realista que pudiera ser aceptable, con algunas modificaciones, si -como ya hemos dicho- estuviéramos dispuestos a seguir siendo un Petro-Estado. Cuyas características negativas todos conocemos y que nos han llevado a las dificultades que tenemos hoy para acometer los cambios estructurales que requieren hacérsele a nuestro Estado y al aparato de Gobierno. Condiciones éstas, casi previas, para salir de cualquier crisis como la actual.

Marco Técnico y Comercial (Las Pequeñas Grandes Diferencias)

Creo que sería conveniente, antes de dar opiniones definitivas al respecto, esperar las reacciones del M.E.M.-P.D.V.S.A., a los señalamientos específicos ya hechos.

Sin embargo, conviene señalar algunos aspectos que, en mi opinión ameritan -posiblemente- además de una explicación, una revisión.

1) **El Concepto Yacimiento**. No parecería muy lógico extender el derecho de explotación a todo un yacimiento si éste transciende a los límites establecidos en la superficie del área otorgada para la explotación. Venezuela es pionera en la práctica

de la explotación conjunta de yacimientos «unificados». Es decir, donde un mismo yacimiento está por «debajo» de los límites de la superficie, propiedad de más de un dueño. Creo que nos ahorraríamos problemas y los intereses nacionales estarían mejor servidos si la extensión del derecho de explotación de un yacimiento estuviese condicionado por los límites de la superficie otorgada para que sea explotado su subsuelo.

- **Retorno del área explorada a la nación una vez que ya no tenga interés exploratorio para el «inversionista».** Mediante un mecanismo automático de recuperación al cumplirse el programa mínimo de exploración por bloque, o mediante la imposición de un impuesto de superficie, lo suficientemente gravoso como para desestimular mantener bloques sin explorar, sin devolverlos a la nación.

- **Reconsiderar la conveniencia de licitar diez lotes de las dimensiones de los sugeridos, de una sola vez y bajo una misma modalidad,** dado que esta sería la primera experiencia de la Apertura Petrolera. Quizás, valdría la pena escalonar un poco las licitaciones, a fin de ganar experiencia, lo cual podría sugerir variaciones convenientes para las próximas licitaciones, sin comprometer tanto, dentro de un solo sistema.

- Aunque ya lo he expresado -sin mucho éxito receptivo- debo insistir que, en materia de comercialización, deberíamos revisar las posibilidades de:

- **Exigir alguna inversión en refinación en Venezuela** para una parte, aunque sea pequeña, de la nueva producción. Soy de los que creen que no es lógico pretender refinar en Venezuela **todo** lo que producimos, ni sería lógico tampoco exigir que se refinara **toda** la nueva producción, resultado de la Apertura. Pero siempre hay un equilibrio entre lo que se produce y lo que se puede refinar en un país exportador, tanto para su consumo interno como para manufacturar productos especiales para algunos mercados y/o mejorar la calidad de algunos productos que ya se exportan a mercados seguros y tradicionales.

Más aun, valdría la pena examinar la posibilidad de solicitar como contrapartida del otorgamiento del derecho de participar en la Explotación de Riesgo Compartido, la obligación de invertir, si no en la expansión, por lo menos en el mejoramiento de la capacidad técnica de la refinación.

- **Establecer con mayor claridad los mecanismos de comercialización para la nueva participación**, en el sentido de explorar la posible extensión aguas abajo de las nuevas asociaciones y que éstas no terminen, necesariamente, en la producción de crudo, parte del cual será procesado y vendido por nuestros socios, sin nuestra participación.

- **Que se explore también, para algunas licitaciones, la posibilidad de incluir áreas de la Faja como parte de un solo paquete**, y/o que se le den algunos incentivos fiscales en las nuevas áreas a explorar en busca de crudos livianos y medianos a quienes estén dispuestos a participar en el desarrollo de la Faja.

- **Estimular la participación nacional en la Apertura Petrolera**, como capital de inversión y como prestador de servicios administrativos, técnicos y comerciales (Este aspecto será desarrollado de seguidas, en el contexto del marco conceptual).

El Marco Conceptual (La Nueva Diversificación)

Ya en varios artículos y conferencias he pretendido establecer la diferencia entre lo que es **Público/Nacional** y lo que es del Estado. Más aun, he señalado la gran confusión que existe en Venezuela, donde se pretende definir como nacional sólo aquello que pertenece al Estado. Así por ejemplo, cuando se decretó la nacionalización del petróleo en 1975, (efectiva el 01/01/76), habían en Venezuela varias empresas petroleras operadoras, propiedad de accionistas venezolanos, como lo eran Mito Juan, Talón y Las Mercedes. A pesar de que esas empresas eran **nacionales** por ser **de nacionales** fueron estatificadas, como lo fueron también la Creole y la Shell de dueños extranjeros. O

sea, que para los efectos de la Ley, a Mito Juan y a las otras empresas venezolanas había que estatificarlas para que fuesen nacionales, a pesar de que eran de venezolanos. No en balde la Ley que popularmente se llama de nacionalización petrolera, lo cual es incorrecto, se denominó, correctamente, Ley que **Reserva al Estado** la Explotación y la Comercialización de los Hidrocarburos. En esa trampa semántica caímos todos, y a partir de la promulgación de esa Ley, todos hablamos de **nacionalización**, cuando en efecto lo que hicimos fue **estatificar**.

El petróleo en Venezuela es el bien causante de esa confusión y, como tal, debería ser el instrumento para poner las cosas en su lugar. Es decir, donde deberían estar. Y donde deberían estar, es en una nueva definición de la propiedad de los yacimientos que no deberían considerarse propiedad del Estado, cuyo instrumento ejecutor es el Gobierno, sino propiedad de la nación, es decir, de los nacionales: **de todos nosotros**, cuyo instrumento ejecutor debería ser una Constitución adecuada que reconociera esa situación y que obligara, en sus disposiciones, al diseño de un marco legal, donde el Estado-Gobierno, no pudiera disponer de esa propiedad como si fuera suya, sino reglamentarla y normalizar su uso, en nombre de **todos nosotros** y con la venia, por la vía del referéndum, si fuese necesario, de **todos nosotros**. Desde hace tiempo, el Estado popularizó la noción de que para «nacionalizar» al petróleo había que estatificar, no sólo su propiedad, sino también su operación. Así, cuando se fundó la C.V.P., años antes de la «**estatificación petrolera**», algunas empresas venezolanas expresaron su interés en promover la participación del capital venezolano privado en la nueva empresa o en otras empresas petroleras nacionales, sólo para que se les respondiera que el Estado, a través de la C.V.P., le daba al petróleo todo el carácter nacional que requería. Y, a partir de allí, la confusión que solamente acepta como nacional, a lo que es propiedad del Estado, se entronizó en la definición oficial colectiva y se hizo dogma (aunque como ya hemos indicado, el

«puntillazo» definitivo fue la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y la Comercialización de los Hidrocarburos).

Otra confusión que viene al caso, fue considerar al petróleo como instrumento potencial de diversificación, aún antes de la famosa frase «Hay que sembrar el petróleo». Pero el concepto se hizo unidimensional en cuanto a que fue interpretado como **sembrar** para recoger cosechas en la forma de otras industrias. En otras palabras, el petróleo, como «palanca del desarrollo», que es ahora la frase con la cual la modernidad sustituye a la de la «siembra», símil propio de un país agrario. Pero, en la búsqueda de una expansión diversificadora en lo económico, se subsidiaron, con los recursos del petróleo, muchas empresas ineficientes y desarrollos agrícolas improductivos.

Lo que no se hizo entonces, pero debe hacerse ahora, fue **diversificar la propiedad** del petróleo (todos somos accionistas) y su **operación** (la mayor participación posible del capital privado venezolano). Sólo así, se empezará a repartir entre nosotros lo que es de todos. Bien está que el Estado nos cobre impuestos a todos si la operación petrolera nos produce ganancias individuales o corporativas. Lo que no está bien, es que el Estado pretenda pagarse y darse el vuelto y, después de cobrar renta a su «propiedad» e impuesto a su propia operación, pretenda repartirnos a nosotros, a su leal saber y entender, parte exigua de lo recolectado, sin que exista, un marco legal apropiado que permita reclamar la usurpación que se le ha hecho a sus legítimos propietarios, que ahora no lo son, dada la interpretación que de la propiedad de los yacimientos ha hecho el Estado.

En mi opinión deberíamos extender el tema de lo específico de la **participación del capital nacional** a lo más general de la **participación nacional** en el proceso. Me explico. Yo diría que M.E.M./P.D.V.S.A. han presentado un plan realista y operativamente viable en sus aspectos técnicos. Claro que, como he dicho en varias oportunidades, se le pueden hacer algunas

observaciones, incluso de tipo técnico. Sin embargo, lo importante, dentro del contexto de mi tesis, es subrayar el hecho de que si no se le agregan a la proposición que reposa en el Congreso, algunos ingredientes de tipo político/social, el resultado será el fortalecimiento del régimen ya conocido del Petro-Estado, cuyas características negativas todos conocemos y que nos han llevado a las dificultades que tenemos hoy, para acometer los cambios estructurales que requieren hacérsele a nuestro Estado y al aparato de Gobierno. Condiciones éstas, casi previas para salir de cualquier crisis como la actual.

Por lo tanto, en mi concepto, el nuevo marco conceptual donde se inserte la Apertura Petrolera, debería incluir los elementos siguientes:

1) Mantener la apertura al capital extranjero, tal como lo sugiere M.E.M/P.D.V.S.A., con reglas claras y con condiciones, lo suficientemente atractivas, como para que la oferta de Venezuela compita favorablemente con otras regiones petroleras, también abiertas a la inversión foránea.

2) Estimular la participación de todos los venezolanos en el negocio petrolero. Tanto como accionistas en las empresas que operan y producen lo que es de todos, como en la participación activa y preferencial de las empresas venezolanas de servicios y productoras de bienes y equipos que apoyan la operación. Para ello, las nuevas empresas de explotación petrolera que se creen y las empresas existentes proveedoras de servicios tradicionales y las que se creen, deben estar dispuestas, estas últimas , a aportar la capitalización de su trabajo como parte del capital necesario para ser socios de la nueva empresa, y los primeros a aceptar esta contribución como parte del capital social.

3) Se debe abrir la inversión a riesgo de la exploración al capital nacional si este quisiera beneficiarse del valor agregado que daría el éxito exploratorio. Esto no significa que tanto P.D.V.S.A., como cierto capital nacional no debería beneficiarse también de un porcentaje del capital, sin riesgo exploratorio, de

la empresa explotadora, tal como se sugiere en la proposición de M.E.M./P.D.V.S.A (Aunque en el documento original formal entregado al Congreso no se mencionó al capital nacional en este contexto). Esto tendría la ventaja de que el capital nacional que tome el riesgo tendría derecho a esperar un mayor beneficio al de aquellos capitales a los cuales se les darían las ventajas de la eliminación del riesgo. Estos últimos no deberían ser capitales privados individuales sino fondos similares a los sugeridos más adelante en este trabajo. De lo contrario, habría demasiada discrecionalidad para otorgar el beneficio de la participación sin riesgo, si esta se le hiciera a individuos o a empresas en forma que, forzosamente, tendría que ser selectiva.

Lo anterior está relacionado con las oportunidades que se le deben dar al capital nacional, corporativo o individual, para participar directamente en la inversión petrolera que requiera la apertura. Pero, la verdadera revolución necesaria, está en lograr que todos los venezolanos puedan participar directamente en parte de la riqueza generada por el sector petrolero sin que toda ésta pase primero por las arcas del Estado, para que éste continué siendo el *Gran Distribuidor* de todo el ingreso petrolero entre sus verdaderos dueños: Todos los venezolanos. Por que si no hice la pregunta al comienzo de este trabajo, ha llegado el momento de hacerla: ¿De quién es ese petróleo que reposa en nuestro subsuelo?. La respuesta no puede ser otra: De los venezolanos. De los nacionales. De la nación, que somos todos y no del Estado que no es sino el brazo político de la nación. Por eso, además de la participación del capital nacional en el negocio petrolero, debemos también asegurar, como ya hemos dicho, una mejor y directa distribución del ingreso entre todos los venezolanos.

Los Nuevos Propietarios (del Estado a los Nacionales)

Algunas alternativas al respecto:

- Examinar mecanismos, tales como vender acciones de las

empresas petroleras en la Bolsa de Valores a los venezolanos.

- Considerar seriamente, la posibilidad de regalarle una acción de P.D.V.S.A., o de las nuevas empresas, a cada venezolano. Esta última sugerencia tiene fuerte apoyo conceptual, en lo ya dicho hasta ahora, como instrumento efectivo de distribución de parte de la propiedad, que es de todos, entre todos, amén de que podríamos parafrasear lo dicho por el ejecutivo de Bolivia en relación al mismo problema:

> "El Estado Boliviano a lo largo de 60 años ha recibido un valioso patrimonio de empresas públicas que, de acuerdo con estimaciones técnicas, tiene un valor superior a los 2 mil millones de dólares. Desafortunamente, este importante capital ha beneficiado sólo a un pequeño grupo de burócratas y políticos que han hecho de las empresas públicas fuente de corrupción y de botín partidario. Como el propósito de rescatar para los bolivianos los beneficios de su propio patrimonio, proponemos la capitalización y democratización de las empresas públicas y la devolución de su real propiedad y utilidades a sus dueños originales, es decir, a los propios bolivianos". ¡Amén!.

- El Estado al no ser el propietario de los yacimientos, no debe cobrarle "regalías" al operador. La "regalía", debería depositarse en fondos especiales autónomos, a crearse, con propósitos definidos y de los cuales se beneficiarían la mayoría de los venezolanos, que son los propietarios del recurso petrolero (Por ejemplo, fondos para pagar prestaciones sociales. Para pagar la deuda pública. Para situaciones de emergencia. Para contribuir a los fondos de pensiones a crearse. Etc).

- Crear un fondo nacional, propiedad de todos los venezolanos, con parte de la "regalía". Este fondo actuaría como una especie de fondo mutual y realizaría inversiones en la propia

industria petrolera, petroquímica, empresas de Guayana, empresas privadas y hasta en el exterior si se considerara conveniente. Más aun, este fondo podría incrementarse con participaciones derivadas de otras empresas públicas cuando se privaticen, tales como, las de la C.V.G., algunas empresas de distribución eléctrica, C.A.N.T.V., etc. El fondo sería administrado por una junta local, con un representante del Estado (allí sí), algún representante de las empresas contribuidoras al fondo, un representante de la sociedad civil y estaría asesorado por alguna firma (s) de reconocido prestigio nacional e internacional y auditado por empresas internacionales que no tengan interés en el fondo. Anualmente repartiría dividendos a sus accionistas (los venezolanos), no disminuiría su capital y mas bien capitalizaría algunos de sus dividendos para ajustar siempre su valor real a la inflación. Esto no lo inventé yo. En Alaska, funciona un fondo muy parecido al que aquí se sugiere como una opción a estudiar.

Creo que es hora de enfrentar ciertas realidades:

- El Petro-Estado, como muchos Estados a lo largo de la historia, confundió dinero con riqueza. Nos creímos ricos, cuando lo que tuvimos fue dinero. Mal distribuido y peor empleado. De haberse repartido parte de este dinero directamente entre los venezolanos, muchos lo hubiesen convertido en riqueza. Creando industrias. Un mercado de valores. Ahorro nacional. Participación mayor de la ciudadanía en las decisiones económicas del Gobierno, puesto que la mayoría hubiese pagado impuestos sobre las ganancias reales que le habría producido la riqueza, es decir, la transformación del dinero en bienes productivos. Por mucha **dilapidación y mal uso individual** que se hubiese hecho del dinero de cada quien, nunca podría haberse producido la debacle que estuvo en capacidad de producir un solo actor, un solo recolector, y un solo distribuidor del dinero disponible. **El Estado lo perdió casi todo. Los venezolanos lo hubiéramos invertido casi todo.** Hay una diferencia. Este fue y es un problema

estructural y no se resolverá a menos que en un país monoproductor petrolero, como Venezuela, reestructuremos completamente la naturaleza del Petro-Estado. Algo que la proposición M.E.M./P.D.V.S.A. no estimula por si sola. Por el contrario, como ya hemos dicho, por si sola, lo que hará será fortalecer la estructura actual, la cual continuará dilapidando el dinero nuevo que le entre y querrá posponer el cambio inevitable para otra época en el futuro.

- Dada la situación descrita, el Estado, ahora, ya no tiene recursos propios para acometer el financiamiento necesario para la expansión y la operación de su industria petrolera. Aunque por algún malabarismo financiero lo lograra, sería a expensas de poder construir la nueva sociedad que requiere mejor educación, salud, servicios públicos, seguridad personal y jurídica, etc. Pero, además, el argumento más persuasivo para la llamada Apertura, es la oportunidad de usar esta necesidad, como una "palanca" para el cambio estructural del Estado. Y hay que hacerlo **ahora**. De lo contrario pasarán más años de seguir viviendo en el "Paraíso de los Tontos". Aunque la crisis debe haberle abierto los ojos a la sociedad y vacunarla contra el espejismo del falso progreso que crea el dinero sin riqueza. Por lo tanto, habría que preguntarse, si el sistema político del Petro-Estado podrá sobrevivir, aun con una inyección adicional de recursos financieros. Yo creo que no. Por ahora, y a muy corto plazo, el sistema viene sosteniéndose por la esperanza del cambio representada y apoyada en un solo hombre. El próximo paso, si no es el cambio, será el derrumbe del sistema.

La gran interrogante, no es si vendrá o no el cambio. El cambio vendrá. La gran interrogante es ¿Quién lo propondrá primero, con seriedad y con voluntad de ejecutarlo?. Si es el estamento político, el sistema y el liderazgo político actual, se habrán salvado. Si es otra institución con otros líderes, entonces la actual generación política tendrá que ponerse las pantuflas.

Mientras se actúa sobre lo anterior, no debemos tomar

medidas de apertura que, en su estructuración, le añadan mayores dificultades a la conversión de los bienes estatificados en bienes públicos nacionales. Por lo tanto, hay que revisar las proposiciones actuales de Asociaciones de Riesgo Compartido y otras modalidades de asociaciones, en cuanto a su posible desestímulo a la participación del capital nacional y a la implantación de cambios estructurales de naturaleza política, como los aquí sugeridos. En este sentido creo que debe insistirse en que la participación de las filiales de P.D.V.S.A., en las nuevas empresas de explotación (estimadas en un 35%) sea de naturaleza obligatoria y no opcional. De lo contrario se correría el riesgo de que no le quedase al final, nada al "Estado" para repartírselo a la "nación" (Por lo menos en las nuevas Asociaciones).

Antes de concluir creo que hay dos aspectos adicionales importantes que comentar:

1) Si consideramos a la inversión privada venezolana como "nacional", entonces muchas de las objeciones que se han hecho sobre la interpretación del Artículo 5to.(*), en el sentido de que "control" significa mayoría accionaria del Estado en las nuevas empresas, podrían diluirse un poco, puesto que la inversión "nacional" total en esas nuevas empresas, estaría dada por la sumatoria de la participación accionaria del "Estado", más la participación accionaria del capital privado nacional (Los "nacionales"). Que en el fondo es como debe medirse la participación accionaria de la "nación" (Como ya se ha dicho el Estado y el sector privado nacional son ambos parte de la estructura integral de la "nación").

2) "Cómo" se organiza un sistema, fuera del ámbito del Estado para la distribución directa a los venezolanos de parte de los ingresos generados por la operación petrolera, es algo que amerita estudios y análisis profundos. Por una parte, hay que conocer las experiencias de algunos países (Bolivia y Alaska, entre otros). Y por otra parte, hay que reconocer las dificultades administrativas que tendríamos al tratar de distribuirle, por

ejemplo, una acción comercial a todos los venezolanos, en un país donde sacar una cédula y hacer un censo son tareas de extrema dificultad. No hay duda de que el proceso tendría que ser a mediano plazo y por etapas. Pero la dificultad mayor inmediata no descansa sobra la mecánica de la inplantación. La verdadera dificultad está en lograr la voluntad política necesaria para iniciar un cambio estructural del Estado, apoyado en la oportunidad de la Apertura Petrolera. Sin eso, no vale la pena perder tiempo en analizar el "cómo". Por lo tanto, todo lo dicho hasta ahora, puede resumirse en una pregunta colectiva al estamento político, representado en el Congreso, ante quienes hice esta exposición (por gentil invitación de la Comisión Bicameral de Energía y Minas): ¿Están ustedes dispuestos a apoyarse en la Apertura Petrolera para diseñar a un nuevo país?. ¿Hay o no, voluntad política para establecer un nuevo "qué"?. Si la respuesta es sí, los tecnócratas, los expertos y ustedes mismos, se encargarán de diseñar el "cómo".

Si todo lo anterior suena a revolucionario y complicado, es porque lo es. Pero repito, que de no efectuarse un cambio drástico, ahora, en la filosofía de la propiedad y la operación petrolera, estaríamos prolongando en el tiempo la existencia del modelo agotado del Petro-Estado y, por ende, demorando el proceso de cambio que requieren nuestras estructuras de Gobierno y de Estado. Y mientras más pospongamos la agonía, más revolucionarios y más complicados se harán los futuros mecanismos de cambio. Tanto así, que probablemente el cambio no lo podremos efectuar por las "buenas", tal como lo propongo aquí.

Por las "malas", tampoco será muy fácil.

Resumen y Conclusiones:

- Estoy de acuerdo con la Apertura Petrolera, como concepto, y hasta con la estructura propuesta por M.E.M./ P.D.V.S.A.

- Sugiero que hay que analizar más a fondo las observaciones legales que se le han hecho. (No debemos entrar en un convenio formal por 30 años si el marco legal no está perfectamente claro).

- Se deben revisar también las observaciones técnicas.

- Hay que asegurarse que las condiciones establecidas en el convenio final, no dificulten o impidan el implantar los cambios estructurales imprescindibles que tarde o temprano habrá que efectuar en la naturaleza de la relación Estado, petróleo , nación. (En este sentido pareciera recomendable que el Estado, como primer paso, estableciera como obligatoria la participación de las filiales de P.D.V.S.A. (35%) en las nuevas empresas de explotación a crearse). A fin de que le sea posible al Estado venderle o transferir esta propiedad a la nación, (todos los ciudadanos) si así se considerara conveniente.

- Hay que estimular la participación del capital nacional en el proceso de Apertura en todos sus componentes: Exploración a Riesgo y Explotación Comercial sin riesgo exploratorio. En estos dos aspectos, la naturaleza del capital debe ser distinta. Individual o corporativa para la exploración. Colectiva o vía fondos especiales para la explotación, a fin de evitar la concentración excesiva de capital de un solo origen en el negocio petrolero y permitir el mayor beneficio colectivo posible de la riqueza nacional.

- Hay que distinguir entre Estado (Gobierno) y nación (los ciudadanos) en cuanto a establecer la propiedad de los yacimientos y, por ende, diseñar mecanismos para que la "regalía" petrolera la reciba directamente el verdadero propietario: Es decir, la Nación. Es decir, todos nosotros.

- Hay que establecer mecanismos que permitan distribuir parte de los ingresos petroleros, **directamente** a los ciudadanos, sin que pasen por las arcas del Estado. Con esa acción se lograría:

1) Disminuir el poder monopólico/distribuidor del Estado, en cuanto a los ingresos petroleros.

2) Desmontar la estructura del Petro-Estado como factor

estimulador de un sistema de Gobierno ineficiente.

Más aun, la posibilidad de poder cambiar estructuras económicas, sociales y políticas en América Latina bajo regímenes democráticos, empieza a cuestionarse seriamente. La tesis es que, aunque democracia y capitalismo van juntos, democracia y la transformación de una economía del Tercer Mundo en un país capitalista no parecen ser compatibles. La reforma económica es caótica y la situación nacional empeora antes de mejorar. En Venezuela, no faltan quienes compartan esta preocupación. Según ellos, la modernización (en su época) de nuestro aparato productivo se inicio y terminó bajo Pérez-Jiménez. Sin embargo, algunos de nosotros seguimos insistiendo en la búsqueda difícil de modernización con democracia, sin paréntesis de dictadura. Porque pensamos que los paréntesis pudieran convertirse en el texto final... y eso no nos gusta.

- Finalmente y casi como resumen de todo lo anterior, aprovechar la Apertura Petrolera, no sólo para lograr un buen contrato de asociación con el sector privado internacional y nacional para la exploración y explotación de nuevos yacimientos sino, más importante aun, para lograr cambios estructurales imprescindibles en la naturaleza del Estado, el fortalecimiento del concepto de nación y la creación de un sistema de distribución de la riqueza petrolera más directo, más participativo y más justo que el actual.

(*) Artículo 5to: "El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1ero de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas.

En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que

garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta,dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes."

27 de marzo 1995

La Apertura Petrolera (III)
FORMULAS PARA UN DOGMA

Después de varios meses de discusiones y de un loable esfuerzo por parte de la Comisión Bicameral de Minas e Hidrocarburos del Congreso Nacional por incorporar al debate a personas e instituciones de la más variada índole, parece que las dificultades para lograr un consenso entre las fuerzas políticas nacionales representadas en el parlamento, se reducen a dos: La participación nacional en la Apertura y la interpretación de «control», derivada del contenido del Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos.

Antes de entrar en materia quisiera señalar, de inmediato, la buena voluntad que han mostrado todos los participantes en el debate para poder llegar a una solución satisfactoria. Lo único a lamentar, por vía de excepción, es el poco interés que han demostrado algunos parlamentarios en seguirle la pista al debate: sus ausencias y llegadas tarde a las reuniones y, de parte de algunos, su poca inclinación a «oír» sugerencias distintas a la visión casi dogmática que sustentan sobre el problema. Producto, como veremos más adelante, de una visión más interesada que tienen sobre el Petro-Estado y los peligros que para ciertos estamentos políticos representaría un cambio estructural del Estado venezolano. Lo cual es otra manera de decir que algunos todavía le temen a la modernización de Venezuela, pues intuyen que ella representaría una pérdida de privilegios, no ganados, de los cuales hoy disfrutan.

La Participación Nacional y el Artículo 5to (La complicación del capricho)

Como dijimos al comienzo, creo que casi todas las

observaciones que se le hicieron inicialmente al proyecto, pueden ser o atendidas o modificadas por M.E.M./P.D.V.S.A., o retiradas por quienes las hicieron, sin mayores problemas. Dentro de esta categoría están aspectos tales como:

El tamaño de las áreas a licitarse. Las explicaciones dadas por P.D.V.S.A., aclaran muy bien las razones para que se hayan ampliado las áreas en relación con experiencias anteriores. En dos palabras -y para no entrar en terrenos demasiados técnicos- la dificultad, el costo y las expectativas de encontrar y desarrollar petróleo en Venezuela han aumentado considerablemente, desde las últimas concesiones y contratos de servicios otorgados por el Estado.

Retorno del área explorada a la Nación una vez que ya no tenga interés exploratorio para el inversionista. Sobre esto no debe haber ningún problema en ponerse de acuerdo.

Reconsiderar la conveniencia de licitar diez lotes de las dimensiones de los sugeridos, de una sola vez y bajo una misma modalidad. Parece que el péndulo se inclina a licitarlos todos como ha sido programado. Sin embargo, este es uno de los aspectos que pudieran afectarse de no haber claridad absoluta en las soluciones propuestas para la interpretación del Artículo 5to. Una falta de claridad y un peligro de que fuese cuestionado legalmente el otorgamiento de los derechos de exploración y explotación, bajo las condiciones dadas, por conflictos con lo establecido en el Artículo 5to., podría sugerir la estrategia de licitar solamente una parte de los diez lotes y esperar un tiempo prudencial para licitar los otros, a fin de aclarar legalmente las disposiciones del Artículo 5to.

Exigir alguna inversión en refinación en Venezuela como parte de las licitaciones. Por lo menos en esta vuelta parece que esto no será considerado.

Establecer con mayor claridad los mecanismos de comercialización para la Apertura. Esto parece estar aclarado lo suficiente, aunque durante la vida de los convenios se podrían

negociar algunas asociaciones «aguas abajo» con los nuevos socios.

Que se explore también para algunas licitaciones, la posibilidad de incluir áreas de la Faja como parte de un solo paquete. Por lo pronto y para esta vuelta, esta posibilidad está descartada.

La Inversión Nacional (El Estado y la Nación)

Desde mi artículo «La Apertura Petrolera: La Nueva Nacionalización», (ver página 21 de este libro), que recoge mi presentación del 26/04/95 -sobre el mismo tema- al Congreso Nacional, han habido suficientes consideraciones y discusiones como para hacer un nuevo resumen del problema.

Lo verdaderamente importante a resaltar es que el concepto de que el capital nacional debe **participar** en el proceso y de que hay que **estimular** esa participación, es ya un principio aceptado generalmente. Queda pues, ahora, definir el «cómo», y este «cómo» puede afectarse sensiblemente por la interpretación que sobre el significado de «control» se le dé a lo establecido por el Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos. Para comenzar es importante definir lo que, para mi por lo menos, debería catalogarse como **capital nacional** en este proceso de Apertura. Estas definiciones servirían además para empezar a desmontar la especie de que sólo es **nacional** lo que pertenece al **Estado**.

Se considerará **capital nacional:**

1) Las inversiones que haga el Estado venezolano, a través de las organizaciones que designe. Por ejemplo, P.D.V.S.A., F.I.V. Fondos Especiales. Otras Empresas del Estado, etc.

2) Las inversiones que hagan directamente las personas naturales o empresas privadas venezolanas.

3) Las inversiones que hagan fondos privados nacionales de ahorro, de inversión, de pensiones, etc.

4) La capitalización que de su trabajo, tanto en la etapa de

exploración como en la de producción, hagan las empresas nacionales de ingeniería, construcción y suministro y manufactura de equipos y materiales.

Como la Apertura Petrolera consta básicamente de dos etapas: Exploración a Riesgo y Explotación (producción) sin Riesgo, es importante definir la cualidad del capital venezolano que podría participar en una y otra etapa.

Exploración a Riesgo. En esta etapa podría participar el capital privado nacional que así lo desee, aunque de arranque habría que excluir la participación institucional de fondos de ahorros, de pensiones, de retiros, de prestaciones sociales, etc., cuyos estatutos y razón de ser impiden su participación en inversiones de alto riesgo. Por supuesto que personas naturales que deseen y quieran utilizar sus ahorros, total o parcialmente, podrán agruparse en un fondo especial para inversiones de riesgo.

También, deberían poder participar en esta etapa exploratoria las organizaciones del Estado, como P.D.V.S.A. y el F.I.V o cualquier otra institución, que se autorice para ello. Esta flexibilidad de opciones pudiera ser clave, como veremos más adelante, para resolver el problema de interpretación del Artículo 5to. Más aun, no parece lógico que el Estado venezolano se auto-excluya de participar en esta etapa, ya que podría ser conveniente correr el riesgo exploratorio, a cambio de una composición final de la empresa de explotación con mayor participación nacional. En efecto, tal como está planteada la Apertura, el sector privado (se supuso extranjero al diseñar el modelo) correrá con el 100% del riesgo exploratorio y P.D.V.S.A. tendrá la opción de adquirir al costo el 35% del capital de la empresa a formarse, para la explotación sin riesgo de los yacimientos ya explorados. Esto, de ejercer P.D.V.S.A. la opción, dejaría la empresa de producción con 65% extranjero y 35% nacional (lo propuesto) .

Supongamos ahora que cambiáramos algo las condiciones y estableciéramos que el 25% de la empresa para la exploración

estuviese reservado al capital nacional (de acuerdo a nuestra definición podría ser P.D.V.S.A., capital privado, o una mezcla de los dos). A esta inversión nacional no se le pediría que vendiera al costo el 35% de su capital, mientras que a la inversión extranjera se le mantendría la obligación de venderle, al costo, a P.D.V.S.A. el 35% del capital de la nueva empresa de producción. El resultado, entonces, sería el siguiente: La empresa extranjera invertiría 75% en la empresa de exploración y quedaría con el 49% de la empresa de producción. Es decir, el 35% de 75%, que es lo invertido, es igual a 26% que pasaría a P.D.V.S.A., y el balance 49% quedaría con el inversionista extranjero. El capital nacional tendría el 25% representado por su inversión original en exploración más el 26% de P.D.V.S.A. que le vendió el socio extranjero al costo. El total del capital nacional sería, entonces 51% (25% más 26%). Lo cual con un simple acuerdo entre el Estado y el capital privado de votar juntos (votaría el Estado) le daría al capital nacional mayoría absoluta en la empresa y al estado el derecho de votar esa mayoría. Corporativamente se mantendrían en empresas separadas P.D.V.S.A. y la inversión nacional privada, a fin de evitar que de existir una sola empresa de capital nacional, y P.D.V.S.A. tuviese mayoria accionaria, esta empresa se convirtiera en empresa pública con todas las desventajas que eso representaría para el capital nacional privado. El capital extranjero estaría corriendo relativamente el mismo riesgo económico que corre hoy con lo propuesto en la oferta actual de P.D.V.S.A., en cuanto a la devolución al costo a P.D.V.S.A. de la misma proporción de su capital invertido. Luego, tanto el capital nacional privado como P.D.V.S.A. estarían obligados a vender a valor de mercado, un porcentaje de su capital (todo el capital que represente la participación de P.D.V.S.A. por el mecanismo de la inversión directa en la etapa de exploración y un mínimo del 10% del capital nacional invertido, en esta misma etapa) al público venezolano. Bien directamente en la Bolsa de Valores o bien mediante fondos especiales,

constituidos especialmente y con propósitos definidos. Este porcentaje de venta al público se diluiría en múltiples acciones especiales, a fin de que su precio final fuese accesible a la mayor parte de la población. P.D.V.S.A. por su parte, conservaría el 26% del capital que le haya cedido, al costo, el socio extranjero.

Si el capital privado nacional no estuviera interesado en el 25% reservado para él, entonces P.D.V.S.A., haría la inversión y tendría la obligación, como ya hemos dicho, de ser exitosa la etapa de exploración, de colocar este capital en la Bolsa de Valores, representado por acciones a valor de mercado para recuperar su inversión y ganarse la diferencia entre la inversión original y su valor de venta al público. Mantendría también el derecho de votar esas acciones, tal como lo tendrá en su acuerdo con el capital nacional privado que participe en la etapa de exploración y en la de producción.

Si el capital nacional quiere participar con más del 25% en la etapa exploratoria, entonces, una parte proporcional del capital invertido en exceso del 25% reservado para la inversión nacional, tendría que vendérsele a P.D.V.S.A., al costo, tal como lo hará el capital extranjero en la misma proporción sobre la totalidad de su inversión. Hay algunas otras variables que habría que considerar, como por ejemplo, si del 25% reservado para el capital nacional en la etapa de exploración, el capital privado lo cubriera todo. Entonces, solamente el 10% de esa inversión sería puesta a la venta al público de mantener sin modificaciones la sugerencia original. Lo anterior, no parece muy probable, pero habría que decidir si en ese caso se le exigiría al capital nacional privado un porcentaje mayor de venta de su capital a precio de mercado al público o si se le pediría a P.D.V.S.A., colocar parte del 26% del capital que recibe al costo del capital extranjero, o una posible combinación de ambas alternativas.

Por último el capital nacional no tendría ninguna restricción para invertir en la fase de producción sin riesgo, del proceso de Apertura. Ya que no aplicararían las limitaciones que afectan a

ciertas instituciones de ahorro para invertir en proyectos de alto riesgo.

El esquema suena más complicado de lo que verdaderamente es, y tiene las siguientes ventajas y desventajas:

Ventajas:

Califica como capital nacional tanto las inversiones del Estado como las inversiones del sector privado nacional. Como ya se ha dicho, se termina con ese concepto artificial que pretende calificar de nacional solamente a lo que es propiedad o inversión del Estado.

- Da un paso en la dirección correcta para separar el concepto de Estado, del concepto de Nación. Estado volvería a ser lo que nunca ha debido dejar de ser: El brazo político y jurídico de la Nación. Y la Nación sería lo que verdaderamente **es**, el conjunto de todos los venezolanos, independientemente de ideología, raza, filosofía política o religión.

- Al establecer y aceptar como Nación a todos los venezolanos y al definir al Estado como la representación pequeña de su forma jurídica y política, se abriría la oportunidad para redefinir el concepto de propiedad pública. Entendiéndose como **público** lo que es de todos y no necesariamente sólo lo que es del Estado. Entenderíamos entonces que los yacimientos petroleros y las riquezas naturales de Venezuela no son del Estado. Son de la Nación, y por lo tanto, no tiene el Estado el derecho de asumir su propiedad y administrar la renta y lo producido por esta riqueza para su beneficio y el del pequeño grupo de venezolanos que forman parte de su estructura. El Estado puede administrar lo que reciba por impuestos, causados por la generación de la riqueza que la explotación de esos bienes públicos nos producen a todos los venezolanos. Puede incluso constituir fondos especiales de administración privada para que parte de esos impuestos sean dedicados al máximo bienestar colectivo. Pero lo que no debe hacer, es constituirse en el generador de esos ingresos, el receptor de la renta y el recolector

de impuestos y el distribuidor de todo lo recaudado por estos conceptos. En una muy vieja definición de Adam Smith que ya hemos citado en ocasiones anteriores, **eso** sería «improper» (impropio) . Por lo tanto, a las recomendaciones que aquí hacemos para perfeccionar el contrato de asociación para la Apertura Petrolera, habría que agregarle cambios sustantivos en nuestra legislación que le devolverían a la Nación (nosotros) la propiedad de los yacimientos. Se le daría a la Nación el derecho de cobro de la «regalía» (como propietario) para su utilización en la creación de fondos especiales (educación, pensiones, salud, etc.) , cuyo rendimiento servirían para beneficiar a toda la población. Se establecería además, un sistema de acceso de los ciudadanos a las acciones de nuestras empresas del Estado, para así verdaderamente nacionalizar lo que es de todos y no continuar con un sistema de estatificación comprobadamente ineficiente, donde el Estado (los pocos) usufructa los bienes nacionales (que son de todos) .

- La mecánica de distribución, aquí sugerida, del capital y los beneficios de la Apertura Petrolera crea, de hecho, un buen marco práctico para iniciar el camino del rescate de lo público por la Nación.

- Pudiera resolverse el problema de interpretación del Artículo 5to., ya que le daría el poder de decisión al Estado mediante el derecho que se le otorgaría de votar el 51% de las acciones del capital nacional. Así habría control y mayoría accionaria que parece ser lo que solicitan los que tienen una interpretación más restringida de la aplicación de dicho artículo.

- Mantendría como sana medida económica un 51% de participación nacional en los nuevos descubrimientos petroleros.

- Al popularizar la inversión nacional en el sector petrolero, crearía una pléyade de «dolientes» que le saldrían al paso a un Estado que intentara malbaratar la riqueza petrolera -la cual ahora sería propiedad tangible de muchos- en las locuras, resultado de políticas económicas erradas y desconsideradas para.con la

población nacional.

Desventajas:

- La posible reacción negativa del capital extranjero ante la limitación del 75% de inversión de su capital en exploración y el 49% en la empresa de producción. Aunque hay que recalcar de nuevo, que la relación capital invertido y devolución a P.D.V.S.A. del capital al costo, en caso de ser exitosa la exploración, no varía en la proporción aquí planteada de la incluida en la oferta sugerida por M.E.M./P.D.V.S.A.

- El costo adicional en el cual podría incurrir P.D.V.S.A., de tener que participar con algún capital en el riesgo exploratorio. Sin embargo, las ganancias adicionales que le produciría el éxito en algunos de los lotes exploratorios, producto de su mayor participación accionaria, podría compensarle estas perdidas. Todo dependerá del posible éxito que se obtenga en los lotes vistos como un todo. Además, es también importante recordar, como ya he dicho en varias ocasiones, que la Apertura Petrolera no debe ser utilizada solamente para obtener un buen contrato de asociación con el capital extranjero. Eso es lo que busca cierto estamento político nuestro que quiere seguir disfrutando de las delicias del Petro-Estado, mientras la Nación colapsa. La Apertura Petrolera tiene que servir de palanca para iniciar el proceso de cambio estructural que requiere nuestro Estado. Cambiarle la naturaleza de propietario a administrador, coordinador y motivador de la generación de riqueza por todos nosotros. Hasta ahora hemos tenido un Estado rico y una Nación pobre. Es hora de tener un Estado eficiente que se ajuste a gastar lo que le ingresa y una Nación rica.

Conclusiones (Hay otra opción)

No quisiera dejar la impresión de que lo aquí sugerido, en forma de una diferente mecánica para las asociaciones de Estado/capital privado, extranjero y nacional, está hecho con la intención única de buscarle una salida al problema de control, planteado

por la interpretación que le se haga del Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos. Esa, pudiera ser una ventaja adicional. Lo verdaderamente importante está en el desarrollo de nuevos conceptos sobre lo que es capital nacional, la naturaleza restringida del Estado, en cuanto a ser propietario de los bienes públicos y la redefinición y comprensión de lo que significa el concepto de Nación y los derechos de todos los ciudadanos que se desprenden de esa moderna y amplia definición. Pero si la mecánica propuesta fuese inaceptable para nuestro estamento político y la interpretación del Artículo 5to. quedara sin definición jurídica, sería entonces muy peligroso aceptar los malabarismos de interpretación que se han sugerido para no cambiar su contenido, cumplir con su mandato y configurar una Apertura y cuyos convenios durarán 30 años, sin correr el real peligro de que una interpretación formal de nuestras cortes, nulifique las condiciones hoy propuestas o que el capital extranjero se ausente ante la indefinición jurídica y la propensión muy nuestra a cambiar las reglas del juego.

Si el capital nacional no puede aportar el 51% del capital en las nuevas empresas de exploración a formarse, y si se quiere hacer un proceso de Apertura eficiente y duradero, no hay entonces más remedio que cambiar el contenido del Artículo 5to., para que sus nuevas disposiciones cubran claramente la mecánica de control que se ha propuesto hasta ahora.

La dificultad está en que hay un grupo importante de parlamentarios que están de acuerdo con la Apertura pero no con la modificación del Artículo 5to. Son los mismos que señalan también que dicho artículo no puede interpretarse con la flexibilidad necesaria para cubrir el esquema de control propuesto por M.E.M./P.D.V.S.A.

Entonces, ¿en qué quedamos?.

¿Se aprueba la Apertura, así como ha sido propuesta en materia de control del Estado sobre la futura operación y se deja

la duda legal para que tarde o temprano nos acose?.

¿Se aprueba una nueva mecánica, como la aquí sugerida, que le de al Estado efectivamente el voto y el control sobre el 51% del capital de las nuevas empresas de producción a constituirse como resultado del éxito exploratorio de la Apertura?.

¿Se modifica el Artículo 5to., aunque sea pasándole una aplanadora a los disidentes?.

Yo me pronuncio frontalmente por las dos últimas.

En todo caso, si la Ley es la reguladora de los objetivos nacionales, y si el objetivo nacional es la Apertura Petrolera, y si la Ley actual no permite cumplir con el objetivo nacional o, por lo menos, presenta suficiente dudas como para que los futuros inversionistas estén algo nerviosos, entonces... ¿qué argumento racional existe para no cambiar la Ley?.

No me respondan. Conozco la respuesta. Es la misma que pasa leyes para reforzar, a veces, en forma arbitraria y hasta inconstitucional el poder del Estado, porque responde a sentimientos populistas y trasnochados del momento, a la vez que le cuesta trabajo elevar a sus protagonistas a la condición de estadistas para mirar el largo plazo sin encandilarse con el facilismo criminal de lo inmediato.

Duele reconocerlo. Pero así parece ser.

P.D.: Habiendo dicho todo lo anterior y hora con los pies sobre la tierra, creo que se aprobará pronto por el Congreso Nacional la Apertura Petrolera.

- El problema de la participación del capital nacional se solucionará con la promesa de la creación de un fondo por P.D.V.S.A., para la inversión popular en el petróleo.

- El debate sobre el control se resolverá mediante la concesión al Presidente (nombrado por P.D.V.S.A.) de la empresa de producción un voto doble y se reestructurará el modelo corporativo para asegurar que P.D.V.S.A. tenga siempre un 35%

del capital de la empresa de producción. Esto ayuda, pero no resuelve del todo el problema de no poseer P.D.V.S.A. y el capital nacional una mayoría clara accionaria del 51%.

- P.D.V.S.A. no invertirá en la etapa de exploración.
- No habrá por los momentos, participación masiva del capital venezolano.

Sin embargo, se habrá logrado un buen contrato de asociación del Estado con la inversión extranjera. Si al mismo tiempo, la Nación venezolana, es decir, todos nosotros, habremos hecho también un buen negocio es harina de otro costal.

Yo creo que no. Me habría gustado que hubiéramos desplegado como Nación la misma habilidad política para transformar al Estado usando la Apertura como palanca para el cambio, que desplegó el Estado para negociar un buen contrato y dejar todo lo demás igual.

15 de junio 1995

La Apertura Petrolera (IV)
CINCO PROPOSICIONES CONCRETAS

El Congreso Nacional, en una demostración de responsabilidad colectiva, ha pospuesto la aprobación de las condiciones generales (marco de referencia) que regirán la llamada Apertura Petrolera, para el 04 de julio. Esto permitirá la discusión de algunas proposiciones y observaciones concretas, hechas por algunas fracciones políticas y personas interesadas en el proceso, que no por haber sido presentadas a última hora, carecen de importancia.

Observaciones a la proposición de P.D.V.S.A./M.E.M. han habido muchas. Algunas han sido explicadas por P.D.V.S.A./ M.E.M. a satisfacción de las partes. Otras han sido acogidas en revisiones sucesivas al documento original. Otras no han sido acogidas por los autores del proyecto en forma totalmente satisfactoria para aquellos que hicieron las observaciones y, por último, algunas observaciones/proposiciones por haber sido hechas a «última hora» no pudieron ser discutidas dentro del seno de la Comisión Bicameral del Congreso encargada de preparar un documento formal con las observaciones y recomendaciones finales del proceso. Es, precisamente, este documento el que servirá de base para la discusión final en el Congreso Nacional.

De todas las observaciones hechas, acogidas y rechazadas, salvo algunas, como el tamaño de las áreas a explorar y la posibilidad de que alguna empresa oferente se le otorguen 5 áreas para explorar (10 mil Km2) de las 10 áreas que saldrán a licitación, las observaciones de mayor importancia se centran ahora en cuatro aspectos críticos:

1) El problema del control que debe ejercer el Estado sobre todo el proceso y los mecanismos que empleará para lograr este

control, todo dentro de la interpretación que se le dé al Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.

2) La participación nacional en todo el proceso.

3) La conveniencia o no de una participación minoritaria de P.D.V.S.A. en la fase de exploración.

4) La sustitución del PEG (Participación Adicional del Estado en las Ganancias Generadas en el Proceso de Producción) por un «bono de entrada» al proceso.

El Problema del Control. No quisiera recorrer todas las argumentaciones legales que, hasta ahora, han empleado diferentes personas para concluir en que lo propuesto, por P.D.V.S.A./M.E.M., pese a los ajustes que se le han hecho a la proposición original, no satisfacen lo estipulado en el Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. Estas diferencias de opiniones, producto algunas de análisis muy serios de naturaleza jurídica, hacen que el proyecto no cumpla con uno de los requisitos indispensables para su éxito a corto, mediano y largo plazo: **Transparencia Legal**. No está, pues, claro para muchos que los convenios que se firmen bajo el esquema propuesto por P.D.V.S.A./M.E.M. resistan, en materia legal, la prueba del tiempo. Algunas personas han sugerido incluso, que la única manera de tener absoluta seguridad legal bajo el marco propuesto, sería mediante la modificación del Artículo 5to. de la Ley ya mencionada. Esto, como ya sabemos, tiene problemas de tipo político que, en sana lógica, no debería tener, ya que si las diferentes fracciones políticas están de acuerdo con la Apertura Petrolera, deberían también estar dispuestas a proveer a esta Apertura con un marco legal adecuado. Pero como la política no es precisamente la ciencia de la aplicación racional de lo que es lógico, entonces, si la modificación del Artículo 5to. no es posible, habrá que buscar el mecanismo menos vulnerable para operar la Apertura, aun bajo su vigencia (la del Artículo 5to). En eso estamos todos y,

como veremos más adelante, existe una estructura corporativa que pudiera ayudar a solucionar este aspecto del problema.

La Participación Nacional. Es importante entender que para muchos, yo incluido, la participación nacional no se reduce a darle algunas ventajas a las empresas de servicios nacionales para que sea contratada su participación como proveedores de bienes y servicios en el proceso. Ni tampoco entendemos como participación nacional exclusivamente, el concurso de los grandes capitales del país como socios en el proceso. ¡No!. Queremos lo anterior, pero para algunos de nosotros lo prioritario es la participación masiva, como socios en el proyecto de Apertura de la mayor parte posible de los venezolanos comunes y corrientes. Los pequeños y medianos ahorristas y hasta aquellos que no han desarrollado aun el conocimiento y la disciplina del ahorro y de la pequeña inversión. Por eso, el anunciado fondo a ser creado por P.D.V.S.A., para atraer a esos ahorristas, no nos parece suficiente, dado que tendría que ser creado de una porción del 35% que se puede reservar P.D.V.S.A. en la empresa de explotación. Y ese 35% es opcional y puede reducirse hasta 1%. Por lo tanto, el esquema propuesto no cumple con el requisito de popularizar la inversión nacional en el proceso de Apertura Petrolera. Tampoco cumple con la necesidad de estimular la **participación accionaria** de nuestras empresas de servicios en la fase de exploración y explotación de la Apertura, ni tampoco tiene «gancho» alguno para incentivar el regreso de algunos capitales de venezolanos honestos colocados en el exterior. En la proposición que veremos más adelante se llenan estos vacíos.

La Participación de P.D.V.S.A. en la Fase Exploratoria. Este es el punto crítico de nuestro análisis. Se le ha vendido a todos los venezolanos que el mayor atractivo del «paquete» sugerido por P.D.V.S.A./M.E.M. es que el riesgo exploratorio lo tomará exclusivamente el socio privado. Tal como está planteado el marco de referencia, ese socio privado en la inmensa mayoría de los casos será extranjero y, por lo tanto, esa situación

conducirá a que ese socio termine con un mínimo de 65% de la empresa de explotación o mucho más, si P.D.V.S.A. no ejerce su opción del 35% en esta fase. Entiéndase bien que, lo que propondremos más adelante, no está hecho con criterio chauvinista de reducir la participación extranjera porque la consideremos inconveniente. Todo lo contrario. Creo que esa participación es imprescindible. Pero creo más imprescindible aun, que tanto P.D.V.S.A. como los ciudadanos venezolanos terminen con una parte importante de las acciones de la Apertura, por lo menos al inicio de esta fase. Si P.D.V.S.A., posteriormente quiere vender su parte, total o parcialmente, **eso** se discutirá en su momento. Nuestro esquema tiene la flexibilidad necesaria para continuar después en la dirección que se decida. **Ese** es, precisamente, su mérito. El esquema propuesto por P.D.V.S.A./ M.E.M. es unidimensional en cuanto a que no permite por su estructura cambios de mucha significación a futuro sobre todo si toda la participación de la Apertura queda en manos foráneas, sacrificando de paso, la posibilidad del derecho que tienen los venezolanos de poder invertir en lo que es suyo. Eso en lo estratégico. En lo puramente económico, pareciera que una inversión de P.D.V.S.A. y el capital nacional privado en la fase exploratoria de hasta un 25% podría tener beneficios que justificarían el riesgo, sobre todo si tomamos en cuenta que la inversión mínima requerida por lote exploratorio es solamente de 50 millones de dólares. El 25% de esa cantidad por lote, o de la cantidad total que al final se invirtiera, representaría un monto irrisorio comparado con el hecho de que la inversión de P.D.V.S.A. para el año 1996, será de 3 mil millones de dólares. Además, P.D.V.S.A. tendría la posibilidad de participar directamente en un descubrimiento importante, de relativo bajo riesgo dada la alta prospectividad de esas áreas.

Cinco Proposiciones Concretas.

1) Que las empresas privadas venezolanas del sector conexo

a la industria petrolera nacional puedan capitalizar sus servicios prestados, tanto en la etapa de exploración como en la etapa de explotación, dentro de las empresas que se constituirán en ambas etapas. Esto sería un incentivo claro para las empresas venezolanas del sector petrolero conexo que pasarían de prestadoras de servicios a socias del negocio petrolero.

2) Que el capital privado venezolano invertido en la etapa de exploración, en caso de éxito exploratorio, al pasar a la etapa de explotación no tenga que cederle al costo a P.D.V.S.A. el 35% de su inversión en la etapa exploratoria, tal como lo hará el capital extranjero. Esto daría un incentivo claro al gran capital nacional, presente y ausente de Venezuela para invertir en la fase exploratoria del negocio, aun corriendo el riesgo de no descubrir nada (Por lo menos tendría un incentivo que no tendrá el capital extranjero).

3) Que P.D.V.S.A./capital nacional privado participen en la fase exploratoria con un 25% de la inversión total. Esto resultaría en una participación, en caso de éxito exploratorio, del 49% para el capital extranjero y del 51% de P.D.V.S.A./capital nacional, 26% que le sería devuelto a P.D.V.S.A. al «costo» por el socio extranjero (35% del 75% es igual a 26%) más el 25% del capital P.D.V.S.A./capital nacional privado invertido en la fase exploratoria. Las acciones del capital nacional privado a cambio de no tener que aportarle a P.D.V.S.A. el 35% de sus inversiones en la fase exploratoria, delegarían en P.D.V.S.A. su derecho a voto en los aspectos de «interés nacional» (control). Así P.D.V.S.A. siempre votaría el 51% de las acciones de la nueva empresa de producción (26% del capital devuelto al costo por los inversionistas extranjeros a P.D.V.S.A. más 25% conservado intacto por P.D.V.S.A./capital nacional privado de su inversión en exploración). P.D.V.S.A. conservaría el 26% entregado al costo por los inversionistas extranjeros y pondría a la venta a valor de mercado las acciones que representan su inversión en la fase de explotación, derivada de su inversión en

la fase de exploración (25%). Estas acciones serían «atomizadas», a fin de que el precio de cada una al público venezolano permita la masificación de la inversión local.

Esta proposición de no ser acogida en su totalidad pudiera considerarse como opcional para P.D.V.S.A. y redactarse así: «P.D.V.S.A. tendrá la opción de participar por sí sola o con capital privado nacional hasta en un 25% de la inversión requerida en la fase exploratoria de cada lote, con la condición de que de ser exitosa la fase exploratoria poner en venta en forma masiva acciones de la etapa de explotación a precios populares a los ciudadanos venezolanos o para ser colocadas en fondos especiales, cuyo rendimiento beneficien a una parte mayoritaria e importante de la población nacional (se entiende que la sumatoria de los precios de todas las acciones puestas en venta o aportadas a fondos especiales resultarán en una cantidad suficiente para cubrir la inversión hecha en la exploración y una ganancia razonable). Otras condiciones para esta participación de P.D.V.S.A. en la etapa exploratoria serán aprobadas, en la oportunidad en la cual P.D.V.S.A./M.E.M. le presente al soberano Congreso Nacional, en sesión conjunta, las condiciones individuales específicas de cada contrato de Riesgo Exploratorio Compartido a celebrarse».

En este caso P.D.V.S.A. participaría a muy bajo costo en la exploración petrolera. Esta participación elevaría la participación nacional en la etapa de explotación y serviría como mecanismo para masificar la inversión nacional en la industria petrolera. Le daría también a P.D.V.S.A. el derecho de voto del 51% de las acciones de las empresas constituidas para la etapa de explotación (Unas de P.D.V.S.A. y otras del sector privado nacional, para evitar la condición de empresa pública que le sería aplicable a una sola empresa de P.D.V.S.A. con el capital nacional privado, en el caso de que P.D.V.S.A. tuviese en esa empresa más del 50%). Esta estructura corporativa podría ayudar a reducir las objeciones legales que se le han hecho al marco propuesto, ya

que P.D.V.S.A. votaría el 51% de las acciones representadas por las empresas de Capital Nacional (P.D.V.S.A. y empresa privada) en la fase de exploración (Sin embargo, para ello P.D.V.S.A. tendría que ejercer la opción de participar en la fase exploratoria, tal como se ha sugerido arriba).

Otras ventajas:

P.D.V.S.A. participaría en todo el proceso de Apertura, incluyendo la fase exploratoria, lo cual simplificaría enormemente el proceso de supervisión y control que sobre las operaciones debe mantener el Estado.

Sería un buen negocio para P.D.V.S.A., ya que el capital extranjero está dispuesto a invertir 100% en exploración y transferir a P.D.V.S.A., en caso de éxito exploratorio, el 35% de esa inversión al «costo» como opción para que PDVSA participe hasta con ese porcentaje en la fase de producción. Por lo tanto, poder invertir en la fase exploratoria sin tener que traspasar monto alguno al costo debe ser mucho más atractivo para P.D.V.S.A. y el capital nacional privado que para el capital extranjero que, sin embargo, continuará interesado en invertir (ver el siguiente punto).

Un Comentario Final:

Se podría alegar que con sólo el 49% de las acciones de la empresa de producción el capital extranjero podría desinteresarse en el proceso de Apertura. No lo creo así. Con cualquier participación del capital extranjero, más alto o más bajo, el control estará en P.D.V.S.A., ya que esto es imprescindible bajo las disposiciones del ya mencionado Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y, ademas está contemplado en la proposicion P.D.V.S.A./M.E.M. De manera que la nueva relación accionaria propuesta no afecta el delicado aspecto del control. Por lo tanto, si 49% les pareciera poco a los accionistas privados, debe ser porque sus expectativas sobre la prospectividad de nuestras áreas son altas y quisieran

invertir el mayor monto posible, en cuyo caso 49% de «algo bueno» sigue siendo más atractivo que la alternativa de no participar.

4) Revisar el concepto de «PEG», a fin de impedir que Venezuela negocie su derecho soberano a establecer impuestos, ya que el «PEG» es ,ni más ni menos, un impuesto adicional que cobrará el Estado venezolano, pero cuya magnitud estará establecida por la «oferta» de terceros. Esto podría solucionarse mediante el cobro de un «bono de entrada» al proceso.

5) Revisar la conveniencia de que una sola empresa pueda obtener la buena pro en cinco lotes exploratorios. Esta magnitud deberá ser reducida, sobre todo si a esa posibilidad, por razones de los parámetros que se utilizarán para la jerarquización de las empresas, sólo podrán acceder las grandes compañías trasnacionales en desmedro de una apertura más diversificada, tanto en lo nacional como en lo internacional.

Conclusiones.

La Apertura Petrolera comprometerá a la Nación venezolana (todos nosotros) con un esquema de asociación por 39 años (9 años de exploración, 20 años de explotación y 10 años de prórroga). El esquema propuesto por P.D.V.S.A./ M.E.M., con la excepción de la no participación de P.D.V.S.A. en el proceso exploratorio, es un buen convenio entre el Estado y las trasnacionales, visto aisladamente de los intereses individuales y colectivos de los venezolanos. Pero creo que ya llegó la hora donde los «buenos convenios» de interés nacional no se pueden ver en forma aislada, como si nuestros ciudadanos hubiese delegado en las partes sus derechos a perpetuidad. Es hora de que todo «buen convenio» nos incluya a todos como parte directa del arreglo.

Las sugerencias aquí esbozadas van en esa dirección.

29 de junio 1995

«Paredón de Papel» y la Apertura Petrolera.

En esta leída columna de "El Nacional" del periodista Jesús Brando, en pocas líneas al referirse a la Apertura Petrolera, dice:

- Que esta se atrasó innecesariamente una semana. Esto es por supuesto cuestión de opinión. De lo que se trataba era de discutir, «algo más», cuatro aspectos de la proposición P.D.V.S.A./M.E.M.:

- Revisar el Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, para evitar problemas jurídicos futuros (se consideró que con el voto doble del Presidente del Comité Central, la acción dorada y la participación supervisora de P.D.V.S.A. en todas las etapas, amén de algunas interelaciones que se aclararon en esa semana, se ejerce «control» suficiente sobre el proceso).

- Aclarar si el P.E.G., era o no un impuesto adicional y modificar su esencia si eso fuese cierto (se modificó en esa semana el concepto del P.E.G., y se convirtió en un «bono»).

- Revisar la conveniencia o no de que P.D.V.S.A. participara en forma minoritaria en el proceso exploratorio (no se consideró).

- Revisar la conveniencia de darle al capital nacional privado el mismo tratamiento que se le dá al capital del Estado (P.D.V.S.A.) y estructurar mecanismos para **estimular** tanto a la gran inversión nacional en todo el proceso, así como también la participación masiva de la gran mayoría de venezolanos (pequeños y medianos ahorristas) en la etapa de producción de la Apertura (no se consideró).

Creo que haberse tomado una semana para revisar cuatro puntos críticos del proceso de Apertura, no merece el calificativo de atraso «innecesario».

- El origen de este «atraso» fue, según Brando, una reunión en mi casa con la «gente del MAS», a quienes les «calenté la

cabeza» con una «serie de argumentos», etc. Las reuniones en mi casa son privadas y me reservo el derecho de comentar públicamente sobre ellas. Pero la acuciosidad de Brando o la de su fuente pecaron lamentablemente, en este caso, de una total imprecisión. Para que todo el proceso se pudiera posponer una semana, tuvo que haber más de una «cabeza caliente», en más de una fracción política, convencida de que sería útil la posposición. Más aun, «la gente del MAS» (plural) no estuvo en mi casa.

- «P.D.V.S.A. está molestísima con Quirós, de quien esperaba una actitud más solidaria».

Cuando se estatifico la industria petrolera el 1ero. de enero de 1976, yo tenía algún tiempo como columnista de El Nacional. En ocasiones, después de la estatización, P.D.V.S.A. se «molestó» con algunos de mis artículos.

En otras ocasiones cuando recomendé cosas como la internacionalización de la industria petrolera y la compra de crudos de otras procedencias para desarrollar mercados que fueran mayores que los que podríamos desarrollar con la sola producción propia. Cuando solicité que se modernizaran nuestras refinerías. Cuando critiqué la política de abandonar la política (valga la redundancia), de darle prioridad a la venta de nuestros crudos pesados, la cual se canceló por razones meramente fiscales. Cuando se pretendió que P.D.V.S.A. y sus filiales le entregaran al Banco Central las facturas petroleras para su cobro y me opuse tercamente. Cuando se reestructuró la industria petrolera en cuatro empresas y yo insistí en que deberían ser únicamente tres y no se me hizo caso. Cuando después de mi salida de la industria petrolera, comenté desfavorablemente algunos nombramientos en varias directivas de P.D.V.S.A. Cuando cuestioné públicamente la política del Presidente Pérez de no nombrar a un petrolero en la Presidencia de P.D.V.S.A., y ahora que le hago algunas observaciones al proceso de Apertura, P.D.V.S.A. y/o el Ministerio de Energía y Minas y/o la Presidencia

de la República se han «molestado» conmigo. Además, como Presidente de Maraven y de Lagoven primero y como Director de El Nacional y de El Diario de Caracas después, tuve oportunidad de «calentarle la cabeza» a más de un dirigente de más de un partido político (No en el sentido peyorativo que utiliza Brando, sino mediante discusiones francas y respetuosas). De manera, mi querido Brando, que mi historia petrolera sustenta la tesis de que lo que una vez «molestó» a alguien en P.D.V.S.A., después se hizo casi todo y mis críticas a los nombramientos en las directivas de P.D.V.S.A. recibieron el apoyo, casi total, del personal de la industria petrolera. Ahora aspiro a que con el proceso de Apertura suceda algo igual, para que los venezolanos podamos ser, de verdad, accionistas y dueños de nuestra riqueza petrolera. Estoy, pues, acostumbrado a «calentarle la cabeza» al mundo político y a que P.D.V.S.A. se «moleste» conmigo. En cuanto a mi presunta ausencia de solidaridad, permíteme aclarar que mi solidaridad siempre ha sido con la institución y que mis recomendaciones, aunque pudieran algunas veces no ser viables, siempre llevan la intención de sugerir lo que en mi opinión fortalece y defiende la integridad institucional. Y si eso produce «molestia» pues tendré que vivir con élla.

Por último, me tomo el trabajo de redactar esta respuesta porque, como bien sabe Brando, hay maneras de escribir una información para que ésta, entre líneas esconda un pequeño esfuerzo de descalificación personal. En el caso de la Apertura Petrolera, estoy seguro que no me la merezco.

13 de julio 1995

XX Aniversario
P.D.V.S.A. EN LA ENCRUCIJADA

Al cumplir 20 años de existencia no son pocos los aciertos logrados por P.D.V.S.A. en su rápida evolución de empresa estatal recién creada, con altísima dependencia comercial y técnica de las trasnacionales del petróleo -que por más de 40 años dominaron la escena de la explotación petrolera nacional- a una empresa estatal, ella misma trasnacional, con presencia directa en los mercados internacionales, con tecnología propia en varias de sus actividades y considerada universalmente como la empresa petrolera estatal mejor administrada del mundo. El éxito se le debe -sin duda- a una infraestructura humana de altísima calidad, la cual, a través de los años, ha sabido reproducir y mantener la excelencia heredada de las antiguas concesionarias extranjeras. Pero no hay que llamarse a engaño, esa infraestructura humana no se desarrolló en un vacío. Se desarrolló dentro de un entorno interno adecuado -que ya existía- y un entorno externo que, pese a sus contradicciones, ineficiencias, corrupción y resistencia a la modernización **le permitió** a P.D.V.S.A. actuar **casi** como si fuera una isla diferente y aislada de ese entorno. Pero no se puede vivir separado del entorno para siempre. Los muros conceptuales que separaban a P.D.V.S.A. del entorno externo y que -por años- fueron protegidos desde adentro y desde afuera empiezan a agrietarse... desde adentro y desde afuera. El Estado, dueño del petróleo, de la operación y del negocio, no quiere seguir viendo a P.D.V.S.A., como a una empresa intocable. Las presiones para intervenir son muchas y los años empiezan a borrar el temor que se le tuvo a tocar a aquello que nos mantiene. Ya ni nos mantiene como antes, ni tiene la aureola de "diferente" con la cual defendió su eficiencia todos estos años. La población -en general- nunca ha

identificado a P.D.V.S.A., como algo propio. En su percepción, la industria petrolera fue antes de los "extranjeros" y ahora es del "Estado". En ambos casos es ajena, aunque la llamemos nacional. Y de **esa** percepción es culpable el Estado ya que a través del tiempo, y varias circunstancias, ha insistido en que lo único nacional es lo que pertenece al Estado. Y el pueblo se ha dejado convencer por esa falacia, en parte porque tampoco ha sentido al Estado como propio, dado que en el Petro-Estado el pueblo se considera también propiedad del Estado. No hemos entendido tampoco, que en el sector público existen **empresas del Estado**, mas no **empresas nacionales** -es decir- aquellas donde participan los venezolanos como propietarios. Esto -como país- nos ha llevado a las distorsión de no considerar como nacionales a aquellas empresas del sector privado de capital venezolano. Si hiciéramos una encuesta pública sobre cuales son las empresas **nacionales** más importantes del país, seguramente aparecería P.D.V.S.A. y las empresas de Guayana, y no la Polar, que es tan o más **nacional** que las otras. Por eso -en Venezuela- se considera "desnacionalizador" la privatización de las empresas del Estado, así éstas sean adquiridas por venezolanos. Es "desnacionalizador" -por lo tanto- que la Electricidad de Caracas adquiriera a Cadafe y que las empresas venezolanas que le prestan servicios a P.D.V.S.A. se convirtieran en socias/propietarias de las nuevas empresas petroleras que creará la llamada Apertura.

La propia gerencia de la industria petrolera ya no se ve aislada del entorno externo. Saberse manejar políticamente es ya una virtud percibida como necesaria para quien quiera llegar a la cima de la pirámide de P.D.V.S.A. Eso **-por sí solo-** no es necesariamente malo. El problema, es que **eso** nunca viene **por sí solo**. Sobre todo en un entorno político como el nuestro lleno de componendas y compromisos. De mentiras, de mediocridades. De compensaciones inmorales. Para moverse "bien" políticamente -por lo general- hay que aprender a deslatrarse de muchas de las virtudes que hicieron diferente a la gerencia

petrolera del entorno externo. Esto es tan cierto, y pesa tanto ese entorno que -por lo general- todos los gerentes petroleros que han intentado actuar en otras empresas del Estado que operan dentro de ese entorno externo, han fracasado. Es en ese espejo donde tiene que mirarse la alta gerencia petrolera de hoy: No hay gerencia exitosa sin entorno adecuado.

Por todas estas razones que afectan al sector humano de P.D.V.S.A., ésta se encuentra hoy en una verdadera encrucijada, donde se cruzan varios caminos posibles a tomar, que conducirán a la creación de estructuras de propósitos diferentes entre si. Pero, más importante que las estructuras organizacionales, será el entorno dentro del cual se enmarcarán esas estructuras. Ese entorno dibujará a futuro la calidad de la industria petrolera que tendremos. A mi manera de ver los caminos son: 1) Mantener a P.D.V.S.A. como empresa 100% estatal (echar atrás la Apertura propuesta). 2) Seguir con la Apertura en los términos planteados por M.E.M/P.D.V.S.A. y aprobados por el Congreso Nacional. 3) Diseñar una Apertura algo diferente a la aprobada. 4) Privatizar totalmente a P.D.V.S.A.

El análisis que haré a continuación será casi unidimensional, por lo tanto inconcluso. Unidimensional, porque solamente evaluaré su impacto en el entorno externo. Aquel que condiciona -como ya hemos visto- la conducta de los actores sociales. Asumo también, que no existe ya la menor posibilidad de mantener al sector petrolero aislado de los efectos causados por ese entorno externo. Es pues -repito- unidimensional el enfoque pero, como se refiere a una dimensión con consecuencias multisectoriales, los elementos de uno u otro entorno afectarán a casi todas las instancias de nuestra vida nacional.

P.D.V.S.A. como empresa 100% Estatal (El mismo entorno)

Independientemente de si esta opción fuese posible implantarla, dada la precaria situación financiera del país, ella

traería consecuencias negativas para el entorno externo:

- Mantendría al Estado como el único generador de la riqueza petrolera, el único cobrador de impuestos y por ende, el único distribuidor de esta riqueza. Es decir, Venezuela continuaría siendo un Petro-Estado, ya que sus ciudadanos seguirían sin tener **acceso directo** a la renta y a la riqueza generada por el petróleo.

- Se fortalecería el modelo político actual. Se desestimularía la participación política de la mayoría nacional en la solución de los problemas que los afectan. Al no participar en el acto económico de nuestra riqueza mayor, el ciudadano común, seguirá dependiendo del favor del Estado repartidor y -por ende- como ha sucedido hasta ahora, será un eunuco político.

- Se desestimulará la descentralización política como acto neutralizador de los desmanes del Gobierno central. Al ser el Gobierno central el receptor exclusivo de la riqueza petrolera, los Estados seguirán dependiendo de mecanismos de distribución restringidos a la conveniencia centralista.

- Al no cambiar, sino mas bien empeorar el entorno externo, P.D.V.S.A. perderá día a día su eficiencia operativa al prostituirse sus sistemas internos de selección de personal, de promociones, de remuneración, de entrenamiento, etc. Al destruirse la meritocracia se destruirán también los sistemas de control. Los partidos políticos tendrán a "sus hombres" dentro de P.D.V.S.A. Se instalará el clientelismo y la corrupción y la "Gallinita de los huevos de oro" empezará a poner huevos de plomo. No exagero. El proceso ya empezó, y como lo dije ya hace algún tiempo, la gerencia petrolera tiene que cuidarse mucho del flagelo de la corrupción -el cual- en la percepción de muchos ya se ha hecho presente en algunas transacciones. Terminaremos pues, con un Estado dueño total de nuestra industria petrolera, para satisfacción de alguna ideología obsoleta, sólo que el atraso conceptual de detener el reloj de la modernización del Estado, nos dejará con las reliquias de lo que pudo ser.

La Apertura aprobada (El mismo entorno)

Como ya lo he dicho muchas veces, la Apertura representada por los Convenios de Ganancias Compartidas son a corto plazo buenas para el Estado y a corto, mediano y largo plazo malos para la Nación. En efecto:

- Mantendrá -de hecho- al Estado como único participante nacional en la sociedad a formarse entre P.D.V.S.A. (filiales) y las trasnacionales del petróleo. Esto, como en el caso anterior -ya descrito- perpetuará la figura del Petro-Estado. Después de todo, Petro-Estado fuimos durante los 40 o más años de explotación petrolera previa a la estatificación. Los únicos socios que generarán ganancias y pagarán impuestos, serán las trasnacionales que repatriarán esas ganancias y a la larga también su inversión inicial.

- Al excluir -de hecho- a la **inversión nacional** en el proceso o al no estimular de manera alguna su participación, se impedirá la generación de riqueza doméstica en el proceso de Apertura, su multiplicación y -por ende- una forma de distribuir la riqueza petrolera, sin que ésta tenga que pasar **totalmente** por el peaje del Estado, antes de ser mal distribuida.

- Al limitar la participación del Estado (P.D.V.S.A) a solo 35% de las empresas de producción, se limitará -también- a ese bajo porcentaje, el total de la participación nacional posible (Estado más participación privada nacional). Se limitará la posibilidad de crear un gran mercado de valores nacional con acciones de bajo precio a ser vendidas a todos los venezolanos, o la creación de fondos petroleros de inversión con participación nacional masiva, o hasta regalar -si fuese necesario- certificados de participación en estos fondos a los venezolanos de menores recursos. O la creación de fondos de propósitos específicos como pensiones, salud, educación, etc., de los cuales se beneficiaría una gran mayoría de venezolanos.

- Al no resolver las diferencias entre Estado y Nación, le dejará al Estado la **propiedad** de los yacimientos petroleros

cuando éstos deberían ser propiedad de la Nación. Es decir, de todos nosotros. El Estado es su ente regulador, más no su dueño. Por lo tanto, las regalías petroleras continuarán yendo directamente al barril sin fondo de la tesorería del Estado, cuando pudieran ir, como se sugiere en el aparte anterior, a fondos de propósitos especiales para beneficio de todos los venezolanos.

- Al no haber insistido el M.E.M/P.D.V.S.A. en que se hicieran los cambios a las leyes que regulan al proceso, y que hubiese asegurado la inserción de su proposición de Apertura en un marco jurídico adecuado, se ha dejado abierta la posibilidad de serios cuestionamientos legales a los mecanismos estructurales de la Apertura. Aunque a la larga, cualquier cuestionamiento legal no prospere, no hay duda que el proceso se ha complicado con artificialidades estructurales que pretenden sustituir a lo que ha podido y debido ser un marco legal sin cuestionamientos posibles.

- Al mantenerse el control del Estado sobre todos los ingresos derivados de la operación petrolera, el entorno externo no tendrá incentivos para cambiar y P.D.V.S.A. continuará sujeta a las mismas presiones a las que estará sometida en el caso anterior, de mantener el Estado el 100% de su propiedad. Sólo que en este escenario su situación se verá aún más debilitada por la presencia de empresas petroleras en el país con mayoría accionaria extranjera que podrán "rescatar" de P.D.V.S.A. a aquellos técnicos que no quieran ser parte del deterioro institucional inevitable que afectará a la empresa petrolera nacional.

Lo que me sorprende es que aquellos que defienden al rol del Estado propietario, se opongan a esta Apertura, como lo hacen los participantes de un foro celebrado en la U.C.V., cuyas conclusiones merecen un comentario aparte. Digo que me sorprende, porque esta Apertura, es lo que más se parece al mantenimiento del entorno externo del Petro-Estado y de los privilegios políticos. En fin, de lo que muchos queremos cambiar,

pero que nuestra ilustre Casa de Estudio parece querer perpetuar, al defender a ultranza la propiedad de las operaciones del petróleo por el Estado -olvidándose de paso- del sesgo antinacional y obsoleto que tiene un sistema donde a los nacionales les está vedado participar como propietarios formales en la industria más importante del país.

La Apertura modificada (Un entorno diferente)

La Apertura modificada es una variable importantísima de la Apertura aprobada. Sus características principales son:

- Apertura al capital nacional, mediante algún estímulo tal como -por ejemplo- no exigirle a la inversión nacional privada en la exploración a riesgo que -de ser exitosa- le entregue al "costo" a P.D.V.S.A. 35% de las acciones en la empresa. Esto le da ventaja al capital del Estado sobre el capital nacional privado y desconoce que tan nacional es el capital de los venezolanos como lo es el del Estado. Este último -después de todo- también es de todos nosotros y no puede cambiar de cualidad porque cambie de nombre. Mientras no entendamos que el Estado es parte de nosotros pero no es **todos** nosotros, y que **todos** nosotros somos la Nación, seguiremos leyendo declaraciones como la de la U.C.V. en relación con la Apertura Petrolera, en la cual se sugiere que todo lo que reste propiedad al Estado sobre la industria petrolera es "desnacionalizador", así esa propiedad o parte de ella, pase formalmente a manos venezolanas.

- Aparte de la participación en la Apertura de los grandes capitales venezolanos -que sí los hay- se requiere masificar la inversión de todos los venezolanos en la industria petrolera. Eso -de por sí- ya cambiaría el entorno externo. Si la propiedad de la industria petrolera ya no es exclusiva del Estado, éste no podrá cometer los desmanes que tarde o temprano cometerá con esa industria. Por primera vez el petróleo tendría dolientes nacionales y cuatrocientos mil o dos millones o más de venezolanos en la calle defendiendo sus derechos accionarios serían el mejor

desestímulo para los posibles actos insensatos del Estado en materia de política petrolera.

- Participación de P.D.V.S.A. en la exploración. A cambio de un pequeño riesgo y de una pequeña inversión, P.D.V.S.A. elevaría considerablemente su participación en la empresa de producción que se formaría después de un descubrimiento exploratorio exitoso. No nos encandilemos con frases que "suenan bien". La Apertura se vendió bajo la premisa de que el socio extranjero correría con el 100% del riesgo exploratorio. Pero a cambio de esto, a P.D.V.S.A. le quedó la opción de comprar -"al costo"- solamente, hasta el 35% de la empresa de producción que resultara del éxito exploratorio. Pero si P.D.V.S.A. participara con el 25% del riesgo exploratorio, pudiera terminar con el 51% de la empresa de producción. De manera que todo es relativo. No hay verdades absolutas y no podemos aferrarnos a un concepto útil para la "venta" pública de una proposición, pero que forzosamente admite modificaciones, sin que pierda su valor argumental.

- Creo que hubiera sido importante una reforma legal que permitiera -sin discusión- los mecanismos de Apertura propuestos.

Esta proposición modifica el entorno externo. Empieza a diferenciar entre los conceptos de Estado y Nación. Permite la participación masiva de los venezolanos en la industria más importante del país. Abre las puertas para una redefinición sobre cómo y a quién se le deberán pagar las regalías petroleras. Reduce el rol del Estado y disminuye -por ende- la existencia del Petro-Estado. Defiende a P.D.V.S.A. de los desmanes del Estado y la protege de ser contaminada por el entorno externo (El entorno externo sería ahora menos contaminante).

La Privatización de P.D.V.S.A. (Un entorno diferente)

La privatización total de P.D.V.S.A. es la última instancia a la cual vamos a llegar tarde o temprano. El problema es cómo,

cuándo y con quién. No hay duda de que en el último análisis la propiedad de P.D.V.S.A. en manos privadas será el paso final hacia la modernización del Estado. Contrario a lo que persigue la Apertura Petrolera actual, en lo relacionado con el control de la industria, en su afán de adaptarse a las leyes que ya no sirven para regular el paso a la modernización de nuestra sociedad, lo que no debe tener el Estado es -precisamente- el **control** de la operación petrolera. Debe conservar el derecho de cobrar los impuestos que generen las ganancias de la industria petrolera, siempre que entienda que la propiedad es de la Nación, es decir de todos nosotros. Las regalías que no son sino la manifestación visible de un derecho ancestral de propiedad ya anticuado, deben destinarse a ser repartidas entre la población sin pasar por las arcas del Estado. P.D.V.S.A. ya no existirá como ahora. Habrán varias P.D.V.S.A.S operadoras y el Estado -**ahora sí**- tendrá mecanismos reguladores de las operaciones petroleras: Protección ambiental. Conservación de los yacimientos. Impuestos a cobrar, etc.Este escenario no será posible sin pasar primero por la Apertura modificada. Razón tienen los que piensan que el resultado final de los procesos de Apertura pudiera ser la privatización de nuestra industria petrolera. No es -sin embargo- una meta consciente. Pero será su consecuencia, siempre y cuando la Apertura se haga con algunas modificaciones. Si se mantiene bajo los parámetros actuales, pueden dormir tranquilos los apóstoles de la estatificación del petróleo. No habrá cambios mayores en la relación Estado/Sociedad en lo relacionado con el petróleo.

Conclusiones (Todo depende del entorno externo)

- El futuro de P.D.V.S.A. como empresa exitosa dependerá enormemente del entorno externo dentro del cual le tocará actuar.

- No será posible mantener a P.D.V.S.A. divorciada de las realidades nacionales. Su imagen y su cultura institucional se parecerán más y más al entorno externo.

- La dependencia/independencia con la cual se manejen los recursos del petróleo, con relación al Estado, será el elemento más importante para la creación, o no, de un nuevo entorno político y social. Sin embargo, estamos dentro de un círculo vicioso: No se puede sustituir al Petro-Estado si no se cambia el entorno externo dentro del cual se administre la industria petrolera. Pero tampoco se puede cambiar el entorno externo si no se modifica la relación de la industria petrolera con el Estado.Por eso, modificaciones a la política petrolera que no contribuyan a modificar las tendencias nocivas del Petro-Estado, no harán sino desestimular la modernización del país.

- En la medida en que el entorno externo continué igual, en esa misma medida P.D.V.S.A. perderá su condición de empresa positivamente "diferente". En la búsqueda constante que persigue la sociedad para lograr la igualdad institucional, P.D.V.S.A., como muchas veces sucede, habrá perdido la pelea entre la excelencia y la mediocridad. Pese a que hay muchos apoyos hacía una Apertura Petrolera, hay también muchas tendencias que quieren mantener el estatismo como filosofía de Gobierno, aunque se sienta la necesidad de dar algunas señales en sentido contrario.Si alguna vez el pensamiento gatopardiano tuvo alguna actualidad, es ahora en Venezuela, donde las señales visibles del cambio, parecieran apuntar, más y más, a un esfuerzo claro para que todo quede igual.

En la medida en que P.D.V.S.A. no entienda que su nueva "habilidad política" pudiera disfrazar su "entrega política" con manto de manipulación pragmática, en esa misma medida P.D.V.S.A. estará condenada a pasar a ser un "recurso" más del Estado.

En la nueva encrucijada que se le presenta a P.D.V.S.A., el camino que conduce al fortalecimiento del Petro-Estado, es el menos conveniente para la institución. Aunque, circunstancialmente, parezca el más atractivo.

14 de septiembre 1995

ECONOMIA

EN BUSCA DEL "NORTH" PERDIDO

EN BUSCA DEL «NORTH» PERDIDO

En una conversación rica en ideas y comentarios, Carlos Bernárdez al reaccionar ante las virtudes que le atribuían dos amigos, al Prof. Douglas North de la Universidad de Washington en los Estados Unidos, y ante la recomendación de que fuera invitado a Venezuela para que conociéramos sus ideas de primera mano, ripostó: ¿»Quiere decir que Venezuela, al fin, encontrará su Norte (North)»?. El inteligente juego de palabras de Carlos puede tener un significado mucho más trascendental para Venezuela de lo que hasta sus mismos interlocutores se imaginaban cuando hicieron la recomendación que le da título a este trabajo.

Digo lo anterior porque el Prof. North es bien diferente a todos los asesores económicos extranjeros y hasta nacionales que hemos tenido por aquí. Y es bien diferente, por cuanto sus elucubraciones y conclusiones descansan sobre la premisa inicial de que las instituciones sociales y las percepciones y creencias arraigadas de los individuos en una sociedad dada, son -en el fondo- las que dibujan el marco de referencia para cualquier esquema de crecimiento económico.

Para entender y justificar esta aseveración, North echa mano de la historia para demostrar que las innovaciones tecnológicas y los recursos naturales fueron menos importantes en el desarrollo económico que la existencia de instituciones sociales y legales fuertes y el derecho de propiedad, los cuales crearon el marco de referencia imprescindible para que -posteriormente- se desarrollara una economía de mercado. Un ejemplo ilustra el punto (citado en un artículo de John Bremmer-St. Louis Post-Despatch, 10/12/93). North alega que el incremento de productividad logrado en el siglo XIX no fue consecuencia exclusiva del cambio tecnológico. El factor crítico fue la supremacía de la marina Británica (institución) que redujo, por

su fuerza relativa, la piratería y aumentó, por ende, la seguridad del transporte marino. Esto permitió reducir los gastos en seguridad, tripulación, cañones y municiones de las embarcaciones, incrementando por ello el espacio de carga disponible y reduciendo los costos operativos del transporte. Lo cual, a su vez, estimuló el comercio internacional y amplió el concepto de mercados. El motor de vapor, que se considera el detonante de la revolución industrial, apareció después.

A lo largo de su análisis histórico, North llega a conclusiones muy interesantes, las cuales con un poquito de imaginación podemos incorporar al «modelo» venezolano.

Entre ellas:

- Las «reglas del juego» legales y sociales determinan la naturaleza de la sociedad. La seguridad jurídica, el derecho incuestionable a la propiedad, son tan importantes como otros elementos más técnicos para estimular el crecimiento económico. Bueno es que contrastemos este pensamiento con lo que ha sucedido y sucede en Venezuela, en relación a por ejemplo, la suspensión de las garantías constitucionales, supuestamente para rescatar lo que en forma ilegal se llevaron algunos banqueros, pero que ha sido aprovechada para crear toda una nueva filosofía de la «inseguridad» de la propiedad expuesta recientemente por el Procurador de la Nación.

- Las reglas informales, aquellas que rigen el comportamiento humano, son también críticas. Por ejemplo, en Venezuela, nuestra tendencia al facilismo, a creer que se puede tener éxito sin trabajar. A desperdiciar el esfuerzo individual y a no reconocer los derechos de los demás, pesan mucho en la resistencia al cambio estructural de parte del Gobierno y de nuestros partidos políticos. Ellos representan lo que hemos sido como sociedad, hasta ahora.

- «La diferencia entre naciones ricas y pobres es, fundamentalmente, como se organiza la gente». No se quien parafraseó a quien, pero recuerdo que el economista Samuelson

en alguna ocasión dijo que no había países ricos y países pobres. Que la diferencia estaba en el buen o en el mal uso de los recursos disponibles. Y ponía como ejemplo el caso de los Estados Unidos que teniéndolo todo lo hizo todo. Argentina que teniéndolo todo no hizo nada y Japón que no teniendo nada lo hizo todo. Por supuesto que North explica el mal o el buen uso de los recursos por la organización social de la población. Por eso, con los mismos recursos algunas sociedades «hacen» más que otras. Por **eso**, en Venezuela, hay que preguntarse como es que con todos los recursos que poseemos, no hemos hecho nada. Y la respuesta no hay que ir a buscarla afuera. Hay que encontrarla en nuestra organización social que es, en este caso, como decir una consecuencia de nuestra estructura política.

- «No se puede dejar el desarrollo sólo en manos de los mercados». De nuevo North enfatiza, sin decirlo, el peso de las instituciones en la creación de una economía de mercado. No se puede admitir al mercado dentro de una sociedad que no entiende ciertas reglas del juego básicas para que el mercado funcione. Las teorías neoclásicas están más preocupadas sobre como «opera» el mercado y menos como se «desarrolla» un mercado. No se puede, pues, prescribir políticas de mercado en sociedades donde no **existe** el mercado y donde no se sabe como desarrollarlo. Según North, las presiones matemáticas que gobiernan ciertas teorías sobre la operatividad de los mercados, atentan, en su abandono e ignorancia de la historia y de los criterios sobre como se deben implantar, contra el éxito posible del desarrollo de una economía de mercado. Debe estar claro para cualquiera que **ese** es el caso de Venezuela: Proteccionismo. Baja productividad. Ausencia de responsabilidad ciudadana en materia impositiva. País monoproductor y estatista. Estado como *Gran Distribuidor* de la riqueza nacional. Debilidad institucional (el Estado lo hace todo). Este inventario demuestra que sobre nuestra estructura política y social no se puede superimponer, sin algunos cambios profundos previos, una economía de

mercado. El problema, como lo vemos hoy, es que aun cuando el Estado no descarta a la economía de mercado como una solución posible, hace todo lo contrario que hay que hacer para que -en la visión de North- se fortalezcan las instituciones y se aclaren las reglas del juego, para que pueda «operar» un mercado al cual hay que «desarrollar» primero.

- La interacción de las instituciones y las organizaciones le dan forma a la evolución de la economía de toda sociedad. Las organizaciones, a su vez, reflejarán en sus estructuras y sus metas y motivaciones las oportunidades que ofrezca la matriz institucional. Si las instituciones son deshonestas, entonces, las organizaciones («grupo de individuos unidos por un propósito común para lograr ciertos objetivos») tendrán también propósitos deshonestos. Si las instituciones reflejan un interés productivo honesto, las organizaciones buscaran también esa meta. Debe estar muy claro, hasta para el más obtuso de nosotros, que nuestra gran institución, que es el Estado ha dado pie para que nuestras organizaciones parroquiales, regionales y nacionales piensen y actúen en función de buscar la riqueza no ganada, el beneficio sin esfuerzo y la filosofía del «sálvese quien pueda», cuando las cosas se ponen mal.

- Educación, aprendizaje (learning) es parte de la respuesta. Pero tiene que haber un incentivo para el aprendizaje. En la medida que se desarrolle una estructura social de competitividad, donde los actores reconozcan que hay que «aprender» para sobrevivir, en esa misma medida el aprendizaje será reconocido como un instrumento positivo para el éxito. Mientras mantengamos un monopolio del Estado sobre la mayor parte de las actividades económicas de una sociedad, no solamente porque el Estado sea el único dueño de la actividad económica (monopolio puro), sino porque el Estado dueño o no, tiene el poder casi absoluto de intervenir, modificar e influir sobre los resultados económicos de los diferentes actores, en la medida -repito- que ese poder exista, en esa misma medida será menos

importante para los ciudadanos el esfuerzo de «aprender», ya que no percibirán que ese esfuerzo -de alguna manera- pueda modificar la conducta del Estado monopólico. En otras palabras, las batallas para tener posibilidad de triunfo hay que darlas entre iguales. En una economía de mercado esa igualdad es la competencia abierta y regulada con reglas de juego aplicables a todos. En la percepción de muchos, el esfuerzo del aprendizaje no tiene contrapartida real si el competidor es un monopolio del Estado o el Petro-Estado, definido éste, como el ejecutador de todos los abusos sociales posibles que puede cometer, quien tiene poder económico absoluto. Lo lamentable de todo lo anterior, es que no conocemos -con certidumbre- los estímulos que nos puedan conducir al aprendizaje, pero si pareciera que conocemos los desestímulos al esfuerzo.

- Según North (discurso en Estocolmo, 1993, en la ocasión de recibir el Premio Nobel de Economía) es muy difícil explicar el auge y la caída de la Unión Soviética y del Comunismo, mediante un análisis neoclásico. Se requiere un enfoque más histórico, institucional y cognoscitivo que debe incluir un análisis de algunos de los elementos siguientes:

1) Las diferentes normas formales e informales de diferentes países harán que la simple transferencia de las normas de una sociedad a otra, produzca diferentes resultados. Por lo tanto, lo que es exitoso en un país puede no serlo en otro. Las privatizaciones no son panacea para solucionar los pobres resultados de una economía. Esto debe sonarle a música celestial a ciertos planificadores económicos de nuestro Gobierno. Pero cuidado con tomar, fuera de contexto, esta aseveración. En el fondo North, es un creyente de la economía de mercado. Lo que sucede es que no está muy de acuerdo con los instrumentos que, como receta universal, proponen ciertas escuelas neoclásicas. Pero, a la vez, creo que tampoco aprobaría las medidas estatificantes y de controles que sirven de apoyo a nuestra política económica actual.

2) Es importante, aunque no fácil, crear políticas que apoyen eficientemente los derechos de propiedad. Esto está dicho en el contexto de la Unión Soviética y su transformación de país socialista en país capitalista. Sin embargo, las recomendaciones y opiniones que siguen a continuación pueden ser, y a mi manera de ver son, relevantes en el caso Venezuela:

a) Las instituciones políticas serán tan estables como sea el interés en su permanencia que tengan las organizaciones de una sociedad. En el caso Venezuela vemos -desde hace ya algunos años- que las organizaciones sociales del país alegan, públicamente, no creer en los partidos políticos. Sin embargo, aceptan con pasividad las consecuencias negativas sociales de su permanencia, no crean organizaciones políticas alternas y utilizan como única señal de protesta las abstención electoral. Que es una manera de decir «no los quiero a ustedes (los partidos políticos) pero no estoy dispuesto a hacer nada para cambiar al sistema. Será muy interesante oír la opinión del Prof. North sobre el caso Venezuela, donde -como hemos dicho- nadie acepta querer y apoyar a los partidos políticos, pero nadie hace nada por combatirlos. ¿Es la abulia y la indiferencia una forma de protestar efectiva?. ¿Setenta o más porcentaje de abstención electoral es suficiente para cambiar un sistema político?. ¿Qué opciones reales de cambio ofrece la abstención electoral?. b) Regímenes autoritarios pueden lograr crecimiento económico a corto plazo. Pero la estabilización del desarrollo de un país a largo plazo, tiene que estar sustentado por un régimen de legalidad. ¡Amén!.

c) La capacidad de adaptación y no la asignación de presuntas eficiencias es la clave del crecimiento sostenido a largo plazo. Los sistemas exitosos políticos/económicos han creado estructuras institucionales flexibles que puedan resistir los «shocks» y cambios que son parte de toda evolución exitosa. Pero estos sistemas han sido el producto de una larga gestación. No sabemos como crear «eficiencia adaptada» a corto plazo.

De nuevo este pensamiento de North en traducción libre de mi parte, subraya la naturaleza largoplacista de los cambios en las percepciones de una sociedad y aclara porqué las teorías más lógicas de desarrollo económico se estrellan contra la aparente falta de comprensión de instituciones y organizaciones sociales de un país dado.

Es que no se puede introducir, sin resistencia, una cuña cuadrada en un espacio circular.

Y en eso estamos.

P.D.: La resistencia al cambio.

La próxima visita del Prof. North a Venezuela tiene varios aspectos interesantes que pudieran, en su originalidad, provocar lo que es casi imposible en este país: Lograr que el Gobierno oiga.

En efecto, North tiene tantas críticas a la teoría económica neoclásica por su intento de adaptar una receta a enfermos diferentes, que el Gobierno Nacional se puede sentir reivindicado en su afán de no aplicar las terapias recomendadas por los que peyorativamente ha llamado «las viudas del Paquete».

Pero al sentirse reivindicado por esa conclusión inicial, no le quedará más remedio que oír lo que North pudiera recomendar como una opción al mencionado y vilipendiando «paquete».

Aquí comenzarán las dificultades. Porque North pudiera no estar de acuerdo con esta ensalada incoherente y ayuna de historia que representa nuestra política económica actual.

North va a querer llegar a una economía de mercado, por algunas vías que, indudablemente, pasaran por un rescate y fortalecimiento de las instituciones y organizaciones del país. Probablemente, también, por una presencia directa y masiva de los venezolanos en las empresas públicas, incluyendo a P.D.V.S.A. Esto aseguraría una participación real en actividades comerciales e industriales de todos los ciudadanos a quienes el Petro-Estado les ha negado el usufructo directo de lo producido por estas

instituciones.

Pudiera ser, que al revisar el caso Venezuela, North concluya que, como política de transición, el Gobierno está haciendo lo correcto y que, Venezuela en su condición actual de país monoproductor, debe dejarle al Estado la distribución exclusiva de su riqueza petrolera, posponer para mejores épocas la privatización de otras de sus empresas básicas, mantener los controles de cambio y de precios

De un iconoclasta como North, uno puede esperar recomendaciones sorprendentes en lo relacionado con la destrucción de los mitos económicos aceptados. Como para él, cada país es un laboratorio social diferente, a lo mejor sus observaciones nos abren un campo nuevo para la meditación y la búsqueda de soluciones que hasta la fecha se nos habían escapado.

Estoy seguro que los venezolanos estaremos dispuestos a ser sorprendidos y a revisar con seriedad las recomendaciones que surjan de la visita del Prof. North.

Si el Gobierno está dispuesto a analizar con objetividad y con la modestia de quien puede equivocarse, las recomendaciones que surjan de esta visita, habremos dado un gran paso en la solución de nuestra crisis nacional.

Aunque las soluciones, no sean las que proponga North.

20 de julio 1995

LA PRIVATIZACION DE LA C.V.G (II)

Mini viaje al ayer (Guayana pierde terreno)

En mi libro "**Ya Dios no es venezolano"** (1995) publiqué "La Privatización de la C.V.G.". Una parte importante del fondo de ese trabajo, estuvo dedicado a los aspectos conceptuales de la privatización en general y de la privatización de la C.V.G. en particular. Tres citas ilustran el comentario:

> «...a las nacionalizaciones antes, y a las privatizaciones ahora, hay que verlas como un acto de Estado. Como una filosofía de Gobierno... y muy poco más».

> "...la década de los 90, es la del rescate del **poder regulador del Estado**. Lo cual es bastante diferente al rol del Estado interventor de las décadas de los sesenta y setenta. Muchos no han entendido aún, que la filosofía de la década de los noventa, no es la de regresar al Estado todopoderoso, a pesar de que se abogue por aumentar el poder del Estado. Es, por el contrario, la de asignarle un nuevo rol al Estado dentro de una economía de mercado. Por eso, apertura económica, libre comercio, privatizaciones, integraciones regionales y economía de mercado, no son conceptos incompatibles con el nuevo rol que se le quiere asignar hoy al Estado: Más fuerte y más coordinador que el Estado de la década de los ochenta, pero diferente en su rol, al Estado interventor y distribuidor de las décadas de los sesenta y setenta».

> «...Estoy convencido de que los habitantes de Guayana no aceptan la privatización como una alternativa al régimen estatal de las empresas, cualesquiera que fuese su situación económica. La aceptan como un mal

necesario ante la imposibilidad de que sigan siendo **operadas** por el Estado... y sobrevivan. Lo cual demuestra que la privatización ha sido aceptada, como una manera desagradable de solucionar un problema económico. Esto es importante entenderlo».

«...La privatización de las empresas de Guayana, no es una privatización cualquiera. De ésas cuyos éxitos pueden medirse, exclusivamente, por la transparencia del proceso y el recibir un precio justo por las acciones vendidas. Ni siquiera por el éxito y el atractivo que pudiera suponer la venta, o el regalo, de parte de las acciones a los trabajadores y, quizás, hasta a todos los habitantes de la zona. ¡No!. La privatización de las empresas de la C.V.G. se enmarca dentro de un proceso muy diferente al de la privatización de empresas del Estado que no tienen la presencia desmedida y la actividad social y profunda que tiene la C.V.G. **Este** proceso tiene que administrarse en forma global. Tiene que aceptar una transferencia progresiva a la gobernación, a las alcaldías y las comunidades de las responsablidades macro-sociales actuales de la C.V.G.»

Las percepciones anteriores fueron el fruto de mi asistencia a un foro, celebrado en Puerto Ordaz el 27 de octubre de 94, para discutir, ante un público de unas doscientas personas de la zona, las estrategias de privatización de la nueva gerencia de la C.V.G. Tres meses más tarde, la presidencia de la C.V.G. está acéfala (la desempeña como encargado el ministro de Energía y Minas), como consecuencia de la injusta y lamentable campaña de descredito que sacó a Alfredo Gruber de esa posición. El Dr. Gustavo Coronel, como Director General, maneja el día a día de las empresas de Guayana y, como era de esperarse de un profesional de sus altas calificaciones y de su implacable honestidad intelectual, ha

sembrado -también- de ideas novedosas al proceso por venir. En el camino ya se ganó la enemistad de las mismas fuerzas que atacaron a Gruber y que, de no dársele a Coronel la autoridad formal de dirigir el proceso, desde la presidencia de la C.V.G., como se lo merece, también terminarán por provocar su renuncia (Por cierto que el no nombramiento de un presidente en la C.V.G., ha sido interpretado por muchos residentes de la zona como un demostración visible de la poca importancia que el resto del país, y en especial su dirigencia política, le concede a la C.V.G. y a los problemas de Guayana. No parece poder explicarse, de otra manera, que a la segunda empresa pública del país, se le haya nombrado un presidente interino en la persona del ministro de Energía y Minas, que bastante tiene ya, de que ocuparse).

Visto ahora el mismo proceso en su desarrollo, creo que debo complementar mi visión conceptual de ayer, con algunas duras realidades más concretas.

El enfoque necesario (Dos soluciones para un problema)

Empecemos por atacar el problema de la C.V.G. contra dos telones de fondo diferentes: 1) El técnico. 2) El social. La simple división del problema, tal como aquí se sugiere, apunta de inmediato a soluciones diferentes. En efecto, aun cuando en el tiempo, la soluciones del problema son inseparables, la forma de enfocar cada una de ellas será distinta, afectará a diferentes actores y requerirá de diferentes habilidades gerenciales y políticas para su solución.

El problema técnico. Tiene que ver con el estado físico y financiero de las empresas de Guayana y con las medidas a tomarse para cumplir con lo que debe ser la primera prioridad de todos: Mantener operativas las empresas de la C.V.G. Esto que suena sencillo, no es siempre comprendido por aquellos que tienen alguna capacidad de influir sobre los mecanismos de solución. Algunos piensan que las empresas no hay que venderlas a precios de «gallina flaca», pero no tienen la menor idea de lo que realmente valen, y al ponerle un precio «emocional» corren el riesgo de que se repita

la experiencia de la Línea Aeropostal Venezolana. Otros trabajan por mantener la vida de las empresas dentro de la misma cultura operacional que ha prevalecido, hasta ahora: con enormes presupuestos de publicidad que mantienen rentables a muchos medios de comunicación, que no sobrevivirían sin **eso.** Que compra a precios superiores a los que podría comprar si no tuviera que pasar por las agonías de ciertos procesos de licitación que lo que hacen es cartelizar la oferta. Que, en ocasiones, como en el caso de los megaproyectos privados de aluminio ha estimulado una enorme proliferación de gastos en infraestructuras que no eran necesarias, sin la comprobación previa de que los megaproyectos se construirían, y que puso a circular dinero en la zona que algunos aprovecharon y que no le dejó gran cosa a la C.V.G (Los proyectos privados no se desarrollaron). Estas experiencias no serán repetibles y la cultura organizacional que ha permitido su vigencia, tiene que ser sustituida, so pena de que las empresas no subsistan. Así tienen que entenderlo los beneficiarios del viejo estilo, que aún podrán prestarle sus servicios a las empresas de la C.V.G., bajo otras condiciones. Salvo que prefieran, como parecen preferir algunos, que desaparezcan estas empresas. De lo que se trata, ahora, es de obtener capital fresco y tecnología para hacer viables a las empresas que hoy luchan con las uñas para subsistir con lo que tienen. ¡No es posible!. De manera que no se trata de privatizar, ya que sé que esa es una mala palabra que nuestro Gobierno actual pronuncia con reticencia. De lo que se trata es de convertir en viables a las empresas que, de seguir como van, tendrán que cerrar, salvo que el Estado obtenga -de donde no tiene- los recursos para su modernización.

Veamos ahora detalles específicos sobre la situación de algunas de las empresas de la C.V.G.

- El endeudamiento acumulado al 31-07-94 de las empresas es de US$4.800 millones.

- **Alcasa**. Tiene un alto nivel de endeudamiento. Serios problemas de Caja, imposibilidad de efectuar nuevas inversiones,

obsolescencia tecnológica y niveles precarios de productividad y producción. No debe ser, pues, blanco favorito de nuevos capitales. Pero, de decidir hacer un esfuerzo serio para su venta -parcial o total- debe hacerse ya, aprovechando los altos precios a los cuales ha llegado el aluminio en los mercados internacionales.

- **Venalum**. Tiene pasivos inflexibles, difíciles de negociar, dada su condición de empresa pública. Requiere algunas inversiones adicionales. Sin embargo, esta empresa tiene tecnología de punta y debería poder re-estructurarse sin mayores dificultades con contribución de capital privado para convertirla en empresa privada mixta.

- **Bauxilum**. Productora de bauxita y de alúmina. Materia prima y semiterminada para la fabricación de aluminio. Tiene un alto nivel de endeudamiento y una producción inferior a su capacidad instalada. No hay muchas esperanzas de que pueda convertirse en exportadora rentable de bauxita y/o alúmina, y paga hoy el precio de haber ampliado su capacidad de producción en anticipación a una expansión por parte del sector privado de la industria del aluminio... que no llegó.

- **Carbonorca**. Fabricante de ánodos de carbón para los procesos de reducción del aluminio primario. Requiere también de nuevas inversiones.

Como se podrá apreciar todas nuestras empresas vinculadas a la producción de aluminio tienen necesidad de capital fresco, casi todas requieren mejorar su tecnología y productividad y pareciera que, de alguna manera, hiciera falta una visión global que entendiera y administrara efectivamente las diferentes interacciones entre ellas y decidiera sobre su capacidad de insertarse rentablemente, tanto en el mercado nacional como en el internacional, donde ello sea posible. No parece ser el Estado el mejor gerente para administrar estas complejidades.

- **Sidor**. Tanto en sus unidades de productos no planos como en las de productos planos requiere de nuevas inversiones. Tiene baja productividad y cierta obsolescencia tecnológica. Es, quizás,

una de las empresas que pudiera convertirse en rentable con una buena inyección de capital y el desarrollo de nuevos productos con tecnología moderna. Es fuerte candidata, junto con el sector de aluminio a la creación de empresas mixtas privadas, aunque se modernice por sectores, paulatinamente.

- **Minerven**. Pareciera que no hubiese urgencia inmediata en buscarle nuevo capital a **Minerven** si se está dispuesto a mantenerla al nivel modesto de producción de hoy y, aun así, podrían haber dificultades para que pudiera optimizar la explotación del oro en las dos minas que opera. La explotación del oro, ofrece múltiples opciones para atraer al capital privado, desde el desarrollo de la gran minería hasta la presencia de la pequeña y mediana minería. Lo que si es cierto es que esta industria de extracción requiere de un largo tiempo de maduración, capitales elevados, buenos controles por parte del Estado y definición clara de las reglas del juego. A mediano y largo plazo estamos sentados sobre una riqueza potencial que, de ninguna manera, podría producir a corto plazo los exagerados ingresos para el Estado, que la desinformación anuncia a diario. Sin embargo, cualquier país sensato, con visión de largo plazo, hubiese estructurado hace tiempo su explotación racional.

- **Uverito**. La plantación de pinos que administra la C.V.G., tiene un enorme futuro si el Estado deja de obstaculizar la industrialización de empresas especializadas en la explotación de madera. Existen diversos usos y diversidad de proyectos: aserraderos privados, usuarios de pulpa, fabricantes de laminas y de cartón piedra, etc. No obstante, aun con el largo tiempo de maduración que tienen los pinos, antes de estar listos para el corte, existe ya una buena cantidad de árboles que pasaron su hora de ser cortados por no haberse instalado a tiempo las industrias para la utilización de la riqueza forestal. No hay una política clara en cuanto a exoneraciones de tasas arancelarias a los equipos traídos del exterior para su explotación, ni incentivos fiscales que pudieran acelerar el proceso de creación de nuevas industrias en la zona. Ni

siquiera se ha podido desarrollar una infraestructura para la exportación de los cortes no utilizados en el país. Por lo tanto se pierde una buena oportunidad de aprovechar, hoy, las demandas ocasionales de una industria que en el pasado se manejó exclusivamente por contratos de suministro a largo plazo. Por otra parte, la enorme riqueza vegetal allí sembrada, y las labores de investigación y mantenimiento que ha hecho el personal de la C.V.G., es admirable y merece que se complemente con un fuerte esfuerzo industrial que sería el resultado de una mayor atención por parte del Estado. No en la creación de nuevas empresas, pero si en el estimulo y en el desarrollo de una infraestructura que permita la presencia activa del sector privado.

Este ha sido un muy rápido análisis de algunas de la empresas de la C.V.G. Quedan otras por mencionar, entre ellas, la más importante de todas por su rentabilidad es Ferrominera del Orinoco, la cual entrará en asociaciones estratégicas para algunas de sus actividades.

Lo más importante a destacar es que la C.V.G. posee una red importantísima de empresas de diferentes actividades, ya establecidas en la región, que corren el peligro de disminuir sus actividades, hacerse improductivas y hasta desaparecer, sino reciben una inyección de capital, un desarrollo tecnológico adecuado y un cambio en ciertas prácticas gerenciales. La mayoría de ellas, consecuencia de su condición de empresas del Estado, dentro del sector público y ahogadas por normas, procedimientos y controles que harían inoperantes a las más boyantes empresas del sector privado. Cómo se atrae al capital y en que proporción participará, es cuestión de dilucidar. Pero me temo que aun cuando se insista en mantener la presencia del Estado como accionista, esta presencia no debería llegar al 50% de la propiedad de las acciones, en ningún caso, a fin de evitar la calificación de empresa del Estado de la nueva asociación. Más aun, el Estado debería pensar seriamente en la democratización del capital de esas empresas, ofreciéndole a la población la oportunidad de comprar

acciones a bajo precio. De esa manera, las empresas tendrían una participación verdaderamente nacional y estaríamos en el camino de diferenciar entre empresas públicas, es decir, de todos nosotros y empresas del Estado, propiedad del restringido ámbito del Gobierno de turno.

Lo Social. Lo primero que hay que recordar es que la C.V.G. se creó con una Corporación de Desarrollo Regional y, por lo tanto, algunas de sus actividades para estimular el crecimiento de la región, no estaban asociadas al concepto exclusivamente gerencial de la optimización de las ganancias. Sin embargo, en el camino de su crecimiento la C.V.G. se embriagó con su rol, ya no de promotor, sino de ejecutor de todas las obras de infraestructura y de prestatario de los servicios. En su afán de abarcarlo todo creo un sistema que desestimuló toda oportunidad de desarrollo de las instituciones regionales de gobierno (estado y municipalidades) y de la emergencia de organismos comunitarios civiles que fuesen realmente independientes de las contribuciones de la enorme caja registradora de la C.V.G. Ahora, la descentralización política y administrativa ha creado un vacío de responsabilidades para las Corporaciones Regionales, entendiéndose éstas, como siempre han sido: El instrumento del Gobierno Central para promover el desarrollo regional. Pero eso era cuando a los gobernadores los nombraba el Presidente de la República y no había alcaldes ni concejales electos directamente por el pueblo. Bajo el viejo esquema el Presidente de la República controlaba a la Corporación Venezolana de Guayana y al gobierno regional. Ahora no. Por lo tanto, la gobernación y los municipios quieren ser sus propios agentes del desarrollo. Pero ¿Cómo hacerlo en una región como Guayana, donde la C.V.G (Corporación Regional del Gobierno Central), de hecho controla, todo los resortes del crecimiento. Tiene todos los recursos de la infraestructura física y subsidia a los servicios públicos?. El conflicto parece ser inevitable si las partes se empeñan en mantener su viejo rol. Pero, tampoco es tan sencillo como simplemente entender el

nuevo rol. La C.V.G. quiere ahora dejar de ser el gran dispensador de los servicios públicos y la gran promotora del desarrollo regional. Pero, la actividad política regional no puede -sencillamente- llenar el vacío, sin un período de transición que le permita generar los recursos necesarios para ejercer sus nuevas resposabilidades. Por eso, el gobierno regional prefiere, porque todo sería más fácil, controlar a la C.V.G., ponerla bajo su mando y dirigir el proceso de transición del pase de las responsabilidades sociales de la C.V.G. a la autoridad regional. Es más, de controlar a la C.V.G. probablemente no tendría muchos incentivos para deshacerse de ella, asumiendo sus obligaciones. Pero ni eso es posible, porque para poder seguir manteniendo y financiando la actividad social de la C.V.G., tendría también que controlar su actividad industrial y continuar ordeñando a sus empresas, para obtener los recursos necesarios para atender lo social. Solo que ahora, ni que así se decidiera, podría obtener los recursos necesarios de las empresas del sector industrial, las cuales, como ya hemos visto, ya no pueden dar lo que no poseen y más bien necesitan quienes les aporten capital. Las magnitudes de lo requerido por los gobiernos regionales para mantener los servicios y desarrollar la infraestructura vial e higiénica de la región son considerables. Entre los años 1984 y 1994, la C.V.G. gastó Bs. 34.584 millones en estos rubros, de los cuales Bs. 15.266 millones vinieron de aportes fiscales y Bs. 19.318 millones de recursos de la C.V.G. y sus empresas. Para el año 1995, se estima que lo requerido para la región para sus obras de servicios y otras, será del orden de los Bs. 5.339 millones, mientras que el presupuesto de la C.V.G. solamente alcanzaría a Bs. 1.914 millones. Esto dejaría un déficit considerable en la ejecución de obras, algunas de ellas impostergables. Solamente en el sector de obras sanitarias hidráulicas los requerimientos son de Bs. 2.425 millones y lo presupuestado es de Bs. 844 millones. En materia de recolección de basura, el costo de la prestación del servicio para el año 1994, fue superior a los Bs. 1.300 millones, mientras que lo recaudado

estuvo por debajo de los Bs. 50 millones. En materia de suministro de agua y obras sanitarias, en 1994 el costo para la C.V.G. fue de Bs. 1.400 millones y la recaudación de Bs. 250 millones. Y, si ahora, el gobierno regional tiene que absorber las enormes diferencias representadas por estos subsidios ¿De dónde sacará los recursos?. Por supuesto que, no hay la menor duda de que los usuarios tendrán que pagar más por sus servicios. Pero, ¿Quién asume el costo político de empezar a cobrarle lo que cuestan los servicios a una población que ya está agobiada por la inflación?. No es, pues, de extrañar que el juego esté trancado entre: 1) Los que saben que la única manera de salvar a las empresas industriales de Guayana es buscarle nuevo capital y tecnología, que no puede aportar el Estado, y cambiarle un estilo de gerencia anterior por uno que ya no podrá contribuir miles de millones de bolívares, de sus ingresos, para el subsidio de lo social y, 2) Aquellos que también saben que después que las empresas industriales de la C.V.G. dejen de ser del Estado se habrá agotado toda posibilidad, por muy poco realista que sea, de que ellas solas subsidien el enorme déficit existente entre lo que cuestan ciertos servicios públicos y lo que la población paga por ellos.

Si se ve con objetividad el problema, algo muy difícil para los actores, se reconocerá la existencia de un falso dilema: El problema no está en abrir o no las empresas industriales de la C.V.G. al capital privado. Esto hay que hacerlo, si se quiere que **esa** parte del problema se solucione (es decir, que las empresas sigan **allí**). Y, **eso** tiene forzosamente que ser menos malo que cerrar a las empresas.

La parte social no puede seguirse solucionando con las contribuciones gigantescas de las empresas de la C.V.G., independientemente de quien sea su propietario. Por lo tanto, en Guayana, como en todo el país, se acabó el subsidio indiscriminado del Estado a los servicios públicos y al uso general de las infraestructuras físicas. El futuro inmediato es que todos vamos a tener que pagar por lo que recibimos lo que verdaderamente

cuesta... y algo más. Pero el Gobierno no puede hacer esos cambios sin modernizar totalmente al Estado y en esto entramos, entonces, en otra discusión. ¿Cuál es el programa económico del Gobierno?. ¿Cuáles son sus planes para modernizar la administración pública?. ¿Cómo reducirá la inflación y aumentará la productividad?. ¿Cómo convencerá a los usuarios de los servicios públicos que ahora tendrán que pagar diez o doce veces el precio subsidiado anterior, si al mismo tiempo no aumentan considerablemente sus ingresos en términos reales?.

Todas son preguntas terribles para las cuales no hay respuestas inmediatas. Pero lo que si debe haber es la claridad mental suficiente para entender que si como consecuencia del problema social de la región de Guayana (que es más grave, pero no diferente al que tienen las otras zonas del país, en cuanto a tener que exigirle a la población que pague ahora por sus servicios públicos lo que no pagaba antes), sus habitantes y sus autoridades destruyen al sector industrial, potencialmente productivo, de la zona, por no permitir su conversión en empresas viables, entonces, al problema del costo futuro de los servicios, le añadirán el costo de la destrucción de toda la infraestrutura industrial creada por el esfuerzo de muchos de ellos mismos.

Conclusiones (Un mapita para la acción)

Hay que salvar a las empresas industriales de la C.V.G., haciendo lo necesario para obtener capital fresco, tecnología de punta y una gerencia que no esté subordinada, en su creatividad y en sus decisiones, a las absurdas restricciones que imponen las normas que rigen a las actividades del sector público.

- Hay que establecer un período de transición que necesariamente requerirá del esfuerzo y la colaboración del gobierno central, el gobierno regional, la C.V.G. y los habitantes de la zona, para que puedan ser «financiadas» las inversiones en obras de sanidad y otros servicios, hasta que se logren establecer tarifas al público que cubran los costos de inversión y

administración para la prestación de estos servicios.

- Dada la descentralización y la regionalización política y administrativa del país, hay que definir el rol (si es que lo tendrán) de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, como apéndices del gobierno central. ¿Cómo puede haber autonomía política y administrativa del Estado Bolívar, si la C.V.G. controla los presupuestos para la ejecución de la infraestructura física y la prestación de los servicios públicos y, a su vez, los directivos de la C.V.G. son nombrados por el Presidente de la República?. Por eso, me llama la atención la aparente reticencia que demuestran las autoridades regionales para asumir la responsabilidad social de la C.V.G. y limitar a ésta, a una empresa industrial regional que pague impuestos regionales y nacionales y que le deje las responsabilidades y los recursos para gobernar al gobierno regional.

El país político debe entender las enormes e imprescindibles transformaciones que su estructura de gobierno debe adoptar. Aceptado esto, debe proceder a convencer a la ciudadanía sobre las virtudes de los sacrificios compartidos para obtener el bienestar general. Pero si el país político no entiende que las ambiguedades sobre su futura acción y las falsas promesas, producto de la desesperación, no conducen sino al postergamiento de toda posibilidad de «recuperación», entonces, nos esperan tiempos tormentosos. Y la tormenta siempre produce resultados más dolorosos en aquellos sitios donde destruye las obras positivas y orgullosamente visibles de un esfuerzo colectivo.

Por eso, al mirar a Guayana, siento el dolor anticipado de lo posible.

A menos que...

26 de enero 1995

LA PRIVATIZACION DEL ALUMINIO

El jueves 09 de noviembre de 95, tuvo lugar un evento organizado por la Asociación Venezolana de Industriales del Aluminio (AVIAL), donde se discutió abiertamente sobre los mecanismos y los principios rectores que deberían ser aplicados al acto privatizador. El evento contó además con la participación del experto internacional Robin Adams, quien por años ha sido algo así como un predicador itinerante de los diferentes problemas que enfrenta la industria del aluminio, desde la producción, pasando por sus actores principales, su sistema de precios, su estructura organizacional, su industrialización, su privatización, su comercialización y sus mercados.

El Dr. Erwin Arrieta, ministro de Energía y Minas, abrió el foro. De lo que dijo se pueden extraer dos conclusiones: 1) Que la C.V.G. -como tal- no es privatizable. 2) Que hay que acabar con el «estigma» de la privatización.

La Privatización de la C.V.G. (El problema no es divisible)

La C.V.G., es una institución promotora del desarrollo regional y como tal -según Arrieta- debería continuar como una agencia gubernamental. La aclaratoria viene al pelo, por cuanto pone sobre el tapete un tema no discutido públicamente hasta ahora: El futuro rol de las Corporaciones Regionales en general y el de la C.V.G. en particular, ante el proceso de descentralización política y administrativa en marcha en el país. Más adelante, durante el desarrollo del foro -una y otra vez- los participantes sindicales y políticos dijeron que Guayana «era distinta» a todo lo demás que se pretendía privatizar en Venezuela. Por lo tanto, su proceso de privatización no podía ser igual al de un pequeño hotel en los Andes (No se si fue intencional o no que la referencia se buscó lo más lejos posible de la zona). Por supuesto que todas las privatizaciones son «distintas» y no podríamos exitosamente

producir un manual para la privatización de hoteles o de empresas generadoras de electricidad, o de compañías petroleras, o de corporaciones regionales y sus empresas. Por otra parte, no es cierto que el esfuerzo para el desarrollo de alguna región tiene que hacerse exclusivamente a través de una agencia del Estado. Si eso fuera así, sospecho que las miles de familias que salieron a incorporar el oeste de los Estados Unidos a ese país, todavía estuvieran en Filadelfia y Nueva York esperando por una agencia oficial que les construyera la infraestructura física o les financiara el viaje. Lo que sí hizo el Gobierno de los Estados Unidos fue promover, a través del Congreso, el «Homestead Act» que le garantizó la propiedad de las tierras a los colonizadores. Lo demás lo hicieron ellos. Con sus esfuerzos. Con su fe. Con su trabajo. Enterraron a los numerosos muertos que consumió el esfuerzo y crearon a un país. De manera que ni siquiera para promover el desarrollo de una región se necesita una organización oficial. Pienso que esa debe ser labor de sus habitantes. El sector público, sin pretender ser el protagonista del esfuerzo, puede ayudar con estímulos de toda índole. Con financiamiento y asistencia e información técnica. Con créditos fiscales. Facilitando créditos para proyectos de comprobada rentabilidad. Estoy seguro que uno de los mayores enemigos de la privatización de las empresas de Guayana es la dificultad para desligarlas de esa confusión ideológica que presume que están donde están para dar empleo, para hacer de aseo urbano, de empresa hidrológica, de constructoras y mantenedoras de vialidad, de financiadoras de escuelas y universidades y, si les queda algún tiempo, para operar eficientemente sus empresas. ¡Pues no!. No están allí para **eso.** Están allí para ser productivas. Para que su presencia **rentable** pueda tener un efecto multiplicador generador de riquezas. Por **eso**, la privatización de las empresas de aluminio y de otras empresas de la zona, no podrá hacerse eficientemente si no se modifica el entorno social y político, dentro del cual operan. Lo primero que hay que hacer es crear dos C.V.G. La C.V.G (I),

debe quedarse con todas las actividades comunitarias y sociales que no son propias de las empresas industriales. La C.V.G (II), debe constituirse como un «Holding», cuyo fin prioritario será vender a las empresas industriales bajo su coordinación. La C.V.G (I) debe, con la asistencia temporal del Gobierno central, transferir **ordenadamente** sus responsabilidades a los gobiernos municipales y estatales, según sea el caso. Al final, dentro de varios años (entre 5 y 10 como mínimo) tendríamos una región con empresas productivas, un gobierno regional/municipal fuerte y unos habitantes que podrían mirar al poder central como un socio lejano en el proceso del desarrollo. Un socio a quien se le pagan impuestos considerables y de quien se espera retribución en la forma de construcción de vialidad interestatal (autopistas nacionales), servicios de teléfonos y de electricidad nacionales (Redes de interconexión con otras regiones del país e internacionales). El establecimiento de normas generales y la supervisión de programas de educación y salud. Asignaciones especiales del Gobierno Central para proyectos específicos, cuyas dimensiones obliguen a considerarlos como proyectos nacionales (Por ejemplo: Centros de investigación que atiendan a todo el país). Asistencia en caso de catástrofes. Servicios de seguridad y defensa nacional. Ayudas promocionales de la región, a través del servicio exterior, etc.

El Estigma de la Privatización (El concepto de la «hemorragia»)

Durante su campaña electoral, el Dr. Caldera, tomó una posición ante dos problemas nacionales que no lo han ayudado mucho en sus dos años de Gobierno. Una fue al ser requerida su opinión sobre la posible ampliación de sus actividades en Venezuela de las trasnacionales de la industria petrolera, respondió: «Por Dios, que se conformen con la Faja». La otra fue, cuando al referirse al número de privatizaciones en el país, dijo: «Hay que detener a esa hemorragia». Esas dos posiciones,

bien conocidas por todos los venezolanos, ahora que el Gobierno ha dado marcha atrás en ambos casos, ha provocado la ausencia presidencial de estos procesos. Pero, Caldera no puede continuar evadiendo lo inevitable, ni puede continuar negándole su apoyo frontal a la Apertura Petrolera (algo ha dicho en ese sentido), ni a las privatizaciones (ha dicho menos). Esta «ausencia» ha dado como resultado que ambos procesos hayan sido enfocados con una exclusiva visión tecnocrática y poca visión política. El Presidente es coresponsable de la palabra «estigma» que aún califica a la privatización. Estigma que se hace presente en definiciones que se perciben como avaladas por el propio Caldera: «La privatización es perjudicial para los trabajadores, empeora sus condiciones de trabajo y produce desempleo» (pocos sacan públicamente las positivas cuentas de la CANTV en todos estos rubros). La privatización es una «desnacionalización» (Este es el peor calificativo de todos. Parece que para el Presidente y para los que piensan como él, lo único que es nacional es lo que es del Estado. Pues -para mi- Polar, Sivensa y la Electricidad de Caracas son muy, pero muy nacionales. Tampoco creo que sea más nacional el Hotel Hilton por ser del Estado que el Hotel Tamanaco por ser del sector privado. Más aun, algunas franquicias internacionales presentes en Venezuela, y operadas por venezolanos y con capital nacional, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y Mcdonald's, son tan nacionales como las empresas de la C.V.G. Las empresas que sí no son nacionales, son las que producen los bienes que importamos y en los cuales gastamos 10 mil millones de dólares todos los años, consecuencia en muchos casos, de una errada política de desarrollo nacional que de manera populista ha querido favorecer a todos los sectores -supuestamente- productivos del país y no ha sabido identificar y estimular en forma prioritaria nuestras ventajas comparativas como nación, para convertirlas en ventajas competitivas).

Pues bien esa ausencia presidencial de dos procesos críticos para el futuro de la vida del país, ha permitido que la Apertura

Petrolera se planteara en términos algo negativos para la nación, al no darles facilidades a los **nacionales** para que participaran en su propia industria, al no crear un mercado de capitales con acciones de las empresas petroleras, cuya oferta a la venta pudiera educar a nuestra población en canalizar el ahorro por vías distintas a las simples cuentas bancarias. El Gobierno que más ha presumido de nacionalista y defensor del bienestar ciudadano, le ha negado a los nacionales de este país la oportunidad de participar de **verdad** en el proceso de Apertura Petrolera. Y eso en mucho se debe a la ausencia del Presidente. Si en lugar de «irse» del esfuerzo, se hubiera incorporado a él, aun «privatizando» dentro de la Apertura, hubiera podido convertir al proceso en un acto **verdaderamente nacionalizador**. Porque hubiera estimulado -desde el comienzo- la participación nacional.

La Privatización del Aluminio (Más de lo mismo)

Robin Adams dio razones importantes para que la C.V.G., no considere la venta de **todas** las empresas del aluminio en un solo «bloque». Siendo como es, un asesor económico, Adams se concentró en las variables de tiempo y precios como disuasivos de esta opción. Según él, será muy difícil encontrar rápidamente a una empresa/consorcio que quisiera comprar todo nuestro complejo de aluminio. De haberlo y de encontrarse, nos pagaría bastante menos que lo que pudiéramos esperar si vendiéramos el complejo en «paquetes» integrados lógicamente (Adams alega que todas nuestras empresas vinculadas a la manufactura del Aluminio no constituyen un «paquete» complementario). A las consideraciones anteriores yo le agregaría las siguientes:

- Se reemplazaría un monopolio del Estado por un monopolio privado (Esto violaría algunas leyes vigentes).

- Se dificultaría enormemente la participación nacional en la privatización ya que, como en el caso de la Apertura Petrolera, el proceso estaría diseñado para favorecer -exclusivamente- a las grandes empresas trasnacionales (Pese al debate político que

provocó la ausencia de los nacionales en la Apertura Petrolera, la privatización del aluminio va por el mismo camino).

- El problema de la deuda de estas empresas se magnificaría, puesto que habría que negociarla con un solo comprador (Se estima esta deuda en unos US$1.560 millones, de los cuales US$640 millones son con entidades del Estado y US$920 millones provienen de otras fuentes de financiamiento. La deuda con el Estado podría «negociarse», pero la deuda comercial habría -lamentablemente- que pagarla... de alguna manera).

Hay muchos más problemas por resolver. Me preocupa el mandato que le pudiera haber dado la C.V.G. a la empresa internacional responsable, por establecer mecanismos para la privatización de las empresas de aluminio. Me temo que sus términos de referencia estén limitados a obtener rápidamente el mayor monto de dinero posible. Eso es -ni más ni menos- una privatización con criterio meramente fiscalista. Dentro de ese escenario -es natural- que Merryl Linch prefiera una venta total y directa (dinero ya) a una parcial colocación de acciones de estas empresas en la Bolsa de Valores (proceso de capitalización más lento). La forma fiscalista de privatizar podría ser vista -por algunos- como un buen negocio para el Estado (los menos). Yo lo vería como un mal negocio para la Nación (todos nosotros).

Más aun, lo que va a suceder es que el dinero, producto de esta privatización, tampoco va a entrar al fisco, y se perderá una oportunidad de darle a los nacionales, participación en sus empresas. Hay muchos problemas por resolver antes que el Estado reciba un cheque. Entre ellos: Deudas de las empresas. Avales del Estado. Prestaciones sociales. Condiciones laborales futuras. Venta de acciones o venta de activos. Impuestos municipales, su posible magnitud, su futura vigencia. Problemas ambientales: finiquitos por daños ecológicos anteriores a la privatización de las empresas. Convenios de suministro de electricidad con Edelca, a precios comerciales competitivos. Contratos de suministro de alumina, de bauxita y carbón (En

caso de que se vendan paquetes separados). Resolver la oposición de la sociedad civil en la zona. Actitud sindical. Robin Adams - quien se mostró optimista- estimó en no menos de tres años el tiempo necesario para concluir la privatización de las empresas de aluminio en Guayana.

Algunas recomendaciones:

- Dividir a la C.V.G. en dos empresas, tal como se sugiere en este trabajo.

- Desarrollar un plan conjunto C.V.G., Gobierno nacional y gobiernos regionales (Estados/Municipios) para transferirle a los gobiernos regionales las **actividades** comunitarias y sociales, hasta ahora ejecutadas por la C.V.G (Nótese que se habla de **actividades** y no de eliminar la responsabilidad social que **razonablemente** le corresponde a toda institución productiva, para con las comunidades donde tiene presencia).

- Establecer un cronograma para la privatización total de las empresas de Guayana. Se debe vender un 60% del control a empresas internacionales. Del 40% restante se reservaría un 10% para ser adquirido por el capital nacional, en las mismas condiciones en que lo adquiriría el capital extranjero, o en las condiciones bajo las cuales la C.V.G., o cualquier ente del Estado, participe en el proceso (la condición que sea más favorable, para evitar que se repita el caso de la Apertura Petrolera, donde PDVSA tiene el derecho de recibir de los inversionistas extranjeros, una vez descubierto petróleo, una participación al **costo** del 35% de la empresa productora. Pero, las empresas nacionales que concurran al proceso, también le tendrán que entregar a PDVSA el 35% de su exitosa inversión, al costo. Es decir, se trata desfavorablemente al capital **venezolano** privado en relación al capital **venezolano** del Estado). Veinte por ciento (20%) para ser colocado -poco a poco- en la Bolsa de Valores, en emisión especial de acciones, lo suficientemente atomizadas como para hacerlas accesibles al ahorrista venezolano. De este

grupo, el 10% será vendido a los trabajadores de las empresas de Guayana en condiciones especiales, pero siempre a través de mecanismos bursátiles, para asegurar su libre convertibilidad. Aunque inicialmente se limite temporalmente esta convertibilidad para estimular el ahorro y contribuir al proceso de aprendizaje del ciudadano. Finalmente el 10% restante debe ser colocado en un fondo especial de inversiones con certificados de propiedad, emitidos en forma gratuita a todos los venezolanos. Este fondo debe ser administrado por un ente financiero internacional con la presencia visible del Estado y de los ciudadanos, que se constituirán en auditores de hecho.

- Las regalías que generen las minas de Guayana (Bauxita y las demás) deberán ser depositadas en otro fondo especial, dedicado exclusivamente a inversiones de programas de interés social: fondos de pensiones, Educación y salud. Deuda externa (¿?). (Sobre esto último no estoy tan seguro).

- No se deben privatizar las empresas en grandes paquetes corporativos, cuya adquisición solo sería posible por las grandes empresas trasnacionales. No se trata de eliminar al gran capital del proceso privatizador. De lo que se trata es de que también participen los «demás». Entre los «demás» están, en forma prioritaria, las empresas privadas venezolanas, industrializadoras del aluminio que -para mi sorpresa- son más de cien. A estas corporaciones -como ya hemos dicho- hay que asegurarles la oportunidad de integrar sus empresas al proceso de manufactura del aluminio, abriéndole espacio a su participación accionaria en la industria a privatizarse. Además hay que garantizarles -también- el suministro seguro y confiable de aluminio primario a precios de mercado.

Finalmente, debo admitir que para hacer posible -aunque sea parcialmente- lo aquí sugerido se requieren cambios fundamentales en las actitudes de nuestro liderazgo político y de la sociedad civil. A menos que empecemos a desmontar al Estado y a transferir su protagonismo económico al sector privado, no

haremos sino correr la arruga de la ineficiencia y malbaratar -de nuevo- los recursos frescos que nos ingresen (de paso, me llamó la atención una expresión repetitiva en boca de Carlos Navarro, Secretario General de la C.T.V., quien dentro de una magnifica intervención dijo varias veces: «Ustedes el sector privado y nosotros los trabajadores...» Si los trabajadores no son Gobierno, ni son del sector político, y si según Navarro parece que tampoco son del sector privado, ¿de qué sector son entonces?. Esta es otra actitud que hay que cambiar. El sector privado, Sr. Navarro, somos «ustedes» y «nosotros», lo que yo prefiero llamar «todos» (los que no somos parte del estamento formal del Estado).

Soy optimista, en cuanto al éxito que tendrá el proceso privatizador de las empresas de Guayana. Y lo soy porque creo -todavía- que los partidos que actúan en la vida política son rescatables. Es verdad que sus conceptos han envejecido, pero eso no significa -necesariamente- que no puedan incorporarse al mecanismo de cambio, mediante el ingreso progresivo de sangre joven a su liderazgo. Más aun, creo que este Gobierno es rescatable, lo cual es estirar bastante al optimismo. Y va a ser rescatable, porque en algún momento, el Presidente Caldera va a examinar -en serio- las opciones que le quedan, si quiere terminar su período. Algo que asumo como cierto. Privatizará, devaluará, levantará los controles de cambio y precios y aplicará el I.V.A. Porque examinadas las opciones, Caldera va a escoger la única política económica y social que le permitirá cumplir con su verdadera prioridad: Quedarse.

¡Eso mismo hará!.

Aunque usted no lo crea...

16 de noviembre 1995

LOS PROBLEMAS DE FONDO

De vez en cuando conviene releer opciones dadas sobre las soluciones a problemas específicos, desbrozadas un poco, y resumidas de manera de que el lector pueda enfrentarlas directamente y sin los rodeos a los cuales obliga, a veces, el análisis exhaustivo.

Tal es el caso de nuestro artículo de hoy, donde abordamos dos temas críticos para el futuro del país: La C.V.G. y la Apertura Petrolera, y otro tema coyuntural: El desabastecimiento, al que trataremos con cierto humor, lo cual, como se sabe, es una cómoda manera de esconder la gravedad de lo comentado.

Para la C.V.G. sugerimos una solución previa a la gran solución necesaria. Es relativamente sencilla, fácil de implantar y resolvería los problemas de naturaleza política que hoy ahogan a cualquier proposición inteligente que se mencione, amén de que neutralizaría bastante las presiones regionales, al colocar las responsabilidades por la solución de la crisis donde deben estar.

La Apertura Petrolera es otra cosa. Ya que en este caso, todos estamos de acuerdo con el fondo de la proposición de P.D.V.S.A. Sin embargo, en nuestra opinión, se requieren algunos cambios en la forma de la proposición, a fin de estimular la participación de capitales venezolanos. Entiéndanse bien, hablamos de **capitales venezolanos** y no simplemente de la prestación de servicios por parte de empresas venezolanas a las nuevas empresas que se crearan para administrar la apertura. Queremos, pues, ver socios venezolanos en **esas** nuevas empresas.

Además, y esto no dependen de P.D.V.S.A., quisiéramos «desestatificar» la propiedad de los yacimientos petroleros y convertirlos en propiedad de **todos** los venezolanos, con el Estado como el ente regulador de su explotación. Repito, **regulador** de la propiedad de **todos**, pero no propietario de lo que es de todos

los venezolanos. Para ello, hay que terminar con la confusión venezolana, en el sentido de que para que algo sea **nacional** tiene que ser **propiedad del Estado**. No es así. Para que algo sea nacional, debe ser propiedad de los nacionales, es decir, todos nosotros, los venezolanos. Para lograr esto, se necesitará voluntad política, presión de todos los venezolanos y cambios importantes en la Constitución y algunas Leyes.

Finalmente, nos referimos en el comentario sobre el desabastecimiento, a un aspecto bien específico del mismo, el cual, burla, burlando, se convierte en agente representativo de todo lo que escasea.

La C.V.G.

Habiendo hecho múltiples análisis sobre como manejar el futuro de la C.V.G., el problema de fondo se reduce a como separar, dentro de la C.V.G. a las empresas industriales de las funciones sociales y comunitarias de la institución. Muy sencillo. A la C.V.G. hay que partirla en dos bloques. Uno administrado por un holding (Casa Matriz) a lo P.D.V.S.A., debajo del cual se colocaría a todas las empresas industriales. Las buenas y las malas. Otro bloque, el cual mantendría las funciones de promoción del desarrollo regional y la prestación de los servicios públicos que a lo largo de los años ha asumido la C.V.G.: Aseo, agua, vialidad, apoyo a fundaciones, etc.

El primer bloque se denominaría Industrias de Venezuela, S.A (Induvensa) y podría, más tarde, incluir bajo su jurisdicción otras empresas industriales de otras regiones, en las cuales el Estado tenga participación. «Induvensa» tendría como primera tarea racionalizar las estructuras operativas de las empresas de Guayana. Fusionar. Desagregar. Cerrar. Ampliar. Vender. Asociar, etc., a fin de que, al final, exista un complejo productivo, totalmente privado (desaparecería entonces Induvensa), o mixto, (se quedaría Induvensa). El Presidente del Holding y la Directiva la nombraría, a diferencia del caso de P.D.V.S.A., la Asamblea

de Accionistas. En ella estarían, en la proporción que sugiera el origen del capital social, los ministros del Gabinete Económico, los accionistas privados activos y los pequeños accionistas pasivos que podrían surgir de la democratización de parte del capital de esas empresas, mediante la colocación de acciones para la venta al público en la Bolsa de Valores.

El otro bloque, el de la promoción y desarrollo regional y hoy dispensador de variados servicios públicos y ejecutor de acciones de tipo social, seguiría, por los momentos, bajo la denominación de C.V.G (Corporación Venezolana de Guayana). Sólo que al efectuarse la división, aquí recomendada, las preguntas obligadas serían:

1) ¿Qué rol tiene en un país descentralizado políticamente una Corporación de Desarrollo Regional dependiente del poder central?.

2) ¿De dónde generará fondos suficientes esta corporación regional para continuar subsidiando a los habitantes de la región en la prestación de ciertos servicios públicos, como por ejemplo, agua y recolección de basura, donde la diferencia entre el costo real de prestar esos servicios, y lo recolectado de los usuarios, es de más de dos mil millones de bolívares al año?.

3) ¿No sería lógico transferirle al poder político regional (gobernación y municipalidades de la zona) las responsabilidades por lo que ahora hará **ese** bloque de la antigua C.V.G.?

Las responsabilidades del Gobierno para con la población, hay que colocarlas donde legítimamente deben estar. El desarrollo regional y la prestación de servicios públicos son **ahora** una responsabilidad regional. El costo político de informarle a los habitantes de la región que se acabaron los subsidios indiscriminados, podría ser compartido, en el arranque hacia una nueva sociedad, por el Gobierno central y el regional. Pero de allí en adelante, le tocaría al Gobierno regional poner su casa en orden.

Por **eso**, una vez hecha la división de la C.V.G. existente,

en los dos bloques aquí sugeridos, estoy totalmente de acuerdo en que el Presidente del nuevo bloque de la C.V.G. que se ocuparía de la promoción regional y de la prestación de los servicios públicos, sea el Gobernador del Estado Bolívar, Sr. Andrés Velásquez.

Complázcalo Sr. Presidente.

La Apertura Petrolera.

Todos estamos de acuerdo en que hay que «abrir» la industria petrolera al capital privado. Pero el hecho de que estemos de acuerdo con el **fondo** del problema, no significa que descuidemos la **forma** de resolverlo.

No hay industria en Venezuela que se preste, como la petrolera, para analizar la confusión permanente que existe en nuestro país, entre los conceptos de lo que es propiedad del Estado y lo que es público.

El origen de la confusión es una visión nacionalista que no acepta como **nacional** sino a lo que es del Estado. Así, por ejemplo, «nacionalizamos» a la industria petrolera, «estatificando» su operación. Consideramos, también, a esa Industria como nacional, porque los yacimientos, por Ley, son propiedad del Estado. Sin embargo, el criterio que pretende convertir en «nacional» la operación del petróleo pasándole al Estado la exclusividad del derecho de ejercer esta actividad sirvió, al mismo tiempo, para negarle a los nacionales (nosotros) el derecho a participar en la explotación de lo que es de todos. Es verdaderamente curiosa la actitud que pretende que para que algo sea nacional, tiene que ser del Estado. Es por **eso** que en Venezuela tenemos empresas del Estado a las cuales les reservamos el usufructo de la operación del bien que debería ser y es de todos, y tenemos pocas empresas realmente **nacionales** a las cuales se pueda identificar como tales, porque de verdad son de aquí, por ser propiedad de nosotros los venezolanos. Bajo esa correcta definición, la Electricidad de Caracas es más nacional

que Edelca y Sivensa más nacional que Sidor. Y también, la General Motors y la Ford son empresas de los Estados Unidos si ser del Estado Norteamericano. Y la Shell es Británica-Holandesa sin ser de ninguno de esos Estados, y así lo entendemos todos. Sólo que cuando trasladamos la percepción de la propiedad nacional a nuestro país, pareciera que los ciudadanos nuestros, no lo fueran para el propósito de identificar a la propiedad nacional. Ya lo dijo Adam Smith, la verdadera diferencia no está entre lo **público** y lo **privado**. La diferencia está entre lo **público** y lo que es del Estado. Entendiéndose como público lo que es de todos los habitantes de un país. El petróleo es, pues, un bien público (de todos nosotros), y no un bien del Estado. El Estado tiene derecho a cobrar impuestos a las actividades públicas, pero no tiene derecho a «cobrar y darse el vuelto» al pretender ser el **dueño** de lo público y, a la vez, cobrar impuestos de regalías y otros impuestos a sus agentes operadores (las empresas del Estado) para convertirse en un Mega-Estado (Petro-Estado en nuestro caso) que puede intervenir y controlar, de hecho, mediante la usurpación de la explotación de lo público, todas las instituciones de un país. Por eso, la Apertura Petrolera, planteada simplemente como un regreso a la etapa pre-nacionalización, con un Estado propietario de los yacimientos y un sector privado, mayoritariamente extranjero, como agente explotador, no puede ser la respuesta moderna al necesario cambio estructural de nuestra economía y de nuestro Estado. Hay ahora que apuntar a la consecución de dos objetivos: 1) La participación masiva de los nacionales (venezolanos) en los mecanismos de apertura. 2) Cambiar el concepto de que los yacimientos petroleros son propiedad del Estado, por el nuevo concepto que son propiedad de todos los venezolanos y el Estado está **allí**, para normalizar y reglamentar su explotación por nosotros y/u otros.

De no hacerlo así, el Estado como propietario no tendría una contrapartida **nacional**, lo suficientemente fuerte, que le pueda reclamar el mal uso, que volverá hacer, de no cambiar su

estructura de propiedad, de los recursos petroleros. Cuando los **propietarios** seamos todos los venezolanos, entonces, el Estado actuaría por delegación nuestra y tendría que someterse, de verdad, al escrutinio **nacional** sobre su actuación como representante de nuestros intereses.

Por lo tanto, la Apertura Petrolera tiene que garantizarle a los legítimos propietarios del bien público lo siguiente:

- Una oportunidad preferencial para que el capital venezolano y las empresas de servicios venezolanas puedan participar tanto en la propiedad como en la operación de las nuevas estructuras a formarse.

- El capital venezolano debe venir de tres fuentes principales: 1) Las empresas de servicios petroleros venezolanas que ya, hoy en día, representan un porcentaje importante cualitativo y cuantitativo de la actividad petrolera global. 2) De capitales importantes venezolanos que no están asociados a la industria petrolera nacional, pero que podrían interesarse en ser accionistas en la nueva Apertura. 3) De pequeños ahorristas e inversionistas nacionales, fondo de pensiones y de ahorro de los trabajadores, fondo mutuales y otras agrupaciones financieras que estarían interesadas en participar en la Apertura Petrolera, si se les diera una señal inequívoca y oficial de que **ellos** tienen, no solo la oportunidad de invertir, sino que el Estado (ahora si) estimula su presencia activa en el desarrollo de esta Apertura.

En todo caso, repito, el fondo del problema está en la propiedad que el Estado tiene del bien público (los yacimientos petroleros) y en la confusión que existe en Venezuela, donde solamente se considera como nacional lo que es propiedad del Estado.

La Apertura Petrolera no puede ser ocasión e instrumento para ratificar y afianzar ese equivocado concepto que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

El Desabastecimiento.

En las últimas semanas se ha desatado, de verdad, por primera vez en este Gobierno el desabastecimiento de ciertos productos básicos de consumo en Venezuela. Empezó la leche por ausentarse, pero como muerte anunciada no cobra cadáveres, la población y el pulpero de la esquina ya se habían abastecido. Luego vino el azúcar, cuya ausencia fue cubierta con café amargo y frutas naturales, sin descontar al noble papelón, que no se ausentó del todo. Luego se fueron los huevos, que con toda y su connotación de dispensadores de colesterol, causaron ausencias dolorosas en la mayor parte de los hogares. Desde la finura de una salsa holandesa y algún soufle excepcional, hasta el par de huevos fritos dominical con la presencia de una arepa casera y la ausencia obligada del jamón de ayer.

De una u otra forma la no disponibilidad de alimentos tan caros a nuestra dieta, en el sentido literal de la palabra, no causaron el impacto social que provocó la noticia, casi dada en voz baja, de que de ahora en adelante nuestros industriales, dejarían de producir el papel higiénico suave de primera clase.

El shock inicial que produjo la noticia, fue sustituido rápidamente por el conformismo de quien entiende que, ante la ausencia de los alimentos de primera necesidad, y la obligación de reducir la dieta diaria a mínimas proporciones, el papel higiénico, de verdad, pasa a ser una necesidad secundaria.

Quien no come, no...

16 de febrero 1995

LA AGENDA VENEZUELA

El Gobierno Nacional le ha presentado al Fondo Monetario Internacional (F.M.I) primero y al país después una lista de buenos deseos para la acción denominada «Agenda Venezuela». Haciéndole honor al pasado catequista de muchos de las personalidades del gabinete la «Agenda Venezuela», como los mandamientos de la Ley de Dios, contiene diez reglas de conducta que, si seguidas al pie de la letra, le garantizarán al país, si no el acceso directo al cielo, por lo menos, la modernización de sus estructuras económicas primero, sociales algo después y políticas -por lo visto- todavía no.

Pero la religión católica es mucho más que los diez mandamientos y la crisis nacional, para su solución requiere también de mucho más que los diez puntos que la «Agenda Venezuela» propone. Tal como hacen algunos católicos que cumplen con los ritos de la religión, sin adentrarse en su filosofía, sin practicar ni compartir sus sabias y hermosas predicas y ejemplos y sin arrepentirse realmente de sus pecados, nuestras flamantes autoridades públicas le han llevado al F.M.I., los ritos externos de la nueva religión económica, para cumplir con la apariencia de una promesa de mejor conducta, sin un real propósito de enmienda. Sin arrepentimiento. Con la hipocresía del que piensa que con «aparentar» religiosidad se cumple con los mandatos del Señor. Pero ni nuestro Señor en lo religioso, ni el señor Camdessus en lo económico, pueden ser engañados con el disfraz que pretende esconder los verdaderos colores del camaleón.

Veamos ahora los «Mandamientos», versión oficial de la «Agenda Venezuela».

Como obtener dinero en diez lecciones fáciles (El Espejismo del Compromiso)

El *aula* es el F.M.I., el *alumno* más destacado es el Sr. Camdessus. El *maestro* es el Dr. Matos Azocar y los diez *Mandamientos*/lecciones ofrecidas son:

Primer Mandamiento: Reducción gradual del déficit fiscal. Aquí el alumno aprovechado encuentra el primer problema de aprendizaje. La oferta es reducir el déficit fiscal en 1996 a 4%, y a 2% en 1997. Para ello se ofrece:

- *Mejorar la recaudación fiscal* (Posible. Dada la reconocida eficiencia del Seniat).

- *Aumentar el Impuesto a las Ventas y el Consumo Suntuario de 12.5% a 15% en 1996* (Probablemente este aumento será insuficiente. Se requiere por lo menos llevarlo a 16 / 17% y aplicarlo a nivel de consumidor. Si llamarlo I.V.A., le causa al Gobierno «pesadillas históricas» se podría llamar I.V.C.: «Impuesto de Ventas al Consumidor»).

- *Creación del Fondo de Estabilización Fiscal y reasignación de recursos de acuerdo con prioridades fiscales, para contribuir con la reducción del gasto* (Suena bien, pero... ¿Prioridades fiscales?. ¿Qué es eso?. ¿Reasignación de recursos?. ¿A quiénes?. ¿Cómo?. ¿Y el Congreso?. ¿Y las leyes entrabadoras que tenemos en materia de política fiscal y presupuestaria?. Y lo que más le preocupa al alumno Camdessus: ¿está de acuerdo con este tremendo cambio de mentalidad oficial el maestro Matos y el excelso profesor Caldera?. ¿O es esto parte de uno de los «Mandamientos» que se considera cumplido por su mera enunciación?.

- *Constitución de un Fondo para el rescate de la deuda externa* (Por lo general estos fondos se crean en las sociedades con lo que sobra después de haber cumplido con un programa para la asignación de recursos prioritarios. ¿Con lo que sobra?. ¡Ojalá!. Esta sección del *mandamiento* tiene un altísimo ingrediente de buenos deseos y -además- esconde en su intención

la firme creencia de que nuestros problemas económicos -como país- se deben -casi exclusivamente- a la magnitud de la deuda externa e interna y no a nuestra baja productividad como sociedad. Adelantándome algo a la descripción de lo que debería ser la verdadera «Agenda de Venezuela» (la *otra*) creo que lo lógico sería, ante la obligación y la inevitabilidad de pagar lo que se debe y ante la escasez de los recursos que generamos hoy, establecer como primera prioridad, antes de reducir gastos y antes de crear fondos improductivos, convertir a nuestra sociedad en una que produzca mucho más de lo que produce hoy. Lo demás son golpes de pecho. El rito externo. La musicalidad de lo que superficialmente se cree que «suena» bien. Hasta ahora el alumno Camdessus sigue confundido).

- *Congelación del 80% de los cargos vacantes de la administración pública nacional* (El problema no es congelar cargos vacantes. De alguna manera la burocracia los vuelve a llenar. A veces a costos superiores, mediante la figura de asesorías. El verdadero problema es que la administración central tiene que ser definida en sus misiones, objetivos y metas, para después estructurarla para que pueda cumplir con esas misiones. No al revés, como suele suceder ahora. Todo el mundo se preocupa por cuántos empleados y obreros hay en la administración pública. Nadie parece hacerse la única pregunta sensata que existe: ¿Para qué está allí?. ¿Qué se supone que deben hacer sus empleados y obreros?. ¡No!. Lo que hacemos los ciudadanos es concluir que son muchos los empleados de la administración pública. ¿Cómo sabemos si son muchos o pocos si no conocemos lo que se supone deben hacer?. ¿Qué funciones y obligaciones tienen los Ministerios?. Reto a cualquier venezolano a que me defina las misiones de los Ministerios de Agricultura y Cría y de Justicia, entre otros. Por no hablar de los Ministerios de Fronteras, Familia y Juventud, esos desmanes que entorpecen y repiten lo que hacen, o pretenden hacer, otros Ministerios. En Venezuela, cuando alguna institución no hace lo

que le toca hacer, creamos otra para que haga lo que dejó de hacer la que ya existe. Pero no eliminamos a la ya establecida y con el tiempo nos acostumbramos a vivir con las dos).

Segundo Mandamiento: Flexibilización del control de cambio (La oferta es desmontar el control de la cuenta corriente en el primer trimestre de 1996 y mantener control sobre la cuenta de capital, por lo que dure el programa de fortalecimiento del sistema fiinanciero, cuya definición **no** veremos clara en el siguiente punto).

Tercer Mandamiento: Fortalecimiento del sector financiero (Se sugiere aplicarle al sector el modelo de Argentina y México, el cual a juzgar por ciertos resultados no debe ser motivo para el optimismo desbordado. Si algo ha manejado mal este Gobierno ha sido -precisamente- la crisis financiera. La cual no se ha superado todavía, y no nos extrañemos si algunos bancos «auxiliados» o «estatificados» vuelvan a colapsar y requieran de inyecciones adicionales de «ayudas». Lo cual -por supuesto- irá directamente en contra del objetivo primario de la «Agenda Venezuela»: «reducir gradualmente el déficit fiiscal». Fogade es un desastre. Desde el punto de vista jurídico las ocupaciones de los bienes y activos de los «banqueros fugitivos» y otros no tan fugitivos, ha creado un caos legal, donde nadie está seguro quien es el dueño legítimo de los bienes ocupados. Nadie se atreve a comprarlos y me atrevo a apostar a que nadie se atreve a venderlos. A los vicios indudables presentes en nuestro sistema financiero le hemos agregado ahora el de la inseguridad jurídica de la propiedad de muchos de sus activos, amén de una gerencia «interventora» casi unánimemente poco profesional y viciada de las mismas malas costumbres que provocaron el colapso del sector. No es -pues- con modelitos exógenos y asesorías pre-programadas para otras situaciones, que se fortalecerá nuestro sistema financiero).

Cuarto Mandamiento: Reforma estructural del sistema de seguridad social . Se ofrece:

- *Constitución de los fondos de pensiones de entidades públicas y privadas* (¡Cualquier cosa!. ¿Se han dado cuenta Matos y Caldera de lo que están ofreciendo?. Nada más y nada menos que la reestructuración total del sistema de seguridad social del Estado incluyendo -por supuesto- la modificación completa del sistema de prestaciones sociales. ¿Saben nuestros distinguidos negociadores cuanto cuesta «fondear» para su arranque un programa de esta naturaleza?. Por supuesto que esta es una pregunta retórica. ¿Cómo lo van a saber quienes no saben ni cuanto debe el Estado por concepto de prestaciones sociales no pagadas a trabajadores ya inactivos y a los trabajadores activos?. ¿Cuánto se debe por intereses acumulados por esas prestaciones?. ¿Cuánto es el déficit real de los diferentes fondos de pensiones de las universidades del Estado?. ¿De las Fuerzas Armadas?. ¿Del Seguro Social Obligatorio?. ¡Por favor!. Camdessus pidió permiso para ir hacer pipí cuando oyó esta oferta. Sobre todo porque anticipó lo que venía de seguidas).

- *Programa de financiamiento multilateral para la reorganización del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)* (La oferta para cumplir con este *mandamiento* se eleva hasta lo sublime de algunos ridículos. ¿Reorganizar qué?. ¿Un servicio de salud depauperado, saqueado por su propio personal profesional y auxiliar?. Sin dolientes. Sin recursos. Sin moral. Sin solidaridad. Sin clemencia y sin amor. ¿Un fondo de pensiones permanentemente deficitario utilizado como caja chica, para financiar los desmanes de los Gobiernos de turno?. ¿Unos gremios que no pueden tildarse sino de irresponsables?. ¿Un sector empresarial cómplice por activismo corrupto o por indiferencia, los dos extremos representantivos de una presencia permanente en gestiones que no pueden tildarse sino de criminales. En materia de seguridad social en Venezuela hay que empezar de nuevo. Repensarlo todo. Las instituciones multilaterales que le inyecten recursos a ese antro de corrupción que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no harán sino desperdiciar dinero útil

que pudiera ser mejor utilizado en propósitos superiores).

- *Respaldo al saneamiento financiero del fondo de pensiones y jubilaciones del Seguro Social* (Hay que ser o muy cínico o muy ignorante para proponer esto como una solución y pretender seguir mirando de frente a los ancianos -supuestamente pensionados- que viven un calvario mensual para no recibir -muchas veces- la vergüenza nacional que constituye su pensión).

Quinto Mandamiento: Expansión de los Programas Sociales (Yo no puedo menos que indignarme, cuando leo una de las proposiciones relacionadas con este *mandamiento:* «Reducción de las condicionalidades de los organismos multilaterales para facilitar el flujo de recursos al conjunto de programas sociales en marcha». La irresponsabilidad y la hipocresía de esta solicitud presume que hay programas sociales **efectivos** «en marcha». Revisen nuestros negociadores solamente la cifra de la infancia abandonada. Su alto índice de criminalidad. Su desnutrición. El abandono escolar. El número de repitientes en todos los grados de la Escuela Básica. El trabajo -para ellos impropio- desempeñado por niños. La prostitución infantil de uno y de otro sexo. ¿Programas sociales efectivos en marcha?. ¡Creo que no!. Se presume también, que lo que no está en «marcha» es por las condicionalidades que nos imponen los organismos multilaterales. De nuestras desgracias sociales ya sabemos -pues- que los culpables son el F.M.I., el Banco Mundial y el B.I.D. Felizmente me he enterado que cuando se discutió este punto con el F.M.I., Camdessus no había regresado aún del baño).

Sexto Mandamiento: Dinamización del aparato productivo (De lo incluido en este *mandamiento* debemos concluir que el aparato productivo nuestro se corregirá a base de inyectarle dinero y más dinero. Financiamiento del Banco Mundial y del B.I.D., para nuestro sistema de créditos agrícolas . ¿Cuántos programas de créditos agrícolas necesitaremos antes de que nuestro agro sea productivo?. Estímulos fiscales. Impulso

a la Apertura Petrolera. Dinero y más dinero. Lo único que se nos olvidó fue responder a la pregunta: ¿»Cómo se crea **riqueza** en Venezuela»?. Dinero siempre tuvimos. Más del que nos pueden prestar ahora las organizaciones multilaterales. Pero somos incapaces de mirar a nuestro propio desastre. El vernáculo. Seguimos privatizando exclusivamente para enriquecer a los de afuera. No ponemos a nuestras riquezas, petróleo, oro, aluminio, hierro y acero al alcance de los venezolanos. Tenemos un mercado de capitales, medido como porcentaje del P.I.B (7,5%) más pequeño que Brasil (36,5%). México (36.1%). Argentina (12,9%). Colombia (24,0%). Perú (15,8%) y Chile con un asombroso 138,9%, mayor que los Estados Unidos (123,4%). Japón (69,8%) y Alemania (21,8%). Africa del Sur tiene 182,6%. Malasia 278,3%. Siganpur 242,3%. Hong Kong 201.3%. Taiwan 105,2%. Así se construye un país. Con estímulos a las inversiones. Con dinero también, es cierto. Pero además con el ingrediente indispensable de educar a su población en la diferencia entre dinero (lo casual y temporal) y riqueza (lo permanente). Si en vez de tener dinero en el banco, a los venezolanos se nos hubiera permitido tener inversiones en las empresas que explotan los recursos del país, estas empresas no estarían quebradas, porque tendrían muchos dolientes. Los venezolanos no estaríamos quebrados porque habríamos acumulado riquezas. Los bancos no habrían quebrado porque sus carteras no hubieran estado constituidas por inversiones de humo. El país sería otro. ¿Será posible que no hayamos aprendido nada con esta crisis y que sigamos buscando hoy, las fracasadas recetas de ayer?. No me contesten. Ya hemos demostrado que es posible).

Séptimo Mandamiento: Ampliación del régimen competitivo de precios. Se ofrece:

- *Apertura selectiva de la economía* (No se si esto significa que «selectivamente» abriremos a la competencia internacional algunos productos nacionales. ¿Proteccionismo selectivo? ¿Proteccionismo estratégico para poder desarrollar ventajas

competitivas donde tenemos ventajas comparativas?. El alumno Camdessus, pidió una aclaratoria. No se la dieron).

- *Fortalecer la integración comercial y económica en el marco del Pacto Andino, acuerdo del G-3, integración Venezolana/Brasileña y apertura hacia el MercoSur, Comunidad del Caribe e incentivos a la integración hemisférica* (Una buena intención dentro de este *mandamiento*. Creo que pudiera convertirse en realidad con poco esfuerzo, siempre y cuando no insistamos con los controles y las políticas proteccionistas a ultranza).

- *Política de reducción de condiciones monopólicas en el mercado nacional* (Si fuese bien estructurada y mejor administrada, no hay duda de que sería una acción valiosa, sobre todo si se comenzara por desmontar los monopolios del Estado).

- *Construcción y fortalecimiento de instituciones públicas para favorecer una competencia efectiva en el intercambio económico* (A Camdessus le dieron ganas de ir al baño de nuevo. ¿Desde cuándo las instituciones públicas en Venezuela sirven para establecer una «competencia efectiva»?. De nuevo el pensamiento verdadero se escapó por la grieta que abrió la hipocresía. El sector público tiene diferencias estructurales muy serias con el sector privado, como para ser -pelo a pelo- un buen competidor. Por supuesto, siempre hay excepciones. Pero se debe administrar por y para la norma y, no por y para la excepción. El Gobierno lo que tiene que hacer es establecer las condiciones para «favorecer una competencia efectiva», dentro del sector privado. El Gobierno no debe intentar estimular ni favorecer nada, volviendose protagonista de lo que pretende estimular y favorecer. Esta figura del Estado como protagonista del acto económico, ha sido nuestra desgracia. Es lástima que en el discurso ante el F.M.I., que pretendía sonar «bien», aunque no fuera «sincero», se nos escaparan algunos gazapos que pusieron al descubierto esa insinceridad).

Octavo Mandamiento: Capacitación para el empleo

(Los programas y estímulos sugeridos -de nuevo- para ser desarrollados se apoyan exclusivamente en el recurso económico. Se ignora que no puede tener vocación para el trabajo y mucho menos para ser «capacitado», quien vive en condiciones infrahumanas, se alimenta mal, no asiste al pre-escolar, no recibe educación básica y se «nutre», por decirlo de alguna manera, de los malos ejemplos de los adultos marginados de la sociedad. De los que ingresan a «esa escuela» como niños, se rescatarán muy pocos para ser capacitados para el trabajo. No es que el programa propuesto no sirva. Es que -por sí solo- no podrá atender a esa inmensa mayoría de jóvenes que lo necesitan más).

Noveno Mandamiento: Nueva política de tasa de interés. Se ofrece:

- *Deslastrar la fijación de las tasas de interés de los Títulos de Estabilización Monetaria (TEM)* (Eso lo inventó este Gobierno. Que lo «desinvente» de una vez).

- *Acción coordinada de política monetaria entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Hacienda* (No nos llamemos a engaño. Otra manera de escribir lo anterior sería: Subordinar la política monetaria del Banco Central a las políticas económicas del Ministerio de Hacienda. De nuevo se le «salió la clase» a los redactores de la Agenda Venezuela).

Décimo Mandamiento: Reforma de la administración pública y privatización. Se ofrece:

- *«Reducción del número de ministerios...»* (¿Porqué no de una vez?. Se podría casi de un plumazo eliminar -por lo menos- a ocho ministerios).

- *Aceleración del proceso de descentralización..* (Lo primero que tiene que hacer el Gobierno actual es, **creer** que **eso** es conveniente. Sugerir lo aquí sugerido es otra hipocresía de quienes -hasta ahora- han hecho todo lo contrario).

- *Relanzamiento del programa de privatización..* (Como se va a «relanzar» lo que nunca ha sido «lanzado» por este Gobierno. ¿Cómo se atreven a poner -como ejemplo de intención-

a la C.V.G., después de haberla descapitalizado de su haber más importante: Su recurso humano, gerencial y técnico?. A muchos de ellos -precisamente- por estimular y apoyar la privatización de esas empresas).

- *Convenio con el Banco Mundial para el proceso de privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica* (Lo primero que hay que hacer y no se ha hecho, y para ello no se requiere del Banco Mundial, es establecer reglas de juego claras, en cuanto a: Suministro de energía eléctrica seguro, confiable, y a precios de mercado a las empresas distribuidoras privatizadas. Fórmula para el establecimiento de tarifas realistas que garanticen un margen de ganancias adecuado a quienes presten el servicio de distribución de la energía eléctrica. Crear incentivos económicos para las distribuidoras más eficientes. Sin lo anterior -y algo más- ningún operador de servicio eléctrico serio va a venir a comprar empresas distribuidoras de energía eléctrica en Venezuela. Por lo menos **eso**, lo deberíamos saber como resultado de los fallidos intentos realizados para privatizar a «Planta Centro»).

P.D.: A su regreso al país de su viaje a New York, donde asistió a la celebración de los 50 años de la O.N.U., el Presidente Caldera, con su elocuencia acostumbrada, de nuevo nos dio la razón a todos los que dudamos del «entusiasmo» con el cual se comprometerá, con las medidas requeridas para iniciar el proceso de modernización de Venezuela, con el apoyo del F.M.I.

Algunos ejemplos de las recientes declaraciones del Presidente:

1) «No estamos discutiendo una Carta de Intención. Estamos conversando con el F.M.I.» (El Nacional y El Globo, 30/10/95).

Traducción: No estamos comprometidos ni apurados en llegar a un acuerdo con el F.M.I. Nosotros impondremos el ritmo y el contenido de la negociación.

2) «El control de cambio no ha fracasado. Lo que ha

sucedido es que hemos sido muy liberales con su aplicación» (El Nacional y El Globo, 30/10/95).

Traducción: No abandonaremos el control de cambio. Lo haremos más estricto.

3) «No se le debe pedir a los trabajadores que renuncien a sus conquistas» (El Universal y El Globo, 31/10/95).

Traducción: Olvídense de buscar -y mucho menos implantar- un sistema diferente al actual de las prestaciones sociales (El Universal y El Globo, 31/10/95).

02 de noviembre 1995

LA AGENDA VENEZUELA (II)

La «otra» Agenda (El Compromiso de los Conversos).

Con este trabajo concluyo mi análisis de la «Agenda Venezuela». Hemos repetido «verbatim» la enunciación de los *mandamientos,* tal como fueron redactados por el Gobierno Nacional y enviados al Fondo Monetario Internacional (F.M.I). Le hemos agregado nuestra propia visión de las acciones a tomar para cumplir con ellos y -en algunos casos- hemos «creado» nuevos mandamientos para reemplazar a los originales, cuando éstos eran repetitivos o de poco peso específico.

A continuación los *mandamientos* propuestos por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (F.M.I), con nuestras recomendaciones para la acción.

Primer Mandamiento: *«Reducción gradual del déficit fiscal».* Sugerimos cambiar el texto del mandamiento por uno que lea: **«Combatir la Inflación»** (El déficit fiscal no necesariamente es la causa única de la inflación y la eliminación de este flagelo constituye la primera prioridad nacional). Los actos de penitencia que recomendamos para anular la inflación son:

- *Estimular el ahorro interno.* Mediante estímulos tales como: Tasas de interés positivas. Políticas fiscales sensatas para promover el ahorro del sector público. Desarrollo de un verdadero y reglamentado mercado de capitales, donde nuestros ciudadanos ahorren, mediante la inversión y no sean -solamente- titulares de cuentas bancarias que producen dinero más no riqueza. - *Aumentar la participación en el P.I.B. del sector no petrolero.* Los estímulos son: política comercial de apertura. Apoyo a las exportaciones no tradicionales. Reestructuración del aparato productivo nacional, con énfasis en el desarrollo de aquellas industrias donde tengamos ventajas comparativas claras. Tasas de cambio que no representen sobrevaloración de nuestro

signo monetario. Ayuda a la creación de pequeñas y medianas empresas, en los sectores de industria, comercio y servicio. *Disminuir el gasto público corriente*. Mediante: Privatizaciones ordenadas y con participación importante del capital nacional y de los pequeños y medianos ahorristas del país. Descentralización con transferencia de recursos y responsabilidades a los gobernadores de los estados y a las municipalidades. Reducir la deuda interna del Estado, como prioridad sobre la reducción de la deuda externa (La deuda externa es de aproximadamente US$30 mil millones, y la deuda interna es de aproximadamente US$6 mil millones. Sin embargo, el costo de sus servicios es el mismo dada las altas tasas de interés vigentes en Venezuela). *Mejorar la Recaudación Fiscal.* Fortalecer aún más al Seniat. *Revisar críticamente el Presupuesto Nacional y las Leyes de Hacienda de la República*, a fin de flexibilizar la metodología presupuestaria. Para ello habrá que examinar:La unidad del tesoro. La inflexibilidad de algunos de sus rubros. El establecimiento de prioridades presupuestarias. El manejo de varios escenarios presupuestarios posibles con sus acciones identificadas para cada escenario. Las leyes programas. La administración y recaudación de algunos impuestos nacionales, por las gobernaciones de los estados. La obligatoriedad de preparar todos los presupuestos de nuestras entidades públicas, bajo el «sistema base cero» (Se establecen metas y objetivos y se asignan recursos como si se estuviera haciendo un ejercicio presupuestario por primera vez. Sin compromisos políticos. Sin herencia. Sin malas costumbres). Elimar totalmente los controles de cambio y de precios. Desarrollar una nueva política de **privatización**. Vender al sector privado nacional y extranjero una participación accionaria importante de todas las empresas públicas de Guayana. Constituir un fondo de inversiones nacional con un porcentaje accionario de las empresas públicas a privatizarse y emitir certificados de participación gratuitos a todos los venezolanos. Este fondo se administraría por expertos

internacionales privados, con la presencia del Estado y el sector privado nacional, como auditores de hecho. Este instrumento financiero invertiría en fondos de pensiones, programas rentables de educación y salud (que sí los hay), y en sectores previamente calificados por sus administradores. Colocación de otro porcentaje menor en la Bolsa de Valores de Venezuela de una serie especial de acciones de las empresas arriba mencionadas que se atomizarían para que su precio unitario fuese accesible a todos los venezolanos que trabajan y puedan ahorrar. Una parte de estas acciones se les vendería bajo condiciones especiales a los trabajadores de esas empresas. Estos también recibirían - como todo venezolano- certificados de participación gratuitos en el fondo especial a crearse, ya descrito. Crearles la obligación a algunos sectores a privatizar (Aluminio, por ejemplo) de suministrar materia prima en forma prioritaria y a precios de mercado a las empresas de manufactura que existen y/o se establezcan en el país y le den valor agregado al aluminio primario. Concederle algunos estímulos fiscales a estas nuevas empresas para las inversiones que se efectuarán en el sub-sector de la industrialización del aluminio. Convertir a la Apertura Petrolera en una oportunidad para incorporar como socios de las nuevas empresas a formarse al capital nacional, así como también para crear un fondo especial, como el ya descrito para las empresas de Guayana. Estudiar seriamente la posibilidad de constituir un fondo para programas especiales con los ingresos generados por la regalía petrolera, a fin de que estos dineros sean utilizados con propósitos netamente sociales. Educación y salud, entre otros. - *Devaluar la moneda ya, a Bs. 230/250 por dólar*. Eliminar esa grotesca decisión de usar al dólar Brady como marcador del dólar turístico y algunos bienes de consumo. Dejar el dólar a Bs. 170 hasta el 31 de diciembre de este año, solo para: a) La industria petrolera (para no causarle pérdidas este año a PDVSA que disminuyan la participación fiscal que el Gobierno recibe de esta empresa. b) Para comprar los dólares

que requiera el Gobierno para pagar la deuda externa. A partir del 1ero. de enero de 1996, eliminar estas excepciones y poner a todas las transacciones en dólares del país a la tasa de cambio acordada de Bs. 230/250 por dólar. Ajustar esta tasa cuando se necesario sin esperar sobrevaluaciones, cuyas correcciones resulten en graves y peligrosos «shocks» para la economía.

Segundo Mandamiento: *«Flexibilización del control de cambio».* La eliminación total de este control está prevista en el primer mandamiento. Se sustituirá por otro mandamiento: **«No pasarle factura política y económica a quienes adversan al Gobierno»**. Se requiere: Respetar la meritocracia en las organizaciones del Estado y no penalizar con nombramientos políticos la buena marcha de estas instituciones. No perjudicar, ni a personas, ni instituciones por su pensamiento político. No negarles irracionablemente oportunidades de mejorar su patrimonio. No presionar a otras instituciones para que prescindan de sus servicios. No retardar autorizaciones oficiales por revanchismo político. No discriminar a los medios de comunicación en el otorgamiento de publicidad oficial. No utilizar la palabra presidencial para fustigar públicamente a quienes adversan sus políticas económicas y sociales. No utilizar contra estos adversarios calificativos que atentan contra su honestidad y su patriotismo.

Tercer Mandamiento: *«Fortalecimiento del sector financiero».* Se requiere: Asistencia técnica del exterior, tanto del sector privado como de parte de las organizaciones multilaterales. Crear una eficiente y verdaderamente profesional superintendencia de instituciones financieras. Bancos. Seguros. Fondos de Pensiones. Bolsa de Valores, etc. Emplear y entrenar con estricta selectividad al personal que gerenciará estas organizaciones. Pagar sueldos competitivos con el sector del mercado privado que mejor remunere. Establecer por Ley, contribuciones al funcionamiento de estas superintendencias, por parte del sector privado y público. Modernizar sus sistemas de

administración, control e información. Estimular y decidir **ya** la privatización de los bancos intervenidos y estatificados. Proteger legalmente el derecho de propiedad del Estado sobre estos bienes. Auditar con empresas nacionales y extranjeras la verdadera situación financiera de estas instituciones. Vender de inmediato -como estén y donde estén- **todos** los activos recibidos por Fogade, en pago por su asistencia financiera al sector. Restituirle al Banco Central su autonomía operativa y su derecho a establecer políticas monetarias, incluyendo la administración de las tasas de interés dentro de una banda «prefijada».

Cuarto Mandamiento: *«Reforma estructural del sistema de seguridad social»*. Se requiere: Reestructurar los programas sociales para evitar la corrupción, la intermediación innecesaria, la hipocresía en su aplicación y las omisiones graves que presentan casi todos éllos, en cuanto a que sus beneficios no cubren a la población más necesitada. Eliminar el sistema actual de prestaciones sociales y diseñar de inmediato mecanismos sustitutivos que incluyan un sistema de pensiones y jubilaciones. «Fondearlo» -en parte- con acciones de las empresas del Estado que se vayan a privatizar (primer mandamiento). Con un porcentaje importante de participación ciudadana colectiva en las empresas que cree la Apertura Petrolera, y con parte de las prestaciones sociales acumuladas en fiideicomisos del sector privado, donde éstos existan. Asignarle a cada trabajador -uninominalmente- su cuota en el nuevo fondo, de las contribuciones hechas a la fecha al Seguro Social Obligatorio, los intereses a tasas de mercado que deberían haber devengado y lo que el Estado pueda contribuir adicionalmente en papeles financieros de la República a corto, mediano y largo plazo. Darle la opción a los trabajadores, con más de 10 años de prestación de servicio, de permanecer en el viejo sistema o inscribirse en el nuevo. Para todos los trabajadores con menos de 10 años de prestación de servicio, y los que ingresen por primera vez al mercado del trabajo, el nuevo sistema será obligatorio. **Todos**

los trabajadores, los patronos y el Estado, deberán contribuir mensualmente con un porcentaje del salario devengado por el trabajador, para mantener al fondo (El período de 10 años de servicio puede -por supuesto- modificarse). Intervenir y declarar en estado de emergencia al sistema nacional de salud. Entrarle a sangre y fuego a la corrupción del Seguro Social Obligatorio y enfrentar a los gremios sin temores. Acelerar los mecanismos tendientes a estimular de inmediato la participación de las comunidades organizadas en la administración de los centros donde se dispensan servicios médicos y asistenciales. Transferir a los estados y municipios los servicios de salud pública. Estimular la creación de servicios verdaderos de medicina pre-pagada. Crear la medicina familiar. Estimular la medicina preventiva. Crear fondos de desempleo.

Quinto Mandamiento: *«Expansión de los Programas Sociales».* Este mandamiento puede convertirse en uno solo combinándolo con el cuarto mandamiento. Por lo tanto se crea un nuevo *mandamiento:* **«Decirle siempre la verdad a la ciudadanía»**. Se requiere: Que el Presidente se dirija al país y se comprometa públicamente con la nueva dirección económica **decidida** por Venezuela y propuesta al F.M.I., como algo **nuestro** de lo que estamos **convencidos** y dispuestos a **defender**. Escoger y nombrar un nuevo Gabinete Ejecutivo, cuyos miembros estén todos de acuerdo con el **sentido** de dirección de la nueva política (el qué), así tengan algunas diferencias en la forma de implantar los mecanismos para el cambio (el cómo). Que el Gobierno tenga el mismo discurso dentro y fuera del país. Que haya coherencia en las declaraciones de los ministros. Que cada representante del Ejecutivo se responsabilice por explicarle al país, los cambios de políticas por las cuales es responsable su ministerio o su institución.

Sexto Mandamiento: *«Dinamización del Aparato Productivo».* Se requiere: Estimular y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, tanto industriales como de comercio y

servicios. El Estado puede ser el gran dinamizador para la creación de pequeñas empresas que le presten muchos de los servicios que hoy le presta una burocracia improductiva. Reestructurar el perfil productivo de Venezuela. Apoyar a los sectores con ventajas comparativas. Acabar con el mito de que se puede construir eficiencia a punta de dinero solamente. Revisar en forma constructiva las políticas agropecuarias. Enterrar de una vez a la especie de que nosotros tenemos tierras inmensamente fértiles y productivas para toda siembra. Estimular la creación de industrias con alto componente energético. Cumplir con todas las penitencias impuestas en el primer mandamiento. Apoyar la integración económica y cultural con Colombia. Facilitar el libre comercio entre ambos países.

Desarrollar comunidades productivas, habitables y protegidas por la ley y la fuerza pública en nuestras zonas fronterizas. Apoyar todos los esfuerzos integracionistas, desarrollados a la fecha. Analizar urgentemente la conveniencia de que Venezuela ingrese a MercoSur y proceder de inmediato a tomar las medidas necesarias para nuestra participación, si ello se considerara conveniente. Utilizar al petróleo como instrumento positivo de integración económica en el hemisferio. Se requiere además, estimular la competitividad y la competencia interna del sector privado, y combatir la especulación y los monopolios, tanto privados como del Estado, mediante una moderna Ley Antimonopolica.

Séptimo Mandamiento: *«Ampliación del régimen competitivo de precios»*. Este mandamiento está incluído en el sexto mandamiento *«Dinamización del aparato productivo»*. Debe ser sustituido por otro que lea: **«Asumir las responsabilidades que se derivan del desempeño de los cargos públicos».** Para ello se requiere: Que el Presidente asuma la responsabilidad pública ante el país por la crisis, sus soluciones y los resultados -buenos o malos- de su gestión. Que los ministros del Gabinete Ejecutivo se responsabilicen por la política de sus

despachos y le informen a la ciudadanía: a) De las misiones y objetivos de sus Ministerios y b) De sus planes y de los cambios que les tocará implantar. Que los presidentes de las empresas del Estado informen públicamente de la **verdadera** situación financiera y operativa de sus empresas y se responsabilicen por los planes para lograr el éxito futuro y la recuperación de las mismas, su privatización o su cierre. Lo que sea pertinente. Todo dentro de un cronograma para la acción. Que la gestión de todos los funcionarios de la administración pública sea medida contra un plan anual que incluya las metas que se persiguen y los recursos disponibles para cumplir con éllas. No debe haber ninguna oficina pública -por pequeña que sea- que no tenga definida su misión (porqué y para qué existe).

Octavo Mandamiento: *«Capacitación para el Empleo»*. Este mandamiento debe ser sustituido por otro que lea: **«Reestructuración de todo el sector educativo»**. El esfuerzo incluye: Aumentar el gasto educativo como porcentaje del P.I.B., de los bajos niveles actuales. Eliminar la gratuidad de la educación superior. Crear sistemas de becas para alumnos aprovechados. Ampliar considerablemente los recursos asignados a la educación pre-escolar y básica. Preparar y entrenar bien a nuestros docentes. Remunerarlos adecuadamente. Convencer a los gremios del magisterio que luchen más por el mejoramiento de la educación y menos por sus beneficios personales (los cuales -en todo caso- se deben mejorar). Establecer programas nacionales de re-entrenamiento de adultos para capacitarlos para las nuevas demandas del moderno mercado del trabajo. Crear escuelas técnicas e industriales para la capacitación para el empleo de los jóvenes que ingresen por primera vez al mercado del trabajo.

Noveno Mandamiento: *«Nuevas Políticas de tasas de interés»*. Este mandamiento puede eliminarse y sustituirse por otro que lea: **«Reformar las estructuras políticas del Estado»**. Se requiere: Promulgar la Ley de los partidos políticos para que -entre otros aspectos- se legisle la democratización de la selección del liderazgo de los partidos políticos y el control de sus finanzas internas.

Modificar la Ley del Sufragio. Reformar la Ley del Trabajo para que se aplique al país que queremos ser y no al país que fuimos. Revisar los conceptos de uninominalidad y nominalidad para las elecciones nacionales y regionales. Reformar al Poder Judicial. Crear la figura del Primer Ministro. Apoyar la descentralización política. Reducir el número de Ministerios. Se podría casi de un plumazo eliminar a los Ministerios de Fronteras (eso le pertenece a Relaciones Exteriores). Familia (eso le corresponde al Ministerio, hoy del Trabajo, que debería ser de Seguridad Social). Juventud (Idem). Planificación (podría ser una oficina de apoyo al Presidente de la República y a los otros ministerios y debería fundirse con el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, para que el Presidente tuviese -de verdad- apoyo profesional, técnico y administrativo). Justicia (lo que hoy hace le corresponde al Ministerio de Relaciones Interiores. La administración de la justicia debería estar en el Poder Judicial). Información (esta es otra oficina que podría adscribirse al Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, al cual -por cierto- se le quitarían las empresas del Estado adscritas, para colocar -las que queden- bajo los ministerios que le sean más afines). Descentralización (eso le toca -realmente- a todo el Gabinete, al Presidente y a todos los Poderes del Estado). Educación Superior y Tecnología (eso le toca al Ministerio de Educación). Ministros itinerantes (si cada Ministerio se encargara de hacer lo que le toca hacer, no se necesitarían ministros viajeros sin cartera y -la mayoría de las veces- sin oficio conocido).

Décimo Mandamiento: *«Reforma de la administración pública y privatización».* Este mandamiento está cubierto por el primero y el noveno mandamiento reestructurados y debe sustituirse por otro que lea: **«Combatir a la corrupción en todos los niveles de la sociedad».** Se requiere: Labor educativa a nivel de los hogares. Que las escuelas enseñen los derechos y deberes ciudadanos a respetar el derecho ajeno y las virtudes del trabajo y el ahorro. Se debe destacar -también- lo pernicioso de la filosofía del «vivo» (El que pretende recibir beneficios sin la contrapartida de su esfuerzo). Recalcar la diferencia entre lo que pertenece al Estado y lo que es

del sector privado. Castigar -sin excepción- a quien cometa peculado o cobrase adicionalmente por cumplir con un deber ya remunerado. Subordinar el poder militar totalmente al poder civil (El tratamiento especial que se le da -a veces- al sector militar, dejando de lado otras prioridades nacionales es -también- una forma de corromper al poder civil). Revisar todas las leyes de la República que -de una u otra forma- incluyan disposiciones para el castigo de la corrupción para establecer una normativa moderna y derogar definitivamente la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Nacional. Esa excusa ineficiente que lo que ha promovido es un país de gerentes públicos que operan bajo la premisa de que el que no toma decisiones no se equivoca y -por lo tanto- no será castigado nunca.

Los mandamientos reestructurados son -ahora- los siguientes:

Primer Mandamiento: "Combatir la Inflación"

Segundo Mandamiento: «No pasarle factura política económica a quienes adversan al Gobierno».

Tercer Mandamiento: «Fortalecer al sector fiinanciero».

Cuarto Mandamiento: «Reforma estructural del sistema de seguridad social».

Quinto Mandamiento: «Decirle la verdad a la ciudadanía».

Sexto Mandamiento: «Dinamización del aparato productivo».

Séptimo Mandamiento: «Asumir las responsabilidades que se derivan del desempeño de los cargos públicos»

Octavo Mandamiento: «Reestructuración de todo el sector educativo».

Noveno Mandamiento: «Reformar las estructuras políticas del Estado».

Décimo Mandamiento: «Combatir a la corrupción en todos los niveles de la sociedad».

Ojalá que el Gobierno «acuse» recibo.

09 de noviembre de 1995

EL COMPROMISO ANTINFLACIONARIO DEL CONVENIO AL CONFLICTO

La Pesadilla (Sudar sin lógica)

Werner Corrales se despertó la víspera del día 28 de mayo a las tres de la madrugada, sobresaltado y cubierto de un sudor frío. Pensó que era un resfriado, hasta que se le disiparon las telarañas del sueño y pudo enfocar, con claridad la causa de su desasosiego. Mañana es la firma recordó, mientras sentía renovarse con nuevos bríos la sudación. ¿Qué va a decir Caldera en el acto formal?. Por lo menos parece que firmará... algo es algo. Pero, ¿y si insiste en no responsabilizarse por lo allí firmado?. ¿Si insiste en ser testigo y no parte?. ¿Si al hablar pone todo el peso del compromiso para el cumplimiento del Pacto en los «otros firmantes»...? Es más, ojalá nadie lea con demasiada atención la Declaración de Intención a firmarse. Allí se establece claramente que Caldera ha «llamado a la colectividad venezolana a poner en práctica un Compromiso Antinflacionario...» La colectividad ha respondido y el Gobierno Nacional ha designado a cuatro ministros para que firmen el documento y afirmen su «intención de suscribir y cumplir el Compromiso Antinflacionario en nombre del Ejecutivo...» Como el Ejecutivo es parte del Compromiso, parece lógico que quien hubiera firmado en su nombre fuese su más alta autoridad: el Presidente de la República, cuya firma encabeza la lista de lo que pudiéramos denominar como «abajo firmantes» pero convenientemente distanciada, no sólo conceptualmente sino físicamente de las de sus ministros, cuyas firmas, «por el Ejecutivo» aparecen en el último lugar de los firmantes. O sea, continuó pensando Werner, que el Presidente, convoca, asiste y firma. Pero su firma colocada donde está y, separada como está, de la de los demás miembros del Poder Ejecutivo, no representa otra cosa que presencia en el acto final de la firma por los sectores

convocados y ser testigo del compromiso contraído por los allí presentes, pero sin ser parte activa de **ése** compromiso. Por los momentos, el Presidente no se declara co-responsable de lo que hagan o no hagan sus ministros, quienes aparecen en el documento en representación del Poder Ejecutivo, tal como aparecen otras firmas de otros sectores pero con la diferencia que en los otros sectores, si están comprometidos con sus firmas, en el lugar que les corresponde, las máximas autoridades de cada sector. Debo confesar, aunque sea a mi mismo, que el Presidente tiene extrañas maneras de apoyar a sus ministros. Espero confiado -agregó mentalmente Werner- que con la firma del Presidente concluya la discusión pública sobre si es parte o no del compromiso. Si es solamente testigo o si no es ni lo uno ni lo otro. La involuntaria referencia le hizo recordar al huésped de La Ahumada, responsable aparente de las acciones de algunos de sus ministros, tomadas, también aparentemente, con su conocimiento o por sus instrucciones. Después concluyó, algo aliviado que, a la hora de establecer responsabilidades por los actos de Gobierno, no importa donde estén las firmas, ni siquiera hace falta la firma autorizando el acto o estableciendo el compromiso. Al final, el Jefe del Estado responde... Visto así, le regresó la desconfianza en forma de mayor sudor.. ¿si de todas manera es coresponsable, porqué no firma abiertamente como parte del compromiso?. Pensó un rato más sobre el tema y, cuando le llegó la respuesta, el sudor aumentó de nuevo.

Los Lineamientos fundamentales del Compromiso Antinflacionario (Resumen de Generalidades)

Horas más tarde, del mismo día de sus sudorosas elucubraciones, Werner Corrales, revisaba el texto correspondiente al compromiso que contraería el Gobierno Nacional:

Eficaz manejo de políticas públicas. Garantías de lograr equilibrios macro-económicos. Reducir dependencia petrolera.

Aumentar impuestos internos. Reorientar el gasto hacia la inversión social e infraestructura para mayor calidad de los servicios. Pensó, sin quererlo, en Hidrocapital a la que no se le ha asignado presupuesto para 1995, y desde 1994, aun con presupuesto, no se le enviaron recursos financieros. Pensó, también, en Cadafe y en Edelca, sin caja la primera y con elevado riesgo de descapitalización la segunda. En la abandonada Autopista de Oriente. En las condiciones peligrosas de la Autopista Caracas-La Guaira. En el Ministerio de Educación y en la salud pública. En la CANTV, donde el Gobierno con el 49% de las acciones, en lugar de proteger su inversión, parece empeñado en destruir la imagen de su socios. Pensó en eso y mucho más... y decidió seguir leyendo. Lo que seguía a continuación no le levantó el ánimo. El Ejecutivo busca un régimen de normalidad, donde no sea necesaria la contínua suspensión de las garantías constitucionales. Sujeto esto último, por supuesto, a que el Poder Legislativo le dote de los instrumentos legales necesarios. Corrales, que es un hombre honesto, hizo inventario mental de las acciones positivas del Gobierno, en virtud de la suspensión de las garantías y, la página en blanco que se le apareció, lo obligó a seguir leyendo. Lo que seguía era un potpurrí de varios programas de Gobierno: Reducir el déficit fiiscal. Privatizar a empresas públicas. Profundizar las políticas del IX Plan. Optimizar la coordinación con el Banco Central (después de quitarle la autonomía en política monetaria, esto suena casi risible). Reducir la deuda de Fogade con el mismo Banco Central. Revisar a Fogade y a la Ley de Bancos. Privatizar los bancos intervenidos. Flexibilizar al régimen cambiario (ahora con el ministro de Hacienda como único vocero de la política cambiaria, tendremos una sola voz. Falta por ver, si eso conduce a que tengamos una sola política). Agilizar cambios legales y administrativos, para modernizar los sistemas regulatorios de los servicios públicos (eso en español, me suena a «permitir» aumentos en las tarifas de estos servicios). Medidas de estímulo

a la producción agropecuaria (¿más subsidios?. Si es así, que por lo menos se le den a aquellos productos donde realmente tenemos ventajas comparativas y competitivas). Aplicar la Ley de Protección al Consumidor (lo cual no significa pasear por las calles de los pueblos a «portugueses amarrados»). Programar el pago de la deuda que el Estado tiene con sus trabajadores, dentro de una planificación fiscal compatible con la reducción del déficit.. (¿Cómo?). Agilizar el proceso de reestructuración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Dios nos agarre confesados. Ahora resulta que un futuro desarrollo de un eficiente sistema integral de seguridad social, descansa en la transformación y reestructuración de ese moustruo corrupto e inmanejable que es el S.S.O. Y, ¿qué pasó con los fondos de pensiones nuevos?. Y, ¿qué pasó con un sistema de salud independiente, cuyos recursos financieros no estuvieran «contaminadas» por «otros» fondos del S.S.O. (Como ciudadano, este objetivo hubiese sido suficiente para convencerme de no firmar). Por último, al abordar el tema relacionado con las prestaciones sociales, se habla de «perfeccionarlo». No se puede perfeccionar lo que no sirve. Y ese régimen es obsoleto y perjudicial a los intereses del sector productivo (trabajadores y empresarios). Hay que sustituirlo, protegiendo, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Para poder cambiar el sistema actual hay que ofrecerle algo al sector laboral que sea **comprensiblemente** superior, a largo plazo, de lo que existe hoy.

Leído todo el compromiso, el ministro no sudó, como lo había hecho horas antes. Pero el dolor de cabeza le recordaba, a cada instante, la conveniencia de estar en otra parte.

El Banco Central. Tony Casas González, tiene la virtud de parecer siempre tranquilo y sin preocupaciones. Es la cara de placidez mejor administrada de Venezuela. Con élla y con su talento, ha sido ministro, director de PDVSA y presidente del Banco Central de Venezuela. Con élla, y tras de élla, esconde sus verdaderas emociones, que no deben ser todas «plácidas»,

dado los cortes que, a la autonomía del Banco Central, le ha producido la legislación reciente. Ya el Banco Central no es «responsable» por, sino que «contribuye» a la política monetaria. Sus obligaciones dentro del pacto incluyen la de definir un programa monetario que «se coordine y complemente con el programa fiscal del Ejecutivo». Es decir, se acabaron los pesos y contrapesos («Checks and Balances»). Si el programa fiscal del ejecutivo no sirve, pues a ayudarlo se ha dicho. Lo demás produce casi «pena ajena», al destacar la subordinación implícita del B.C.V., a los deseos del Ejecutivo. Tony Casas va a firmar el pacto, porque genuinamente cree que haciéndolo va a ayudar al país. Yo no estoy tan seguro. Tanta subordinación empalaga. Las instituciones fuertes que nos quedan, y el Banco Central ha sido una de ellas, no pueden hacerse el «hara-kiri» simplemente para ponerse a la moda de los acuerdos edulcorantes. De nuevo debo terminar con una nota personal. Yo, presidente del Banco Central de Venezuela, no hubiera firmado.

El Sector Empresarial. Lo único a destacar después de un rosario de generalidades son dos aspectos:

1) Se cooperará con la reestruturación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (lo cual, como ya se ha dicho, es perder dinero, tiempo y prestigio. Hay que cambiar el sistema de seguridad social en Venezuela y, no intentar resucitar a un muerto, que ni cuando estuvo vivo funcionó bien).

2) Los productores agrícolas, a través de Fedeagro se comprometen a mantener, durante 1995, el índice de crecimiento de precios «al menos en un 20% promedio por debajo del índice general de la inflación y hacen un llamado para que el incremento de precios de insumos y productos finales se dé en rango compatible con esta meta». Lo transcribo verbatim porque realmente no entiendo el compromiso. Si los precios pueden estar 20% por debajo de la inflación general y aún producir ganancias, entonces, algo extraño sucedía con los precios anteriores. Si, por otra parte, ésta acción está condicionada a

que a los productores agrícolas no se le aumenten los insumos, más allá de la reducción de ése mismo 20% sobre la inflación general, entonces, la inflación **para el sector** no será la misma que la **inflación general** y, así cualquiera.

La Banca. Desarrollar las funciones de intermediación financiera (es decir, su verdadera función). Reestructurar las deudas del sector agrícola y de la pequeña y mediana industria de acuerdo con los decretos emitidos (es decir, cumplir con la Ley). No elevar las tarifas por servicios prestados (ya lo hicieron). Establecer montos mínimos razonables para abrir una cuenta corriente y/o de ahorros (¿Qué es razonable?. La «razonabilidad» bancaria fluctúa hoy entre Bs. 200 mil y Bs. 1 millón). Sigue alguna que otra «pajita»:

Los Trabajadores. Plantearán aumentos de salarios dentro de parámetros compatibles con los límites de la inflación que se establezcan en el compromiso (¿Qué quiere decir compatibles?. ¿Indexación con las metas de la inflación?. ¿Algunos puntos por debajo?. ¿Cuántos?). Mucho mejor es el compromiso contraído para el desarrollo de un sistema de seguridad social y una discusión sobre prestaciones sociales. Dado que es un pacto entre varias instituciones, hubiera sido mucho mejor que el párrafo relacionado con estos temas, hubiese sido redactado igual para todos los sectores. En el caso del compromiso de los trabajadores, éste no está condicionado ni a la reestructuración del S.S.O. ni al mantenimiento de sus derechos adquiridos, los cuales no están cuantificados en ninguna parte del documento. Sin embargo, en otro numeral se menciona de nuevo el S.S.O. y su necesaria reeestructuración. Además, el sector se compromete a facilitar y cooperar en privatizaciones previamente acordadas (¿entre quienes y por quienes?), y en procesos que lleven a un acuerdo de productividad (bien). Al final, después de compromisos intrascendentes (la tónica del documento) se inserta un numeral (6.9) que lee así: «Contribuir para que el debate, la discusión y la crítica en lo político, social o económico sea cada vez más

constructivo y respetuoso» (como se habla de debate, discusión y crítica, pienso que el llamado es tanto para la oposición como para el Gobierno. Dado que la oposición ha sido particularmente parca en sus críticas, ¿será esto un llamado a que las respuestas oficiales sean más constructivas y más respetuosas?. En todo caso, bien por los trabajadores).

Las Comunidades. Lo primero que sorprende es que no suscriban el pacto, organizaciones como Queremos Elegir y su Escuela de Vecinos, Facur (Federación de Asociaciones de Vecinos) y Pro-Calidad de Vida, entre otras. Quizás no las invitaron. Quizás no quisieron suscribir. Quizás ellos ya lo explicaron y no me enteré. En todo caso, los que sí suscribieron se comprometieron a promover procesos educativos y comunicacionales para diseminar el pacto y estimular proyectos comunitarios dirigidos a reducir la pobreza. Buscar mecanismos para la distribución de bienes de consumo masivo y medicinas a sectores de bajo recursos. Profundizar su participación en el diseño de políticas sociales y cooperar en el desarrollo de un nuevo marco jurídico moderno, acorde con «las nuevas metas que plantea la sociedad en este campo» (lo último es importante por cuanto las organizaciones de la sociedad civil emergente no han encontrado aún los mecanismos apropiados para gozar de una verdadera expresión política. No tanto para llevar a sus representantes a los órganos Ejecutivos y Legislativos del Gobierno, lo cual sería importante, sino para poder ser oídos con respeto por los órganos del Poder Público).

Los Ausentes (¿Faltan algunos?)

Parece que, a pesar de la proliferación de sectores y de la abundancia institucional intrasectorial, pudieran haberse quedado fuera del pacto algunos sectores o instituciones de la vida nacional. Entre ellos:

Los partidos políticos. Independientemente del criterio utilizado para su exclusión y de que ésta haya sido o no voluntaria,

no hay duda de que en Venezuela no hay pacto, de la naturaleza del aquí mencionado, que pueda implementarse, sin el visto bueno de los partidos políticos, o por lo menos de una representación mayoritaria de ellos. Con firma o sin ella, los partidos, buenos o malos, populares o execrados, siguen siendo en Venezuela la expresión organizada del sentimiento político nacional. A ellos, gústenos o no, se le debe históricamente: la **consolidación de la democracia**, a pesar de su triste papel ante los dos intentos golpistas recientes (algunos de ellos hasta se sumaron a cierto entusiasmo anti-democrático, representado por una breve y construida popularidad de algunos de los líderes sediciosos). **El desarrollo de una cultura política de masas**. Cuya manifestación más reciente es la abstención electoral ante lo que considera una ausencia de opciones políticas modernas. **El desarrollo de una cultura popular**. Cuyas manifestaciones visibles son la proliferación de ateneos, grupos teatrales y musicales en el país y, la presencia contínua de nuevas firmas en nuestros medios de comunicación escritos. **La formación deportiva**. Que alguna vez llenó el territorio nacional de terrenos y facilidades deportivas y, fomentó el deporte escolar. Todo lo cual se ha venido a menos en los últimos años. **La libertad de expresión**. Que con o sin presiones de los gobiernos, expresadas éstas de diferentes maneras, ha podido desarrollar una cultura nacional, donde cierta mayoría dice lo que piensa sin sufrir perjuicios graves, aunque a veces reciba amenazas veladas, intentos de chantaje moral y de descalificación pública.

En lo negativo, los partidos políticos han creado un Gobierno a su imagen y semejanza en su empeño de tener jefes y no estadistas. Una patente de corso para administrar las finanzas como si fueran propias y no de sus miembros y una selección del liderazgo que frecuentemente viola los principios más elementales de toda democracia. Así es también el país en el ejercicio de su liderazgo. Por **eso** para modificar la estructura del Estado hay que modificar primero la estructura interna de

nuestros partidos políticos. Mientras tanto, ellos (los partidos) deben estar presentes en todo pacto que pretenda modificar o reglamentar algún aspecto importante de la vida nacional (sobre todo cuando ahora, sin haberse secado la tinta de éste, se anuncian nuevos pactos).

El Sector Público. Pudiera argumentarse que los sindicatos y el Gobierno representan, dentro del pacto, a este sector. No lo creo, si fuera así no sería uno de los sectores más abandonado de la vida pública nacional. Ha sido descuidado por todos los gobiernos y se ha permitido que se deteriore su imagen hasta, a veces, llegar al absurdo de culparlo de todos los males del país, sin entender que el sector no es «causa» sino «consecuencia» de un sistema de Gobierno diseñado para atender a las cúpulas y no para servirle a los ciudadanos. En esa confusión de su verdadero rol, el sector público ha tenido que hacer malabarismos de adaptación para sobrevivir y, a duras penas, prestar el servicio que le reclaman los ciudadanos, sin contar ni con la filosofía gubernamental apropiada ni con los instrumentos legales, gremiales y corporativos para poder administrar con eficiencia. Si algo se necesita en Venezuela para poder cumplir con cualquier pacto, es el concurso de un sector público profesional, apolítico y bien remunerado. Por ello, a ese sector hay que buscarle adecuada representación dentro de su seno y no dejársela ni a gobiernos ni a gremios ni a sindicatos que nunca han visualizado al sector como lo que verdaderamente debería ser: Un conjunto coherente y eficiente de servidores públicos que están allí para ayudar, en forma profesional, a los diferentes gobiernos a implantar sus respectivas políticas sectoriales. El sector público, como cuerpo organizado de la administración central (a la cual nos referimos en estos comentarios), debería tener las normas, procedimientos y seguridad de empleo que sustentan y motivan a los trabajadores de las empresas privadas y a algunas instituciones de la administración descentralizada. Para lograr esto, el sector no puede ser atomizado en su representación

dentro de la celebración de cualquier pacto sectorial de interés nacional.

La Iglesia. Le he criticado a la Iglesia sus elevados mensajes espirituales, no por su fondo, pero sí por la poca divulgación popular que han tenido. Nuestra jerarquía eclesiástica pasa por un momento estelar, pero sus enseñanzas y conclusiones son para una pequeña élite que las recibe complacida pero que ni las practica del todo ni las trasmite «hacia abajo». Peor aun, hasta las élites se confunden a veces con los mensajes de la jerarquía y se preguntan: ¿Quién representa y habla en nombre de la Iglesia en Venezuela?. ¿El Cardenal Lebrun?. ¿El nuevo Arzobispo de Caracas?. ¿Monseñor Moronta?. ¿El Padre Arturo Sosa?. Sólo por nombrar a algunos prelados que no siempre coinciden en el fondo de su mensaje.

No estoy seguro si la Iglesia debería ser parte de los pactos que se firmen en Venezuela entre las instituciones de poder. De lo que si estoy seguro es que formal o informalmente la Iglesia debería tomar posición ante el contenido de los pactos, su sentido de dirección y su cualidad de justicia social. Y la Iglesia debería tomar una posición pública que le llegue a las masas para que la **oiga** y la **vea** una población ayuna de valores espirituales que la está esperando.

El Sector Militar. Lamentablemente no puede ni debe ser invitado como sector, mientras no esté establecida «operativa» y «mentalmente» su subordinación al poder civil. Dada las asociaciones que aun existen en la percepción de muchos, entre el sector militar y el golpe de Estado, lamentablemente resucitadas a raíz de las dos intentonas golpistas recientes, el sector militar no sería visto dentro del pacto como una institución más. Sería **la institución** a la cual todos mirarían como la única con la fuerza necesaria para imponer sus ideas. De allí a considerarla como el gran arbitro nacional no hay más que un paso. Por **eso**, el sector militar tendrá que ser el gran ausente de estos pactos.

Conclusiones (La Condición Indispensable)

Para que acuerdos multisectoriales, como el que se acaba de firmar, puedan ser implantados, tienen que ser claros, concisos y establecer responsabilidades y compromisos cuantificables.

De todo lo anterior, en mayor o menor grado adolece el pacto antinflacionario. Es lamentable escuchar, después de tanto esfuerzo colectivo, por parte de algunos de los que suscriben, su poca fe en el pacto. Peor aun, su molestia por haber tenido que firmar un documento con el cual no estaban de acuerdo. Bien por su contenido. Bien porque sus instituciones no podían comprometer a sus miembros. Bien porque en el fondo sintieron que no hubo negociación real, y que se les **impuso** la obligación bajo la presión y la velada amenaza de exponerlos al escarnio público de no haber firmado.

Por regla general, los documentos así suscritos duran muy poco y, en el mejor de los casos, se sepultan bajo un piadoso olvido. En el peor de los casos sirven de detonantes para un conflicto político y social entre los sectores firmantes. Los cuales, habiéndose comprometido con lo que sabían no podrían cumplir, querrán, de todos modos, salvar su responsabilidad ante el fracaso.

Le deseo suerte al pacto. Pero puedo decir, casi tajantemente que le veo poquísimas posibilidades de que sea exitoso. Dada la larga discusión que precedió a su firma y a las expectativas que ha provocado en algunos sectores de la población, tampoco veo como muy probable que pase al olvido sin alguna «guerrita» previa. Por lo tanto, lo más probable es que cause algunos conflictos inter e intra-institucionales.

No sería la primera vez que un intento de consenso se convierta en campo fértil para el conflicto.

Estamos a punto de convencernos que la ciega obediencia y la ausencia de verdaderos debates no conducen a soluciones mágicas tomadas por un solo sector. Si el pluralismo ideológico y de soluciones pragmáticas es la esencia de la democracia, a la

nuestra le ha faltado hace tiempo un buen debate que cuestione las ya rígidas bases, sobre las cuales descansan los principios ya obsoletos del Petro-Estado.

Si el resultado final del pacto fuese una buena discusión, aun con enfrentamientos, para redefinir «quien es quien» y «quien hace que» en Venezuela... celebro el pacto. Pero no puedo celebrarlo por las razones que se firmó.

01 de junio 1995

DOS RECOMENDACIONES

El Reto (Demasiadas respuestas)

El otro día un buen amigo del sector empresarial me preguntó, sin anestesia, cuales serían las dos recomendaciones que yo le haría al Gobierno para que las implantara de **inmediato** como medidas que ayudarían a solucionar la crisis.

Debo confesar que mi silencio fue largo, si lo enmarcamos dentro de una conversación que, hasta ese momento, había sido fluída.

Cruzaron por mi mente en rápida sucesión: Devaluación. Eliminación de controles. Reducción del gasto público. Reestructuración de las deudas externa e interna. Modificación del sistema de prestaciones sociales. Reestructuración del poder judicial. Reforma constitucional. Convocatoria a una Asamblea Constituyente. Una cayapa colectiva a la inseguridad personal. Reforma de los partidos políticos. Reforma de la ley electoral. Cambio de gabinete. Convocatoria a un Gobierno de emergencia nacional. Modificación drástica de los sistema de educación y salud. Privatizaciones. Venta de P.D.V.S.A. Concesiones de las minas de oro de Guayana. Conversión de deuda en inversión. Descargas impositivas drásticas a las inversiones nacionales y extranjeras... Un par de minutos después, dí mis dos recomendaciones.

¿Recursos para qué? (¿Para quién?)

Lo que lleva ya años preocupándome de nuestro país, especialmente a partir del intento de reforma económica de C.A.P., es que todos los esfuerzos de nuestros gobiernos parecen estar dirigidos, exclusivamente, a generar más ingresos para el Estado. Lo cual no está mal. Lo que está mal es que esos recursos adicionales no sean también generados por la sociedad en lo

colectivo, a fin de que el Estado cobre de esa generación de riqueza su cuota en impuestos y nos convirtamos en una verdadera sociedad capitalista. Entendiéndose como tal, una en la cual todos tenemos algo de capital.

La reciente visita del Prof. Douglas North ha puesto sobre el tapete, de nuevo, experiencias recientes como la de la República Checa, donde se han entregado certificados de participación, a todos los ciudadanos, en fondos que agrupan a muchas de las acciones de las que fueron empresas del Estado. Este es un intento por convertir un sistema socialista en un sistema capitalista a muy corto plazo. En Bolivia se intenta hacer algo parecido, pero la motivación es diferente. De lo que se trata es de «devolverle» a los ciudadanos la propiedad de las empresas públicas que nunca debieron dejar de ser de éllos y que el Estado ha usufructado para su propio beneficio. En Alaska, se creó un fondo petrolero, cuyos dividendos se capitalizan, en parte, todos los años y el balance de esos dividendos se le entrega a todos los habitantes. Este mecanismo es un esfuerzo para repartir entre todos los ciudadanos la riqueza petrolera que en el Estado de Alaska se considera como un beneficio para toda la nación y no para el usufructo exclusivo del Estado/Gobierno.

Más y más los países se dan cuenta de la importancia que tiene que el ahorro nacional pase por los mercados de capitales. Es la diferencia entre generar dinero y crear riqueza. La locura que se desató en Venezuela con las altísimas tasas de interés que ofrecían los bancos para captar el ahorro de los venezolanos, era el espejismo de una riqueza inexistente. Al final, fueron solo billetes que se devaluaron rápidamente en una corrida desbocada, donde era inevitable que la inflación le ganara la carrera a las tasas de interés. Esos mismos billetes crearon, para unos pocos, falsos mercados de capitales especulativos, donde la manipulación financiera, la información privilegiada y unos «take overs» totalmente ficticios en la valoración de los activos, que se inflaron para multiplicar capitales en pocos días, produjeron a la corta

una crisis financiera. La cual fue alimentada, a la vez, por acciones de corrupción por parte de la banca que no podía sustraerse al criminal carnaval que engañó a todos los ahorristas de Venezuela, al ofrecerle multiplicar sus billetes, sin que estos estuviesen respaldados por inversiones reproductivas. Esto es otra manera de decir, que al no haber un mercado de capitales, construido por activos productivos, el dinero que circulaba exclusivamente por el sector bancario no era sino de especulación financiera de muy corto plazo. Así no lo supieran los ingenuos ahorristas que se dejaron encandilar por el espejismo de la riqueza súbita, creada por la vía de tasas de interés artificialmente altas, ya que el dinero a ese costo, no tiene cabida en inversiones serias. Ese dinero se usó, también, por pequeños grupos privilegiados, para manipular los precios de acciones, colocadas en la Bolsa de Valores y otros tipos de papeles financieros que, como en el caso de las altas tasas de interés, pretendieron representar **valores comerciales** que no existían.

No ha habido, pues en Venezuela, un verdadero mercado de capitales y no es de extrañarse, ya que la propiedad de las grandes industrias nacionales está en manos del Estado. Ellas son las que pudieran rápidamente crear un mercado de capitales realmente popular. Es interesante notar que en el caso específico del admirado milagro chileno, poco se habla de la forma como se privatizaron muchas de las empresas del Estado. De cómo el Gobierno chileno, con la presencia en el Ministerio de Hacienda de Hernan Buchi, decidió que no podía esperar a que las condiciones económicas mejoraran para privatizar. Buchi entendió que había que fortalecer al sector privado, entre otras razones, porque no se puede desarrollar una economía social de mercado (lo que parece buscar el Gobierno de Caldera) «con un sector privado crónicamente débil y penalizado» (Buchi). Pero, ¿cómo hacerlo?, cuando en esa época en Chile, como hoy en Venezuela, el sector privado estaba en crisis, era mal visto por el país y cargaba con la culpa de ser el responsable de la crisis

económica. ¿Cómo venderle a ese mismo sector algunas de las empresas que poseía el Estado, precisamente porque bajo la propiedad del sector privado se habían insolventado?. En Chile ese sector se denominó el «área rara» de la economía (en Venezuela esa «área rara» serían las empresas, hoy de Fogade y algunas otras propiedad directa del Estado). Dejemos que el propio Buchi defina el enfoque: «La estrategia de recuperación apuntó a los flujos, a través de la reforma previsional y la reforma tributaria. Al pagar **menos** impuestos, las empresas aumentaban su nivel de inversión o quedaban en condiciones de llevar sus ahorros al mercado financiero o de liquidar un compromiso con el banco. Y apuntó a los stocks, a través de los mecanismos del **capitalismo popular**, **capitalismo laboral**, facilidades a los empleados públicos, etc., que implicaron **transferencia de acciones** en forma **no discrecional a grandes grupos de personas**. La idea era dar acceso a la propiedad a grupos más o menos amplios de personas, funcionarios de la administración pública, trabajadores de las empresas privatizadas, pequeños ahorristas, utilizando expedientes no convencionales, como el uso de los fondos de desahucio e incentivos tributarios manifiestos» («La Transformación Económica de Chile. Del Estatismo a la Libertad Económica», Hernan Buchi, Editorial Norma, 1993. Subrayados míos).

Así se hicieron privatizaciones importantes en Chile, cuando la inversión extranjera no llegaba en forma suficiente. Así se privatizaron el Banco de Chile y el Banco de Santiago, entre otras instituciones. Bajo esa visión se crearon los fondos de pensiones, los Isapris (seguros de salud), con el resultado de que ambos fondos han superado con creces todas las expectativas, mientras que en Venezuela todavía discutimos la conveniencia o no, de cambiar un sistema de prestaciones sociales, cuyos fondos de respaldo en todo el sector público son inexistentes. Una solución como la que le costó el Ministerio a Asdrúbal Batista, de pagar esas prestaciones al sector público con acciones de

P.D.V.S.A. no mereció la menor atención positiva. Otras proposiciones, que hemos hecho, entre otros, Francisco Monaldi y yo, ni siquiera han merecido una discusión seria a nivel político.

Cuando propuse en el Congreso Nacional, en ocasión de la Apertura Petrolera, la posibilidad de que el capital nacional corporativo y los venezolanos en masa participaran en el proceso, hasta regalándole acciones de las nuevas empresas a crearse, a la población, si ese fuese el único mecanismo viable, un distinguido diputado comentó que yo lo que quería construir era un país de pensionados. Ojalá pudiéramos. Precisamente lo que no tenemos son pensionados que vivan dignamente. Salvo aquellos que tienen la suerte o la malicia de enchufarse en aquellas instituciones de carácter público que jubilan a sus trabajadores con sueldos completos, después de quince o veinte años de servicios prestados y cuyas pensiones se cargan a los gastos operativos de esas instituciones, por no existir reservas adecuadas que «soporten» esos pagos.

La conclusión inevitable de este rápido análisis es que mientras el Estado siga siendo dueño, receptor de renta (petróleo), cobrador de impuestos y gran distribuidor del ingreso nacional, no habrá sector privado fuerte (seguirá dependiendo de los favores del Estado). Ni capitalismo popular (no habrán empresas que puedan aportar un porcentaje de sus acciones a bajo precio para educar y estimular a la población a invertir en el mercado de capitales). Mientras la dirigencia política no entienda que hay que construir una **Nación** y que eso no lo puede hacer el Estado por sí solo, así fuese eficiente y honrado. Que no lo es. De poco servirá la Apertura Petrolera que de ninguna manera le dará al Estado, en términos relativos, los recursos financieros que le dio en el pasado y que fueron dilapidados ayer. Y si no le permiten a los ciudadanos de este país que creen su propia riqueza, para que ellos mismos la reproduzcan y construyan, de paso, una nación de gente productiva y entrenada para el trabajo, que pague impuestos y que le duelan esos impuestos porque han

salido de su esfuerzo, seguiremos buscando el cambio social por la vía de mantener a Venezuela con los vicios del Petro-Estado y no tendremos instituciones fuertes sobre las cuales desarrollar un plan de crecimiento coherente, económicamente fuerte y socialmente justo.

Las Dos Respuestas (Del Estado para ti)

La primera, de las dos recomendación solicitadas, es revisar las condiciones de la Apertura Petrolera y crear estímulos para que en ella quepan tanto las empresas nacionales que se dedican a esa actividad, además de otras que pudieran hacerlo, así como el ciudadano común y corriente que debería poder ser accionista directo del sector petrolero. Utilizar parte de la regalía petrolera, hoy, toda del **Estado**, para crear fondos de propósitos especiales (educación, pensiones, salud, etc), los cuales se administrarían fuera del sector público y sus rendimientos irían directamente a beneficiar a los nacionales, sin pasar por los peajes del Estado. La mecánica para que eso sea posible la he sugerido en varios artículos de los cuales puedo recomendar la lectura de «La Apertura Petrolera (III). Cinco Proposiciones Concretas», en este libro, página 49.

La segunda recomendación es la privatización inmediata de las empresas de Guayana, mediante emisión parcial de acciones populares que podrían colocarse en la Bolsa de Valores o, entregarse a los trabajadores bajo un plan especial o, mejor aun, crear un fondo con un porcentaje fijo de cada una de las empresas y repartir, como en la República Checa, «Certificados de Participación» en ese fondo a todos los venezolanos o, una combinación de todo lo anterior asociado a inversiones extranjeras que quisieran hacerse presentes. Sin descartar, por supuesto, capitales venezolanos, hoy en el exterior. Condición, imprescindible, sería la de privatizar, de inmediato, las gerencias de las empresas de Guayana, aun cuando el Estado mantuviera, temporalmente, la mayoría de las acciones durante el período de

transición. De esta manera, aun cuando hubiese que vender hoy, dadas las condiciones por las que atraviesa el país, a un precio que mañana, después de la recuperación, nos parezca casi irrisorio, un importante porcentaje del valor agregado de la inversión inicial, se quedaría en el país, en manos de los venezolanos que, al fin y al cabo, son sus legítimos dueños. Creo que es importante subrayar y recordar que mi sugerencia es que en toda privatización de empresas de importantes sectores de recursos naturales y su industrialización (petróleo, acero, oro, aluminio, etc.) un porcentaje de alrededor del 20% de esas empresas debe permanecer en manos venezolanas, vía la masificación de la participación nacional en el mercado de capitales. Aunque en algunos casos se haga hasta sin recibir el Estado contrapartida monetaria de parte de los ciudadanos. Esto no descarta participación adicional en estas empresas de grandes empresas y capitales nacionales. Pero, por supuesto, en este caso, esas Corporaciones pagarían el valor del mercado al cual se le vendería también al capital extranjero, aunque podrían considerarse algunos incentivos de naturaleza especial para el capital nacional.

Esta estrategia, por sí sola, no resolverá, por supuesto, la crisis nacional. Pero, contribuiría con lo siguiente:

- Abriría a la industria petrolera y a las empresas de Guayana a la inversión y participación nacional.

- En el caso de Guayana, privatizaría su gerencia y la haría inmune a la politización de sus normas, procedimientos y selección de personal. Lo que acaba de suceder con algunos de sus gerentes, desplazados después de años de servicio eficiente, no puede repetirse.

- Generaría, vía la venta de acciones y la participación extranjera, algún ingreso para el Estado, que nunca está demás.

- Abriría un nuevo camino para la transformación y popularización de nuestros mercados financieros y de capitales.

- Le serviría al Estado como experimento para convencerse

de que no necesita ser el **dueño** de la producción nacional para ser un Estado efectivo y eficiente.

- Ayudaría a fortalecer al sector privado que no está solamente formado por los grandes capitales y las grandes empresas del país. El sector privado somos **todos** los venezolanos que vivimos y trabajamos en este país. El sector del Estado son aquellos que se han dedicado a labores de Gobierno. Los que trabajan en empresas del Estado son, en lo individual, sector privado, sólo que están regidos por normas diferentes. Y **ese** es el problema.

- Aumentaría la productividad de las empresas de Guayana y por ende, vía los impuestos, la participación del Estado en las ganancias de esas empresas, hoy notorias consumidoras de recursos de la nación.

Por algo hay que empezar.

Además, como reacción espontánea a una pregunta en frío, ya agoté los dos minutos de indecisión que tuve en el momento, en el cual me la hicieron.

Los dos minutos... y algo más.

10 de agosto 1995

EL DES-CONTROL DE CAMBIO

La junta de administración cambiaria de Venezuela ha anunciado que no podrá satisfacer los requerimientos de dólares -y otros signos monetarios exógenos- de los ciudadanos. La razón no puede ser más sencilla, ni más comprensible: No hay dólares suficientes en las castigadas arcas de las reservas internacionales, para continuar satisfaciendo la demanda por esa moneda de los venezolanos. Como el nivel de las reservas internacionales está ya por debajo del límite legal permitido, el Banco Central de Venezuela resistirá las solicitudes del Gobierno para que entregue más divisas a los ciudadanos apoyándose -como ya se dijo- en el único argumento que no admite discusión: El aritmético.

La «Agenda Venezuela», tal como ha sido presentada, no podrá convencer al Fondo Monetario Internacional de la conveniencia de abrirle -con su aval- créditos al país, por US$1.500 millones de inmediato, y esperar hasta después de las elecciones regionales de diciembre para que el Gobierno de Venezuela presente un plan económico coherente que incluya -por supuesto- las amargas medicinas del Fondo. Por lo tanto, esta organización internacional tampoco le dará al Banco Central de Venezuela seguridad alguna, que le permita a éste adelantarle «algo» de sus flacas reservas en divisas a la junta de administración cambiaria, para que no se paralicen -entre otras cosas- las importaciones críticas que requiere el país. Si alguien tuviera alguna duda sobre lo que el F.M.I. hará o no hará en el caso Venezuela, dados los objetivos, la misión y las variables que maneja técnicamente para hacer un diagnóstico objetivo sobre la situación de los paises que acuden a él, en busca de asistencia financiera, les recomiendo, muy de veras, la lectura del excelente y pedagógico artículo sobre el tema, publicado por Rafael Mac Quhae, en El Nacional, el domingo 08 de octubre

de 1995 («Venezuela en la Agenda del F.M.I»). Por su parte, los miembros de la J.A.C. tampoco están dispuestos a autorizar entrega de divisas, si no cuentan con un presupuesto que respalde la disponibilidad **real** de las mismas. Sería irresponsable de su parte y además engrosarían las filas numerosas de los funcionarios públicos que autorizan gastos sin contar antes con los recursos financieros necesarios para responder por éllos. Juego trancado.

Vale la pena darle un vistazo -vuelo rasante- a las causas que llevaron a Venezuela a esta crítica situación.

- Hace -aproximadamente- un año el Gobierno ahogado por la crisis financiera y, ante la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en la situación económica del país, implantó un control de cambio «para frenar la fuga de divisas, hasta que se restituya la confianza ciudadana en el sistema».

- De inmediato, acudió a los tecnócratas de Petróleos de Venezuela, para que diseñaran una Organización Técnica de Administración Cambiaria (OTAC), mediante el acto inusitado de una orden emanada de su asamblea de accionistas (El Gobierno). Digo «acto inusitado», a por cuanto en casos anteriores (Recadi, por ejemplo) el Gobierno ha solicitado la colaboración de P.D.V.S.A., para que lo asista en la implantación de alguna medida especifica. Pero que yo sepa, esta es la primera vez que la «colaboración» se solicita mediante una **orden** formal de la asamblea de accionistas. Si me apuran mucho -diría- que se violaron los estatutos de la casa matriz de la industria petrolera, al imponerle oficialmente una tarea que está claramente fuera de sus obligaciones formales y de sus objetivos básicos. Que a mi manera de ver, esta acción constituye un peligroso precedente.

- Establecida la OTAC -en tiempo récord- el Gobierno decidió que algo tan delicado como la administración del control de cambio, no podía dejarse -exclusivamente- en las manos tecnócratas de algunos gerentes petroleros. Nombró entonces una instancia superior, en forma de Junta de Administración Cambiaria (J.A.C), donde incluyó a venerables hombres de su

confianza y -por si acaso- a un petrolero retirado, ex-director de Petróleos de Venezuela (Wilhem), quien ahora coordina las actividades de la J.A.C., después de bastantes tropezones causados por su primer coordinador (Pulido Mora).

- La razón primordial para establecer el control de cambio fue -como ya debe haber sido intuído- abrir un paréntesis temporal, dentro del cual el Gobierno diseñaría un programa económico coherente, y la ciudadanía, convencida de la eficiencia gubernamental, recuperaría la confianza en la economía nacional. Logrado esto, se volvería al cambio libre. Toda la estructura de la OTAC se diseñó -pues- para administrar algo temporal. El mismo hecho de que la OTAC esté administrada por unos 40 gerentes petroleros activos, que deben regresar a P.D.V.S.A., a desempeñar las tareas para las cuales están preparados, debe ser evidencia suficiente del carácter provisional que se le dio a esa oficina.

- El Gobierno no diseñó un programa económico. La situación del país -por lo tanto- empeoró. La mera presencia del control de cambio tuvo efectos psicológicos negativos. Los ciudadanos, ante la amenaza de que los controles en lugar de desaparecer, se endurecieran, solicitaron más dólares de los que hubieran adquirido en una situación «normal».

- El Gobierno, se empeñó en mantener fija la tasa de cambio (Bs. 170 por 1 dolar). La diferencia entre esta tasa de cambio y el valor real del bolívar, estimuló la creación de un mercado paralelo ilegal. El Gobierno -entonces- buscó la manera de tener un mercado legal paralelo. La encontró en los bonos Brady, que ahora pueden comprarse en bolívares y, mantenerse o venderse en dólares, en los mercados internacionales. El valor mínimo de denominación de estos bonos es de US$250 mil, lo cual le cerró la puerta de acceso a esos dólares a la mayoría de los venezolanos. Los más «pobres» -entonces- se las ingeniaron para hacer trampa en la adquisición de dólares «oficiales» para viajes de negocios y de turismo. Importaciones sobrefacturadas y otros variados

mecanismos, todos estimuladores de la corrupción privada y oficial.

- Mientras tanto la JAC y la OTAC, en repetidas ocasiones, conscientes de la crisis que se avecinaba, le solicitaron al Gobierno que estableciera prioridades para la entrega de dólares. Solicitaron también que se les pidiera a los diferentes ministros del Poder Ejecutivo que prepararan presupuestos en divisas, utilizando para ello, los conocimientos y las estadísticas que poseían sobre la demanda histórica de dólares en sus respectivas áreas (Productos agrícolas, medicinas, insumos industriales, etc). En fin, que cada organismo se responsabilizara por lo que le competía. Que cada quien hiciera lo que le correspondía. El Gobierno no contestó. Se quedó mudo (El Dr. Maza Zavala -en diferentes ocasiones- solicitó públicamente una reglamentación clara del control de cambio y la toma de medidas complementarias).

- Para complicar aún más las cosas, los convenios comerciales bilaterales y multilaterales que tiene Venezuela con otros países y, los compromisos derivados de su participación en el GATT, le impiden -salvo por razones de crisis extrema- establecer limitaciones a las importaciones de los productos elaborados por los países con los cuales tiene estos convenios. Esto pudiera explicar la falta de acción, hasta ahora. Pero no justifica que el Gobierno no se haya preparado para lo que se sabía vendría después. Ni tampoco justifica que todavía -ahora- cuando si hay crisis, se pretenda seguir actuando como si no la hubiera. Aclaro -de inmediato- que no es que creo que una política de prioridades cambiarias hubiese evitado el agotamiento de los dólares. Sin política económica que restituya la confianza ciudadana en el sistema económico, no hay gradualismo ni estrategia de prioridades que no se agote tarde o temprano. Lo que llama la atención es que un Gobierno, cuya única política económica parece ser «correr la arruga», no haya usado el sistema de prioridades cambiarias -dentro del control- para que la disponibilidad de divisas que no renueva su errática política

económica, le durara más.

- De diferentes maneras, tanto el Gobierno como algunos de sus aliados políticos y, algunos de la oposición, pretenden -ahora- sentar en el banquillo de los acusados a la JAC y a la OTAC. Peor aún, algún «notable» de la JAC parece querer asignarle responsabilidades en el desastre actual a sus colegas de la OTAC. Esto es, por demás injusto.

- Como era de esperarse en un sistema cambiario improvisado, que funciona en un país sin controles, algún escándalo tenía que presentarse. El llamado caso Semary, llenó el vacío. Si hubo o no actos de corrupción en la asignación de dólares a este importador de frutas y otros bienes, espero que las investigaciones lo aclaren. Pero -mientras tanto- las críticas a la OTAC o a la JAC, por haber entregado divisas para la importación de bienes -para algunos- no prioritarios, no tiene ningún fundamento. Tanto la OTAC como la JAC entregaron divisas contra solicitudes recibidas, respaldadas por un presupuesto asignado por el Banco Central. Su administración es -por lo tanto- cuantitativa y no cualitativa. No establece la J.A.C. prioridades para la entrega de dólares porque no es su responsabilidad hacerlo. La responsabilidad estaba y está en el Poder Ejecutivo (el Presidente y sus ministros) y éste no tomó acción. El Congreso tampoco llamó al Ejecutivo y le señaló la necesidad de actuar. Esto es importante recalcarlo. La JAC y la OTAC administran políticas. No las diseñan. El diseño de políticas -como ya se ha dicho- le corresponde al Ejecutivo y al Congreso Nacional. Tratar -ahora- de eludir ésa responsabilidad por parte de quienes la tienen y, siempre la han tenido, es un acto más de irresponsabilidad política por parte de aquellos que teniendo la responsabilidad de hacer las cosas, no las hacen, y pretenden transferir su pecado de omisión a quienes no tienen el mandato de hacerlas.

- El problema económico y la escasez de divisas se ha convertido en un problema político. Como era de esperarse -

cuando eso sucede- los que salen con las tablas en la cabeza son los tecnócratas que -ahora- quieren regresar a sus ocupaciones en P.D.V.S.A. con la falsa creencia de que todos comprenderán que la culpa no es de ellos y aquí no ha pasado nada. Ha pasado mucho:

- El país podría desabastecerse de insumos críticos (medicinas, alimentos, materiales y equipos, repuestos industriales, etc).

- Algunos servicios esenciales de origen externo, como el de las líneas áreas internacionales, podrían suspenderse.

- Muchas de las empresas privadas de ingeniería y prestadoras de servicios a la industria petrolera, podrían colapsar si no tienen dólares para sus importaciones de materiales y equipos. Serían rápidamente sustituidas por empresas foráneas que tienen dólares y a quienes P.D.V.S.A. les paga directamente en esa moneda. Lo que no puede hacer con las empresas nacionales, que tienen que esperar su turno, que ahora no les llegará, ante la OTAC y la JAC para poder convertir bolívares en dólares (los otros sectores industriales del país, correrán igual suerte).

Algunas de las lecciones importantes de este proceso son las siguientes:

- No se pueden imponer exitosamente controles sobre materias delicadas en un país, donde el deporte nacional es burlarse de los controles y de las leyes (El mal ejemplo oficial tienen múltiples seguidores).

- No se puede convertir en permanente lo temporal sin una adecuación previa administrativa y técnica.

- No se puede restituir la confianza ciudadana en las finanzas nacionales si el Gobierno no diseña un programa económico coherente, moderno y creíble.

- No se puede -en momentos de crisis- acudir ante quienes pueden ayudarnos, con desplantes infantiles (El Gobierno ante el F.M.I).

- P.D.V.S.A. debe revisar cuidadosamente su política actual de «asistir» a otras instituciones públicas. Sus experiencias previas en Recadi y en el Seguro Social Obligatorio -entre otros- le deben prender la luz roja de la cautela, ante de exponer a sus gerentes a situaciones, donde su habilidad y su talento están mal empleados. Se pueden cambiar los sistemas administrativos en algunas instituciones, pero no se puede cambiar su entorno. El problema no se resuelve -exclusivamente- por tener conocimientos técnicos y administrativos. ¡No!. El problema también incluye una pesada carga de inmoralidad administrativa. De malas costumbres, construidas en el tiempo, por los actores internos y externos de la mayoría de nuestros procesos productivos y de prestación de servicios. El primer culpable es el Gobierno que, dentro de su política estatizante, pretende seguir siendo el dueño de todo, sin admitir responsabilidad por nada. De todos los actos de corrupción oficial, el peor de todos es la irresponsabilidad que conduce a pretender no ver los problemas y -por lo tanto- a la inacción, cuando la crisis le mira la cara frente a frente y sin disimulo alguno. No se puede pretender administrar un país si nadie hace lo que está obligado hacer. Si nadie asume las responsabilidades que le corresponden. Si se administra y se legisla por capricho. Si continuamos justificando con nuestra conducta la muy citada respuesta de los soldados a quienes enviaron a buscar al enemigo y regresaron diciendo «¡Hemos encontrado al enemigo... y somos nosotros!».

Si alguien tiene todavía alguna duda sobre donde está el enemigo, revise cuidadosamente el proceso del control de cambio.

Si todavía cree que el enemigo está en otra parte... mejor será que le ofrezca sus servicios al Gobierno.

Los ciegos deben estar juntos... y los que no quieren ver también.

12 de octubre 1995

EL GOBIERNO DESPUES DEL F.M.I.
TERNA DE OPCIONES

La fuerza de las circunstancias ha obligado al Gobierno a acudir al Fondo Monetario Internacional (F.M.I) para obtener recursos financieros que nos ayuden a capear temporalmente la crisis agobiante, causada por el capricho, el populismo y la ineficiencia de las políticas económicas (?) del Presidente Caldera.

Creo que ya no queda nadie en Venezuela -medianamente informado- que no sepa que las condiciones mínimas que impondrá el Fondo para empezar a conversar en serio con nosotros, por mucho que las disfrace la demagogia oficial, inevitablemente se parecerán mucho al discurso económico de los «anti-cristos», Miguel Rodríguez, Moisés Naim, Imelda Cisneros, Ricardo Hausmann y otros desaprovechados venezolanos, que tienen bien claras las medidas urgentes a tomar para restablecer los equilibrios macro-económicos. Condición indispensable para empezar a salir de la crisis. Ahora que hay que dar por sentado que tarde o temprano el Gobierno firmará una Carta de Intención con el F.M.I., y que tendrá que comprometerse a efectuar los ajustes que satisfagan a esta institución, la pregunta que queda por resolver -entre varias otras- es si el Presidente Caldera va a identificarse con los cambios que por fuerza tendrá que efectuarle a su actual política económica, y si buscará a personas para integrar su Gabinete que también se identifiquen con esa nueva política. O si -por el contrario- como ya he sugerido en ocasión anterior («Las Opciones del Fracaso II», en este libro, página 315), Caldera continuará pensando en materia de desarrollo económico y social como piensa hoy y tomará a regañadientes la medicina -para él amarga- del Fondo sin comprometerse públicamente con el nuevo enfoque. Con un equipo ministerial que también piense como él y cuyas

actuaciones traerán como consecuencia unas relaciones traumáticas con el Fondo y una demora en la restitución de nuestro crédito comercial internacional. Queda también, otra posibilidad de Gobierno, y es la sugerida por el Congreso Nacional, por la Causa R. y por A.D. Estas sugerencias -aunque con matices bastante diferentes- buscan la integración de un Gabinete donde figuren los «mejores» hombres del país, un apoyo institucional por parte del Congreso y una participación activa y visible del Presidente de la República en la toma de decisiones críticas.

Tenemos pues, tres escenarios posibles que complementan lo descrito en el trabajo ya mencionado.

Los escenarios son:

Escenario I: «La Modernización a juro».

Escenario II: «La Torre de Babel».

Escenario III: «El Gobierno responsable».

La Modernización a Juro

Este es un escenario sin futuro exitoso para el Gobierno. Su primera característica es la ausencia de un compromiso del Presidente con las medidas económicas que forzosamente tendrá que tomar, si no quiere promover una crisis de tal magnitud, como para poner en real peligro la supervivencia institucional. Que no se llame nadie a engaño. El escenario actual -ya descrito por mi, varias veces- de «Más de lo mismo» se agotó. Sin embargo la retórica oficial se empeñará en mantener la ilusión de que el Gobierno no ha dado su brazo a torcer y que las duras medidas amargas que tomará son parte de un programa preparado por el mismo Gobierno, e incluido en la llamada «Agenda Venezuela». Que el Fondo no ha impuesto nada. Que no estamos de rodillas. Que la economía crece poco a poco. Que la inflación bajará el año que viene (siempre el año que viene). Que el aumento de la gasolina es para proteger a los pobres. Que los nuevos impuestos son parte de la reforma fiscal necesaria, iniciada por

este Gobierno. Que el control de cambio fue exitoso y que ahora -gracias a **ese** sistema- podremos regresar -poco a poco- a la liberación cambiaria. Que gracias a Dios que el Gobierno tuvo la fortaleza suficiente para mantener el valor de nuestra moneda a Bs. 170 por dólar, lo cual impidió que se disparara la inflación. Que el control de precios acabó con la especulación por parte de los comerciantes irresponsables. Que pese a las críticas de los desadaptados de siempre, el Gobierno no colapsó ni se cayó el sistema democrático. Que toda la crisis de debió a la debacle financiera, provocada por banqueros inescrupulosos que ahora conspiran en el exterior contra los intereses del país.

Para poder mantener este discurso el Presidente requerirá de un gabinete como el que tiene ahora. Puede ser que cambien los apellidos de los ministros, pero lo que no cambiará será su disposición de mantener el falso mensaje de que todo anda bien. De que el Gobierno solo, preparó un plan económico que luce coherente, sin serlo.

Este escenario -pese a sus deficiencias- podría llevar al Gobierno a concluir el período presidencial (Este trabajo no analiza escenarios catastróficos). Pero será una llegada triste al final del período. Con pérdida de popularidad y credibilidad por parte del Presidente Caldera (El Gobierno como entidad ya perdió **eso** y mucho más). Con tropiezos y discusiones agrias constantes con el F.M.I. Con relaciones tensas con la Banco Comercial Internacional que se debatirá entre darle valor a algunas de las medidas económicas positivas que -sin duda- tomará el Gobierno y lo negativo de la repetición constante de un mensaje oficial que reiterará todos los clichés «jurásicos» que le han mal servido de muleta a la acción oficial.

En este escenario, Acción Democrática seguirá apoyando selectivamente al Gobierno y extrayendo -como contrapartida de ese apoyo- concesiones en la forma de acuerdos parlamentarios a leyes presentadas por ellos y -por supuesto- las conocidas prebendas y beneficios que siempre obtienen las

instituciones «amigas del Gobierno». Copei se colocará en la difícil posición de una oposición «razonable», donde no tendrá más remedio que apoyar a muchas de las medidas impopulares que se tomarán, aunque tratará -sin éxito- de neutralizar ese apoyo denunciando el doble discurso del Gobierno. A pocos les interesará esa posición de Copei. De todos los partidos políticos el que más tiene que perder en este **escenario** es Copei por la falta de espacio para la maniobra política efectiva que le dejará la nueva situación. El MAS seguirá deshojando la margarita de la indefinición pero -indefinido y todo- llegará al final con el Gobierno de incómodo aliado. La Causa R., además de A.D. y con diferente estrategia, tendrá la oportunidad de ganar nuevos adeptos. Podrá oponerse hasta a lo que parece razonable, con el argumento circunstancial de que la nueva política es la misma de Pérez y producirá sus mismas negativas consecuencias. Ofrecerá opciones para la acción como por ejemplo la convocatoria a una Asamblea Constituyente y/o un Gobierno de entendimiento nacional donde participe -en la solución de los problemas- toda la sociedad venezolana. Ninguna de estas proposiciones tendrá cabida dentro de este escenario. Sin embargo la Causa R., podrá racionalizar sus objeciones al Gobierno alegando que si las medidas económicas no se enmarcan dentro de un plan de acción coherente, explícito y con alto contenido social, el sacrificio del pueblo será en vano. Y -para muchos- su mensaje sonará razonable. Seguirá pidiendo también la presencia y compromiso del Presidente con las decisiones críticas y será el único partido, dentro de este Escenario, que estará claramente y sin ambages en la oposición por todo lo que queda de este período de Gobierno.

Este es el escenario donde el Gobierno hará muchas de las cosas que hay que hacer, pero por mensaje propio las descalificará como no hechas. La palabra oficial no permitirá -absurdamente- que se beneficien políticamente los responsables de tomar las nuevas acciones. Caldera y sus ministros llegará agotados al final

del período, y le dejarán al próximo Gobierno la posibilidad de usufructuar para su propio beneficio, las medidas difíciles que tomó el -para entonces- Gobierno anterior.

La Torre de Babel

En este escenario el Presidente atiende las llamadas de A.D., la Causa R. y el Congreso Nacional e intenta hacer un Gobierno con un gabinete estructurado con los «mejores». Además, aunque no acepta presidir personalmente diferentes comisiones especiales, con la participación de los partdios políticos, dentro del seno del Congreso, aceptará nombrar en ellas a representantes personales.

Las primeras dificultades comenzarán con la integración del gabinete. ¿Quiénes son los «mejores»?. ¿Pertenecen o no a algún partido?. Si los «mejores» están dentro de algún partido, ¿cómo será el procedimiento para su selección?. ¿El Presidente los escoge y le pide al partido su autorización para que los deje actuar?. O, ¿el partido le ofrece al Presidente una terna para que éste escoja uno?. Bajo cualquiera de estos mecanismos -de hecho- tendremos un gabinete seleccionado o autorizado por los partidos políticos. Un nuevo pacto de Punto Fijo. Eso -casi todos estamos de acuerdo- no funcionará. ¿Se estructurará entonces el gabinete con figuras independientes?. ¿Quiénes son los independientes que -en la percepción de los partidos- no tienen simpatía por alguna organización política?. Recordemos solamente el bochornoso espectáculo que dio el mundo político para seleccionar a los miembros independientes del Consejo Supremo Electoral.

A esta complicación habría que agregarle la necesidad de una representación adecuada en el Gobierno -aunque sea como «asesores»- de la nueva sociedad civil. De las instituciones de poder: La Iglesia. Las Fuerzas Armadas. Los empresarios. Los sindicatos. Los gremios profesionales. Las universidades, etc. Todos reunidos para elaborar un plan de desarrollo coherente.

El problema es que no saldrá un programa coherente. No puede salir de una discusión -por ejemplo- entre Luis Giusti (PDVSA) y Francisco Mieres (U.C.V), nada que se parezca a un plan coherente, si a juzgar vamos por los lineamientos para un plan de Apertura Petrolera del M.E.M/PDVSA y las conclusiones del «Juicio» a esa misma Apertura, celebrado en la U.C.V.

Después de muchas dificultades se formará un gabinete que no dejará satisfecho a nadie y del cual estará ausente la mayoría de aquellos «mejores» que -hasta ahora- no habían participado en labores de Gobierno y que se inhibirán de nuevo ante las confusiones que creará la activa mediocridad de siempre.

Después de dos o tres meses de frustraciones, renunciará el gabinete y el Presidente no tendrá otra alternativa que la de optar -otra vez- por gobernar con sus conocidos de siempre (escenario de «La Modernización a Juro»), o decidirse por comprometerse con un plan modernizador y buscar él mismo directamente a las personas más idóneas que lo puedan ayudar fuera -por supuesto- del circulo de su conocidos (escenario de «El Gobierno Responsable»).

Este escenario de «La Torre de Babel», por las confusiones, inhibiciones e incoherencias que generará, amén de la frustración colectiva que producirá la pérdida de las expectativas ciudadanas, falsamente generadas por la posibilidad de establecer un Gobierno de «consenso nacional», podría fácilmente desembocar en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como la última opción percibida para salvar al sistema.

La búsqueda del consenso y la participación masiva de todos en la elaboración de un programa económico y social para salir de la crisis -en su fracaso- provocará la pérdida de apoyo político que hasta ahora ha caracterizado a este Gobierno. A.D. retirará su ayuda, frustrado ante la dificultad de formar un Gobierno de los «mejores». Copei será el partido político que saldrá más favorecido dentro de este escenario puesto que -desde el principio- mostrará su esceptisismo ante el posible éxito del

experimento y se eximirá de formar parte del gabinete. Esta decisión lo aislará del debate pedestre público, en el cual se empeñarán los otros partidos políticos y la sociedad civil en la búsqueda de posiciones de poder dentro del nuevo Gobierno. Así -desde el principio- Copei será el verdadero partido de oposición del Gobierno y el que estará mejor colocado para el próximo paso, cualquiera que éste sea. El MAS -en este escenario- se separará del Gobierno al convencerse por las discusiones políticas que se tendrán para integrar el gabinete que, en la percepción del Presidente -ese partido carece de peso- en relación con la importancia que se le dará -por ejemplo- a una A.D. Esta manera de tratar al MAS, como al hermano pobre de la alianza no será nuevo pero, en el río revuelto de la búsqueda del consenso, la conducta indiferente del Presidente será la gota de agua que rebozará el vaso -ya casi lleno- de la paciencia de la dirigencia del MAS. El gran perdedor será la Causa R., quien verá fracasar su sueño -como fracasan las utopías- de un Gobierno de amplia participación nacional para el **diseño** de políticas de Gobierno. En la búsqueda de nuevas opciones la Causa R., por muchos esfuerzos que haga para explicar el fracaso de la política de una gran discusión nacional, se verá en dificultades para encontrar una nueva estrategia que sea -a la vez- popular y creíble.

El Gobierno Responsable

Este es parcialmente el escenario descrito como «La Nueva Apertura», en mi artículo -ya citado-. «Bajo este escenario ya no hay tiempo para el gradualismo. Hay que entrar por el «aro» de las condiciones negociadas con el F.M.I. para modernizar la economía: Reducir el déficit fiscal. Tasas de interés positivas. Devaluación. Reforma fiscal. Aumento de la gasolina. Aumento de las tarifas de los servicios públicos. Restructuración y flexibilización del presupuesto. Inversiones en obras de infraestructura, sanidad y educación. Liberación de precios. Privatización de las empresas del Estado. Aumento de la

productividad del sector privado. Creación de un sistema social moderno, con compensaciones adecuadas para el desempleo. Creación de fondos de pensiones. Revisión a fondo del sistema de prestaciones sociales».

A lo anterior habría que agregarle el desmontaje de los controles de precios y de cambio, aunque se deje regulada por algún tiempo una cesta pequeña de productos de consumo básico (alimentos y medicinas) y se mantenga algún tipo de control sobre la repatriación de capitales.

El Gobierno reconoce que no se podrá tener éxito, sin un plan coherente integral que recoja y maneje a todas o casi todas estas variables. Diseña y establece el plan y poco a poco se convence de que ha encontrado el camino para salir de la crisis. Dentro de este escenario también se discutirá en serio la reforma del Estado, la reforma de Ley de los partidos políticos y la reforma de la Ley del Sufragio. Por cierto que en la discusión de esta última, se pondrá de nuevo sobre el tapete la opción de la nominalidad con listas abiertas como una alternativa a la uninominalidad pura, que ha presentado dificultades casi irremontables en sus intentos para darle acceso a los poderes públicos a aquellos candidatos independientes que carecen del apoyo de los grandes partidos políticos nacionales.

Los pasos a transitar dentro este escenario son los siguientes:

El Presidente se dirige a la Nación y expone: a) La gravedad de la crisis sin eufemismos. Cuantificando esa gravedad en términos sencillos. Cuánto se debe. Cuánto le ingresa al país. Cuánto es el déficit fiscal. Cuánto las reservas internacionales reales.

b) Reconoce públicamente la imposibilidad de seguir aplicando una política económica que -pese a sus mejores intenciones- ha sido demostrablemente ineficaz.

c) El Gobierno prepara el programa económico y sin discusión previa se lo presenta a las instituciones de poder y a los partidos políticos, para que le den su apoyo. De esta manera,

el Gobierno se responsabiliza totalmente por el éxito o el fracaso del plan.

d) Anuncia simultáneamente la restructuración del gabinete, para que refleje -en su composición- las tendencias coincidentes de los que lo forman con el nuevo plan.

e) Anuncia la restructuración del Poder Ejecutivo y la reducción de los ministerios.

f) Anuncia la restructuración del presupuesto y las medidas más expeditas para reducir el gasto público.

- Ante este mensaje la sociedad civil y los partidos políticos responden al llamado. Se crean mecanismos verdaderos de cooperación. Se le conceden al Ejecutivo algunas facultades para tomar decisiones de urgencia que deberán luego ser ratificadas por el Congreso Nacional de ser esto necesario.

- El pueblo acepta -aunque a veces a regañadientes- la imposición de estas nuevas medidas que -indudablemente- en el muy corto plazo le serán visiblemente desfavorables, y aumentarán la intensidad de su sacrificio. Sin embargo, el apoyo que le da al Gobierno el sector político y las instituciones de poder permiten a éstas últimas actuar como catalizadores del descontento y evitar que éste se convierta en manifestaciones sociales incontrolables.

- Después de varios meses, empiezan a notarse los beneficios de la nueva política y aumenta de nuevo la credibilidad, no ya del Gobierno exclusivamente, sino de un sistema político social que logra la recuperación del país, por la vía del apoyo consciente de las instituciones de poder a las políticas económicas y sociales establecidas por el Gobierno.

Este escenario es -sin duda- para el Gobierno, el escenario del éxito asegurado. Dentro de él, A.D. será el gran ganador al contribuir visiblemente al éxito de la gestión del Presidente Caldera. Copei, tal como en el escenario de «La Modernización a Juro, será el gran perdedor al ver -de nuevo- copados sus espacios para la maniobra: En el campo de la colaboración con

el Gobierno por A.D. y en el campo de la oposición por la Causa R. El MAS, continuará apoyando al Gobierno y saldrá con mejor imagen pública dentro de este escenario que en el escenario de «La Modernización a Juro». Pero, con menos opciones para flexibilizar su posición hacia el futuro que los que le presenta el escenario de «La Torre de Babel», donde -como ya hemos visto- se separa del Gobierno. La Causa R., no tendrá otra opción que hacer oposición, tal como lo hará en el escenario de «La Modernización a Juro», solo que ahora no podrá apoyarse en la bandera de la inexistencia de un programa de desarrollo coherente. Pero como a todo programa de desarrollo se le pueden encontrar fallas, la Causa R. explotará las que encuentre al máximo y llegará a las próximas elecciones, como el único partido claramente en la oposición. Por muy bueno que sea cualquier Gobierno, siempre habrá espacio para una oposición bien razonada.

Finalmente, mis pronósticos sobre las probabilidades de cada escenario, son las siguientes:

Para el escenario de «La Modernización a Juro»: 75%.

Para el escenario de «La Torre de Babel»: 5%.

Para el escenario de «El Gobierno Responsable»: 20%.

Ojalá me equivoque.

19 de octubre 1995

EL AUMENTO DE LA GASOLINA

Aunque muchos lo duden, una de las medidas más inteligentes y oportunas que ha tomado el Gobierno del Presidente Caldera, ha sido aumentar el precio de la gasolina.

Inteligente por cuanto, al mantener fijo y hasta reducirle algo el precio a la gasolina de menos octanaje, ha cumplido opticamente con el propósito de lograr un aumento de precios con «justicia social», lo cual le ha permitido publicitarlo como un acto de sensibilidad hacia los más pobres. El argumento «neoliberal» de que el subsidio de la gasolina era regresivo, por cuanto favorecía a los «ricos», ha sido aceptado y utilizado por el Gobierno para poder decir ahora que fue solamente a los «ricos» a los que le aumentaron el precio.

La predicción de los analistas políticos, incluyendo a un aliado del Gobierno, como Teodoro Petkoff, que de aquí hasta después de diciembre el Gobierno no tomaría medida alguna que pudiera tener un costo político, también fue derrotada por la acción de Caldera que -ante los ojos de la mayoría- tuvo el coraje político suficiente, como para incurrir en ese costo. Además, al no publicitar -abiertamente- el hecho de que el producto de ese aumento en el precio de la gasolina irá totalmente al fisco, sin que P.D.V.S.A. se beneficie -en lo absoluto- ha dejado a mucha gente con la equivocada impresión de que el aumento no tiene -exclusivamente- fines fiscalistas.

La sorpresa fue de tal magnitud que la mayoría de los comentarios se han orientado a aplaudir la decisión calificándola -como era de esperarse- como «un paso en la dirección correcta». Sin embargo, creo que es hora de hacer un análisis un poco menos superficial de aquellos que se han limitado a aplaudir porque «había que hacerlo», o a criticarlo porque, entre otras razones, viola promesas muy claras hechas por Caldera en sentido

contrario, durante su campaña electoral y durante sus dieciocho meses de Gobierno.

Veamos a este aumento de precio de la gasolina, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.

El punto de vista económico (P.D.V.S.A. pintada en la pared)

Hay que aceptar que el aumento de precios de la gasolina -como ya hemos sugerido- apunta en la dirección correcta. Pero, como en la mayoría de las medidas de este Gobierno, el sentido de dirección no es el ingrediente más importante de su proceso de toma de decisiones. Veamos:

- El producto del aumento de precio irá totalmente al Fisco. Esta decisión no hubiera podido tomarse, en esta forma, hace algunos meses, ya que estaba demasiada «viva» la discusión sobre las pérdidas, en las cuales incurría P.D.V.S.A. anualmente por mantener los precios bajos de la gasolina. Para muchos, el aumento de los precios se justificaba conceptualmente bajo el argumento de que no se debía obligar a una empresa comercial -así fuese del Estado- a que vendiese un producto por debajo de su costo de manufactura. También se alegaba que los aumentos en los precios no deberían ser con fines fiscalistas. Pues bien, de un tiempo a esta parte, se ha venido hablando de presuntas «evasiones fiscales» de P.D.V.S.A., por diferentes medios. Se ha dejado -también- colar la idea de que P.D.V.S.A. puede asumir esas «presuntas pérdidas» en la venta de gasolina al mercado local, ya que «no va a quebrar por **eso**». Además, el precio promedio que recibe por sus ventas de gasolina en el mercado doméstico y en el de exportación, es claramente superior al costo de manufactura. De manera que no hay realmente «pérdida» en las ventas de gasolina, cuando se ven como un todo indivisible. Esta política de «ablandamiento» contínuo, para negar la necesidad que tiene P.D.V.S.A. de eliminar sus pérdidas en el mercado doméstico, recoge hoy sus frutos, cuando el Gobierno

-prácticamente sin cuestionamiento público- aumenta el precio de la gasolina y decide recibir íntegro los resultados financieros de ese aumento. Dejando a P.D.V.S.A. en la misma posición de pérdidas operativas -en este negocio- en la cual estaba antes del aumento. Lo que llama la atención es que P.D.V.S.A., que estuvo tan activa, promoviendo el aumento e informando sobre la magnitud de los costos, en los cuales incurría por vender gasolina a los venezolanos a precios subsidiados, no haya dicho nada para explicarle a los venezolanos que de este aumento no le ingresará a su caja registradora ni un mísero bolívar.

Lo cierto es que la habilidad manifiesta del Gobierno para presentar «su caso» ha resultado en que el aumento en los precios de la gasolina, haya sido hecho con fines totalmente fiscalistas, que P.D.V.S.A. no haya recibido ni un centavo para compensar sus pérdidas y que nadie haya protestado esta clara violación y el abandono de todas las razones que alguna vez se dieron como buenas para aumentar el precio de la gasolina.

- El Gobierno espera recibir unos Bs. 66 mil millones como resultado del aumento del precio de la gasolina. Esto pudiera no ser así. Contrario a lo que muchos piensan, en Venezuela el consumo de la gasolina de alto octanaje es muy superior al de bajo octanaje. Por eso, tienen razón algunos conductores de vehículos de transporte colectivo, cuando dicen que ellos utilizan gasolina cara. Por supuesto la pregunta es, si pueden o no utilizar gasolina de más bajo octanaje de ahora en adelante. La respuesta es sí, en la mayoría de los casos, aunque hay algunas marcas de vehículos donde esto será más difícil. En la medida en que, por el diferencial de precios hoy existente, entre la gasolina de alto y bajo octanaje, los conductores se pasen a la gasolina barata, en esa misma medida el Fisco recibirá menos dinero (La base de precios para calcular el impuesto será menor). Si -por ejemplo- la relación de hoy entre el consumo de alto octanaje (70%) y el consumo de gasolina de bajo octanaje (30%), se invirtiera y la gasolina de alto octanaje representara solo el 30% del consumo

total, el Fisco dejaría de recibir unos Bs. 22 mil millones. Sin embargo, este cambio en el consumo doméstico sería favorable para P.D.V.S.A., ya que le quedaría disponible mayor octanaje para la exportación y recibiría -por ende- precios sustancialmente superiores, por esos volúmenes, a los que recibía en el mercado doméstico. Esto -por supuesto- no le compensará sus pérdidas globales en el mercado nacional. Pero... algo es algo.

- El Gobierno ha anunciado un mayor octanaje de la gasolina «barata». Eso no es del todo cierto. Después que se le hicieron ciertas modificaciones técnicas a la Refinería de El Palito, nuestra gasolina barata tenía ya el octanaje que hoy se anuncia como superior al de antes. Lo que pasó fue que no se cambió en los surtidores la denominación del octanaje. Se anuncia -pues- la gasolina barata como de mayor octanaje a la que se venía consumiendo, cuando en efecto es la misma. Eso es un pecadillo menor, ya que técnicamente no hay engaño en la nueva versión del octanaje que contiene la gasolina «barata». El engaño está en hacer aparecer a esta gasolina de hoy, como "mejor" a la de ayer.

- Es artificialmente grande la diferencia de precios entre la gasolina de alto octanaje y la de bajo octanaje, No responde a las relaciones de precios asociadas a distintos octanajes que prevalecen en los mercados de consumo. Eso es una invitación a la corrupción. A la mezcla de diferentes calidades de gasolina para «subir» el precio de la barata, sin que se entere el usuario. Por la misma razón, aunque solo sea para utilizarla como un componente para mezclarla con la gasolina de alto octanaje, nuestra gasolina barata seguirá siendo muy popular en las zonas fronterizas, donde el contrabando de extracción continuará campante ante la mirada cómplice de nuestras autoridades.

Más aun, con el aumento del precio de la gasolina en materia económica, como es ya casi costumbre, el Gobierno ha entendido sus prioridades al revés. Lo que tenía que hacer primero era aumentar el precio de la gasolina lo suficiente para cubrir las

pérdidas operativas de P.D.V.S.A., en el suministro de este combustible al mercado nacional. La razón es obvia. En cualquier economía sana los ciudadanos deben pagar -por lo menos- lo que cuesta producir los bienes que consumen. Una vez cubierto este déficit improductivo, **entonces** y solo **entonces,** el Gobierno debe decidir cual será su política fiscal en relación -en este caso- con la gasolina y en cuanto eleva el precio, ya no para cubrir el costo de producción, sino para recabar ingresos fiscales adicionales. **Eso,** es lo que se hace en todos los países, donde el precio de la gasolina, **después** de cubrir los costos de producción y una ganancia razonable para el productor, incluye además un monto adicional con fines netamente fiscales. Y todo el mundo lo sabe y así lo acepta. Aquí no. Aquí para sincerar lo que se debe sincerar, cometemos la insinceridad de aumentarle el precio a la gasolina con fines exclusivamente fiscales, dejando que muchos piensen que ese aumento -en parte por lo menos- irá a P.D.V.S.A. No es así y P.D.V.S.A. ahora, en lugar de estar subsidiando a los consumidores está subsidiando al Gobierno. Está peor que antes, porque ya el Gobierno descubrió que puede recaudar recursos fiscales adicionales por la vía de un aumento de los precios de combustibles al consumidor local y mantener a P.D.V.S.A. operando a pérdida en el mercado nacional. Una artificialidad más, que habrá que desmontar el día que nos demos cuenta que no podemos seguir viviendo de engaños.

El punto de vista político (Un gambito exitoso)

Soy de los que cree que Caldera hizo una jugada política magistral al aumentar el precio de la gasolina antes de las elecciones de diciembre y no después.

En efecto, todo el mundo «sabía» y por lo tanto esperaba que ese aumento se produciría en enero o febrero del año próximo. De haberlo hecho así, Caldera hubiese sido predecible y el aumento de precios hubiese perdido el impacto producido por la sorpresa. Más aun, político predecible no es político

exitoso. Caldera sacó bien sus cuentas. Aquellos que votaron por él, no van a arrepentirse porque haya aumentado el precio de la gasolina, sobre todo en la forma como lo hizo, protegiendo a los «pobres» al reducir el precio de la gasolina barata. Con ese gesto, Caldera visiblemente cumple con su filosofía de justicia social (Las otras injusticias implícitas en esta decisión, no son aparentes para el mortal promedio). Más aun, dio una demostración bien calculada de coraje político. Y en ese cálculo estuvo su inteligencia. Calculó que el aumento no le restaría apoyo. Ahora -dos meses antes de las elecciones regionales- Caldera toma una decisión que bajo un análisis superficial lo perjudica. Pero que -por el contrario- le va a ganar los votos de aquellos que pensaban que todas las decisiones importantes estaban congeladas hasta después de las elecciones regionales de diciembre. Caldera recuperará esos votos que algunos de sus admiradores le habían retirado y quedará para muchos como un hombre de gran coraje que no subordina a consideraciones electorales las decisiones que hay que tomar, aunque sean impopulares. ¡Brillante!.

Además, la administración del conflicto social que el Gobierno se había empeñado en pronosticar como consecuencia de un aumento en los precios de la gasolina, puede ser manejado ya que los estudiantes -grandes usuarios del transporte público- están de vacaciones. Esto es importante porque disminuye el impacto inicial de la protesta. Este aspecto constituye un cálculo de mayor peligrosidad en sus posibles resultados negativos, que las razones meramente electorales ya comentadas. Si el Gobierno puede mantener el orden público, cuando se requiera la utilización de todo el transporte colectivo -entonces- el éxito político relacionado con el aumento de precios de la gasolina será absoluto. Sinceramente así lo deseo, aun cuando siga teniendo graves reservas sobre la forma poco transparente como fue manejado el proceso.

P.D.: Releo y releo lo anterior y no puedo sustraerme a

pensar en la suspicacias que pueden despertar mis comentarios. ¿Cómo es -se preguntarán muchos- que Alberto Quirós Corradi, experto petrolero, comentarista económico y político, que ha criticado al Gobierno por sus indecisiones, ahora que ese mismo Gobierno toma una decisión trascendente, justo antes de las elecciones regionales de diciembre, comenta desfavorablemente muchos aspectos de esa decisión?. ¿Es que Quirós será oposición si no se aumenta el precio de la gasolina y si se aumenta también?.

Corro a conciencia ese peligro y aclaro:

1) El aumento de la gasolina es una decisión que va en la dirección correcta.

2) Los aspectos políticos del proceso fueron manejados magistralmente por Caldera.

3) Los efectos económicos llevan sabor de engaño y de manipulación. Representan un agravio más a la administración independiente de P.D.V.S.A. Perjudican su caja y -peor aún- le resta credibilidad a una gerencia que -hasta hace pocos días- explicaba elocuentemente la necesidad de que se produjera un aumento en los precios de la gasolina, para mantener **su** buena salud financiera. Llegó el aumento, no le tocó nada a P.D.V.S.A. y no ha habido el menor comentario por parte de su gerencia.

De todas las consecuencias que traerá esta decisión del Gobierno, el silencio de P.D.V.S.A. es lo que más me preocupa.

Digan algo... ¡Por favor!.

Aunque sea para justificar la decisión del Gobierno con el argumento de que, dada la crisis financiera actual del Estado, lo recaudado por **este** aumento en los precios de la gasolina irá totalmente al Fisco, pero que los próximos aumentos irán a P.D.V.S.A. para compensarle sus perdidas operativas en la comercialización de la gasolina en el mercado doméstico.

Eso, no lo creería, como tampoco creí y así lo manifesté -en su momento- la promesa que hizo el Gobierno de C.A.P. de invertir, el producto de **su** aumento en los precios de la gasolina, en construir vialidad rural.

Yo, no lo creería, pero al menos le daría a P.D.V.S.A. una justificación para su silencio.

Y, preocupa mucho su silencio sin justificación.

21 de septiembre 1995

POLITICA

TORNEO DE INSENSATECES

TORNEO DE INSENSATECES

El título se lo debo a la vena creativa de mi buen amigo Anibal Latuff, recientemente pasado a la condición de ex-vicepresidente y ex-presidente (cargo que desempeñó por algunos días) del Consejo Supremo Electoral. En conversación sostenida, en Venezuela, en privado y sin inversionistas potenciales extranjeros presentes -por si acaso- y estimulado por las declaraciones del ministro de Hacienda realizadas el día 02/06/95, relacionadas con P.D.V.S.A., que comentaremos después, llegamos a la conclusión que detrás de tantas torpezas, debe existir un plan maestro que escapa a nuestra comprensión. Como cada acción parece responder a una torpeza mayor que la anterior, Anibal decidió que lo sucedido debería ser el resultado de un torneo de insensateces entre los protagonistas del quehacer oficial. ¿Qué buscan o cuántos y cuáles premios le esperan al ganador o ganadores del torneo?, es algo que resultó indescifrable para nosotros, ya que la única explicación racional para que fuese creíble tendría que contar con la aprobación activa del Presidente de la República y la respuesta pasiva de los otros poderes públicos... y ninguno de los dos (Anibal y yo), estamos dispuestos -**todavía**- a considerar ésa innombrable posibilidad.

De un rápido recorrido por acciones y declaraciones recientes, podemos extraer los siguientes ejemplos como demostrativos de lo competido que se ha vuelto el torneo de las insensateces.

El «Caso» Carlos Blanco (¡Calla o vete!)

Carlos Blanco es un venezolano talentoso, polémico y objetivo. Es todavía joven, y ya tiene una trayectoria pública reconocida y una posición clara ante los grandes problemas que afectan a Venezuela y a América Latina. Por esos méritos ha

sido, en los últimos años, Secretario General del CLAD, organización internacional que promueve la reforma del Estado y la gobernabilidad democrática en América Latina. Con anterioridad, Blanco, bajo los Gobiernos de Lusinchi y Carlos Andrés Pérez fue Secretario Ejecutivo y Presidente de la COPRE, organización que nunca se distinguió durante esos períodos por servirle de apoyo incondicional a los presidentes de turno. Por el contrario, fue un foro para discutir, analizar y proponerle soluciones a los grandes problemas del país. Allí están para comprobar lo dicho, múltiples estudios sobre la reforma del Estado y la educación por no mencionar sino a dos grandes temas y una lista impresionante de colaboradores, que es casi el «Quién es Quién» de Venezuela, sin distingo de ideología o afiliación política. En más de una ocasión los presidentes creyeron tener motivos para indisponerse ante algún boletín o declaración de la COPRE sin que se cuestionara las honestas motivaciones de Carlos Blanco. Paralelamente durante estas actividades en la COPRE y por muchos años antes Carlos fue un columnista leído y destacado por sus comentarios, a veces no exentos de cierto humor ácido y, en años ya pasados -con bastante agresividad- bajo algún seudónimo de todos conocido. Por lo tanto, no parece lógico suponer que cualquier Gobierno al cual Blanco le preste su colaboración bien directa o indirectamente, como en el caso del CLAD, pueda indisponerse por su condición de columnista nacional, siempre y cuando sus comentarios no pongan en peligro la supervivencia de la institución a la cual representa: El Gobierno si es ministro o la CLAD en el caso que nos ocupa. Esta es una tesis que he defendido públicamente en más de una ocasión (ver «La Lealtad Selectiva», en el mi libro «**El Diagnóstico de lo Imposible**», Caracas, 1986). Pues bien, el Consejo Directivo del CLAD debido, entre otras razones, a una crisis financiera interna, a la cual ha contribuido el Gobierno de Venezuela por haber recortado sus aportes en más del 60%, durante los años 1994 y 1995, decidió sobre la conveniencia de iniciar una reforma de

sus estatutos para poder reelegir o prorrogar el mandato del Secretario General. Todo con el fin de darle continuidad, en un momento difícil para la institución, a una gestión que a todas luces es considerada eficiente. De acuerdo con lo relatado por Carlos Blanco el Gobierno de Venezuela, a través del Dr. Ricardo Combellas (actual Presidente de la COPRE), envió una comunicación a la Presidencia del CLAD oponiéndose a lo propuesto por varios países, es decir, a la reelección o a la prórroga del mandato de Blanco. Por lo tanto, sin el apoyo de su país, Blanco entregará -dentro de unos meses- la Secretaría General del CLAD a un ciudadano de otro país al cual Venezuela deberá darle el apoyo para su nombramiento, que hoy le niega a uno de sus distinguidos ciudadanos.

Aparentemente la razón de peso del Gobierno de Venezuela para tomar esta decisión, es la de que Blanco escribe en los medios de comunicación. Ya que «esto es contradictorio con su condición de directivo de un organismo internacional». No entiendo lo de «contradictorio», ¿será más bien «incompatible», lo que se quiso alegar?. En todo caso, este tipo de razonamiento -si fuera la verdadera razón- francamente huele muy mal, ya que levanta la suspicacia asociada a la interrogante, sobre si se hubiese tomado la misma medida, o se hubiese alegado la misma razón, si Blanco escribiese a favor del Gobierno y no con contenido algo crítico sobre algunos aspectos de nuestro Estado. Máxime cuando hay altos funcionarios de este Gobierno que también escriben columnas de opinión.

En todo caso, la decisión sobre Blanco no hace sino agudizar y darle pie a la sospecha ya hecha pública por muchos que este Gobierno pese a los fuertes y, a veces, justificados alegatos del Presidente en sentido contrario, tiene características sectarias, pasa facturas políticas y no tiene, a todos sus niveles, la grandeza de tolerar disidencias sin cobrarlas de alguna manera.

No ayuda a la imagen internacional de Venezuela este tipo de retaliaciones, ni con Carlos Blanco hoy, ni con Rosario

Orellana, en tiempo reciente. No hay retórica oficial, por muy brillante y bien hilvanada que sea, que pueda compensar la desconsideración con la cual se ha tratado oficialmente a personas como Carlos Blanco, cuyo talento ha sido reconocido y apreciado más allá de nuestras fronteras.

Hay maneras mucho más elegantes de argumentar a favor de causas políticas y éxitos gubernamentales.

El Consejo Supremo Electoral (La Nueva Farsa)

Después de ocho meses de atraso la nueva directiva del Consejo Supremo Electoral se juramentó la semana pasada, con sólo cuatro caras nuevas dentro de sus once miembros principales. Los salientes fueron Isidro Morales Paul y Rubén Jaen, por renuncia y Anibal Latuff y J.A. Urbina por sustitución. Da algo que pensar, y no es en positivo, que nuestras Cámaras Legislativas (léase partidos políticos) después de idas y venidas y de contribuir activamente al descredito de un organismo como el Consejo Supremo Electoral, en el cual descansa la credibilidad y reglamentación de los procesos electorales nacionales y regionales, haya producido una solución tan poco diferente a la que ya existía. Máxime, cuando de hecho se había descalificado a más de treinta personalidades «independientes» al acusarlos de tener alguna relación con «otro» partido político y, por lo tanto, no poder confiar en que fuesen imparciales dentro del seno del Consejo Supremo Electoral. El mismo razonamiento, por extensión, se le tiene que aplicar a los miembros de los partidos políticos que están en el Consejo Supremo Electoral, los cuales por admisión propia y de las organizaciones políticas que los postulan están allí para representar, de frente, a los intereses de los partidos y no a los intereses nacionales... que no siempre son los mismos. De manera que ahora tenemos un nuevo Consejo Supremo Electoral, aprobado por los partidos políticos, cuyos miembros «independientes» fueron seleccionados por esos mismos partidos políticos y cuyas credenciales principales, no

son su competencia ni su habilidad para administrar un proceso electoral, sino la visión que sobre su no compromiso político tienen los partidos.

La conclusión inevitable es que, de acuerdo a esos mismos partidos, para ser miembro del Consejo Supremo Electoral, se requiere ser o un miembro de un partido político que defienda sus votos a como de lugar y no se los deje «robar» por otros partidos políticos, ya que la deshonestidad parece ser la constante presumida por los protagonistas del proceso. O un independiente que no tenga ninguna relación de amistad con los partidos políticos, ya que de ser esta su situación la presunción es que se comportaría igual que los miembros activos de los partidos y haría o condonaría las mismas trampas electorales que se supone todos cometen. Lo contradictorio, aun dentro de estas desagradables definiciones, es que algunos de los nombrados, no pasan ni siquiera la ridícula prueba de no ser amigos de alguna agrupación política. Y para defender esta farsa nos pasamos ocho meses con un Consejo Supremo Electoral sin poder y sin recursos. Perdiendo día a día su credibilidad y su capacidad de ofrecerle al país unos comicios limpios y eficientes. Pareciera una vez más que nuestros partidos políticos además de promulgar un nuevo adefesio, como lo es la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio, estuviesen empeñados, con el concurso de las organizaciones políticas que apoyan al Gobierno, a no tener elecciones en diciembre o a provocar una abstención electoral de tal magnitud como para «ganar» las elecciones con los sólos votos minoritarios de los fieles a sus causas.

Juego peligroso este de tener en el país un enorme caudal electoral potencial que no ejerció su derecho por desconfiar tanto del proceso mismo así como de sus protagonistas principales. Juego peligroso este de tener en la calle una mayoría no comprometida con los resultados electorales. Juego peligroso este de creer que una minoría raquítica le da a los poderes públicos la legitimidad que algún día reclamarán los que se ausentaron

voluntariamente del proceso. Juego peligroso este de tener una oposición desorganizada, frustrada y reprimida en el país, que algún día, cansada de tener paciencia, reclamará lo que considera sus derechos por cualquier medio... Ojalá que fuese por la vía de los votos, aunque ya esté desacostumbrada a participar en estos procesos.

Matos y P.D.V.S.A (La Retórica del Poder)

El sábado 03 de junio los diarios nacionales nos «sorprendieron», si eso fuese todavía posible, con unas declaraciones atribuidas al ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azocar. Según el diario El Universal de la misma fecha, Matos habría dicho lo siguiente:

- Se revisará el plan de inversiones de P.D.V.S.A. «para que contribuya un monto mayor al financiamiento del sector público».

- Se le harán ajustes a las tasas de contribución fiscal de P.D.V.S.A. «como se le está haciendo a las empresas privadas del país».

- Que algunas de las empresas de la industria petrolera «tienen costos de operación artificialmente elevados de manera de pagar menos impuesto sobre la renta».

- En lo que resta del año no se aumentará el precio de venta de la gasolina al público.

Dado a lo que se pudiera esperar como resultado de estas declaraciones, es importante señalar lo siguiente:

Sorprende que el ministro de Hacienda tenga que declarar públicamente que se revisarán los planes de inversiones de P.D.V.S.A. **Eso** se puede hacer sin alborotar a la ciudadanía y sin dar la impresión que P.D.V.S.A. pudiera tener planes de inversión desconocidos por el ministro de Hacienda. Algo mal anda en ese Ministerio, si el ministro del ramo tiene que apelar al público para revisar un documento que se supone reposa en su mesa de trabajo. El presupuesto de inversiones de P.D.V.S.A.

fue aprobado por su Ministerio en la ocasión de la Asamblea Anual de P.D.V.S.A. Fue discutido con CORDIPLAN, el Banco Central, el Ministerio de Energía y Minas y P.D.V.S.A., en una comisión que se formó cuando Gustavo Roosen era Presidente de P.D.V.S.A. ¿O es que ahora no se coordinan entre sí los Ministerios de la Economía, en aspectos tan sensibles e importantes como el monto de las inversiones de P.D.V.S.A?. Dada las declaraciones del ministro, me siento inclinado a retirar la pregunta. Nótese que no critico que se revise el plan que, como todo plan que se respete, tiene que estar permanentemente sujeto a revisiones y alteraciones. Sólo los planes oficiales, como el IX Plan de la Nación y sus ocho predecesores, gozan de tal perfección que cualquier intento de revisión durante su vigencia se considera un acto inamistoso e inaceptable en contra de la sabiduría oficial. Lo que se critica es la forma agresiva de anunciar un acto que debería ser rutinario. Que lo único que requiere es una convocatoria por teléfono a los ministros de la Economía y al Presidente de P.D.V.S.A., para discutir objetivamente la mejor forma de hacer ajustes a las inversiones o a los gastos operativos de ser conveniente. Pero un llamado dramático como el del ministro, diciendo que P.D.V.S.A. será tratada como «los demás», es caer en la inaceptable tentación de hacer un ejercicio de poder innecesario y un gesto casi de guapetonería inelegante. Pero el colmo de lo verdaderamente inconveniente por el cúmulo de declaraciones que puede desatar por parte de aquellos que buscan y aprovechan cualquier oportunidad para «tirarle piedras» a la «poderosa P.D.V.S.A.» o a un «Gobierno dentro del Gobierno», etc., es cuando el ministro dice que los costos operativos de P.D.V.S.A. son «artificialmente elevados», para pagar menos impuestos. Eso sería una acción dolosa. Un fraude a la Nación y parece, por lo menos, un atrevimiento peligroso que por boca del ministro de Hacienda se asome esa posibilidad. ¿Y porqué no investiga antes de disparar y presenta pruebas de estos posibles hechos, como lo pidió el propio Presidente de la República, en

su reciente discurso en el Poliedro, al referirse a las acusaciones de corrupción que se le hacen al Gobierno?. ¿O es que ahora para neutralizar otras acusaciones de corrupción vamos a convertir a P.D.V.S.A. en coto abierto de caza?.

Las otras dos aseveraciones del ministro no comprometen a P.D.V.S.A. directamente, pero en el caso del no incremento en los precios de la gasolina, se pone de manifiesto una enorme incoherencia en el establecimiento de políticas oficiales. ¿Cómo es posible que se considere más prioritario reducir inversiones reproductivas en la industria petrolera que reducir el enorme subsidio que le representa al Estado y a P.D.V.S.A. el precio actual de la gasolina?. Pareciera que el único producto nacional cuyo aumento en los precios producirá una explosión social es la gasolina. Las medicinas. Los comestibles de primera necesidad. Los artículos de uso diario, todos aumentan en forma exponencial en el país y **eso** parece ser aceptable. Pero a la gasolina le han creado una aureola de intocabilidad que raya ya en la irresponsabilidad colectiva. Además, ratificar en la misma declaración, donde se arremete contra P.D.V.S.A., una política costosa de subsidio permanente a la gasolina no es, precisamente, la manera más responsable de manejar la información oficial (Aunque se crea que no aumentar el precio de la gasolina y «controlar» a P.D.V.S.A., suene a «música celestial» a los oídos de muchos. Hay que tener el cuidado de no embriagarse demasiado con las notas de la irracionalidad por muy «bonitas» que suenen a veces).

Por último, la «amenaza» de ajustarle las tasas impositivas a P.D.V.S.A., en la víspera de la Apertura Petrolera, no hace sino alimentar las sospechas y prejuicios que tienen muchos para no invertir en Venezuela dada la fragilidad visible de su sistema jurídico y la volatilidad de las reglas del juego. Más aun, en el Congreso se discute, con mucho ahínco y preocupación, el problema de definir lo que significa el «control», por parte del Estado, de las empresas que se formen como resultado de la

Apertura Petrolera a la inversión privada. Se alega que bajo las disposiciones del Artículo 5to. de la Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos, el Estado debe tener control absoluto sobre la operación es decir, la capacidad de imponerle al socio sus decisiones y no un simple derecho de veto como lo propuesto formalmente hasta ahora. Con estos cambios en las reglas del juego, con los que amenaza a la industria petrolera el ministro de Hacienda, en materia impositiva, no creo que los inversionistas privados se sientan muy cómodos, ni confíen demasiado en que ese «control», de ser establecido, será ejercido por el Estado, con la racionalidad y la seriedad que impone una asociación donde el socio inversionista privado delegue en el socio/Estado el control de la empresa.

De nuevo debo advertir que el origen de cualquier malestar que se produzca en el exterior como resultado de este análisis, debe buscarse en las declaraciones del ministro y no en los comentarios que ellas susciten.

Otras «Menudencias» (La lista, aumenta)

El Informe del Contralor. Mejor dicho, las reacciones oficiales que ha provocado que rayan desde lo ridículo «nosotros tenemos irregularidades, lo anterior era corrupción», hasta lo irresponsable «el Contralor no sabe lo que dice. Que presente pruebas». Un informe como este, bien razonado y con consideraciones conceptuales importantes, en lugar de descartarlo como vehículo inútil, debería aprovecharse para que sirviera de instrumento rector para una revisión a fondo de las estructuras y las prácticas operativas de nuestra administración pública.

- **El acto del Poliedro**. Sin dejar de reconocer el derecho de toda organización política de dar una demostración de fuerza y de apoyo popular, hay momentos en las naciones donde se requiere de cierto pudor para promover a las instituciones.

Muchos ya se han preguntado como se financió el acto. Sería una buena lección de pedagogía política que Convergencia le saliera al paso a estas suspicacias y publicara un balance financiero de este acto, con dos simples columnas: Una explicando el origen de los recursos financieros y otra el destino que se le dio. Ambas, por supuesto, vinculadas exclusivamente al acto del Poliedro. Por ejemplo, de un lado contribución recibida de... y del otro «gastos de transporte», etc.

Por otra parte, aprobar unos estatutos para la organización por aclamación, en un acto festivo, sin ninguna posibilidad de discusión, podrá ser una demostración colectiva de confianza en el liderazgo, pero -que me perdonen mis amigos de Convergencia- no es la manera más pedagógica de hacer una demostración de democracia interna. Lo que a mi, personalmente me preocupa, es que Convergencia, como nueva agrupación esté dando demostraciones de poseer un estilo político que no tiene nada que envidiarle a las decadentes costumbres de los partidos del status. Peor aún, no sólo parece que se contaminaron rápido, sino que además están introduciendo unas cuantas innovaciones «autoritarias» de su propia cosecha.

Conclusiones (La obvia)

No se ve bien este, recientemente inaugurado, «Torneo de Insensateces».

No se ve nada bien.

Y **eso** es lamentable en un país ansioso de encontrar algo diferente en sus nuevas organizaciones políticas.

08 de junio 1995

EL DISCURSO

La Forma (breve, conciso, bien escrito)

En la forma, el discurso del Presidente - dicho en Miraflores el primero de enero de 1995- podría ser un modelo de lo que debería ser el discurso de Fin de Año de cualquier Presidente: Corto. Sin introducciones históricas que nada le agregan al presente. Claro. Conciso y con una cobertura de los principales problemas del país, tanto los que nos afligieron en 1994, como los que nos esperan en 1995 (que parecen ser los mismos). Si algo, uno podría criticar es la extensión de su última parte, dentro de la relatividad de lo corto del discurso, la cual ocupó aproximadamente el 14% del texto. «El orgullo de ser venezolano» (frase con lo cual terminó el Presidente su discurso) se ha visto bastante afectado por lo ocurrido en el año 1994. No puede ser motivo de mucho orgullo las cincuenta o más muertes violentas todas las semanas, solamente en Caracas. Ni el estado de nuestros hospitales y nuestras escuelas. Ni los comentarios internacionales sobre nuestros riesgos como país, ya no sólo para invertir, sino hasta para viajar a él. Ni puede dejar de producir rubor las razones corruptas de nuestra crisis financiera, ni la salida masiva al exterior de muchos de sus responsables. No es pues, en estos momentos, razón de mucho orgullo para nadie, la situación de nuestro país. Por eso, las invocaciones presidenciales, apoyadas en la próxima canonización de una Beata nuestra y la celebración del bicentenario de Sucre, no parecen ser apoyos suficientes como para compensar por lo negativo. Entre otras razones, porque la santidad de la Beata, Madre María de San José, se debe a no dudarlo, a la vida ejemplar llevada por la religiosa en su dedicación a aliviar la vida de los pobres. Lo cual enaltece a la Madre María de San José, pero también, nos recuerda la vieja historia de la pobreza en Venezuela aún - lamentablemente- no superada. Y el Mariscal de Ayacucho, es

también hombre meritorio, pero es parte de esa pléyade de héroes de nuestra independencia, en cuyas proezas, ya hace tiempo, muchos no encontramos alivio para reconfortarnos con la situación actual del país. Mayor tranquilidad me hubiese dado oír del Presidente, una invocación al rescate del orgullo nacional, tal como básicamente lo hizo pero acompañado de una oferta de parte de su Gobierno, de abandonar ciertos dogmas políticos y ofrecer su colaboración para que la sociedad civil emergente y los gobiernos estatales y municipales pudieran participar, en forma más activa y coordinada, en la solución de los problemas del país a nivel regional aunque, a nivel nacional, tengan divergencias con el Gobierno Central. El Gobierno **no** es uno solo, como sugiere el Presidente. Tienen, si, los diferentes gobiernos (nacional, regional y municipal) la obligación común de «servir a la gente». Pero esto no quiere decir que no hayan diferentes maneras de cumplir con esta obligación. Por supuesto que no pueden haber «veinte y dos gobiernos nacionales» en el país, pero tampoco puede haber «uno solo», ya que este intento lo que ha provocado, hasta ahora, es una duplicación de esfuerzos para tratar de hacer las mismas cosas, por parte del poder central y los gobiernos regionales y municipales ante las dificultades estructurales que se han presentado para lograr una efectiva y eficiente transferencia de competencias del centro a la periferia. Es pues, largo y posiblemente equivocado e inconveniente -en la forma y en el fondo- el remate presidencial a un bien estructurado discurso, sobre todo -como ya hemos dicho- en la forma.

El Fondo (El Arte de la Omisión)

La Introducción. En esta breve sección se encuentran referencias y comentarios relacionados con: La lucha contra la corrupción (a no dudarlo que se han hecho esfuerzos serios en este sentido). El modus-vivendi encontrado entre los poderes públicos (Cierto, aunque el intercambio verbal entre la comisión

del Congreso y el Presidente en el acto de participación al Presidente de la clausura de la sesiones ordinarias del Congreso, pudiera tomarse como el anuncio de un posible deterioro en ese modus-vivendi). La necesidad de una reforma constitucional (Por cierto que sería interesante conocer la posición del Presidente en cuanto al contenido de la reforma, ahora que parece haber modificado algunas de sus posiciones pre-electorales. ¿Estaría Caldera dispuesto a sugerir una reducción en el sesgo estatista de la Constitución actual?. ¿Qué recomendaría como texto para describir los derechos ciudadanos en materia de educación y salud?. ¿Qué posición tomaría en cuanto a la profundidad y flexibilidad del proceso de descentralización?. ¿Qué atribuciones le añadiría a los gobiernos regionales en materia fiscal, por ejemplo?).

- **Las Fuerzas Armadas**. Un comentario discreto y apropiado que no pudo, sin embargo, evitar la eterna reiteración por parte de nuestros gobernantes civiles de la disposición de las Fuerzas Armadas a «sostener y defender la soberanía nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas». Que es algo así, como decir, que nos encontramos satisfechos porque el ministro de Agricultura y Cría reiteró su disposición de ocuparse de la agricultura y de la cría. El día que un Presidente en su mensaje anual, elimine esa referencia, ese día me convenceré de que la subordinación del poder militar al poder civil, en Venezuela, está en vía de convertirse en una actitud incondicional.

- **Dignidad de nación soberana**. Se recuerda en esta parte del discurso nuestros compromisos con las integraciones regionales, las reuniones hemisféricas que se han celebrado y las visitas que dignatarios extranjeros han hecho a nuestro país. Se mencionan también, los esfuerzos en defender nuestros intereses comerciales en el exterior, tanto en el caso de la gasolina reformulada en los Estados Unidos de Norteamérica y la orimulsión en la Unión Europea. Se habla, también, de tomar todas las medidas para «salvar al país» y «garantizar los derechos

humanos, entre los cuales, quizás, el más preciado es la libertad». Aquí el Presidente pisó terreno peligroso para la credibilidad de su discurso. Si la mejor definición de libertad es aquella de Le Torqueville: «Libertad es poder hacer todo lo que permite la Ley», y si la suspensión de las garantías constitucionales, reduce el ámbito de «poder hacer lo que permite la Ley», entonces, no puede haber duda que nuestra libertad está restringida y, por lo tanto, no parece el mejor momento para que el Presidente mencione «la soga en la casa del ahorcado». Sobre todo, si existen serias dudas sobre la legalidad de su decisión de suspender las garantías constitucionales, a pesar de la opinión desfavorable, al respecto, del Congreso Nacional, que para muchos era -ni más ni menos- una revocatoria de la decisión presidencial.

- **La crisis del sistema bancario**. Se hace un buen, aunque incompleto, resumen de la crisis financiera. Del drenaje de las reservas internacionales y de la necesidad de establecer un control de cambio, para evitar una continua devaluación del bolívar y «una violenta reactivación de la presión inflacionaria». La omisión está en no hablar del billón y algo de bolívares que, con dinero inorgánico, se destinó a inyectarle recursos monetarios a bancos insalvables y a reconocer que esta decisión sí es la principal causa de la inflación. Esta inflación no desaparecerá hasta que esa enorme masa monetaria le sea devuelta por Fogade al Banco Central de Venezuela, para que éste la ponga a buen recaudo, para no obligar al B.C.V. a continuar imprimiendo dinero inorgánico.

Se menciona, también, un auge sin precedente en las exportaciones no petroleras, con el sector privado como responsable por más del 67% del esfuerzo (Ojalá que estas exportaciones respondan al desarrollo de una verdadera ventaja competitiva de nuestros productos y no a la desesperación de tener que exportar, a cualquier precio, para mejorar el flujo de caja en nuestras empresas, dada la caída -por lo menos al comienzo del año 1994- de la demanda interna). La cuenta

corriente obtuvo un superávit fuerte y la inversión extranjera fue más del doble de la del año anterior.

La presión inflacionaria. El mensaje es que una inflación del 70% no es para sentirse feliz, pero es menos mala de lo que pronosticaban los «profetas económicos que tanto abundan». Se aprovecha la coyuntura, para criticar también, los pronósticos negativos de «organismos de la seriedad del Banco Central». Se justifica, por esta misma inflación, la imposición de un control de precios, aunque se tiene buen cuidado de aclarar que: 1) El número de artículos de precios controlados es bajo. 2) Los precios máximos se fijaron tomando en cuenta los costos de producción más una ganancia razonable. 3) No hubo desabastecimiento. Se mencionan los ajustes de salario en el sector público y de las pensiones del Seguro Social Obligatorio.

La omisión está en no mencionar las medidas urgentes a tomar en política monetaria, política fiscal y administración de la tasa de cambio, a fin de reducir la inflación para el año 1995.

Educación y Salud. Unas pocas líneas sobre estos importantísimos sectores de la vida nacional, nos hacen saber que la tarea de rescatar la educación está en marcha y ha comenzado por la dignificación del maestro. Lo que se omite, es que no sólo se trata de dignificar, sino de profesionalizar y elevar el nivel del maestro. Un reciente estudio de la Universidad Central de Venezuela, destaca «el analfabetismo funcional de un porcentaje importante de nuestros maestros. No entienden lo que leen. No saben de sintaxis. Por supuesto, es casi ininteligible lo que escriben y les es difícil desarrollar un tema en forma coherente y pedagógica» («La Bola de Cristal». Alberto Quirós Corradi. **Ya Dios no es venezolano**, 1995). Poco tiempo después de haberse dado a conocer -públicamente- por los medios de comunicación, los resultados del estudio de la U.C.V., una polémica entre la profesora universitaria y experta en materia comunicacional, Martha Colomina, con el profesor Rudecindo Oberto, presidente de Fetra-Enseñanza, puso de manifiesto, de

manera por demás visible, los hallazgos de la U.C.V. En efecto, la profesora Colomina en forma clara y en un artículo muy bien escrito destacaba -según su criterio- algunas de las fallas de nuestro sistema educativo y los males que cierto gremialismo, mal entendido, le causaba a la educación en general. La respuesta no se hizo esperar. Lo que si se hizo esperar fue una argumentación bien hilvanada y mejor escrita, por parte del profesor Rudecindo Oberto, quien se limitó a intentar desarrollar una especie de texto-manifiesto, cuyos enredos conceptuales y falta de sintaxis hicieron las delicias de la profesora Colomina, quien se dio banquete con su respuesta al presidente de Fetra-Enseñanza. Notése que no tomo partido en cuanto al fondo del debate, entre otras razones, porque el profesor Rudecindo Oberto en su respuesta no me dio material «didáctico», como para contraponerlo a la argumentación de la profesora Colomina. Pero si debo destacar, la pobreza de expresión, la ausencia de argumentación pertinente y la incoherencia manifiesta en el desarrollo del tema, como elementos claramente presentes, en la respuesta del profesor Rudecindo Oberto...Y eso es, tanto o más grave, que si la profesora Colomina tuviese razón en su planteamiento.

Ya no quedan, ni grandes excusas, ni pequeños remedios, para empezar a solucionar el problema de la educación. Como he dicho en otras oportunidades, el actual ministro de Educación, el profesor Cárdenas, tiene los conocimientos técnicos para orientar nuestra educación en el camino correcto, pero tendrá que enfrentarse a numerosos intereses creados dentro del sector, y a un gremialismo que ha perdido la brújula de lo cualitativo y ha sido un pésimo defensor de los aspectos cuantitativos del magisterio (Lo cual no es extraño. No puede haber uno sin lo otro).

En materia de salud pública, donde también parece haber un ministro competente y trabajador, se mencionan como éxitos obtenidos el haber mejorado la situación económica del personal,

haber adelantado el proceso de descentralización y haber tenido éxito en un programa masivo como el de la vacunación contra el sarampión. Todo lo cual está «bien». Lo que no está tan «bien» son los casos ya rutinarios de personas conocidas que arrastran por los hospitales del Estado la angustia de saberse abandonados de los más elementales cuidados de la ciencia médica. Lo que prevalece es la ausencia de interés en el enfermo y la deliberada costumbre de mirar para otro lado, cuando se preside sobre el acto de la muerte de un paciente, cuya definición de tal, obedece más a la acepción de un ejercicio de paciencia, que a su otro significado de estar al «cuidado» de algún médico.

Años de observación del deterioro de la educación y la salud, me han llevado a la conclusión de que a la lista de responsables por el estado de abandono de estos servicios hay que agregarle a los usuarios y a sus familias. No es posible continuar mirando con indiferencia la negativa enseñanza que se les ofrece a nuestros niños, y con paciencia rayana en la irresponsabilidad, presenciar la muerte de un familiar por falta de recursos y atención médica en nuestros hospitales. Cuando un pueblo mira con resignación como se muere un ser querido, por indiferencia y negligencia de los servicios médicos del Estado, mirará con la misma resignación a los ciudadanos anónimos que asesina el hampa todas las semanas en Venezuela. Cuando no se respeta la vida, queda muy poco por respetar. Cuando se es indiferente a la muerte innecesaria, quedan muy pocos valores en la sociedad por los cuales lucharán sus ciudadanos.

Si, en materia de salud pública, nuestras comunidades no se despiertan de la convicción irresponsable de que el Gobierno sólo les va a solucionar el problema, descubrirán, más temprano que tarde, que sus vidas no valen nada... para nadie. ¿Para quién van a valer, si no valen nada para los que aún están vivos?.

Las soluciones de los problemas de educación y salud, tienden a perderse en los mensajes presidenciales, que son necesariamente un recuento del corto plazo. Pero un Presidente

como Caldera, que descansa una buena parte de su prestigio político en su sensibilidad social, no puede «salir» de esos problemas con comentarios «pro-forma» como los incluidos en su discurso. Muy pronto, por no decir inmediatamente, tendrá que dedicarles a estos dos sectores una buena parte de su tiempo... y hacérnoslo saber a todos.

Política económica. Se menciona el Programa de Estabilización y Recuperación de la Economía (P.E.R.E) como «acogido con general beneplácito por todos los sectores de la sociedad civil» (Esta aseveración es, por lo menos, una exageración). Este programa ha sido vapuleado en universidades, foros, mesas redondas, por la prensa, la televisión y la radio y, ha sido considerado por la mayoría de nuestros economistas como un programa que no arrancó. Aclaro que, personalmente, creo que ha sido criticado en exceso. Pero, objetivamente, no puedo compartir -ni de lejos- el optimismo presidencial en cuanto a su elevado grado de presunta aceptación pública. Se habla de que las universidades consumen el 5% del presupuesto, pero no se recomienda alternativa alguna para su funcionamiento no gratuito o su posible generación de fondos propios por diferentes vías. Se afirma que nuestra economía tiene una gran solidez estructural, cuando lo que ha tenido -hasta ahora- es una infinita capacidad de soportar todos los errores de política económica cometidos a la fecha, que es otra cosa.

Sobre política petrolera y minera, se destaca su apertura al capital privado, aunque se prefiere limitar el comentario a las «asociaciones estratégicas», cuando las modalidades para la apertura son bastantes más amplias que lo que esa definición sugiere. Hay menciones sobre la posibilidad del turismo para atraer inversiones y generar divisas. La reforma tributaria. El castigo a la evasión fiscal. La promesa de implantar en 1995 el sistema de concesiones para obras de real importancia. La mejora considerable de la producción agrícola. Se reconoce que la recuperación de la crisis no será inmediata, que falta mucho por

hacer y que el desempleo, si bien es algo alto, no pasa del 8.9% (Parece muy baja esta cifra). Se recalca el interés del Gobierno en la pequeña y mediana industria, aunque haya que sospechar que éste debe ser el sector más afectado negativamente por políticas tales como el control de cambio.

El problema de la inseguridad. Se menciona no sólo la inseguridad personal sino también las enormes deficiencias en nuestro sistema carcelario y el problema de la inmigración ilegal. Todo lo cual es cierto. Pero en el comentario sobre este aspecto aparecen muy poco, en la palabra presidencial, sugerencias sobre cómo se atacarán estos problemas. Cierto es que se habla de depuración de los cuerpos policiales, incorporación de la sociedad civil (concretamente las organizaciones vecinales) a los análisis y soluciones de esta crisis de inseguridad personal e institucional. Pero falta el plan global. Aquel que enmarque en una megasolución todos los elementos que, hasta ahora, se han venido mencionando en forma aislada. La violencia tiene demasiadas caras, demasiadas causas y demasiados aliados para poder atacarla exitosamente con paños tibios aislados. Como en los casos de educación y salud, la inseguridad personal tendrá que ser enfrentada por todos en forma masiva y desde variados ángulos, ya que se nutre de demasiadas fuentes: La pobreza crítica. Las fallas de los sistemas de educación y salud. La corrupción de la justicia. El caos social de nuestro sistema carcelario. La marginalización de la clase media. La destrucción del núcleo familiar. La ausencia de campos deportivos populares y asociaciones culturales vecinales y, muchos otros.

Las fronteras y el Sur. Aparece en esta sección un reconocimiento importante a las políticas de mediano y largo plazo, concepto que se aplica en este caso, al control de nuestras fronteras y al desarrollo potencial del Sur. Son apenas dos párrafos, pero llenos de sugerencias positivas.

El orgullo de ser venezolano. Ya fue comentado al comienzo de este trabajo.

Conclusiones:

Un buen discurso, sobre todo en la *forma*, con algunas omisiones importantes en el *fondo* del mensaje.

Las principales omisiones son:

- La falta de definición y análisis de las variables de políticas económicas que se manejarán, a fin de combatir la inflación.

- La falta de una mención clara sobre la política de privatización.

- La falta de un comentario, más sustantivo, sobre la reforma constitucional.

- La falta de un comentario sobre los aportes del Estado a las instituciones financieras en crisis y su impacto sobre el déficit fiscal.

- La ausencia de un compromiso a mediano y largo plazo para comenzar las reformas de nuestros sectores de educación y salud.

Pero quizás, la omisión más importante, es no llamar a las cosas por su nombre. A un exceso en el uso de eufemismos para evitar una definición cruda del problema. Por eso, palabras como mercado, apertura y privatización se esconden detrás de definiciones vagas, mientras que, por otra parte, se abusa de palabras como justicia social, solidaridad y orgullo de ser venezolano. El Presidente advierte que algunas de sus melosidades no son populistas. Lo son. No tanto por su uso en si, sino por **su** uso y el **no** uso de otras palabras que describen mejor a nuestra sociedad.

Quizás en su mensaje del próximo año, al referirse a 1995, el Presidente pueda usar el mismo formato de discurso que usó el 1ero. de enero de 1995, con un contenido más rico en soluciones y proposiciones concretas.

Estaremos, otra vez, pendientes del televisor el 1ero. de enero de 1996.

05 de enero 1995

Alejandro Izaguirre

No puedo dejar que comience el nuevo año sin expresar mi alegría por el indulto presidencial concedido a mi buen amigo, Alejandro Izaguirre. Me satisface que haya terminado su pesadilla. Pero me duele que un hombre honesto tenga que haber sufrido las presiones desmoralizadoras de haber sido sometido a la vergüenza pública, dentro de un proceso que para muchos -incluyéndome a mi- nunca tuvo, ni ha tenido, la solidez argumental necesaria como para generar las consecuencias que produjo en las vidas de los enjuiciados.

05 de enero 1995

LA CORRUPCION TRANSACCIONES Y RECIPROCIDADES

Las viejas transacciones (La cabra de Mesopotamia)

El problema mayor de la corrupción, y de su rama más gruesa: el soborno, es que -dígase lo que se diga- es practicada y tolerada por personas a las cuales la sociedad las tiene como honestas. Más aun, la línea que divide el acto corrupto del acto honesto es -a veces- muy tenue y la costumbre puede hacerla invisible. Por ejemplo, en Venezuela, fue siempre costumbre pagarle a un «gestor» una cantidad fija, por obtener el título de chofer. No conozco a nadie que haya cumplido con todos los trámites que imponía la vieja legislación sobre la materia para obtener ese «título». ¿Era eso un acto de corrupción?. ¿El hecho de que fuera universalmente practicado, en alguna forma disminuía la «inmoralidad» cometida?.

Robert Mabro, profesor del Saint Anthony's College de Oxford, al explicar la caída del Shah de Irán, introducía el tema recordando que todas las sociedades tienen una base (un porcentaje) de corrupción tolerable. Es solamente cuando se rompe el equilibrio de lo tolerable y se sustituye por el exceso, que la sociedad pide castigo para el corrupto. El Shah de Irán, en la versión de Mabro, violó el acuerdo tácito entre el Bazar y la Religión sobre la corrupción permisible, a favor del Bazar, y eso provocó la indignación popular y su caída.

Según algunos, no existe tampoco el hombre totalmente corrupto, ya que nadie **violará** siempre, **todas** las leyes vigentes en una sociedad y eso nos lleva a la conclusión que, de ser juzgado por el cumplimiento de **todas** las leyes, en un momento dado, no existiría -tampoco- el hombre totalmente honesto. Lo cual desvirtúa la especie, popularizada en un refrán muy conocido, que compara la honestidad con el embarazo. Pues, si bien es cierto que no se puede estar medio embarazado, no es menos

cierto que sí se puede ser medio honesto o medio corrupto, de acuerdo en donde se pretenda poner el énfasis.

De acuerdo con John T. Noonan Jr., quien para muchos ha escrito el tratado definitivo sobre la corrupción, con énfasis en el soborno, («**Bribes.The Intellectual History of a Moral Idea**».University of California Press) dice en su introducción al tema que: El juicio sobre la corrupción en cualquier país no descansa necesariamente en datos estadísticos, ya que en el soborno actúan variables que hacen sumamente difícil su cuantificación: 1) El acto es criminal y consensual, las víctimas reales -por lo general- no conocen el acuerdo que las afecta personalmente (Por ejemplo, sobornos que «agilizan» ciertos procesos legales para la importación de bienes y servicios, pueden encarecer el precio de éstos al público que, por lo general, ignorará estas transacciones, y aun cuando las sospeche, no conocerá con exactitud los montos involucrados). 2) Las acusaciones de sobornos en muchas ocasiones están motivadas políticamente o se hacen para satisfacer ciertas necesidades sociales y psicológicas. No se puede juzgar, pues, por la sola acusación si ha habido o no corrupción. 3) La magnitud de la atención legal que recibe la corrupción es engañosa. En algunas sociedades no se le aplicarán estrictamente las leyes en el caso de soborno a los pequeños burócratas, y la impresión estadística, dada la ausencia de sentencias condenatorias, pudiera ser la de un sistema honesto. En los casos, donde se castigan implacablemente todos los actos de corrupción oficial, la impresión pudiera ser que el sistema es corrupto, aun cuando los casos juzgados continúen siendo la excepción. La existencia de la ley y su aplicación no es, pues, necesariamente un buen indicador para medir el grado de corrupción de un sistema social. 4) La falacia del hombre totalmente corrupto o totalmente honesto, que ya hemos discutido.

Finalmente, es muy difícil interpretar los estándares de una sociedad, cuando ésta se examina desde afuera o con el enfoque

del historiador. El observador externo, como el cínico o el extremadamente riguroso en lo interno, reducirá todas las transacciones y reciprocidades a la simplicidad de una sola interpretación (Por ejemplo, ¿el hecho de recibir cualquier regalo por parte de un empleado público, debe interpretarse como un acto de soborno?. O, ¿una «propina» a los empleados públicos, es algo aceptable, común y corriente o es una forma de complementar una insuficiente remuneración?).

Desde los años de la antigua Mesopotamia existía el concepto de reciprocidad entre la autoridad y el ciudadano y **eso** era lo normal y lo moral. Noonan, cita la historia de un ciudadano de Nippur, llamado Gimil-Ninurta, quien visitó al alcalde y le llevó una cabra. El alcalde le preguntó que esperaba de él, ya que le ofrecía un regalo. El ciudadano le entregó la cabra e imploró sus bendiciones. El alcalde celebró un festín con la cabra, pero sólo le dio al ciudadano un hueso y cerveza rancia. El ciudadano juró venganza y visitó al Rey y le ofreció una mina de oro a cambio de que le permitiera usar por un día el Carruaje Real. El Rey accedió y el ciudadano, en el Carruaje visitó -sin ser reconocido- al alcalde. El alcalde lo alojó en su casa y el ciudadano, durante la noche, abrió un cofre que llevaba vacío y acusó al alcalde de haberle robado el contenido. Seguidamente, amparado en el presunto apoyo real que sugería el uso del Carruaje, ordenó darle al alcalde tres palizas por su crimen. El alcalde, entonces, aplacó la «ira» del ciudadano, «regalándole» dos minas de oro. La moraleja es que el alcalde no pecó por recibir el regalo del ciudadano. Pecó por no reciprocar lo recibido. El Rey actúo «bien» ya que recibió una mina de oro y dio reciprocidad mediante el uso de su Carruaje Real. Y el ciudadano tuvo razón en reclamar sus «derechos» (La reciprocidad por lo regalado). Bien clara era, pues, la moralidad de la sociedad de Mesopotamia. La autoridad «recibía» los regalos de los ciudadanos pero tenía que dar algo a cambio. En algunas sociedades modernas la costumbre no ha cambiado mucho, así

como tampoco ha cambiado en algunas religiones, donde se espera que las «contribuciones» que se le hacen a la deidad, sean correspondidas por algunos favores de su parte.

Las sociedades y los sistemas políticos se han modificado desde los tiempos de Mesopotamia. De alguna manera, la reciprocidad del «yo te doy», «tú me das», de la época, representada por una transacción directa y cara a cara entre las partes, ha sido sustituida, en lo político, por las contribuciones a las campañas electorales de los candidatos a ocupar posición oficial. Las pequeñas contribuciones anónimas y aquellas hechas para evitar que gane el opositor, o por una convicción desinteresada de que el candidato representa lo mejor para el país, no pueden considerarse como «sobornos», ni generan una expectativa de reciprocidad. Sin embargo, por lo general, las grandes contribuciones a las campañas electorales, en el mejor de los casos, están hechas para garantizarle al contribuyente el acceso directo al candidato al resultar éste electo. O en el peor de los casos, a la compra de un compromiso por parte del candidato para que éste tome ciertas decisiones que favorecerán al contribuyente. Como en la Mesopotamia de 1500 años antes de Cristo, lo que se espera es la reciprocidad por parte del hombre público y, como en Mesopotamia, lo que se condena no es que éste reciba la contribución, sino que no cumpla con su parte del convenio.

Venezuela (Las nuevas transacciones)

En Venezuela -de acuerdo al concepto de Mabro- el problema de la corrupción debería haber roto ya, hace tiempo, el porcentaje de lo tolerable en toda sociedad. No obstante, parece haber ocurrido entre nosotros un fenómeno curioso de adaptabilidad colectiva a cada nuevo equilibrio que impone el auge de la corrupción. Casi sin notarlo, hemos superado la corrupción de las comisiones pagadas a los altos personeros del Gobierno de Pérez-Jiménez, las cuales han sido prácticamente

perdonadas por el nuevo juicio colectivo, bajo el razonamiento de que en esa época «el Presidente y los ministros robaban, pero las obras se terminaban y se hacían bien». Eso, naturalmente, al contrastar lo hecho y concluido entonces con -por ejemplo- la autopista de Oriente, donde se supone muchos han robado, la obra no se ha terminado todavía y nadie está totalmente seguro de las bondades técnicas de lo hecho a la fecha. La nueva corrupción se caracteriza por lo inconcluso y por una complicidad entre los actores que tiende a optimizar la reciprocidad mediante el expediente de disminuir la calidad de lo público. Esta disminución de la calidad, no está representada -exclusivamente- por el uso de materiales defectuosos en obras, cuyos costos deberían garantizar su excelencia, ni en el abandono a medio camino de lo que ya se pagó para ser terminado. Está también representada en la ejecución de proyectos innecesarios o en el cobro de obras fantasmas, nunca iniciadas. En el chantaje aduanal de retardar la salida de productos perecederos, a menos que se reciba un pago «especial» y en una multitud de reciprocidades artificiales que afectan, no ya al ciudadano de Mesopotamia que le regala una cabra al alcalde, sino a toda una sociedad que se ve perjudicada en sus deseos de desarrollo y modernización por las transacciones criminales de **muchos**, ante la conducta pasiva y tolerante de **todos**. No ha habido -pues- ruptura del equilibrio social en Venezuela ante el aumento de la corrupción. Por el contrario, el aumento de la corrupción lo que ha hecho es aumentar el porcentaje de la corrupción tolerable en nuestra sociedad. Trágicamente lo que esto significa es que ahora hay una corrupción mucho más generalizada y con mayor participación activa y colectiva que nunca (el vaso de leche escolar, está castigado, no solamente por el sobreprecio en su importación, sino también por sus mecanismos de distribución y consumo).

Todo lo cual se explica por una pérdida de valores elementales por parte de nuestra sociedad. Valores que nunca

antes habían sido cuestionados por considerarse parte inseparable de nuestra convivencia social: El trabajo, como una actividad enaltecedora. El ahorro como un acto responsable. El respeto al derecho ajeno como una protección al derecho propio. La honestidad como una virtud a ser exhibida.

Y **esos** valores se pierden por el deterioro de la educación. Por la prostitución moral que significa el vivir del favor del Estado. Por el desarrollo de los antivalores sustitutivos de la sencillez de ayer. Las transacciones en busca de reciprocidad entre la autoridad y la ciudadanía ya han llegado a la aceptabilidad colectiva de la antigua Mesopotamia. Sólo que ahora hay más de una cabra en juego y más de un ciudadano afectado por la transacción.

La transacción entre el sistema bancario y el Estado le ha causado al país una crisis insalvable a corto plazo. ¿Cuáles fueron las reciprocidades establecidas en este caso?. ¿A quiénes beneficiaron?. ¿Porqué no se pudo privatizar y salvar a la Línea Aeropostal Venezolana?. ¿Cuáles son las transacciones, en juego, que dificultan la solución racional de los problemas de las empresas de Guayana?.

En Venezuela, es hora de empezar a analizar la corrupción como la sumatoria de transacciones y reciprocidades. A veces, no son ni siquiera los actores directos en la transacción a los que hay que buscar. También, hay que identificar a los que estimulan al entorno para que se mantenga ambiente propicio a estas transacciones. Hay que buscarlos entre los que se oponen a la reforma educativa. A la humanización de la salud. A los corruptores de la administración de la justicia. A los diseñadores de normas y procedimientos, complejos e incoherentes, que resultan en la imposición de controles que invitan a las transacciones colectivas cuyas reciprocidades son «acelerar» los procesos. A los que se burlan de las virtudes corrientes como cosas de «pendejos».

En Venezuela, el problema de la corrupción es grave, muy

grave, por la sencilla razón de que en las transacciones entre el Estado y algunos ciudadanos, la reciprocidades establecidas le están costando a los demás ciudadanos un altísimo precio. Porque, además, hay un grupo de promotores indirectos de estas transacciones que no aparecen como actores directos en el establecimiento de las reciprocidades, pero que se benefician enormemente de ellas. Porque una transacción en particular, la que «administró» la crisis bancaria, le ha demostrado al país por primera vez, en forma visible, que la «viveza» que se ve tan atractiva en las exhibiciones de bienestar de algunos, requiere de una pléyade de tontos que la financien.

Ahora, en Venezuela, la mayoría está viendo en el espejo las arrugas de sus viejas convicciones... y empieza a dudar de la conveniencia de seguir aclamando a los «vivos» de ayer.

Si de la duda se pasa a la rabia y al rechazo total, habremos dado un importante **primer paso** en la lucha por restablecer el viejo equilibrio moral de nuestra sociedad.

Pero solamente el primero...

P.D.: Si se analiza la corrupción como un conjunto de transacciones y reciprocidades establecidas entre diferentes grupos de nuestra sociedad, ante la impotencia de la mayoría, se podrá apreciar lo absurdo y lo inoperante que es nombrar a un Comisionado Anticorrupción. No se debe pretender concentrar, lo que debería ser un esfuerzo colectivo de una sociedad para purificarse a si misma, en la imagen de un símbolo errante que se ocupará de investigar las transacciones que se denuncian, o porqué compiten con otras transacciones mayores, o porqué no ofrecen las reciprocidades esperadas. Para cualquiera que medio comprenda el proceso de la corrupción en Venezuela y la penetración profunda que ella ha logrado en todas nuestras actividades diarias, el nombramiento de un Comisionado Anticorrupción es una transacción más, cuya reciprocidad será una focalización en lo micro e individual de un acto de corrupción,

mientras que las transacciones mayores, aquellas que ya forman parte de nuestro tejido social, seguirán impunes, por estar integradas al ya elevado porcentaje de corrupción tolerado por nuestra sociedad.

Por otra parte, la concentración en una sola persona del sentimiento de culpa y la búsqueda de soluciones, es la nueva forma cómoda que ha encontrado nuestra sociedad para lavarse las manos de un problema que nos afecta a todos.

Lamento que el Presidente nos haya estimulado una nueva evasión.

02 de febrero 1995

MI VECINO EL CULPABLE

Peter Travers en la revista «Rolling Stones», de septiembre de 1994, critica negativamente la película «Natural Born Killers» (Nacidos para Matar), dirigida por Oliver Stone, no tanto por ser un catálogo de la violencia que sacude al mundo contemporáneo, ni por su realismo convertido casi en excesos «busca shock» sin una verdadera condena de una sociedad que tolera tales excesos. !No!. La crítica de Travers está dirigida al director Stone, quien como un «pobre diablo» cualquiera («Chicken Shit») con algún talento para los efectos especiales, se aísla detrás de la cámara de todo compromiso personal con lo que sucede en su película. Sostiene en sus manos un espejo que refleja la amargura del mundo de hoy, pero no tiene la grandeza para mirarse en él. Sus cámaras nos llevan a la contemplación de un mundo brutal, mientras que él -el director- se mantiene aislado, en su olimpo, como pasándole juicio a una humanidad de la cual no forma parte. Pero ni siquiera se lamenta por la **realidad** de lo que sucede. Por el contrario la explota.

En ningún momento se sugieren las causas que impulsan a nuestra sociedad a su comportamiento obsceno. En su lugar Stone, en la expresión gráfica de Travers, se esconde detrás de su agresivo estilo cinematográfico, «negándole a la película lo que más necesita: un latido del corazón».

Travers debe estar demasiado sumergido en sus propias actividades como para darse cuenta de que lo que le critica a Stone es -precisamente- la característica individual más dominante de nuestra época: La habilidad de contemplar el desastre social actual sin sentirse parte del problema. Es más, hasta los actores más violentos de la crisis de valores contemporánea se dan pausa para contemplar otras miserias sin sentirse parte de ellas. Así hay asesinos que lamentan el auge en el uso de las drogas, condenan las muertes que causan, mientras

que no les tiembla el pulso para asesinar por «otras razones y otros medios». Bien conocida es, entre algunas «familias» de la mafia norteamericana, su reticencia inicial a participar en el negocio de las drogas. Por otra parte, son también conocidos los valores familiares tan fuertes que tienen algunos importantes traficantes de drogas y los miembros de la «Cosa Nostra». Es más, la Mafia pretende ser en sus valores de lealtad y compromiso, una Gran Familia.

En momentos críticos de nuestra historia como nación, Tomas Lander, en una definición que pretendía resumir la angustia de lo inexplicable, nos redujo a una sociedad de cómplices. Era y es peor que eso. Para ser cómplice se requiere de una decisión consciente para intervenir y participar activa o pasivamente en las grandes decisiones que afectan a nuestro futuro. Apoyar visiblemente los parámetros que definen al oportunismo (cómplice activo). O a presenciar el proceso sin intervenir en él, pero con el secreto deseo de que algo les toque en el reparto del producto de la nueva moralidad (cómplice pasivo). El «cómplice», activo o pasivo, sabe lo que está pasando y escoge entre arriesgarse a participar visiblemente en el nuevo festín, o escoge, quedarse en la sombra de la pasividad sin riesgo. Aquella que ni lo compromete con la manera de hacer las cosas, ni lo retrata con la oposición a **esa** manera. Claro está que aún en esta sociedad de cómplices, existe una minoría que se opone abiertamente a los «mandamientos» de la nueva «religión». Sólo para descubrir, en el caso de que triunfara su posición, que los cómplices silenciosos tienen más recursos y más confiabilidad, entre la sociedad, para asumir el nuevo liderazgo. Por ser menos contestatarios. Por ser menos peligrosos dentro de la posibilidad de que también se opusieran abiertamente a las nuevas reglas de la transición que, a su vez, desarrollará cómplices activos y pasivos (Casi da vergüenza mencionarlo, por lo micro de su importancia, pero estas relaciones se pueden identificar fácilmente en nuestra sociedad, mediante un análisis de las individualidades

visibles en su apoyo a Lusinchi (solamente un punto histórico reciente de referencia). Después a C.A.P. Luego a Velázquez. Y ahora a Caldera. No han sido, precisamente, los opositores abiertos y no cómplices del sistema los que tienen hoy cuota de poder. Son más bien los cómplices silenciosos y pasivos, los que intentan modelar, ahora, la nueva realidad. Por eso, se habla mucho del anonimato político de los miembros del nuevo poder).

Por **eso**, la definición de Lander, no es aplicable, ni verdaderamente definitoria de la sociedad de ayer y de hoy. La complicidad se ejerce de diferentes maneras. Es más, es abiertamente discutible si puede hablarse de complicidad. Creo que no. Lo que debe analizarse en propiedad para intentar entender el proceso, es la flexibilidad que ha desarrollado nuestra sociedad para ignorar su cuota de debilidad moral (como instituciones o individualidades) y resaltar, para que **todos** los miren, los cánceres de las otras instituciones e individualidades del país, cuyas actividades -aun sin la **complicidad** de quienes miran- son las causas de nuestra crisis. Cada sector, pues, tiene sus propios pecados, los cuales racionalizan como parte de sus imprescindibles «pequeñas» desviaciones morales aceptables para salvar a la institución. Son, entonces, las desviaciones de los otros, las causantes del desastre. Pero de hecho existe también una solidaridad institucional que no permite señalar esos problemas como parte de un compromiso para su solución. Lo mío, dice la nueva moralidad, es presidir sobre la denuncia de lo existente (no soy cómplice), pero sin participar activamente en su solución y sin un esfuerzo introspectivo para mirarme a mi mismo.

Lo que caracteriza a una sociedad de cómplices, como la definía Lander es el silencio. Lo que caracteriza a la nueva flexibilidad moral es la denuncia. Pero una denuncia donde el denunciante se sitúa cómodamente como un observador distante, no participativo, «inocente» de lo que hacen todos los demas. En muchas ocasiones es hasta selectivo en sus denuncias, pues

toma buen cuidado de no denunciar aquello en lo cual podría estar incurso. Así, los que se benefician del control de cambio, critican todas las corrupciones, menos las de ese sector. Los que denuncian todo lo imaginable desde los medios de comunicación, no critican la corrupción moral implícita en la denuncia falsa y en la ausencia de una aclaratoria (Una costumbre heredada de la vieja izquierda y que todavía existe por allí, es la de no retractarse jamás de lo denunciado. Cuando una denuncia resulta falsa, se pasa a otro tema, como si nada hubiese ocurrido).

Hemos construido una sociedad de denunciantes que esperan que otros -u otro- solucionen el problema por ellos percibido. No quieren ser parte de la solución, pero ya se han convertido en parte del problema. Lo más grave es que ahora se usa la denuncia casi como una absolución, por el pecado de no participar en las soluciones necesarias.

Por eso, todas las oficinas que se crearon para recibir quejas (denuncias), están abarrotadas de cartas y llamadas telefónicas exigiendo soluciones a los problemas que la sociedad, en su conjunto, debería solucionar.

Por eso, un hombre como Lorenzo Tovar, es tan popular. Porque personaliza y resume en algunas de sus acciones mucho de lo que los ciudadanos deberían hacer por su cuenta, para dejar de ser víctimas de lo que denuncian. Si nadie le comprara a un especulador, éste no podría sobrevivir. Si todo usuario de un servicio mal prestado se negara a cancelar el último recibo del prestatario, sería mejor atendido la próxima vez. De lo que nos olvidamos, a veces, es que son más las víctimas que los victimarios y, por lo tanto, tienen en sus manos la solución. Si se pudiera ir en forma accesible a los tribunales, sector a quien si le compete oír denuncias, y éstos actuaran en forma honesta y expedita, no necesitaríamos como paliativos hipócritas de nuestra indiferencia, ni comisiones, ni comisionados, ni oficinas de quejas, ni nada que se le parezca.

En el fondo, la denuncia selectiva resulta una manera

cómoda de pretender no ser cómplice y la proliferación de buzones públicos, para recibir quejas (que no otra cosa son las distintas instancias de protección al consumidor y el comisionado anticorrupción, recién nombrado), una manera de engañar a la ciudadanía por parte del sector público, que ahora pretende tapar su complicidad de ayer y su ineficiencia de hoy con el cómodo artificio de crear válvulas de escape para la frustración colectiva, mediante el estímulo a la denuncia. No hacia falta. Ya la sociedad, por si sola, había creado su propia válvula de escape, mediante el desarrollo de una flexibilidad moral, ya descrita, y la utilización de voceros convenientes, para denuncias que no afectaran, ni se refirieran a sus propios vicios y que les permitieran mirar los problemas en el ojo ajeno con las ínfulas de quien tiene autoridad moral para pasar juicio. Así la flexibilidad moral se sectorizó, con el resultado hoy harto conocido, de que se ha desatado la guerra intersectorial, sin que se abran las hostilidades intrasectoriales. Una posible excepción de lo anterior, empieza a ser la del sector bancario, donde los sobrevivientes ya han entendido que no pueden seguir buscando, en otra parte, la responsabilidad por lo que les ha sucedido. Pero esa introspección puede haber llegado tarde si, como sospechan algunos, el sector completo pudiera ser estatificado a corto plazo. Para que lo sucedido en este sector, pudiera servir de lección para muchas otras instituciones, sería altamente conveniente que la estatificación total no sucediera, y que algunos de los sobrevivientes duraran lo suficiente para demostrar las bondades que tienen las correcciones intra-institucionales y el reconocimiento público de los errores cometidos. Cuando esto pasa, la denuncia se vuelve un verdadero instrumento de cambio, porque, entre otras razones, deja de ser selectiva.

Todas nuestras instituciones se beneficiarían si denunciaran sus fallas internas y trataran de autocorregirse en lugar de defenderse, como hacen ahora, de las denuncias que, sobre su operatividad, formulan otras instituciones, que también se

beneficiarían si buscaran adentro lo que con tanta claridad ven afuera.

Algunas ideas concretas («Lo bueno» está «dentro»)

En Venezuela cuando tenemos un problema institucional nombramos una comisión que -por lo general- está compuesta por personas que, aunque pudieran ser conocedoras de los problemas, son ajenas a la institución que los tiene. Esa comisión, generalmente nombrada por el Presidente de la República, se reúne con los ministros y los directores y gerentes de la institución en busca de soluciones. No es, pues, de extrañarse que, en la mayoría de los casos, no se llega a solución alguna. La mayor parte de nuestras instituciones públicas en crisis, lo están precisamente, por malas políticas del Gobierno. Siempre he creído que dentro de las instituciones identificadas con problemas, existe dentro de su tren gerencial y administrativo un núcleo de personas competentes que sólo necesitan ser invitadas a participar en las soluciones para que aporten ideas creativas. A **esos** hay que identificarlos. Luego hay que conocer el punto de vista de los usuarios. Una de las calamidades mayores que nos ha impuesto los monopolios del Estado es la indiferencia con la cual las instituciones tratan a sus usuarios. Esto es debido, exclusivamente, a que sus lealtades institucionales no están con el público, a quien están destinadas a servir, sino que las lealtades están con la élite del poder político que nombra a su dirigencia. Si en materia de salud pública, en lo relacionado con el Seguro Social Obligatorio, se nombrara una comisión compuesta por una selección de la gerencia media de la institución y una comisión de usuarios para que identificaran los problemas operativos del sistema, seguramente -en poco tiempo- tendríamos información confiable que pudiera, entonces, someterse a un análisis de alto nivel político y gerencial. Por lo menos tendría la virtud de reflejar las verdaderas percepciones sobre los problemas institucionales vistos por dos protagonistas, cuya opinión es imprescindible en

cualquier análisis. Así, las recomendaciones no estarían contaminadas por la visión desinformada de los subsectores que no buscan sino la defensa de sus propios intereses: El sector político, la alta gerencia y los gremios y sindicatos, los cuales, en una sociedad ordenada serían los legítimos representantes de lo que en nuestra sociedad pretenden representar, sin éxito, ni derecho.

En lugar de nombrar a un comisionado anticorrupción para que se convierta en un filtro de denuncia, muchas de ellas interesadas. ¿Porqué no se arranca con un programa piloto de concientización del funcionario público?. Para que se discuta, no la falsa moralidad impuesta desde arriba, sino las dificultades y las presiones que reciben a diario nuestros funcionarios de parte, a veces, de sus propios dirigentes para que administren por excepción. Donde se pueda poner en claro las tentaciones que llevan al acto corrupto. La imposibilidad conceptual de cumplir con un conjunto de normas rígidas, incoherentes y contradictorias. Las malas condiciones físicas del entorno donde se trabaja. La invasión desconsiderada de oficinas públicas por buhoneros y toda clase de vendedores y «solicitadores» profesionales de favores. La irresponsabilidad gremial/sindical y oficial que firma convenios colectivos imposibles, que en su incumplimiento no hacen sino frustrar aún más a sus engañados supuestos beneficiarios (el trabajador y el empleado público). Porqué no convertir estas reuniones educativas en verdaderos centros de análisis de desarrollo organizacional, donde, sin temor al castigo, el funcionario público menor, pueda describir el verdadero entorno dentro del cual labora. Sería sumamente interesante, educativo y me atrevo a decir, productivo, que en algunos de nuestros ministerios o empresas del Estado se empezara un plan piloto en este sentido. Hay algunas organizaciones profesionales que podrían asesorar en la implantación de este tipo de estudio. Léase bien, asesorar y nada más. El esfuerzo grande y definitivo tiene que venir de adentro.

Del corazón de la organización (Lo que le faltó a Stone en su película).

Quizás con esfuerzos como los aquí sugeridos se le podría dar una nueva dimensión al concepto de denuncia. Estaríamos en presencia de un verdadero esfuerzo para recoger información pertinente, de aquellos que verdaderamente nos la pueden dar. Solamente, el acto mismo de poner sobre el tapete de la discusión institucional aquellos puntos de la agenda silenciosa que todos llevan dentro, ayudaría enormemente a disminuir las tensiones que contribuyen a flexibilizar la moral pública, como un acto de defensa para conservar la sanidad mental en un ambiente de contradicciones éticas. Si entendemos, entonces, que la denuncia interesada, la flexibilidad de la moral y la comodidad de mirar las causas de la crisis en el ojo ajeno, no son sino reacciones a la frustración causada por la difilcutad de convertir en respuestas públicas, las respuestas privadas que todos conocemos, quizás, entonces -y sólo entonces- podremos pasar de cómplices silenciosos, en la versión Lander, y observadores interesados y jueces no participativos de las desviaciones ajenas, en la versión más moderna, a ser una sociedad que colectivamente busca las respuestas a sus dificultades, empezando primero por analizar la conducta que mejor debería conocer: La propia.

Aunque en una sociedad, donde las instituciones no quieren responsabilizarse por sus propios actos, es seguramente más cómodo analizar la conducta ajena.

Y **ese** es el problema.

09 de febrero 1995

LA PERTINENCIA INTELECTUAL

El Conocido Escapismo (El Largo Plazo no Compromete)

Alguien cuya opinión tengo en alta estima, me comentaba recientemente que no entendía como ciertos «intelectuales» nuestros, y los ponía entre comillas en forma expresa, no trataban los temas de nuestra sociedad que deberían ocupar su atención. «No tienen pertinencia», decía mi interlocutora. Bien está -continuaba- que alguien se ocupe, de vez en cuando, de analizar el por qué de las Guerras Púnicas o la transcendencia del ser o hasta, Dios nos libre, cuestionar el trasfondo filosófico de Juan Nuño. Pero, por favor, interesante e importante como es todo lo anterior, no puede sustituir en materia de enseñanza colectiva al análisis de los temas específicos, sin cuya solución, y hasta identificación -añadiría yo- no se puede esperar salir de este complejo atolladero, en el cual, nos han metido 37 años de democracia, medidos por lo reciente. Para tener completo el cronograma de nuestra historia política actual, tendríamos que agregarle diez años de dictadura Perezjimenista. Tres años adecos de experimentación, improvisación y revanchismo. Cuatro años de «buenas intenciones» sin verdadera «médula espinal» de medinismo. Cinco años de un intento de transición hacia la democracia de López Contreras, con demasiadas ataduras al pasado, y más o menos 30 años, mal contados de gomecismo, que ni empezaron con él, ni terminaron con su muerte. Por **eso**, siempre estarán **mal** contados.

El motivo de la ira de mi interlocutora eran dos artículos aparecidos en el Diario de Caracas, el domingo 12/03/95. Uno de Emeterio Gómez donde -según ella- continuaba con su «escapismo» improductivo filosófico/teológico, con lo cual no le añadía nada a la solución del problema económico nacional, tema que por lo demás, se sabe que domina Emeterio. Otro de Orlando Albornoz, con quien mi antigua amistad de niños, casi

me inhibe de repetir lo dicho. Con Orlando lo duro del comentario, toma alturas conceptuales muy severas. Bien está, dice mi interlocutora, que se cuestione fuertemente la homologación salarial en nuestro magisterio. Pero, ¿Por qué un investigador internacional de nuestro sistema educativo, utiliza cuartillas importantes en un intento de demostrar que en materia de continuidad de la filosofía educativa son iguales Gustavo Roosen y Antonio Luis Cárdenas?. ¡Por favor!. Eso es anteponer cierta antipatía personal entre las partes a un verdadero análisis de lo que persigue el actual ministro de Educación. Más aun - continúa en vena crítica mi interlocutora- Orlando pretende descalificar los esfuerzos educativos de «Fe y Alegría» como subordinados a una intención catequizadora de la Iglesia, lo cual se equipara -ni más ni menos- a la intención de lucro detrás del esfuerzo de la educación dispensada por el sector privado. Aquí mis discrepancias menores, hasta ahora, con su soliloquio toman características de oposición, casi frontal. Ya que al decir Orlando lo que dice, no creo que pretenda ni descalificar, ni agredir a la Iglesia. Veamos: En materia educativa hay tres actores importantes en Venezuela: El Estado, la Iglesia y el sector privado. Si de buscarles intenciones ocultas a las partes se trata, todos las tienen. Lo importante es que esas intenciones no disminuyan la calidad y la cantidad del acto educativo que ofrecen. Se dice que: 1) El sector privado busca el lucro mediante su participación en el sector de la educación. Pero, a no dudarlo, la calidad que ofrece hoy, es superior en el acto **instruccional** a lo que ofrecen los otros dos sectores (Subrayo «instruccional» para no entrar en polémica con Orlando sobre el concepto de educación integral. O sea, la educación que se imparte dentro y fuera del sistema formal. Señalar que la educación fuera del sector formal, pudiera ser mejor en las clases menos privilegiadas de nuestra sociedad, que en las clases media y alta, como lo hace Orlando, es un atrevimiento intelectual, que por venir de quien viene, requiere meditación y comprobación. Sobre todo, si

sabemos de las ausencias estructurales de las cuales padecen los núcleos familiares de nuestra marginalidad. Y no defiendo, ni niego el alto número de divorcios, la ausencia de humana solidaridad, ni ciertos complejos sociales que pudieran tener nuestras clases media y alta. Me limito a exponer las consecuencias trágicas de nuestra pobreza. La desnutrición. Las enfermedades. La falta de instrucción formal. La violencia. El incesto. Pobre como es, hoy en día, la formación ofrecida a sus hijos por las clases de mayores recursos de nuestra sociedad, no hay duda que la marginalidad ofrece todavía ejemplos más frágiles para la formación de sus niños). 2) La Iglesia. Desde luego que la Iglesia le agrega al acto de instruir la intención de educar, y para ella la religión es parte importante de la formación integral del ser humano. Se puede estar en desacuerdo, como lo están muchos, con que se mezcle instrucción laica con instrucción religiosa, pero no hay duda de que la Iglesia en Venezuela, con todas sus fallas en cuanto a su preocupación social integral y a cierta tendencia, algo reciente, a ser un tanto «elitesca» en sus mensajes, juega y ha jugado un importantísimo papel en nuestro acto educativo. Desde las escuelas de Fe y Alegría, pasando por los Colegios San Ignacio, La Salle y Maristas, entre otros, hasta culminar en la Universidad Católica Andrés Bello. 3) El Estado. De acuerdo a casi todas las Constituciones de los países modernos, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que el acto de educar esté al alcance de todos los ciudadanos. Esto por supuesto no quiere decir, que el Estado provea a **todos** de instrucción formal gratuita, ni tampoco, que deba ejercer **directamente** la función docente. Mientras más inflexible sea el Estado con relación al curriculum educativo, mientras menos comparta la responsabilidad de educar con las comunidades, la educación se hará más **estatista** y menos **nacional**. Entendiéndose, como ya he repetido en numerosos artículos, que lo nacional es lo que pertenece a todos los «nacionales» y lo del Estado es lo que le corresponde hacer a esta institución como

el «brazo político de la nación». Mientras la educación sea más del Estado y menos de la Nación, se correrá siempre el real peligro de que los programas educativos se utilicen para transmitir ideologías fascistas y otras propias de los Estados reaccionarios, dictatoriales y violadores de los derechos ciudadanos. Ejemplos sobran en la historia, y no es necesario llover sobre mojado para demostrarlo. Por otra parte, el Estado y la Nación pueden unir esfuerzos para convertir el acto de instruir en un acto más integral, donde en el aula se contribuya a formar al ciudadano que, después, como adulto, pueda ayudar desde «afuera» a la formación de un ciudadano «educado» (Albornoz dixit).

Lo que pretendo ilustrar con el comentario es que mi interlocutora no debe desanimarse, ni tomar a mal que un estudioso del proceso educativo, como Orlando Albornoz, busque y encuentre, detrás del acto educativo, promovido y ejecutado por el Estado, la Iglesia y el sector privado, algunas intenciones diferentes a la abstracción de educar, convenientes a su sector y que en la mayoría de los casos no desvirtúan el resultado positivo de su esfuerzo. Así éste tenga una dosis, no exagerada, de intención de lucro (el sector privado), de catequización (la Iglesia), o de apoyo a algún sistema político (el Estado). No hay que olvidarse de que, en el fondo, estos tres sectores consideran «buena» educación la promoción de sus propios intereses. Así ha sido siempre, y así será mientras la transmisión del conocimiento y la libre discusión de las ideas contengan una buena dosis de subjetividad.

Pero dejemos, por ahora, a las víctimas recientes de los comentarios de nuestra interlocutora y pasemos a los problemas que, según ella, deberían acaparar la atención de nuestros intelectuales. De nuestros hombres brillantes. De nuestros «notables», aunque a estos últimos ella les niegue cualquier posibilidad de convertir sus «limbos mentales» en pensamientos «pertinentes».

El Inventario de lo Pertinente (Sobran Temas)

A riesgo de incurrir en la ácida crítica de mi amiga (por la «muestra»), tomaré el último discurso presidencial para intentar construir un inventario de las dificultades que pudieran interesarle a los «distraídos» intelectuales de hoy.

- **Lo económico**. Alguien debería explicarnos cómo en un país altamente dependiente de sus importaciones se puede combatir la inflación con un bolívar sobrevaluado, fijado a un dólar que, a su vez, se ha devaluado en los mercados internacionales. Cómo se puede reducir el gasto público, si -en palabras del propio Presidente de la República- «el presupuesto nacional confronta compromisos ineludibles que dejan poca disponibilidad para la construcción de obras y servicios de indudable necesidad» (En otras palabras, es inflexible). Cómo se puede estimular la producción y la inversión con un control de cambio que «no controla» el tráfico ilegal de divisas, pero que limita su disponibilidad a aquellos que podrían transformar dinero en riqueza. Cómo puede convencerse al Gobierno que sin un plan económico coherente que armonice las variables cambiaria, fiscal y monetaria, no habrá «luz al final del túnel». Cómo hacer entender al Gobierno que sin convicción real de la necesidad de privatizar muchas de sus empresas, nunca creará la base legal y la correcta actitud mental en su burocracia, lo cual es imprescindible para evitar el costoso capricho que dejó en manos del Estado una línea aérea quebrada (L.A.V.) y produjo el ridículo público que significó la fallida licitación del Hotel Melia Caracas.

- **Lo político**. Cómo convencer al Gobierno que sin una reforma a fondo del Estado, de sus atribuciones, de sus enfoques, de sus relaciones públicas y políticas, no se pueden acometer exitosamente las reformas necesarias en los otros sectores nacionales. Cómo se puede pretender que un Estado arcaico en su pensamiento y en sus estructuras pueda acometer la tarea de modernizar a un país. La Apertura Petrolera en la forma como se ha estructurado, demuestra, para quien lo quiera ver, que el

Estado venezolano no tiene la menor intención de dejar de ser un Petro-Estado. Por el contrario, mantener la propiedad de los yacimientos y contratar su operación con el sector privado, casi siempre extranjero, no hará sino reforzar el poder distribuidor del Estado, al no «nacionalizar», ni la propiedad, ni la operación petrolera. En efecto, no se colectivizará la inversión petrolera entre los venezolanos, y al no hacerlo, el Estado continuará usurpando lo que es de todos. Seguirá siendo el *Gran Distribuidor* de la riqueza nacional e impedirá que, por lo menos, una parte de esa riqueza, le llegue a los venezolanos sin su intermediación. Cómo hacer, entonces, para «popularizar» la inversión y la propiedad del petróleo (Para una discusión más profunda sobre el tema ver «La Apertura Petrolera I y II» en este libro, páginas 13 y 21). Cómo estimular la participación nacional activa en el acto político, a fin de que se reflejen en el resultado electoral los verdaderos deseos de la ciudadanía. La elección uninominal fue, a no dudarlo, un fiasco. ¿Se debe cambiar el sistema? o, ¿de lo que se trata es de evitar que la mecánica electoral pervierta la intención selectiva individual de la uninominalidad?. ¿Cómo darle mayor presencia y participación a la sociedad civil organizada en asociaciones comunitarias?. ¿Cómo ligarla en un esfuerzo común con las estructuras políticas municipales y parroquiales?. En fin, cómo cambiarle el rostro político al país, de abajo hacia arriba.

- **Lo social**. Cómo estimular un sentimiento solidario en nuestra sociedad que motive las acciones necesarias para rescatar a la marginalidad y darle la dignidad de saberse productiva. Cómo administrar la transición de una generación improductiva, por abandonada, a una generación productiva e incorporada a los deberes y derechos ciudadanos, sin que el apoyo colectivo al esfuerzo no sea un acto de caridad, una dádiva dada a la fuerza, un subsidio permanente para salir del paso o acallar conciencias. Cómo modernizar el acto educativo y mantener en el sistema a los desertores de hoy. Cómo lograr esa complementariedad

«externa» del acto educativo, tan cara para Orlando Albornoz. Cómo disminuir la delincuencia. Penetrar los antros donde se genera el delito. Cómo prevenir, para no tener que retaliar y castigar en forma excesiva. Cómo disminuir la corrupción de cuello blanco que, en cierta forma, le da una excusa a los abandonados de la sociedad para irrespetar a un sistema que parece diseñado para brindarle impunidad a los delincuentes de alto nivel social y castigar, a veces sin fórmula de juicio, a los delitos de la marginalidad. Cómo fortalecer al núcleo familiar. Cómo rescatar las virtudes del ahorro y del trabajo. Cómo borrar de la percepción popular la noción de que todo ciudadano acaudalado es un ladrón. Cómo establecer en la mente popular que generar riqueza no es sinónimo de explotación inhumana. Cómo hacer la transición desde la cultura del rancho a la vivienda higiénica y acogedora. Cómo darle seguridad jurídica a una sociedad compleja y pluralista como la nuestra que requiere de árbitros honestos para solucionar sus diferencias.

- **Las Fuerzas Armadas**. Cómo romper la paradoja que, por una parte, reclama la subordinación del poder militar al poder civil y, por lo tanto, buscar un deslinde entre lo que es la responsabilidad militar y lo que es la responsabilidad civil, mientras que por otra parte recuerda, en todos los discursos oficiales, el apolitisismo de las Fuerzas Armadas y su lealtad al sistema democrático, algo que debería darse por entendido. Y, peor aun, llama a los militares a que desempeñen funciones civiles cuando se presentan problemas con ese sector. Eso, solamente, se debería hacer en situaciones de real emergencia, con mucha reticencia y por poco tiempo. Lo menos deseable, son unas Fuerzas Armadas acostumbradas a desempeñar las tareas propias del sector civil, por iniciativa de un Gobierno constitucional que haya perdido la capacidad de solucionar los conflictos intersectoriales propios de toda democracia. El problema de la convivencia democrática entre Gobiernos de origen legítimo y las Fuerzas Armadas, en América Latina, es un tema que

solamente parece discutirse en profundidad en foros realizados por universidades extranjeras en el exterior. Hay, pues, campo fértil para una buena discusión nacional sobre esta relación que, como dos asonadas militares recientes lo comprueban, está lejos de estar totalmente definida.

Conclusiones (Del análisis a la acción)

Como podrá apreciarse del resumen anterior, tiene razón mi interlocutora, en cuanto a la existencia de un abundante e interesante inventario de temas para el análisis cuidadoso y profesional.

Quizás, muchos de nuestros intelectuales piensen que el análisis ya se ha hecho. Que el diagnóstico está sobre la mesa y que aquellos a quienes le corresponde transformarlo en acción, han tenido, característicamente, oídos sordos. Aunque esto fuese cierto, ello no desvirtúa el llamado hecho por mi amiga a la «pertinencia» de las opiniones que se emitan. No sólo «pertinente» en la opinión. También hay que ser «pertinente» en la acción.

Quizás sea en esto último donde fallamos. No hay duda que todos nuestros sectores conocen, porque han oído y leído repetidamente, los catálogos de buenas intenciones en los cuales se han convertido nuestros discursos políticos. Nuestros planes económicos. Nuestros programas educativos. Lo que poco se ha hecho es arremangarse la camisa y ponerse a trabajar. Yo se que muchos intelectuales piensan que **eso** no les corresponde.

Pero hacerlo, sería un experimento interesante...

Si se atrevieran.

16 de marzo 1995

LOS PELIGROS DE LA RACIONALIDAD

La Apertura Petrolera (La Shell y la Creole son Cómodas)

Los argumentos más **lúcidos** en materias de interés político en Venezuela -que es como decir todas las materias- si no vienen acompañadas de un coro de aprobaciones, corren el riesgo de interpretarse, casi como desestabilizadoras o, en el mejor de los casos, como inconvenientes y contraproducentes para el éxito de alguna causa que la generalidad considera de interés nacional.

Un caso reciente lo constituye la posición que ha tomado la Cámara Venezolana del Petróleo, en relación a la Apertura propuesta por el M.E.M/P.D.V.S.A., y actualmente bajo estudio por una Comisión Bicameral del Congreso Nacional. En efecto, en las primeras de cambio, la Cámara dio la impresión de criticar la falta de inclusión, en la proposición oficial de apertura, de algunas ventajas o -por lo menos- posibilidades reales, de participación del capital nacional en la nueva fórmula propuesta por el Ejecutivo. **Esa** posición resulta incómoda para el Estado venezolano que, no sólo se ha opuesto, sino que ha obstaculizado y hasta prohibido en el pasado, la participación de nuestros «nacionales» en el negocio petrolero. Cuando hablo de «negocio» no me refiero a la importante, aunque restringida participación que han tenido en la actividad petrolera las empresas nacionales, agrupadas en la Cámara Venezolana del Petróleo. Son, han sido y, por lo visto, se conformarán con seguir siendo, suplidoras de bienes y servicios a los «dueños» de la operación petrolera de siempre y a los que surjan de las licitaciones promovidas por la nueva apertura. Las últimas declaraciones de Miguel Bocco, presidente de la Cámara, parecen ponerle punto final a la posible participación de esa institución en el debate nacional, que no se ha producido aún, sobre la **necesidad** de estructurar la participación masiva de los venezolanos en la composición

accionaria de las nuevas empresas a formarse. Cuando digo masiva, no me refiero necesariamente a que haya proporcionalmente dentro del capital global una enorme participación venezolana, en lo relacionado con cuanto dinero aporten. Me refiero más al número de venezolanos que deberían participar, aunque fuese con pequeñas cantidades cada uno. A fondos nacionales de retiro y pensiones. A fideicomisos privados. A fondos constituidos por prestaciones sociales, etc.

Luchar por la participación de los «nacionales» en la Apertura Petrolera, es una proposición eminentemente razonable, que no sólo corregiría una discriminación **odiosa** del Estado para con sus ciudadanos, (los verdaderos propietarios del recurso petrolero), sino que desarrollaría nuestro mercado de capitales, ampliaría las posibilidades de inversión para nuestros ciudadanos e instituciones, y fortalecería la imagen de Venezuela ante la inversión extranjera, ya que ésta vería que los ciudadanos de Venezuela, están dispuestos a invertir **su** dinero en las mismas empresas, en las cuales solicitan la participación foránea. Nos evitaríamos así, la vergüenza de que personas como Paul Volker, ex Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, nos volviera a decir, en respuesta a la fuga de capitales venezolanos y nuestra petición constante y simultánea, para que el capital extranjero venga a Venezuela -como préstamo o como inversión- que el problema es que los venezolanos le pedimos al capital foráneo que traiga por la puerta de «adelante» lo que nosotros nos llevamos por la puerta de «atrás».

Por supuesto, que siempre hay argumentos para «dejar las cosas así». El primero es que no hay capital en Venezuela para invertir en algo de las dimensiones de la industria petrolera. Falso. No habrá para sustituir a la inversión extranjera (algo que no está planteado), pero si hay como para complementarla. Luego vienen otros argumentos, tales como el de Leonardo Montiel Ortega, quien piensa que si se le dan algunas ventajas al capital nacional, nosotros nos convertiremos en testaferros del capital

extranjero. Puede ser. Pero yo me resisto a que se nos considere un país de delincuentes. De que los hay, los hay, pero no es -precisamente- cerrándonos la oportunidad a los venezolanos para que invertamos en nuestra propiedad como vamos a combatir a los ladrones. Ya el argumento de que necesitamos a los del exterior para que nos enseñen a administrar el negocio petrolero, suena acomodaticio, cuando tenemos a P.D.V.S.A., manejada por venezolanos, como la tercera empresa petrolera del mundo, y cuando, esa misma P.D.V.S.A., utiliza los servicios, en forma masiva, de las empresas agrupadas en la Cámara Venezolana del Petróleo: perforan, hacen levantamiento sísmicos, interpretan modelos de yacimientos, etc. Por eso, porque se ha demostrado hasta la saciedad la capacidad operativa venezolana, es que duele que esas mismas empresas, a través de la Cámara, se conformen con seguir siendo simples suplidores para las nuevas empresas operadoras y no tengan, al parecer, ni la ambición, ni el interés de convertirse en accionistas. Yo creo que la Cámara debe repensar su posición. Sería muy triste que se perdiera esta oportunidad por una ausencia de racionalidad, o que se abriera la oportunidad para la inversión nacional y fuesen los venezolanos ahorristas los únicos que aprovecharan las ventajas de la Apertura. La «otra» razón que no se menciona, sino en susurros, es que el Ejecutivo y P.D.V.S.A., se sienten más «seguros» y más «cómodos» con la inversión extranjera, sobre todo si esta proviene de empresas fuertes y trasnacionales, como Shell, Exxon, Mobil, Chevron y otras. ¿Porqué complicarse la vida con los venezolanos, para cuyas inversiones tendrían que crearse mecanismos especiales para canalizar su inversión?. Sobre todo, ¿Por qué preocuparse si la Cámara Venezolana del Petróleo, se conforma con que le sigan dando, lo que le han dado hasta ahora: Un pedazo importante del suministro de bienes y servicios?. Yo solamente quisiera recordarle a los que así piensan, que la **comodidad** ha sido una de las características más perniciosas de nuestra sociedad. La falta de creatividad, el inmovilismo y el

conformismo son los hijos predilectos de esa actitud, que no quiere pararse de su cómodo sillón para ir a recoger el sobre donde están guardadas las oportunidades del futuro.

Visita a Miraflores (La Reincidencia de Eduardo)

Con algo de curiosidad y técnica de crónica social ha sido comentada, por algunos, la visita que le hiciera Eduardo Fernández al Presidente Caldera en Miraflores. Adela Leal (El Nacional) reportó breve y profesionalmente el acontecimiento. Más de una hora hablaron, dijo la reportera. La excusa fue, por supuesto, conversar sobre los arreglos en marcha con motivo del X Aniversario de la trágica muerte en la selva guatemalteca, de Aristides Calvani. Más allá de lo conversado que -aparentemente- incluía una solicitud de Eduardo al Presidente, en el sentido de que se reestablecieran las garantías constitucionales y consideraciones sobre problemas de actualidad: desempleo, prestaciones sociales, apertura petrolera, seguridad social, etc. Más allá de lo conversado -repito- uno debe imaginarse la «atmósfera» de la entrevista. ¿Salió, por ejemplo, el Presidente de su oficina a recibir a Eduardo a la antesala?. ¿Lo hizo esperar?. ¿Cuánto?. ¿Lo recibió dentro de su oficina de pie?. ¿Estaba sentado cuando entró Eduardo?. ¿Dónde se sentaron?. ¿En la parte de la oficina con sillas para visitantes o se sentó el Presidente detrás del escritorio, mientras Eduardo se sentaba al frente?. Hay que descartar, por supuesto, que hubiese alguna animosidad manifiesta en la entrevista. Tiene que haber sido cortes. ¿Fué fría?. ¿Cómo saludó Caldera?: ¿Cómo estás, Eduardo?. ¿Cómo está, Eduardo?. ¿Cómo está, Dr. Fernández?. Estas son las expresiones características del Presidente para dirigirse a sus interlocutores, de acuerdo a si se siente amistoso, algo frío o totalmente distanciado.

A su vez, se debe esperar que Eduardo se dirigiera a Caldera, como «Presidente». En su caso no había opciones. Sin embargo, con una sola palabra, Eduardo, un maestro no reconocido de la

ironía, puede estar diciendo sin decirlo: «Estimado Presidente». «Amigo Presidente». «Que fastidio Presidente». «Mejor me sentiría en casa Presidente» u otras variables alusivas al acto.

Se debe esperar que Caldera, un verdadero zorro político, haya pensado mucho en este acercamiento con Eduardo y que haya aprovechado el nexo familiar de Eduardo, a través de su esposa, con la familia Calvani, para pedirle su colaboración en un acto protocolar. Por supuesto que debemos descartar que Caldera sintiese alguna obligación, en razón del parentesco mencionado, de pedirle a Eduardo su colaboración en los actos para honrar a Calvani. Pero, una vez decidida la conveniencia de un acercamiento, la oportunidad no podía ser desperdiciada. De manera que la primera conclusión tiene que ser que Caldera, ha pensado seriamente en la conveniencia de restablecer una relación personal con Eduardo.

Por supuesto que Eduardo, que dejó el tonto en la escuela, hace muchos años, sabe todo esto y debe haber llegado a la misma conclusión y, sin embargo, atendió el llamado. La segunda conclusión es, entonces, que Eduardo también piensa que una relación personal, aunque sea distante con el Presidente, puede serle conveniente.

Francamente, a primera vista, se entienden mejor las posibles razones de Caldera: COPEI ha amenazado con una oposición abierta. Eduardo puede ser un buen interlocutor para el Presidente. Además, una oposición de COPEI combinada con visitas a Palacio de Eduardo, pudiera neutralizar los efectos visibles y públicos de esa oposición. Algunos piensan que el gesto de Caldera, es otra manera de demostrarnos que después de todo, «él sí perdona». No creo en esta razón. Caldera ni quiere, ni necesita gestos de esta naturaleza para afianzar su imagen. Y él lo sabe. La razón es política, aunque no excluyo que de alguna manera Caldera se «sienta bien» al hacer lo que hizo.

Por su parte Eduardo, o tiene mala memoria o ha desarrollado cualidades maquiavelicas no conocidas en él. Su

historia política reciente lo debería alejar de toda silla presidencial que no estuviera ocupada por él.

El precio público que pagó para rescatar su credibilidad política fue sumamente alto: Perder la candidatura presidencial de su partido y una excelente oportunidad de ganar las elecciones. En cierta forma, para el público electoral, que disfruta de las elecciones como si de un torneo deportivo se tratara, Caldera vs. Eduardo en una elección tenía más historia de pugnacidad entre las partes, y más posibilidades de incluir elementos revanchistas en la percepción popular que la disputa electoral Caldera/Oswaldo. Y no puede ser una conclusión predeterminada que donde perdió Oswaldo, hubiese perdido también Eduardo. No hay mucha lógica en ciertos resultados electorales. Si no me creen, acuérdense solamente de Claudio Fermín y su cercano segundo puesto en el resultado final, cuando se le vaticinaba un lejano cuarto puesto.

Lo importante ahora es recordar que la gota que derramó la paciencia popular con las presuntas manipulaciones eduardistas, fue su relación con el Presidente Pérez. No tanto su relación real, sino su relación percibida, sustentada en que en la noche del 4-F, Eduardo fue a la televisión a apoyar públicamente al Gobierno democráticamente electo, en oposición a los sediciosos conducidos por Chávez, quien, por cierto, no fue a la televisión sino después de haber sido hecho preso, lo cual no habla mucho de su sentido estratégico.

Como el gesto honesto de Eduardo, se confundió con oportunismo, no se le dio el valor que realmente tenía. Pérez sabe, por supuesto, a quienes llamó esa noche y cuantos no se presentaron. Sería interesante que algún día contara esa historia públicamente.

También sería interesante recordar la llamada que le hizo a Eduardo el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, después del fallido golpe militar y, ante la debilidad manifiesta del Gobierno, para que Eduardo convenciera a COPEI para que apoyara al

Gobierno e hiciera público y visible ese apoyo, participando con dos distinguidos copeyanos en el Gabinete de Pérez. Eduardo oyó la solicitud y la creyó -por venir de quien venía- y permitió que Humberto Calderón Berti y José Ignacio Moreno León, entraran al Gobierno. Puede ser que al hacer esto, cometiera un error de juicio, como parece haberse puesto en evidencia después. Pero, sobre lo que no puede quedar ya duda, es que su decisión fue una acción honesta de su parte y no un acto de oportunismo político. Todo lo contrario. Eduardo tenía que saber los riesgos que corría su imagen política con esa decisión y, sin embargo, la tomó. Un claro ejemplo de los peligros de la racionalidad en este país.

Ahora, Eduardo vuelve a Miraflores y habla con el Presidente, en momentos cuando su partido COPEI anuncia oposición franca al Gobierno. ¿Cuál es ahora su racionalidad?. El argumento de los actos para Calvani, no tiene mucha fuerza, ya que, por propia confesión, Eduardo no se limitó a discutir con el Presidente su rol en los actos conmemorativos de Guatemala. Habló, como ya hemos dicho, de las garantías constitucionales y muchas otras cosas, lo cual convierte a su visita en un acto político. ¿Qué busca Eduardo?. ¿Terminará esta nueva relación con esta visita?. ¿O buscará Eduardo, una nueva racionalidad para justificar su presencia en Palacio?. Y a todas estas, ¿Qué piensan algunos líderes de la línea dura de COPEI como Gustavo Tarre Briceño, sobre esta nueva situación?.

Tal como están las cosas y, a cuatro años de las próximas elecciones presidenciales, Eduardo con su Fundación Pensamiento y Acción, que le da visibilidad pública. Con un buen trabajo dentro del partido, que no se haga muy público todavía. Como líder de un partido de oposición razonable y con su credibilidad política rescatada de la suspicacia pública, por su derrota en 1993 ante Oswaldo Alvarez Paz, tiene magníficas posibilidades de ser -de nuevo- un fuerte candidato presidencial.

Por eso, la pregunta obligada es:

¿Qué tiene que buscar Eduardo en Miraflores, en los próximos cuatro años?.

Mi desinformada respuesta es:

¡Problemas!.

23 de marzo 1995

CAMBIO DE GABINETE

Ajedrez en Palacio (Conversación a dos)

El Presidente Caldera esperaba, algo impaciente en su despacho, a que llegara su hijo Andrés, para darle los toques finales al Gabinete. En la lista de cambios seguros y necesarios estaban Ciro Añez Fonseca y Alberto Poletto. El primero porque estuvo a punto de causarle al Presidente su primera gran derrota política ante el Congreso Nacional, cuando los congresantes de A.D., COPEI y CAUSA R., casi consiguen pasar un voto de censura, que hubiera obligado al Presidente a su destitución. La sangre no llegó al río porque, como ya es costumbre en este Gobierno, el partido A.D. vino en su auxilio. El segundo, porque al final de su gestión, tácitamente reconoció que el control de precios no era fórmula mágica para contener ni la especulación, ni los aumentos de precios normales, causados por una inflación indetenible. Poletto, fue víctima de un sistema que, a través de los años, le ha cobrado a talentos reconocidos el error de aceptar posiciones de gobierno, a sabiendas que tendrán que defender una política comprobadamente equivocada. Al final, los individuos pagan con pérdida de prestigio personal y más de un disgusto serio, el no haber resistido la tentación de ejercer el poder o el haber sucumbido a la seducción de individualidades políticas, duchas en el arte de saber convencer sobre las posibilidades de éxito de ciertas acciones sobre las cuales el seducido conoce de antemano sus negativos resultados.

«No quiero -pensó Caldera, aún solo en la oficina presidencial- convertir a estos nombramientos en un cambio de gabinete. Mejor dar la impresión de que todo anda bien y mover solamente lo imprescindible. Para ello...» - «Hola Presidente, - interrumpió Andrés- perdone la tardanza, pero la gente de la C.V.G. no termina de aceptar la privatización que ya apoyó el Congreso». - «Ya te dije que los tranquilizaras, no va a pasar

nada, por los momentos. Además, acabamos de nombrarlos, dile que se queden tranquilos». - «Ya se los dije -respondió Andrés con prontitud- pero hemos debido aprovechar los cambios que hicimos para hacer una verdadera limpieza a fondo de ciertos cuadros gerenciales». - «Bueno, de eso hablaremos más tarde. - interrumpió el Presidente-. Veamos ahora los nombramientos en el Gabinete. ¿Qué hacemos, por fin, con Fomento?». - «He pensado bien lo que discutimos ayer -expreso Andrés- y creo que estás en lo cierto al querer mantener a Corrales en el Gabinete. Primero, porque nos evita una explicación al MAS. Segundo, porque en verdad ha sido muy trabajador y leal al Gobierno y, tercero, porque a menos que reestructuremos totalmente el Gabinete, va a ser difícil conseguirle un sustituto de categoría. Por lo tanto, la mejor solución es pasar a Corrales de nuevo a Fomento. Sobre todo porque ya está elaborado el IX Plan de la Nación y es preferible que sea otro ministro quien le haga los correctivos y las modificaciones necesarias a ese documento. Es más fácil -ahora- buscar a un ministro para Cordiplan que para Fomento». (Caldera se sonrió internamente, sin demostrarlo, ante la sagacidad de Andrés y, en lo visible, asintió sin demostrar mayor satisfacción ante la excelente recomendación de su vástago). - «Eso nos deja -continuó Andrés- con el problema de Agricultura y Cría. Tengo algunos nombres de personas jóvenes que podrían ejercer el cargo». - «No creo que sea necesario buscar mucho -atajó Caldera-, hay que encontrar una persona que haya estado ligada al sector agrícola, pero que no haya sido un protagonista activo de los últimos debates dentro del sector, puesto que esto inevitablemente lo pondría en pugna con el grupo al cual no favoreció su posición. Si tuvo alguna experiencia en la administración de la Reforma Agraria mejor. Eso lo favorece ante la opinión de los pequeños y hasta medianos agricultores y con los sindicatos del agro. Si además, ha tenido experiencia reciente en organizaciones internacionales, eso lo favorece ante los grandes capitanes agrícolas, el sector de la Agroindustria y

algunas organizaciones patronales. Y si, para completar el cuadro, es un hombre de mi confianza, por haber ya desempeñado cargos en la administración pública, bajo mi primer Gobierno, entonces creo que tenemos al hombre perfecto». (- «Raul Allegret», pensó Andrés, sin decirlo, algo preocupado por la tendencia del Presidente de sacarse de la manga viejos afectos. «Debo reconocer, sin embargo -continuó pensando Andrés- que en este caso, la selección no es mala»). - «Tienes razón -dijo Andrés, ahora sí, para que lo oyeran. - "Bueno, -continuó Caldera- sólo falta Cordiplan y para ese ministerio ya acordamos que pasará Edgar Paredes Pizzani». - «Así es» -asintió Andrés, mientras pensaba, con algo de escalofrío involuntario, en cuales podrían ser los lineamientos del próximo Plan Paredes. Los encontronazos que indiscutiblemente se producirían con Corrales y los documentos que paralelamente estarían produciendo los técnicos de Hacienda, bajo la dirección de Matos Azocar («Parece - continuó Andrés en silencio- que tenemos que pasar cada dos o tres meses por dos Planes Sosa, las críticas de Enzo del Buffalo y sus anuncios de devaluación, las llamadas de Luis Carlos Palacios a un aumento en los precios de la gasolina y a una ausencia de controles de precios y de cambio lo cual -se dice- hizo exclamar a Pompeyo que en el Gabinete, Palacios (MAS) parecía más neoliberal que Sosa. Por último, los llamados de Asdrubal Baptista, a que se usaran acciones de P.D.V.S.A., para ayudar a pagar las prestaciones sociales del sector público. De todo hemos tenido, en este primer año de Gobierno -expresó con un suspiro Andrés-. Casi agregó en voz alta, sin darse cuenta, «y lo que falta», pero se contuvo a tiempo). - «Queda pendiente -recordó Caldera- una revisión con más calma, del Ministerio de Justicia, donde creo que si no actuamos pronto se nos puede complicar el asunto. Relaciones Exteriores, aunque allí, los problemas actuales con Colombia sugieren no mover la mata todavía, por si hubiese algo que rectificar después, hacerlo coincidir con un cambio ministerial. La C.V.G., cuya decisión

está ligada a lo que decidamos sobre el ministro de Energía y Minas: dejarlo, o pasarlo a Guayana. Esta decisión es urgente y no se si podemos diferirla hasta que el Congreso apruebe las condiciones para las nuevas asociaciones petroleras. Sanidad y educación, no hay que tocarlos. Trabajo, tampoco. Ambiente y Desarrollo Urbano, hay que observarlos un período más -con cuidado- pueden ser fuentes de problemas, así como Transporte. De Escovar, ya hemos hablado y por los momentos te agradezco no me toques el tema. Los demás, no tienen grandes problemas». Andrés, supo que se le había acabado el tiempo y salió del despacho presidencial.

Las Opciones del Cambio (Conversación a uno)

Caldera, ante cada cambio ministerial sostenía una reunión consigo mismo, a fin de evaluar los próximos pasos. Esta vez no fue una excepción y el Presidente retomó el análisis de varias opciones que repetidamente se planteaba.

1) **Más de lo mismo**. Ante la aceptación popular de su persona, que había resistido la tremenda crisis económica de 1994, Caldera no dejaba de pensar que podía culminar su período de gobierno sin hacerle mayores concesiones al sistema político. Sin abrir la puerta a coaliciones incómodas y sin correr el riesgo de suspender al Congreso, mediante un acto ejecutivo o mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Con cambios ministeriales, de vez en cuando. Con el empuje, que indudablemnte, le daría a su Gobierno la Apertura Petrolera y la «juiciosa» privatización de algunas empresas de Guayana se podía neutralizar bastante la mala prensa en el exterior y lograr un apoyo, sin concesiones visibles, más allá de las ya nombradas, del FMI, del BID y del Banco Mundial. Sin embargo, Caldera sospechaba que, aun concluyendo su período, esta fórmula podría no lograr la reestructuración del Estado y la modernización de la economía. Y, por lo tanto, lo más seguro es que dejaría para otras administraciones sacar a Venezuela del foso. Todo lo cual

perjudicaría, enormemente, su sitio en la historia. El problema para Caldera, visto por Caldera, se diferencia del problema visto por otros, en el sentido de que el Presidente no cree, ni por un instante, en la posibilidad de no terminar su período de Gobierno. Esto es importante entenderlo, porque es la única forma de explicarse como -para Caldera- el peor escenario es llegar al final de su Gobierno sin haber resuelto los graves problemas del país. En resumen, Caldera en su fuero interno, sabe que su Gobierno puede no ser exitoso. Pero lo que no acepta como posible, es que sea interrumpido antes de su culminación constitucional. Por lo tanto, su selección de opciones de gobierno estará condicionada por su visión del éxito posible y no por consideraciones de permanencia y estabilidad. Este trabajo, en su visión, ya lo hizo... Esa actitud puede ser muy positiva.

Aun cuando, la opción del «más de lo mismo», puede fracasar, no hay tampoco que descartar el éxito posible. Si Caldera, además del capital extranjero, que sin duda vendrá a participar en la Apertura Petrolera, logra interesar y estimular en forma masiva, la participación del capital nacional, mediante la «popularización» de la inversión por parte de los venezolanos, podría fortalecerse enormemente nuestro mercado de capitales y crear, paulatinamente, un país de pequeños ahorristas e inversionistas. El Estado habría así encontrado un mecanismo para la más justa distribución de la riqueza generada por el único bien verdaderamente competitivo en lo internacional que tenemos, ya operativo en el país (Por primera vez, una parte importante de la riqueza petrolera, sería de la nación (los «nacionales») y no exclusivamente del Estado, como ha sido hasta ahora).

Esta estrategia le daría un interés económico a la ciudadanía para seguir apoyando su gestión. La Apertura Petrolera y la participación nacional, tendría efectos multiplicadores importantes, no sólo económicos, sino también sociales y culturales. Al abrir nuevos horizontes de relaciones institucionales

entre el Estado y sus ciudadanos, estimularía, además, las libres transacciones financieras y comerciales. Al tener ciudadanos más participativos causaría cambios importantes en la naturaleza del Estado, para poder servir y atender bien a esa nueva pléyade de ciudadanos que, de hecho, se involucrarían más en las grandes decisiones nacionales. Hay pues, la posibilidad de una salida feliz a la opción «más de lo mismo», que en el fondo ya no sería «**eso**».

2) **La convocatoria a un gran gobierno nacional con apoyo militar y popular.**

Posible, aunque no fácil. La gran pregunta es ¿cómo se selecciona a ese Gran Gobierno?. ¿A quienes se convoca?. ¿A los partidos?. Dado su descredito actual ¿se sentirán los ciudadanos representados en un Gobierno de partidos?. Eso en lo político. En lo económico/ patronal, ¿sería Fedecámaras un interlocutor institucional aceptable para la mayoría de nuestros empresarios, grandes y pequeños?. En lo económico/sindical, ¿puede la C.T.V. representar a nuestros trabajadores?. Muchos creen que no. ¿Entonces?. ¿Cómo se organiza representatividad para la llamada sociedad civil emergente?. ¿De los empresarios fuera de Fedecámaras?. ¿De los trabajadores fuera de la C.T.V?. A pesar de que personas a quienes mucho respeto, como Asdrubal Baptista, entre otros, hayan dicho que **sí** hay instituciones en nuestro país, yo no estoy tan seguro que esa aseveración sea cierta en lo que pretende significar. Hay instituciones como el Banco Central, P.D.V.S.A., el Metro de Caracas y alguna otra. Pero no son las que con su aquiescencia puedan comprometer a sectores importantes del país, como sería el caso de ser verdaderas instituciones fuertes y creíbles los partidos políticos, las organizaciones patronales y las organizaciones de los trabajadores. Por supuesto, que también existe la Iglesia, la cual me atrevo a insinuar que en estos momentos no parece tener mucha fuerza de convocatoria masiva en Venezuela. Esto puede cambiar de aplicar la Iglesia una política comunicacional agresiva

de diseminación de algunos de los aspectos sumamente importantes que han cubierto los obispos en sus diversos mensajes. La Iglesia tiene que jugar en todas nuestras reformas sociales un papel mucho más activo que el que ha jugado hasta ahora. Menos elitesco en sus métodos comunicacionales y más popularizador de su doctrina. La otra institución es, por supuesto, la de las Fuerzas Armadas, cuya fuerza de convocatoria, algunos preferiríamos no estimular.

Agreguemos a lo anterior, la reticencia del Presidente Caldera de gobernar con socios. Reticencia, apoyada además por el éxito político alcanzado gobernando solo. Su control sobre el Congreso, sin tener control en el sentido político/ortodoxo, y su imagen de gobernante democrático, a pesar de haber gobernado casi todo su período con las garantías constitucionales suspendidas. Quien es capaz de lograr **eso**, no va a tener muchas inclinaciones a llamar a otros para compartir con ellos el acto de gobernar.

Sin embargo, los tiempos cambian. Las popularidades declinan y las autosuficiencias se deterioran y se vuelven intolerables e incompetentes. Por lo tanto, en una situación como la descrita, pudiera darse el caso de que la única salida al caos o al golpe de Estado, fuese un Gobierno de apertura nacional, de coalición, de ancha base, o como se prefiera llamarlo.

Uno de los problemas con esta opción, es que si fracasara, no le dejaría muchas opciones abiertas a próximos gobiernos. Si ya fracasamos con gobiernos de individualidades (Herrera, Lusinchi, CAP, Velázquez y ahora Caldera) y si fracasamos también con gobiernos de representatividad pluralista, ¿a quién llamaremos después?.

Al igual que con todas las opciones, esta tiene también posibilidades de éxito. Si se resuelven a apoyar al Presidente los mejores talentos del país. Si la ciudadanía apoya la gestión, abriendo, con algunos sacrificios, un compás de espera. Si las Fuerzas Armadas se quedan tranquilas en sus cuarteles y se

ocupan de los problemas que les competen. Si la Iglesia le da apoyo moral masivo al esfuerzo, es muy posible que el resultado final sea exitoso, ya que además, se tendría el apoyo de organizaciones internacionales. Habría confianza del capital extranjero y nacional en la inversión en Venezuela, y podrían ponerse en práctica muchos de los programas conocidos e imprescindibles, pero difíciles de implantar, bajo otras opciones.

3) **Disolver el Congreso y/o convocar una Constituyente**. Mientras más tiempo pasa menos deseable parece ser esta opción. No sólo menos deseable, sino también menos factible. Si se trata sólo de una reforma constitucional esta podría llevarse a cabo bajo cualquiera de las opciones de gobierno discutidas en este trabajo. Un Fujimorazo, no parece propio de la personalidad de Caldera. No porque en el fondo no tenga algunas inclinaciones autocráticas, que si parece tenerlas, sino porque Caldera es ante todo un civilista, y todo acto que de alguna manera afecte al libre juego de la democracia, tiene que tener una justificación y un asidero legal. ¿Suspensión de garantías?. ¡Si!. ¿Disolución del Congreso?. ¡No!. ¿Convocatoria a una Constituyente, llenados los requisitos legales?. ¡Quizás!. Pero pienso que Caldera evaluaría la acción como de alto riesgo político. Las últimas elecciones demostraron que todavía nuestros electores no han podido separar mentalmente a los candidatos elegidos uninominalmente de su afiliación partidista. Y se produce el curioso fenómeno que, a pesar de haber tenido la oportunidad de elegir un 50% de los congresantes en forma uninominal, separándolos, por ende, de su afiliación partidista, no hay un solo diputado o senador en el Congreso Nacional que haya sido electo uninominalmente, sin el apoyo de uno de los cinco partidos o agrupaciones políticas principales del país (A.D., COPEI, Causa R., MÁS, Convergencia). O sea, que el elector no distingue, ni selecciona al candidato independiente. Siendo esto así, ¿porqué hemos de pensar que una Asamblea Constituyente tendría una composición política significativamente diferente al Congreso

actual?. Más aun, ¿porqué hemos de pensar que los independientes no afiliados a los partidos políticos, tendrían mayor oportunidad de éxito en esta ocasión?. Quizás algunas organizaciones políticas de corte reciente, como por ejemplo, el Movimiento Bolivariano del Comandante Chávez, lograra colocar a dos o tres representantes. ¿Y qué?. Para la modernización del país, que es lo que se pretende, eso sería más bien un retroceso. Caldera, lo sabe, y sus elucubraciones y discusiones con él mismo, le dan a esta opción una baja probabilidad.

Como las otras opciones esta también podría ser exitosa. Pero en este caso los factores críticos serían tan difíciles de superar y el tiempo necesario que tendría que transcurrir, para organizar legalmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y desarrollar este proceso, crearía tal vacío de poder y de gobierno, que difícilmente se puede anticipar un escenario cuyo éxito pudiera compensar al desgobierno que provocaría la espera.

Conclusiones (La Aritmética de la Predicción)

Habiendo sido partícipe invisible del pensamiento de Caldera, mi análisis de probabilidades, como pronosticador, para las diferentes opciones es el siguiente:

1) **Más de lo mismo**: 50% (Dentro de este 50% las posibilidades de éxito de este escenario, las coloco también en un 50%. El otro 50% conduciría, por supuesto, al fracaso).

2) **Gobierno de amplitud nacional**: 35% (Dentro de este 35% las posibilidades de éxito, serían, en mi opinión, de un 60%. Quedaría pues un 40% de posibilidades para el fracaso de esta opción).

3) **Disolución del Congreso y/o convocatoria a una Asamblea Constituyente:** 10% (Las posibilidades de éxito para esta opción, de producirse, no pasarían, en mi opinión del 15%. Quedaría pues un 85% de posibilidades de que, una vez instalada,

esta opción fracase).

4) **Otros**: 5% (Sin posibilidades en la visión Caldera). A estas posibles salidas no institucionales, no les doy ninguna posibilidad de éxito.

Piense, querido lector, en la opcion que más lo estimula, y trabaje duro por conseguirla. De lo contrario, como en el viejo «slogan» publicitario, el Presidente y el Gobierno continuarán pensando por Usted... y sin Usted.

Y eso es parte grande del problema actual.

30 de marzo 1995

EL GRAN ACUERDO NACIONAL

A la fecha de escribir este artículo, no se si Fedecámaras habrá o no firmado un acuerdo tripartita (Gobierno, sector laboral, sector empresarial), o una Carta de Intención. Ni tampoco se si el Presidente de la República será «testigo de honor» de este acuerdo, o testigo simple, o firmante o ausente. Ni mucho menos cual será la redacción final de lo que se firme (si se firmara). Pero asumiendo, firma o no, que lo que se busca en forma prioritaria es establecer un acuerdo tripartita para combatir la inflación, donde dos de las partes se comprometan a hacer ciertos sacrificios sectoriales (los sectores laboral y empresarial), y el Gobierno a tomar ciertas acciones, todas tendientes a combatir la inflación y a reducirla a dimensiones más tolerables por la ciudadanía, entonces, tengo sobre este acuerdo los siguientes comentarios específicos.

- Para mi lo más importante en toda discusión sobre un probable acuerdo entre varias partes, es la naturaleza del entorno dentro del cual se pretende negociar. En efecto, ya la palabra **negociar** implica un cierto equilibrio de poder entre las partes. Si una de ellas está en posición de **imponer** su punto de vista sobre la otra, entonces, no habrá habido **negociación**, y por lo tanto, el «acuerdo», al cual se llegue, no podrá considerarse como legítimo, ni mucho menos de «obligatorio» cumplimiento por aquellos a quienes le ha sido «impuesto».

De un ligero, pero factual, examen de las condiciones exógenas, dentro de las cuales se inserta la negociación de este acuerdo, podemos detectar dos factores negativos muy importantes, que no proveen el clima necesario para negociar dentro de condiciones de igualdad.

1) El Gobierno Nacional tiene ya, por casi un año, suspendidas las garantías constitucionales. A pesar de que algunos, hayan manifestado que ésto no significa la suspensión

del Estado de Derecho, no hay duda alguna de que sí suspende ciertas libertades fundamentales, como para que las otras partes no se sientan del todo «cómodas» con este ambiente y, mucho menos, en condiciones de igualdad ante el Gobierno.

2) El propio Presidente de la República y varios de sus ministros, ante opiniones disidentes sobre las bondades de este Gobierno, expresadas por algunos -dentro y fuera del país- han calificado a los que así opinan, como «traidores» a la patria, «los frustrados de siempre», etc. Es evidente que toda negociación implica la confrontación de varios puntos de vista. Si disentir del Gobierno va a resultar en recibir -de los más altos niveles oficiales- estos calificativos, muchos se abstendrán de emitir su verdadera opinión y, por lo tanto, cualquier acuerdo que resulte de una negociación donde dos de las partes expresen opinión, a través del filtro de una mordaza, entonces, las decisiones así tomadas no tendrán legitimidad como para esperar que sean cumplidas por aquellos a quienes los amordazados pretendan representar (Me adelanto a cualquier posible respuesta, que quisiera exhibir como libertad de expresión algunas desavenencias públicas que hayan podido expresar las partes. El problema, como lo veo yo, no está en lo que se haya dicho, sino en lo que se haya dejado de decir).

Pero, más allá del ambiente inapropiado para cualquier negociación con el Estado, creado por la suspensión de las garantías constitucionales y por la forma desconsiderada como este Gobierno ha reaccionado ante ciertas críticas negativas a su gestión, existen también en el país otras realidades institucionales que entorpecen la posibilidad de establecer un acuerdo **cumplible**, como el que se pretende.

En efecto, la naturaleza del Petro-Estado ha creado un Estado sin verdaderas instituciones, dado entre otras características, a su condición de *Gran Distribuidor* de la riqueza nacional, por ser el dueño del recurso petrolero, su explotador y operador, el receptor de la renta y la regalía y el recolector de

los impuestos que genera el negocio de los hidrocarburos en Venezuela. Por ser un país monoproductor, esto convierte al Estado, como ya se ha dicho, en *Gran Distribuidor* de la mayor parte de la riqueza nacional y crear una sociedad que pensó que podía vivir gratis para siempre. Dentro de una sociedad que lo recibe todo del Estado, no es fácil que se desarrollen las instituciones civiles que se desarrollan en otros países, donde el sector privado y todos los ciudadanos, están acostumbrados a generar, con su trabajo, gran parte de la riqueza nacional. Ello le da la oportunidad de desarrollar instituciones fuertes y representativas que pueden negociar de frente y en igualdad de condiciones con el Gobierno, cualquiera de los aspectos de una sociedad que afecten al bien común. No es ese el caso en Venezuela. El Petro-Estado creó en lo político una *democracia pactada* que en lugar de desarrollar una democracia madura, a la cual se le deben deberes y obligaciones a cambio de servicios, creó un Estado al cual se le vio como a una maquina de dispensar favores. Y los favores mayores, se los reservaron a una élite política complaciente, que aun en su caricatura de falsa posición oposicionista, no hacía sino expresar desacuerdos en público, solamente para cobrar sus cuotas económicas y políticas en privado. También fue en el fondo, el gran sostén de una farsa democrática, donde las élites políticas a la larga no representaban a los electores. Las élites económicas no representaban a una masa empresarial dependiente de la política oficial, y los organismos sindicales, cómodos y corruptos, menos y menos representaban a los trabajadores. Ahora que el petróleo ha dejado de ser, por lo menos parcialmente, a través del Petro-Estado, el *Gran Distribuidor nacional*, el Estado pretende solucionar los problemas, mediante pactos institucionales que sólo son posibles ante la presencia de instituciones legítimas y representativas de lo que pretenden representar. Lamentablemente, y hay que repetirlo, el estamento político, ni representa, ni conoce las aspiraciones populares. Las organizaciones sindicales, ni

representan, ni conocen las necesidades y aspiraciones de una masa laboral, cuya composición se diferencia, cada vez más de sus supuestos líderes y, el capital organizado en Fedecámaras - con la excepción de algunas organizaciones empresariales regionales- tampoco representa a cierto empresariado emergente que ha modernizado sus estructuras y su manera de pensar, bastante antes de que el Estado y otras instituciones se hayan preparado para actuar dentro de las actuales circunstancias nacionales e internacionales.

Además, el Petro-Estado tiene otras características que dificultan el tránsito hacia la modernidad:

- Su rasgo estructural es el **desequilibrio fiscal**. No puede aumentar los ingresos, ante la baja del ingreso petrolero (No ha diversificado la economía). Ni puede, y es lo más grave, disminuir sus gastos, porque estos forman parte del tejido estructural que soporta su propia naturaleza. Sería demasiado pedir que los beneficiarios del sistema y, de hecho, sus administradores, no sólo **entendieran** que ha llegado el final de su hegemonía, sino que además, fuesen su propio pelotón de fusilamiento.

- **Es un aparato rentista**. En Venezuela, la contribución rentista del petróleo ha disminuido considerablemente. Lo que esto significa es que el aparato del Estado rentista se desarticula y el bien que producía la renta, deja de producirla, y se acerca progresivamente a tener la **rentabilidad** esperada de operaciones industriales «normales».

El resultado es que ya el Estado, privado de la renta que le producía el petróleo, no puede seguirse comportando como un Petro-Estado. Ni puede tampoco, como ya hemos dicho, ser el brazo ejecutor de su propio cambio.

- **El Petro-Estado es estructuralmente incapaz de hacer los ajustes necesarios para solucionar la crisis endémica, propia de los países que dependen de un solo bien** («El Mal Holandés»). Las artificialidades económicas y políticas creadas por el Petro-Estado adquirieron personalidad, poder y dimensión

propia. Son parte del tejido social que defiende y se resiste al cambio. Por eso se hizo vulnerable. Congeló los arreglos políticos, lo cual lo dejó sin preparación alguna para administrar y sobrevivir a los cambios del entorno. Los partidos y las instituciones, hijos de los arreglos del Petro-Estado, lucharan para proteger y conservar su privilegios, dentro de un entorno diferente.

La abundancia, resultado de la renta petrolera, creó la filosofía de la impunidad, no sólo en el terreno de su sospechosa moralidad, sino en la creencia de que el petróleo podía pagar todas las cuentas de la locura y la continua irresponsabilidad. La combinación de sus pérdidas operativas y compromisos financieros desangraron al Estado. Pero, ni aun con el desastre mirándole a la cara, pudo el Estado reaccionar implantando mecanismos de cambio. En su lugar, siguió estirando la «arruga» en busca de tiempos mejores. Aún ahora, pareciera que el Estado se empeña en no reaccionar ante las señales que le envían diariamente los mercados financieros. La privatización está paralizada. La esperanza de Planta Centro acaba de esfumarse. Por lo menos, por ahora. Y si alguna vez ha sido importante el «por ahora»... es «ahora». La Apertura Petrolera es un paso positivo pero no quiere aprovecharse como «palanca» para reestructurar al Petro-Estado. Y lo que no queremos aceptar es que el Estado, tal como opera hoy, no puede presidir sobre un cambio exitoso. Privatización y Apertura Petrolera representan, en el fondo, la extensión de la vieja estrategia del Petro-Estado, de buscar recursos adicionales para solucionar la crisis. El problema nacional no es de recursos. **Esos** los tenemos. El problema nacional es de construir un nuevo Estado que pueda hacer más con menos en lo relacionado con el gasto público. Buscar además, fórmulas para crear mecanismos de distribución del ingreso nacional, que le lleguen a la población sin pasar primero por el peaje de la «unidad del tesoro». Si fuera necesario, distribuyéndole gratuitamente a la población acciones de

P.D.V.S.A., o de Fondos Colectivos constituidos por las acciones de P.D.V.S.A. y de otras empresas, como las de Guayana, por ejemplo. Y eso sería mucho más eficiente que continuar con un Estado propietario de los bienes públicos. Es decir, de todos nosotros. En mi intervención ante la Comisión Bicameral de Energía y Minas, sugerí la necesidad de implantar mecanismos como los aquí sugeridos para asegurarnos de una más amplia y equitativa distribución de la riqueza petrolera. La reacción de un político fue que regalar acciones de P.D.V.S.A. o de un fondo -como el que propongo- lo que haría sería construir un «país de pensionados». Para crear ese calificativo hay que tener muy poco sentido de la responsabilidad compartida que tiene el mundo político por la pésima gestión que ha hecho el Petro-Estado de nuestra riqueza, en un país que -a pesar de sus inmensos recursos- lo que presenta hoy es una elevadísima proporción de pobreza crítica. Un desastre educativo. Un servicio de salud que sólo puede tildarse de criminal. Otros servicios públicos colapsados. Un sistema político que para gobernar requiere de la suspensión de las garantías constitucionales y un entorno social, donde la vida no vale nada ante el hampa desatada.

¿"País de pensionados"?. No habrá pensión suficiente para compensarnos a los venezolanos por el despojo criminal que se nos ha hecho de nuestra riqueza. Pensionados han sido los que sin trabajar, ni producir riqueza, han vivido como élite parasitaria del Petro-Estado.

Un nuevo Estado moderno e imprescindible que empiece a restituirle a todos los venezolanos una pequeña parte de la riqueza que le usurpara el Petro-Estado por muchos años, no puede resumirse en el sentido peyorativo que el político citado le pretendió dar a la condición de pensionado. Pensionado, tiene la connotación de compensación por esfuerzos hechos y de retribución por un derecho ganado. «Mantenido» es otra cosa. «Mantenido» le queda mejor como definición a los responsables de la mala distribución del ingreso nacional, consecuencia de la

aplicación del viejo refrán que dice que: «El que reparte y comparte, y en repartir tiene tino, siempre deja del buen vino, para si la mejor parte».

Conclusiones:

- No se puede lograr consenso entre instituciones que no representan a quienes pretenden representar.

- Sin embargo, el esfuerzo es loable y creo que tendría consecuencias positivas si:

1) Obliga a que las instituciones se reestructuren para adaptarse a la nueva modernidad.

2) Obligue al Estado a reestructurarse para la modernidad y presentar un verdadero plan económico y social que apuntale el compromiso que se le exige a las otras instituciones civiles.

3) Presiona para que el Estado restituya las garantías constitucionales y para que el Gobierno sea más tolerante con la disidencia.

- De lo contrario me temo que el pacto no hará sino ampliar la brecha entre el Gobierno y la sociedad civil y entre las instituciones de la sociedad civil y sus miembros. Lo cual conduciría rápidamente al desmoronamiento de nuestro Estado de Derecho, tal como lo conocemos hoy.

Sobre las consecuencias fatales del posible desmoronamiento de nuestro Estado de Derecho, aún deficiente como lo es hoy, es mucho lo que nuestras jóvenes generaciones no conocen, por no haberlo sufrido... ¿Todavía?.

Depende de que no se siga administrando la realidad con criterio de fantasía.

18 de mayo de 1995

El Informe del Contralor ¿ENEMIGO DE LA PATRIA?

El Informe del Contralor, correspondiente al año 1994, merece y debe ser leído por todos los venezolanos con alguna preocupación por el presente y futuro del país. Y debe leerse por varias razones:

1) Por su organización y presentación.

2) Por su novedoso enfoque.

3) Por su valentía en decir cosas difíciles en forma muy clara, a sabiendas de la delicada epidermis que ha desarrollado este Gobierno y otras instituciones del sector público como reflejo del liderazgo político actual.

Organización y Presentación (El Arte de la Coherencia)

Hay una página al principio del Informe, que parece sobrar, donde se le dá mérito, más allá de lo debido, al proceso de selección del actual Contralor, habida cuenta de la tormenta política, salpicada de algunas discusiones de mal gusto, que precedió a su nombramiento. El resto del capítulo dedicado a la «**presentación**» del Informe tiene muy poco desperdicio. Por desperdicio me refiero a lo que no tenía porqué estar allí. Por lo menos en la forma expresada, ya que por no ser fiel a los hechos, podría arrojar dudas sobre la fidelidad de todo lo demás. Me refiero al caso de Alfredo Gruber. El Contralor pretende presentar la salida del Dr. Gruber como el resultado de una investigación de la Contraloría que cuestionaba **su** gestión como Presidente de la C.V.G. Nada más lejos de la realidad. La salida de Gruber se produce por una investigación de la Contraloría sobre hechos atribuidos a Gruber años antes de su designación como Presidente de la C.V.G (Más adelante, en otra sección del Informe, se precisan mejor las realidades de este incidente). Más aun, las razones del Contralor para cuestionar la integridad moral

de Gruber son de dudosa validez. Se basan en el hecho de que Gruber haya negociado con el Estado una concesión de oro, cuando era Presidente de Palmaven (Filial de P.D.V.S.A). Su condición supuesta de empleado público le impedía efectuar esas transacciones. Sin embargo, la condición de empleados públicos de los trabajadores del sector petrolero ha sido cuestionada más de una vez. Hace solamente dos semanas se presentó un «impasse» entre los trabajadores petroleros y la gerencia del sector, al alegar los trabajadores su condición de trabajadores privados, lo cual -de ser aceptada- les daría derecho a recibir el tristemente celebre bono de Bs. 500, por jornada trabajada, recientemente decretado por el Ejecutivo Nacional. Al final, la industria petrolera concedió un pago equivalente al bono, para no tener que admitir oficialmente que los petroleros tienen la condición de empleados regidos por las disposiciones legales que amparan al sector privado del país. Sería interesante que en su Informe del año 1995, el Contralor comentara sobre esa ambigüedad de definición, que por una parte pretende calificar a los trabajadores petroleros como del sector público mientras, con nombre diferente, le asigna los beneficios destinados exclusivamente, por decreto oficial, al sector privado.

Pero volvamos a la organización y presentación del Informe del Contralor.

Lo primero que llama favorablemente la atención es la definición de objetivos de la Contraloría:

- **Mejorar el desempeño del organismo**.

- **Implantar mecanismos para el control, la conservación y el mantenimiento de los bienes públicos**. Esto pudiera ser clave para que el Estado pueda recuperar el valor de mercado de los bienes dados en garantía a Fogade, y evitar el deterioro contínuo y progresivo de los bienes de empresas públicas con aspiraciones a ser privatizadas.

- **Desarrollar la tecnificación de la Contraloría General de la República**. Se habla de desarrollar un «Sistema Nacional

de Control». Creo que este no es el sentido de dirección correcto. Me suena a credo sobre como controlar al Estado en diez (10) lecciones fáciles. Las situaciones de nuestros entes públicos son diferentes entre si, como deben ser también diferentes algunos de los mecanismos de control de cada uno de ellos. Es más, creo que el control se debe flexibilizar y la delegación debe ser mayor, aunque esto suene a anatema en un país desarticulado. Lo que hay que lograr, como el mismo Informe lo reconoce, es mayor profesionalización y honestidad en el campo de la administración pública, aunado a un cambio de actitud ciudadana (la conversión en ciudadano útil del ciudadano «mediocre», en la muy apta descripción de Gustavo Coronel). Pero, a la vez, se requieren cambios estructurales en la naturaleza del Estado, como también lo intuye el Informe, lo cual, agregaría yo, por fuerza debería venir acompañado de una nueva definición de control para que no sea inhibidor, ni de acciones positivas ni de creatividad. Esto lo acepta el Contralor. Lo que parece no aceptar del todo, es el derecho a equivocarse honestamente. Más adelante, al analizar el Informe, abundaremos sobre el tema.

- **Profesionalización del personal del órgano contralor y los recursos humanos en general de la administración central y descentralizada**.

- **Luchar contra la corrupción**. Más importante aun, «promover con el apoyo de otras instituciones de la vida nacional la internalización de los valores de ética personal y pública que fundamentan el establecimiento de una **cultura de la honestidad**, para superar progresivamente el actual estado de corrupción generalizada que hoy impera en el país». ¡Amén!.

Luego la Presentación describe la «**Misión de la Contraloría**»:

«...velar por la correcta administración del patrimonio público y luchar contra la corrupción».

Su «**Visión de Futuro**» es:

«Consolidarse como fuerza y referencia moral de la

República... contribuyendo efectivamente a la revitalización y reordenamiento del Poder Público, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho».

Esta «**Visión**» se complementa después con objetivos tales como mejorar la calidad de vida y fundamentar sus actuaciones en los «valores de objetividad, imparcialidad, apoliticísmo y probidad».

En los aspectos más técnicos se asoma la posibilidad de adaptar como método de control fiscal el «control de gestión», que no se si se refiere a la posibilidad de eliminar el «control previo». Pero, ojalá fuera así, como parte de la flexibilización del control sobre el gerente público.

En esta primera parte de la Presentación se incluye además:

- **La necesidad de emprender una buena campaña divulgativa sobre las gestiones efectuadas**. Esto es sumamente importante y, para comenzar, la Contraloría debería tener disponible en sus oficinas copias del Informe y su anexo, para aquellas personas que se tomaran la molestia de solicitarlo (Se me ha entregado el Informe, mas no el anexo).

- Se pone énfasis especial sobre lo sucedido en:

El Sector Financiero. «La crisis financiera no fue manejada con los criterios más idóneos y no reportó los resultados esperados». Hubo «una inadecuada gerencia de crisis». Se evidenció «la aparente violación de disposiciones jurídicas». «La mayoría de los directores de los bancos intervenidos han actuado en forma deshonesta».

Sector Minero. En las empresas originariamente contratantes de la C.V.G., se operó «un mecanismo de especulación y trafico de influencias». Se vendieron acciones a «empresas extranjeras de capital abierto» y no se conocen a los accionistas de las mismas. «La C.V.G. no ha desarrollado mecanismos de registro y control para el seguimiento de los contratos».

Sector Eléctrico. «El sector no está regulado por una ley».

«El proceso de privatización... obliga a su ordenamiento y saneamiento».

Los Gastos Militares. La Contraloría se ha «abstenido de dar curso a las ordenes de pago tramitadas ante ella, correspondientes a los casos Margold, Turpial y blindados AMX-30».

La Junta de Emergencia Financiera. En este subcapítulo hay una serie de consideraciones que ameritan discusión. Entre ellas está la crítica que se le hace al Articulo 8 del Decreto 248 (ya derogado) sobre las responsabilidades personales limitadas que se le aplicaron a los miembros de la Junta, en el sentido de que «sólo responderán por aquellos actos ejecutados de mala fe o con intención de obtener provecho a su favor o de un tercero». En este sentido el Contralor sugiere que tal disposición entra en conflicto con el Artículo 121 de la Constitución que reza «...el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder, o por violación de la Ley». A mi manera de ver, ambas disposiciones son limitantes en su definición de responsabilidades individuales en el ejercicio de cargos públicos. Una habla de «mala fe» y otra de «abuso de poder». Una habla específicamente de actos de corrupción, otra de violación de la Ley. Ninguna pasa juicio sobre las acciones a tomar por el Estado, en caso de equivocación honesta del funcionario en perjuicio de la nación. A menos que equivocarse honestamente viole alguna Ley (¿La de Salvaguarda?).

Pero independientemente de los aspectos meramente legales, el Contralor parece suponer que el mensaje que se le daba a la Junta de Emergencia era el de que sus miembros «gozaban de inmunidad si su gestión fracasaba por su negligencia, impericia o imprudencia, siempre que no hubiese mala fe o lucro personal». Ahora bien, pienso que no puede haber negligencia («descuido u omisión»), ni imprudencia («punible e inexcusable negligencia») sin «mala fe». De manera que **eso** estaría cubierto por el Decreto 248. Lo que si no sería punible sería la «impericia»

(lo contrario de «pericia» que a su vez se define como «sabiduría, práctica, experiencia y habilidad»). Además tener «pericia» tampoco da garantía absoluta de que quien la posea no pueda equivocarse. Más aun, habría que considerar también en el caso de que se castigara la impericia del que desempeñe una posición, la impericia que, por su parte, tuvo quien lo designó. En esta discusión y confusión descansan muchos de los males de nuestras leyes y controles que pretenden castigar los actos contra la propiedad y patrimonio del Estado. Debo asumir que el Contralor sugiere que el fracaso siempre es punible aunque ocurra de buena fe. Y no es que «no importa el fracaso si ocurre de buena fe». Claro que importa, y le cuesta recursos al Estado. Pero la pregunta es, ¿si quien se equivoca de buena fe tiene responsabilidad legal e individual ante el Estado?. Si la respuesta es sí, no nos extrañemos - entonces- que nuestros gerentes del sector público adopten la posición de no tomar decisiones creativas, por temor a equivocarse e «ir preso». De no modificar este enfoque, nuestra administración pública estará sujeta a que los únicos actos de innovación gerencial, con riesgo, que se tomen, sean aquellos que le dejen al empleado público algún beneficio personal. Y esa parece ser la norma. Y lo que es más grave el Contralor lo sabe, por cuanto admite al final de su **Presentación** que el problema de fondo no se resuelve con leyes y procedimientos, es cuestión de «actitud nacional». Más aun, tampoco es aceptable la excusa de «las adversidades heredadas», ni el resultado positivo del poder público es «la consecuencia necesaria del sólo buen comportamiento o de las buenas intenciones de los funcionarios».

Así que, mi querido Contralor, usted concluye:

- Que los errores se castigan así sean de buena fe (cosa que no comparto del todo).

- Que los Gobiernos no pueden apoyarse en la administración anterior para justificar sus fracasos (Amén).

- Que no basta sólo la honestidad y la buena fe para hacer

un Gobierno eficiente (de nuevo, Amén).

- Que «sin resultados el Estado no cumple su fin» (Amén, también).

Caramba, Contralor. Por menos que eso, han regañado a unos cuantos.

El Enfoque Novedoso (La Buena Presentación de la Opinión)

En la sección que sigue a la **Presentación**, denominada «**Evaluación General**», hay que destacar dos aspectos:

1) Algunas opiniones específicas sobre sectores de la administración pública.

2) La presentación por sector de las fallas más importantes detectadas.

Opiniones por Sector.

La Reformulación del Presupuesto. Es importante destacar que, en la opinión del Contralor, con la cual concurrimos y hemos escrito sobre ello en otras ocasiones («Gasto Público. La Mentira Recurrente». **Ya Dios no es venezolano,** Caracas. 1995), la reducción del gasto público es sumamente difícil. Es más, en términos reales, el presupuesto de 1994 es casi igual al de 1993. El presupuesto es inflexible, tal como lo concebimos hoy y con la metodología de su preparación (82% de los gastos ya están predeterminados). Hay impericia en su preparación. Engaño en su elaboración. Corrupción en su ejecución. Me sorprende un poco que el Contralor, al comentar las fallas de la administración descentralizada hable de formulación de presupuestos «deliberadamente insinceros» y no mencione tambien esta «falla», en la elaboración de los presupuestos de la administración central. Yo que he visto el «animal» por dentro, me atrevo a afirmar que los presupuestos de la administración central son tanto o más «insinceros» todavía que los de la administración descentralizada.

El Contralor conoce y denuncia malversación e

irregularidades, pero yo diría que si se corrigieran estas irregularidades no se reduciría el presupuesto. Lo que sí habría, sería mejor uso de los recursos disponibles. Las carreteras serían de mejor calidad y el vaso de leche le llegaría a más niños, etc.

Por lo tanto, ante la dificultad de disminuir los egresos hay que aumentar los ingresos y, para ello, el Contralor sugiere algunas vías:

- **Revisar el subsidio de la gasolina**. Se acepta que hay que reducirlo y la única vía es mediante un aumento de precio al consumidor, aunque el Informe no lo diga en forma explícita. Al hablar de subsidio, el Contralor sigue la línea de informes anteriores de la Contraloría, en los cuales se mide la magnitud de este subsidio examinando las cuentas nacionales donde, dentro del rubro de ingresos, se contalibiliza el impuesto al consumo, pagado por P.D.V.S.A. En las cuentas de la industria petrolera el impuesto al consumo es un egreso, que se paga independientemente de las ganancias de la corporación y, por lo tanto, no es factible que «cuadren» sin ajustes previos las dos cuentas. Lo que sugiere el Contralor es que la pérdida de P.D.V.S.A. en sus ventas de gasolina en el mercado doméstico no es igual (es mayor) que el «subsidio» que concede el Estado a los consumidores. Bien está el saber **eso**. Pero saberlo no resuelve el problema, ni del subsidio ni de la pérdida operativa real de P.D.V.S.A. en el negocio de la gasolina. Por ambas razones se requiere un aumento del precio del combustible, y si se quiere mantener la especie de que P.D.V.S.A. opera como empresa comercial, entonces, hay que poner sus cuentas en negro en lo relacionado con este rubro, y así el Estado recibiría de regreso el monto del subsidio actual... y algo más.

- **Continuar la Reforma del Estado y mejorar su funcionamiento administrativo**. Aunque estos dos capítulos están separados en el Informe, no hay duda sobre la conveniencia de analizarlos juntos. Sin una reforma política, reconocida como necesaria por el Contralor, no será posible una reforma

administrativa. El concepto negativo del Petro-Estado que es una consecuencia política/administrativa de la abundancia petrolera y de nuestra condición de país monoproductor, no se modificará sin una revisión a fondo de una concepción del Estado (bajo el control de unos pocos), para que este control pase a ser parcialmente ejercido por la Nación (que somos todos). Sin este nuevo enfoque, persistirán los daños materiales y morales que le causan a la República, en palabras del Contralor, «el descuido, la negligencia, las fallas y las omisiones que continúan ocurriendo en algunos sectores administrativos, en un contexto caracterizado por inadecuados sistemas, normas y procedimientos...»

- **La presentación por sector de las fallas más importantes**. Un acierto indiscutible del Informe es la presentación, en recuadros detallados y fáciles de leer, de las fallas más importantes de cada sector analizados por la Contraloría.

- **Fallas de la Administración Central**: «Evasión y falta de diligencia de la recaudación fiscal. Manejo indebido de fondos en cuentas bancarias y falta de reintegro de anticipos, intereses y remanentes. Fraccionamiento de adquisiciones y contratos. Falta de comprobación de gastos efectuados. Malversación de fondos. Irregularidades en el inventario, administración, manejo y custodia de bienes nacionales. Incumplimiento de lo dispuesto en las publicaciones de la Contraloría General de la República. Sobreprecio de adquisiciones. Fallas en la contratación, ejecución y control de las obras públicas. Ineficacia de los órganos de control interno».

- **Fallas de la Administración Descentralizada**: «Planificación deficiente y reiterado incumplimiento de objetivos y metas. Formulación de presupuestos deliberadamente insinceros. Adquisición de compromisos sin disponibilidad presupuestaria. Utilización de recursos para finalidades distintas a las legales o administrativamente previstas. Deficiente mantenimiento y conservación de bienes y equipos. Concesión

de anticipos sin que se de inicio a las obras contratadas. Inejecución de las cláusulas penales contractualmente acordadas. Atrasos en las conciliaciones bancarias. Retardo en la presentación de estados financieros. Registros contables de transacciones sin soportes documentales».

- **Fallas en la Gobernación del Distrito Federal**: «Fallas en la formulación del presupuesto. Imprevisión en la adquisición de bienes y servicios. Fallas recurrentes en la administración de fondos de avances. Graves deficiencias en la administración de personal. Ineficacia en la ejecución de obras. Problemas de organización. Crisis en el servicio de salud».

- **Fallas en las Administraciones Estadales**: «Deficientes niveles gerenciales. Inexistencia de normas y procedimientos actualizados. Descuido en el inventario de bienes. Fallas en la administración financiera. Deficiencia en la ejecución del presupuesto. Irregularidades en la ejecución de obras. Incumplimiento de la Ley de Descentralización. Proliferación de entes descentralizados. Ausencia de acciones correctivas. Mediatización del Control».

- **Fallas en las Administraciones Municipales**: «Ausencia de manuales de normas y procedimientos y de instrumentos legales. Malversación de fondos. Falta de comprobación del gasto. Irregularidades en pagos a concejales. Deficiencia en la administración de personal. Fallas en la contratación y ejecución de obras. Contrataciones indebidas para la recaudación de impuestos. Fallas en la formulación y ejecución del presupuesto. Deficiencia en la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal».

Conclusiones (¿Y ahora qué?)

- Las fallas detectadas están listadas arriba.

- La necesidad de reestructurar al Estado y a la Administración Publica, está señalada.

- El mito de que leyes y normas «arreglan» a una

administración, está destruido.

- El «otro» mito de que sólo con buenas intenciones y honestidad se administra bien, también está destruido.

- Que la prueba de una buena administración se ve en los resultados y no en la retórica, está establecido.

- Que el Estado mal administró la crisis financiera y esto, le hizo un daño irreparable al país, está dicho.

- Que se requiere un cambio de actitud en los ciudadanos y el desarrollo de una «cultura de la honestidad», está solicitado.

Además, salvo algunas aseveraciones con las cuales no estamos de acuerdo (básicamente el caso Gruber en la C.V.G. y la homologación de los conceptos de «negligencia» e «imprudencia» con «impericia» para los fines de dispensar castigo al funcionario público que le produzca perjuicio al Estado), saludamos el esfuerzo hecho este año por la Contraloría General de la República en la presentación de su Informe al Congreso. Además, le recomendamos -amistosamente- que se ocupe incansablemente de divulgar no sólo el mensaje implícito en las fallas detectadas en la operación de la cosa pública. Mal que bien eso lo han hecho casi todos los contralores. El mensaje más importante y el que vale la pena recoger, hasta en una separata, es el vinculado a los aspectos negativos conceptuales y estructurales de nuestro Estado. Aquellos que no son solucionables por un mero perfeccionamiento del acto gerencial, o una mejora en las leyes, normas y procedimientos. Todo **eso**, ayuda. Pero sin un cambio profundo en la naturaleza del Estado. En su interpretación de sus deberes y derechos. En su visión del rol de los ciudadanos como participantes indispensables en la toma de decisiones fundamentales de todo acto de Gobierno... Sin una nueva visión sobre todo **eso**, el país no se recuperará.

El Informe del Contralor, trata todos esos temas.

Por **eso** es importante y diferente.

Por **eso** merece que todos lo leamos.

Porque es una pieza fundamental para llegar a una gran

discusión nacional, donde todos podamos participar en igualdad de condiciones, sin pasar primero por la farsa de un presunto acuerdo nacional dentro del cual no se ha incluido un debate sobre lo verdaderamente importante.

Y mucho de lo verdaderamente importante, aunque a veces, en forma aislada, está en el Informe al Congreso de la Contraloría General de la República.

Ojalá que en esta ocasión el sector político se ponga los anteojos y lea lo que está allí.

Y que una vez «bien leído» la respuesta no sea un intento de descalifición personal, dentro del estilo del título de este trabajo.

25 de mayo 1995

DEMOCRACIA A LA MEDIDA (II)

El Eslabón Perdido (La esencia de la Democracia)

Pasan los días y la pregunta se hace más apremiante: ¿Puede la democracia presidir sobre un cambio estructural del sistema de Gobierno, de la modernización de la economía y de la equidad social en Venezuela?. En realidad éstas fueron las preguntas que pusieron al descubierto las nuevas brabuconadas de Chávez. En el fondo, su manera primitiva de plantear los problemas sugieren dudas, en algunos, no sobre los aspectos específicos mencionados por Chávez -nepotismo y conspiración militar- sino sobre la posibilidad de éxito de un gobierno democrático, como pretende ser el de Caldera, para solucionar los problemas del país. Duda que se acentúa, día a día, ante la pérdida progresiva de los derechos ciudadanos, visible aún en esta caricatura de la democracia, representada por nuestro sistema de gobierno: interrogatorios en la D.I.M. a periodistas por repetir un cable de una agencia internacional de noticias y presiones a ciudadanos e instituciones para que no expresen críticas severas contra el Gobierno, mediante el expediente de exponerlos -a unos y a otros- al desprecio público. No es por pura casualidad que la campaña contínua de descredito y de reclamos tronadores, por parte del Gobierno, le haya disminuido ante las clases más pobres del país -que son las más- el poco prestigio que le quedaba aún al sector empresarial del país y se empiece a responsabilizarlo de todos los males de Venezuela. Lo más probable es que el triste final del pacto antinflacionario sea el de aumentar aún más la animosidad existente en contra del sector productivo del país cuando haya que buscar un chivo expiatorio para justificar el fracaso de ese pacto. Caldera, por su parte, ya ha demostrado hasta la saciedad que, en su visión, para administrar la crisis se requiere de la suspensión de las garantías constitucionales. Lo cual es otra manera de decir que los derechos

individuales que concede la democracia, son incompatibles con los procesos radicales de cambio.

Pero, la discusión no se focaliza en Venezuela y en el Perú, por no citar sino dos ejemplos. Hace algún tiempo un «liberal» tan genuino como Michael Kinsley, se hacía la reflexión sobre si para hacer el tránsito del tercer mundo a la modernidad, no se requeriría de un sistema dictatorial, el cual, una vez logrado el cambio, convocaría a elecciones y, **entonces** y sólo **entonces**, en presencia de un entorno económico y social modernizado podría implantarse un verdadero sistema democrático. Aunque no lo mencionó específicamente, su reflexión parece haber tenido a Chile en mente. Sin embargo, sus ejemplos explícitos fueron Rusia, donde el empeño de implantar de inmediato un sistema democrático, ha provocado un caos económico y social inmanejable. Mientras que en China, un sistema de gobierno dictatorial, está a punto de lograr una verdadera revolución modernizadora de la economía y la sociedad. El problema con este análisis -como lo admitió el propio Kinsley- es que no hay ni seguridad ni mucho menos garantías, de que un Gobierno dictatorial exitoso en lo económico y en lo social, esté dispuesto a convocar a la creación de un sistema de gobierno democrático. Un claro ejemplo de esta reticencia lo podemos observar en la conducta de los gobiernos de los países llamados tigres asiáticos, donde el éxito no ha resultado en una modernización democrática del sistema político.

Pero quizás, a la discusión anterior le falta el ingrediente de una definición critica, que parece ser causa, efecto, objetivo y estorbo a la vez: ¿Qué se entiende por sistema democrático? y ¿tienen los países del Tercer Mundo, que pretenden modernizar a sus sociedades, un verdadero sistema democrático?. ¿O es **precisamente**, la presencia de un sistema seudodemocrático lo que dificulta el tránsito exitoso a la modernidad?.

La Democracia en Venezuela (Farsa, ficción o realidad)

Es imprescindible plantear la discusión en términos de examinar primero si existe o no un sistema verdaderamente democrático en Venezuela, antes de concluir sobre sus posibilidades de presidir sobre un proceso de modernización de la sociedad. Cualquier análisis general sobre el tema, invita a la conclusión de que nuestro sistema tiene «fachadas» de democracia, pero le falta en los «cuartos» del sistema, muchos muebles irremplazables. Esas ausencias llenadas por improvisaciones y la construcción de parcelas de intereses individuales y grupales, son los que dificultan el proceso de modernización.

Nuestra democracia se construyó y se solidificó, en forma bastante *sui-generis*, con los recursos del petróleo. El Petro-Estado, como lo hemos dicho en varias ocasiones, creó la figura del **Estado Distribuidor.** Eso, a su vez, impidió el desarrollo de instituciones fuertes en las cuales podría apoyarse el Estado democrático. Sin instituciones reales y bajo el principio «distribuidor» se hizo innecesaria la creación de mecanismos para administrar los conflictos propios de toda sociedad pluralista. Se gobernó por consenso. Pero, oígase bien, no por consenso institucional sino por el falso consenso derivado de la convicción del Estado de que sus métodos distributivos eran aceptados por todos como «justos». Y todo eso fue posible por las características de país monoproductor y rentista de Venezuela. Pero, cuando la renta -por sí sola- ya no alcanzó y el rol distributivo se quedó corto en la posesión de los recursos a distribuir, los «cuartos» vacíos de nuestra democracia se pusieron en evidencia. Se hizo manifiesta la fragilidad de nuestras instituciones, su ausencia de representatividad y -por ende- de legitimidad. Tomemos como ejemplo a Fedecámaras y a la C.T.V. Tanto la una como la otra permitió que se diluyera su fortaleza institucional en políticas que solidificaran sus relaciones con el Estado, para obtener de éste, como *Gran Distribuidor*, la mejor

tajada. Así el liderazgo de ambos se burocratizó y en la aguda definición de un ilustre venezolano, «a Fedecámaras se la cogieron los empleados». Queriendo destacar con esto, la ausencia de sus directivas de los verdaderos capitanes de nuestra industria y comercio.

Por su parte, el liderazgo de la C.T.V., no sólo se burocratizó sino que se congeló en el tiempo. Se ausentó de las grandes mayorías de empleados y obreros. Terminó no siendo ni siquiera el apéndice laboral del partido político dominante. Los partidos políticos nacionales, sufrieron el mismo destino, y esa fragilidad no puede estar más clara que en la falta de definición y rumbo que han demostrado -sobre todo en el manejo de la crisis- durante los gobiernos de C.A.P. y Velázquez antes y de Caldera ahora. Y no podía ser de otra manera. El Petro-Estado, centralista, proteccionista y, por definición discrecional, sustituyó al análisis y la discusión de los problemas por la negociación entre el Estado y las otras instituciones (frágiles) por el reparto de la riqueza no trabajada. De esa manera de tomar decisiones no podía surgir sino la corrupción, que se instaló como alcabala de cobro de peaje en todas las instancias del mecanismo de toma de decisiones. Se corrompió lo político por el exceso de poder del Estado y se corrompió lo civil por la subordinación que reemplazó a la ausencia de conflictos institucionales. El «cuarto» de la democracia más importante que quedó vacío, fue aquel que debería haber albergado a las reglas del juego que la democracia impone para dirimir civilizadamente los conflictos. Se cometió el error **expreso**, de confundir consenso para la **solución** de los problemas de **fondo**, con **consenso** para el establecimiento de las reglas que permiten la libre discusión de **fondo** de los problemas. Lo último es democracia en acción. Lo primero es la seudodemocracia que prostituye a las instituciones para imponer, primero, su criterio y disfrazar después a las decisiones en forma de consenso. Esa es, hasta ahora, la nuestra. La que no ha medido en muchos años la fuerza relativa de las partes, la que todavía

piensa que un mal arreglo es preferible a un buen conflicto. De «malos» arreglos en «malos» arreglos, hemos llenado el camino a la crisis actual. Por eso, por otras razones y por otros ejemplos, no funcionan los servicios de educación y salud. No hemos «negociado» con los gremios y los sindicatos. Hemos asumido que firmar un contrato colectivo incumplible es preferible a una huelga, **administrada y llevada a cabo** dentro de las disposiciones de la Ley de Trabajo que, por cierto, son bien explícitas para estos casos y que, tanto los obreros como los patronos, como el Ministerio del Trabajo, se saltan alegremente a la torera. Esta realidad nos señala otra de las dificultades casi insoluble construida por la seudodemocracia: la falta de honestidad intelectual para convivir dentro de un sistema basado en la confianza en que la mayoría aprueba y respeta las reglas del juego. Los acuerdos formales. El espíritu del respeto al derecho ajeno. En fin, la convicción de que todos somos honestos y, por lo tanto, no es necesario poner un policía al lado de cada ciudadano para que respete las normas que la colectividad democrática le ha dado. Lamentablemente no es así. Nos hemos convertido en abanderados de la trampa. De la violencia de los procedimientos que las sociedades civilizadas y organizadas introducen, para facilitar la convivencia. Así aquí, los semáforos no se respetan «porque no viene carro en dirección contraria». O sea, que convertimos en **discrecional** lo que es de **obligatorio** cumplimiento. Los motociclistas irrespetan, no sólo los semáforos, sino el sentido de dirección de la calle y avenida, ante la mirada indiferente de los fiscales de tránsito, la Guardia Nacional y todo agente uniformado de orden público que se encuentre por «allí». El Congreso resuelve que en la composición del C.S.E., deben participar seis candidatos independientes y los partidos políticos disfrazan a sus simpatizantes para violar la disposición. Y todavía creemos que mediante discusiones legislativas podemos establecer un clima de respeto general al Estado de derecho. No es así. Uslar Pietri en una ocasión dijo

que las leyes no convierten a un pillo en un hombre honrado. Y es así. Por eso, la idea subyacente de que represión y legislación le cambian la mentalidad a un país, es parte del circulo vicioso de la corrupción, consecuencia de creer que controles y discrecionalidad de la autoridad resuelven el problema. Todo lo contrario. La anarquía mayor se crea cuando se pretende reemplazar educación, y buena y oportuna información, con represión y control. Bien está que se castigue, por ejemplo, a los banqueros corruptos, pero sería igualmente importante que en nuestras escuelas diéramos cursos de economía doméstica, de identificación de los puntos críticos a analizar ante de hacer una inversión. De cotejar riesgos con beneficios en la escogencia del banco que nos conviene. No sólo en la escuela, que por allí se empieza, sino en sistemas de reeducación de adultos, mediante el uso masivo de los medios de comunicación para que prestasen, aunque parcialmente, un servicio al público. Educación y más educación ciudadana. Rescate de los valores del ahorro, trabajo y respeto al derecho ajeno. Recalcar que el «vivo» nuestro no es sino un delincuente potencial, a veces ni tan potencial, porque en muchos de estos casos la delincuencia dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad. Así y sólo así, nos quitaremos de encima el San Benito del **Estado Distribuidor** y habremos adquirido una nueva voz para fortalecer, defender y reclamar nuestros derechos. Ese será también el camino directo hacia el rescate de la legitimidad y la representatividad de nuestras instituciones y de la creación de normas y reglas del juego que nos permitan administrar nuestros conflictos en forma civilizada y en convivir con diferentes maneras de llegar a soluciones y aceptar que no todas esas soluciones serán de nuestro agrado personal. Esa es la alternativa a esa búsqueda criminal de un presunto consenso nacional, sobre como se deben hacer las cosas. La democracia verdadera, es aquella que sabe gerenciar la disidencia. Las diferentes posiciones ante un mismo problema. No es aquella que le da **una sola** respuesta a la crisis. No es

aquella que le dice a sus miembros institucionales «a quien no le guste el partido, que se vaya», como ha dicho alguien en A.D. Esa actitud que busca la respuesta única y el consenso para todo, se llama fascismo, nazismo, justicialismo y todos los «ismos» que se quiera. Lo que no es, es democracia, así nos desvelemos haciendo causa de fe sobre nuestro compromiso con el sistema. Puede ser que estemos con el «sistema», tal como lo aplicamos en Venezuela. Pero, por favor, no confundamos ese sistema con democracia.

Y, ahora, podemos retomar la discusión inicial, contestando, antes, dos preguntas:

1) ¿Puede un sistema democrático presidir sobre un proceso de modernización de la sociedad en un país?. Mi respuesta es: ¡Si!.

2) ¿Puede un sistema político, como el venezolano, presidir sobre un proceso de modernización de la sociedad?. Mi respuesta es: ¡No!.

Los Caminos del Cambio (La muerte del «más de lo mismo»)

Si la conclusión es la descrita, léase que este sistema de gobierno nuestro no puede presidir sobre un proceso de modernización de nuestra sociedad, ¿qué hacer entonces?. A mi manera de ver no hay sino dos opciones:

1) Evolucionar, dentro del sistema actual, hacia una verdadera democracia con sus características esenciales y sin los vicios ya descritos. Este es un proceso de largo plazo, para lo cual se requiere establecer, desde ya, el acto masivo de educación ciudadana. Diseñar normas y reglas de juego para permitir la libre discusión de las ideas y administrar el conflicto. Entender y aceptar que debe haber un reacomodo institucional, donde unos ganan y otros pierden con relación a los privilegios del viejo sistema. Pero todos ganan en cuanto a su posibilidad de supervivencia bajo el verdadero sistema democrático. De

nuevo hay que resaltar, que instituciones que no puedan «operar» bajo las reglas de una democracia «de verdad», no tienen nada que buscar en este proceso evolutivo.

2) «Forzar» el proceso de cambio, suspendiendo las -hasta cierto punto- falsas (en su aplicación) garantías constitucionales. Crear, de hecho, una dictadura civil, la cual, una vez logrados los cambios estructurales necesarios, regresaría al establecimiento de un sistema democrático que, esta vez, ya habrá corregido los vicios del sistema anterior.

La diferencia mayor entre estas dos opciones, es que en este último escenario no se permite el conflicto en su etapa inicial y el Estado sigue siendo el árbitro de la crisis. Por lo tanto, hay que apostar a que en **este caso**, el Gobierno tendrá la sabiduría y la voluntad de restringir hoy, para liberar después. Más aun, tiene también que tener la capacidad técnica para poder aplicar las correctas medidas de política económica y social que nos sacarán de la crisis. De lo contrario tendremos el peor de todos los sistemas: represión, suspensión de los derechos ciudadanos y un retroceso en la aplicación de las políticas correctas que nos llevarían a la modernización del país. Esta opción puede también, teóricamente, ser llenada, aunque con mayores dificultades de continuidad y regreso, por un golpe militar. Cierta atomización institucional de nuestras Fuerzas Armadas y posiciones nacionales e internacionales rígidas, en cuanto a la viabilidad de esta opción, parecen hacer muy poco posible este último escenario, si la meta final fuese la modernización de nuestra sociedad y la evolución política hacia una democracia verdadera.

Conclusiones (La historia pasa factura)

La paradoja de nuestra situación es que fue el petróleo y su consecuencia el Petro-Estado quien nos sacó de las dictaduras y permitió el establecimiento, en lo visible, de un sistema democrático. Pero fue, precisamente, la realidad de un **Estado Distribuidor**, resultado de nuestra condición de Petro-Estado,

lo que creó también un sistema pervertido de la democracia. Con buena cara y malos modales. Si todavía fuésemos una dictadura, sería relativamente fácil argumentar que lo que nos hace falta para modernizarnos como sociedad, es la implantación de un sistema democrático. Pero, como a juzgar por casi todas las apariencias, **somos** un sistema democrático, ¿cómo hacer para desmontar el mito y convertirnos de verdad en lo que siempre nos han dicho que somos?. Sobre todo si en el proceso, una opción que se nos ofrece es retroceder primero, para poder arrancar después.

En eso está el Gobierno de Caldera.

Con el agravante de que muchos sospechan, que el retroceso puede ser para quedarse allí.

P.D.:Este tema con algunos «ajustes menores» fue desarrollado en El Universal el 25/08/94. El hecho de que haya requerido sólo de «ajustes menores» para su publicación en el día de hoy, da una idea de lo poco que hemos avanzado durante el último año en la búsqueda de soluciones a la crisis. De este estancamiento dan fe los resultados alarmantes de un informe económico elaborado por el B.C.V. y P.D.V.S.A., reportado por Carlos Croes en El Nacional el 19/06/95, en el cual **hay** que creer, y las continuas desfachateces de Chávez a quien **no hay** que creerle... aunque de que «vuelan, vuelan».

22 de junio 1995

EL OTRO LADO DE LA INTENCION

En varias ocasiones he examinado, en diferentes artículos, la posibilidad de que en Venezuela se produjera un escenario político de «Dictadura Civil». No ahora, cuando parece haberse popularizado el concepto, sino hace más de un año en una sucesión de trabajos que analizaban, a raíz de la victoria electoral del Dr. Caldera, su verdaderas posibilidades, como gobernante, de sacar al país de la crisis (Ver: «Chudo»; Las Opciones del Fracaso y Una Visión para el Optimismo.**Ya Dios no es venezolano**, Caracas.1995) .

Creo que es importante retomar el tema, por cuanto la restitución de las garantías constitucionales de reciente data y las declaraciones de Moisés Moleiro, invitando a una dictadura democrática dentro del sistema, para permitirle al Dr. Caldera gobernar con mayor flexibilidad, en un proceso de crisis, invitan a reflexiones adicionales.

Muchos se han preguntado, si es posible para un país entrar a la modernidad y modificar sus estructuras políticas, sociales y económicas, **dentro** de un sistema democrático. Mi respuesta, hasta ahora, ha sido **sí**... si es un sistema democrático. **No**... si es el sistema político vigente en Venezuela al cual con algo de alegría llamamos democracia. En este análisis se nos presenta un problema prácticamente insoluble. No podemos modernizar bajo nuestro sistema actual, por las inflexibilidades, de hecho, que este sistema le opone a todo intento modernizador. No por ser una democracia, sino, precisamente, por no serlo. El Petro-Estado -definido ya por mi extensamente- no actúa con los pesos y los contrapesos institucionales propios de las democracias verdaderas. El Petro-Estado tiene demasiado peso en las decisiones que afectan la vida institucional del país. En su esencia es anti-institucional. Pervierte y penetra todo los sectores de la vida nacional. Crea cotos de privilegiados suprainstitucionales.

Domina al Congreso y corrompe al sistema judicial. Subordina a las organizaciones obreras y compra, de hecho, al sector productivo. Pero, cuando los recursos del petróleo, ya no alcanzan para seguir comprando la subordinación institucional total, busca por la vía fiscal (impuestos) los recursos, ahora faltantes, para poder seguir financiando las estructuras de poder típicas del Petro-Estado, mientras se resiste a promover cambios estructurales en el aparato político del Gobierno. Esto hace posible que, **por algún tiempo**, el Petro-Estado sobreviva aún ante una disminución de los recursos petroleros. Los reemplaza, como ya hemos dicho, con nuevos impuestos a la población y un cambio en el poder relativo de algunas organizaciones políticas: La alternabilidad en el Gobierno de A.D. y Copei en el pasado y la emergencia ahora de Convergencia como partido de Gobierno. Este último fenómeno no sólo no se manifiesta en un cambio en las actitudes políticas del nuevo grupo, sino que más bien, en su involución, rescata prácticas populistas que creíamos ya superadas. Tales como el desfile de un gran número de autobuses llenos de personas «recogidas» en diversos lugares del país, para llevarlos a un sitio determinado -el Poliedro, en este caso- donde una presuntamente espontánea manifestación le rinde homenaje y hace votos de sumisión a una figura política. Todo lo cual, se supone, será visto por el resto de la ciudadanía como una demostración de fuerza popular. Las manifestaciones masivas de A.D., en la segunda década de los 40, vienen a la memoria. Sólo que entonces, esa estrategia política se veía como más normal y ajustada a ese momento histórico, que como se ve 50 años después. ¡Dios mío!. ¿Será que todos estamos equivocados y no se ha inventado aún la televisión?. Las «masas» se quedan ahora en sus casas, cómodamente sentadas, «oyendo y viendo» el mensaje. Llenar el Poliedro, no es ninguna hazaña en un país de 20 millones de habitantes. Phill Collins y otros artistas lo han desbordado. Y ni siquiera son de aquí. Ni hablan español. Ni le prestan autobuses y además, cobran por que los vean.

No podemos pues, modernizarnos bajo nuestro sistema actual y parece que tampoco podemos reestructurar al sistema para convertirlo en una verdadera democracia por la vía evolutiva de sus estructuras de poder. ¿Qué hacer entonces?. La tentación «totalitaria» puede ser, a veces, atractiva. Gobernar, eliminando los pocos pesos y contrapesos institucionales actuales. Concentrar en el Poder Ejecutivo y en un solo hombre los mecanismos de decisiones y apostar a que ese hombre, en uso de estas facultades y poderes, inicie el cambio estructural necesario para abrirnos a un verdadero proceso modernizador. Pero como en todo sistema que apuesta a un solo hombre, el hombre puede no ser el que necesitamos como sociedad. El hombre puede utilizar el nuevo poder para cambiarle la cara al Gobierno y a la retórica política, sin cambiar la naturaleza del Petro-Estado. Hacía mucho tiempo que, en Venezuela, la llamada sociedad civil y algunas de sus instituciones, tales como el sector productivo, la clase media, el movimiento sindical (que todavía no sabe lo que viene) , el empresariado, las gobernaciones y las alcaldías, en fin, casi todas las instituciones que aglutinan a los ciudadanos de un país, no habían sido tan golpeadas como lo han sido en los primeros dieciocho meses de este Gobierno. Hacia mucho tiempo que el Estado no se mostraba tan intolerante con la disidencia. Todo lo cual forzosamente nos lleva a la conclusión que ya habíamos aceptado hace muchos años: Hay enormes peligros para que un sistema democrático, por la vía electoral, se equivoque en la selección de su liderazgo político. Pero hay aún peligros mayores si se concentra en un solo poder todo el mecanismo de decisiones de una sociedad pluralista. Puede ser que hayan habido «dictaduras ilustradas» y puede ser que Fujimori sea un exitazo. Pero si estimulamos como sociedad a ese tipo de Gobierno, corremos el inmenso peligro de que los apoyos a ese Gobierno, vengan menos y menos, de sus ciudadanos y más y más de las bayonetas. Las cuales, de paso, con su acuerdo tácito, hicieron posible el asalto a las instituciones del país. Fujimori tiene hoy

el apoyo popular. Si algún día lo perdiera, el sistema podría haber agotado su capacidad de producir una respuesta democrática y se pudiera pasar, entonces a una solución militar. No nos equivoquemos. Según varios observadores sensatos, en Perú, detrás de las exclamaciones aprobatorias de los ciudadanos se empiezan a oír los ruidos de los sables desenvainados.

La respuesta, como siempre, la tiene la gente. El interés que la ciudadanía tenga en participar en las soluciones de sus problemas. En Argentina, el electorado participó y apoyó a un movimiento político, ya tradicional, como lo es el peronismo y, hasta ahora, la confianza popular parece haber sido depositada en la organización política correcta, dada su capacidad de evolucionar de sus viejos *slogans* a sus nuevas acciones. En México, la marginalidad ha obligado a un cambio político profundo. En Perú, el electorado barrió del mapa político a los partidos tradicionales y desde hace cinco años, escoge a su Presidente fuera de la vieja estructura política. En Venezuela, la respuesta popular a su frustración ha sido la abstención electoral. Esa posición no genera cambios importantes de tipo político, social o económico. La abstención primero y la apatía ciudadana después, lo que genera son gobiernos sin una base popular importante que pueda aceptar los sacrificios necesarios para hacer el tránsito hacia la modernidad. Pero si además, se le pide que se sacrifique para que el Petro-Estado pueda subsistir, y no otra cosa se le está pidiendo hoy al país, entonces, la reacción popular, cuando despierte del sueño, será de tal intensidad que ningún Gobierno, apoyado en el pedestal de una sola persona, podrá resistir la protesta.

Yo he sido un critico constante del esfuerzo, especialmente de Werner Corrales, por lograr un pacto institucional (en su caso, un pacto anti-inflacionario) . Y lo he sido, porque dudo que se pueda desarrollar un pacto institucional donde no existan instituciones sólidas. Pero empiezo a sospechar que Werner es más astuto de lo que muchos piensan o que pudiera tener éxito

por razones que no son las suyas. La convocatoria al pacto ha producido un fortalecimiento institucional en algunas de las organizaciones participantes. Ya, por ejemplo, el sector empresarial, aunque todavía débil y algo dormido, empieza a hacer valer sus razones y pone condiciones para participar en el pacto. Las organizaciones sindicales, aunque menos estructuradas y más divididas, también han dado -por primera vez en algunos años- verdaderas y positivas señales de vida. Todos, hasta el Gobierno, empiezan a cuestionar seriamente las bondades de la política actual. Personajes de las organizaciones civiles emergentes que, a la vez, son consumidores, abogan por un aumento en el precio de la gasolina dando demostraciones de responsabilidad y valor cívico. Además, demuestran algo más importante aun: entienden el problema y no están dispuestas a aceptar soluciones populistas a la crisis nacional. Todos los sectores le reclaman al Gobierno la ausencia de un programa económico y social creíble, moderno y sincero. Todos los días surgen nuevas voces que se rebelan ante el insulto a su inteligencia representado por ciertas reacciones oficiales, que pretenden justificar lo injustificable con explicaciones inaceptables para todos, con un lenguaje condescendiente que ya molesta por irrespetuoso y anticuado. Como ya lo he sugerido, quizás Corrales no lo hizo a propósito, pero su convocatoria a un pacto institucional ha despertado a varios «muertos» peligrosos para el *Status-Quo*, pero necesarios si se quiere imponer la modernización en nuestra sociedad, por la vía de la presión institucional y popular.

Aunque sólo **pensar** en esta vía como posible, ya despierta en nuestra sociedad una nueva visión sobre su propio esfuerzo y sus propios derechos. Este intento de pacto que puede resultar al final en letra muerta y en compromisos incumplibles, puede a la larga ser la primera piedra de un proceso de cambio en nuestra sociedad y el primer intento serio de rescatar a nuestras instituciones de ser solamente grupos subordinados, de hecho,

al Petro-Estado.

Otra institución que quizás -sin proponérselo- puede haber empezado otra revolución para el cambio, es el Seniat. Cierto, que su objetivo es aumentar la recaudación fiscal y los impuestos a los ciudadanos, pero por otra parte, también está culturizando al ciudadano sobre la necesidad de pagar impuestos, puede ser que al principio bajo amenazas de castigos corporales. Pero, a la corta, después de haber pagado, el ciudadano va a empezar a preguntarse que está haciendo el Estado con **su dinero**. Pregunta que no se hacía bajo la filosofía del Petro-Estado, gran receptor y mal distribuidor de la riqueza petrolera, la cual, por su magnitud, suplantaba la necesidad de que la población pagara impuestos. Esta filosofía le hizo olvidar al pueblo venezolano que la riqueza petrolera era de los ciudadanos y que el Estado no le estaba haciendo ningún favor al no cobrarle impuestos como individuo (ya se los había cobrado, a través de la renta petrolera no distribuida entre sus verdaderos dueños) . El próximo paso de cada ciudadano será, aparte de reclamarle algo al Estado por lo que ahora paga, preguntarse si en esta nueva condición de pagador directo de impuestos, le debe seguir permitiendo al Estado continuar comportándose como si fuera el dueño del petróleo. O si se deben establecer mecanismos que aseguren que parte de esa renta petrolera que construyó al Petro-Estado, ante la indiferencia de todos, no debería empezar a repartirse **directamente** entre los venezolanos ahora -como hemos dicho- pagadores de impuestos. El primer intento de hacer algo al respecto, se pudo hacer con el proceso de la Apertura Petrolera, aprobado recientemente por el Congreso Nacional (Ver: Réquiem para un Proceso, en este libro, página 3) . No tuvo el éxito esperado, pero muchos de los actores nacionales ya han tomado la bandera de que los venezolanos deben participar directa y colectivamente, de alguna forma, en la renta petrolera. El «caso», pues, está lejos de haberse cerrado y cada Convenio que se le presente, para su aprobación, al Congreso Nacional va a tener

que pasar la prueba de una revisión pública, a fin de asegurarse que incorpore mecanismos que faciliten, no sólo la presencia del gran capital venezolano (que sí existe), sino también la presencia masiva de pequeños y medianos ahorristas del país en el proceso de Apertura.

Estamos, pues, sin que muchos se hayan enterado todavía, en pleno proceso de cambio. Puede ser que después de todo, nuestro sistema político en su afán de oponerse a la modernización de nuestra sociedad y en su búsqueda de nuevos recursos financieros y estratégicos (impuestos, pactos, etc.) para mantener las cosas como están, pudiera, en su insensibilidad hacia lo que verdaderamente desean los ciudadanos, estar creando los instrumentos para acelerar el proceso de cambios estructurales que requiere el país.

Sostengo mi tesis, ya expresada, que este sistema político nuestro no puede presidir sobre un proceso de modernización de nuestro país.

Lo sostengo, pero empiezo a sospechar que es tal su ineficiencia que, en la búsqueda de su permanencia, está creando los mecanismos que conducirán a su eliminación.

Nos toca, pues -ahora- a todos los ciudadanos, estar alertas a las señales de cambio para que las utilicemos en nuestro beneficio.

Será la primera vez, en mucho tiempo, que el Estado hace algo realmente positivo por nosotros, aunque sea sin darse cuenta.

13 de julio 1995

EL BUEN USO DEL CONFLICTO

El Falso Consenso (La Nueva Fuerza Institucional)

Las idas y venidas durante las discusiones de un iluso pacto anti-inflacionario ya han producido lo positivo que era de esperarse de este esfuerzo, aunque sus protagonistas no lo supieran en su momento.

Lo que se ha generado como subproducto importante es un fortalecimiento de algunas instituciones nacionales. Fedecámaras, en pleno proceso electoral, aprovechó los últimos días de Romero Nava en su presidencia para disparar verdades, fijar posiciones y salir de su proceso electoral revitalizada en su imagen externa, aunque su nuevo directorio luce débil. Esperemos que sus divergencias internas -y las hay bastante serias- no terminen por desgastar sus nuevas fuerzas. En cierta forma la C.T.V., y algunos de sus sindicatos más importantes, han entendido lo valioso que para cohesionarse tiene entrar a la modernidad sindical. Tanto de fondo como de forma. En este sentido, Fedepetrol (Federación de Sindicatos de Trabajadores Petroleros) ha anunciado públicamente la democratización de su selección del liderazgo, lo cual se hará -a partir de las próximas elecciones- directamente por la base. Si ese «virus» positivo se le pega a la C.T.V., habrá desaparecido una de las causas cuyas consecuencias son un liderazgo desgastado por haberse convertido en vitalicio. Pero no hay duda que a partir de las discusiones del «pacto», la alta dirigencia sindical del país habla un lenguaje más moderno, más situado en los problemas vigentes y menos colocado en el viejo «jardín izquierdo» del campo de las ideas. Hasta el Gobierno parece haber hecho un inventario realista de su propia fuerza, a juzgar por ciertas posiciones recientes, que apuntan a una nueva comprensión de la fuerza relativa de las partes. Esto se ha reflejado en un lenguaje menos agresivo y más coherente por parte del Presidente y sus ministros,

quienes parecen haberse dado cuenta que no podrán continuar imponiendo a rajatabla su punto de vista sobre las instituciones nacionales. A menos que estén dispuestos a participar en una recia discusión que bien puede desencadenar en serios conflictos. Esta nueva posición parece haber sido estimulada por la enérgica reacción condenatoria de cierta calificada opinión pública a los aumentos salariales concedidos al sector militar. Financiados en parte -aparentemente- por recursos destinados a otros sectores, como los del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides). La reacción institucional del Congreso de la República al hacer lo mismo con los parlamentarios no se hizo esperar. Como tampoco la huelga de los trabajadores del poder judicial, reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo, para no ser los menos. Hay pues, un estirar de músculos en dos de los tres poderes nacionales formales. Motivados en parte por la convicción de que, de alguna manera, el Poder Ejecutivo dio señales claras de debilidad ante el sector militar al destinar recursos identificados como de la sociedad civil para satisfacer sus aspiraciones. Si a las consideraciones anteriores le agregamos las amenazas de huelgas por parte de los profesores de Educación Básica y Media y la posibilidad anunciada de un cierre de las universidades, a partir de septiembre, se entenderá la necesidad que tiene el Gobierno de reexaminar sus conductas futuras y cuestionar ese aparente poder ilimitado, para someter a las otras instituciones nacionales, que había demostrado hasta hace poco.

Lo claro es que de ahora en adelante habran más conflictos interinstitucionales ciertos y menos falsos consensos derivados de las debilidades reales o percibidas de algunas de las partes. Y eso, en una sociedad en plena evolución, no es necesariamente malo. Lo malo es el marco de referencia social y legal dentro del cual se dirimirán estos conflictos. El cual -como ya hemos visto- es totalmente inadecuado, tanto en lo informal de las actitudes negativas de los protagonistas, como en la ausencia de claridad en las reglas de juego que otras sociedades han diseñado

-precisamente- para permitir el desahogo del conflicto sin llegar a la anarquía y a la destrucción institucional.

El reciente caso del colapso bancario, debido en gran parte a varios delincuentes de cuello blanco, y no menos, a actitudes cómplices, ineficientes y poco profesionales del sector público institucional encargado de la vigilancia y auditoría del sector financiero, no podía resolverse, según el Gobierno, dentro del sistema legal vigente. Apeló entonces a una suspensión de garantías, para intentar castigar a los **presuntos** culpables y afectó, de paso, a los **seguros** inocentes, que éramos **todos** los demás. La conclusión inevitable es -entonces- que un Estado de Derecho que no puede administrar, dentro de las leyes que rigen la normalidad, una crisis claramente hamponil, no es un Estado de Derecho. Ya que un Estado de Derecho no puede descansar sobre normas legales que no le sirven para resolver la violación de esas mismas normas.

Los Nuevos Escenarios (El Conflicto Inevitable)

La nueva fortaleza institucional recién descubierta, en un afán por lograr un pacto anti-inflacionario, puede desbordar los limites frágiles del consenso y provocar conflictos en cadena. Tiene ahora el Estado que resolver, con las misma celeridad con la cual intentó resolver la crisis bancaria, la forma como administrará esos conflictos interinstitucionales que se desatarán inevitablemente. No hay sino dos escenarios: 1) Discusión dentro de reglas de juego claras. 2) Represión autoritaria. Las condiciones sociales, políticas y económicas están dadas para ir por cualquiera de los dos escenarios.

En el escenario de la discusión quien tendrá que ceder más es el Gobierno. Por lo menos a los ojos de la opinión pública, que pudiera juzgar y medir su posición **ahora** contrastándola con las posiciones tomadas **antes**. Este será uno de los precios a pagar por la ceguera y sordera oficial. Por otra parte, ese precio pudiera ser mínimo y hasta convertirse en beneficio, si la nueva

flexibilidad se percibe como una política moderna que refleja la comprensión de los grandes problemas nacionales, las dificultades de otras instituciones para sobrevivir a la crisis y una voluntad clara de incorporar a la discusión a todas las fuerzas formales e informales de la sociedad. Habrá riesgo en este nuevo enfoque. Los conflictos pueden salirse del marco de las reglas de juego, y provocar disturbios sociales. Pero, es dable esperar, que esas serían las excepciones y probablemente fuesen condenadas por el resto de la sociedad. En esto estará el secreto del éxito del Gobierno: Lograr que las instituciones nacionales lo acompañen en el esfuerzo. No por temor a la autoridad, ni por factores reverenciales de corta vida, sino por una convicción genuina de que se está transitando el camino correcto.

El escenario de la represión y el autoritarismo será de corta vida para el sistema democrático. Así como en economía los controles generan más controles, en política la represión genera más represión y no hay sistema democrático por muy perfecto o imperfecto que sea, que pueda convivir e imponer autoridad ante explosiones sociales masivas y protestas populares constantes. La fragilidad de nuestro sistema democrático se puso en evidencia el 4-F, cuando algunos pocos desadaptados de los cuadros medios del ejército pusieron en jaque al país y pudieron hasta haber triunfado, de no ser por la inexperiencia y falta de garra del líder máximo de la asonada. Si en relativa tranquilidad social **eso** fue posible, no se necesita ser un politólogo o sociólogo de mucha jerarquía para extrapolar lo que -sin duda- sucedería con nuestro frágil sistema de Gobierno si el 4-F se repitiera, esta vez con la masiva presencia del pueblo en la calle.

Conclusiones (La Eficiente Administración de la Escasez)

Estamos pues en el umbral donde se toman, por parte de los gobiernos, las grandes decisiones.

El nuestro tiene que aceptar que ya la crisis no se solucionará por mecanismos exclusivos de pactos y convenios forzados.

Vendrán conflictos con:

- El sector educación.
- Los tribunales de la República.
- Los trabajadores en general (prestaciones sociales, fondos de pensiones).
- El sector salud.
- La sociedad civil en general (inseguridad jurídica y personal).
- Las regiones (centralización vs. descentralización. Autoritarismo del Poder Ejecutivo. Nuevos protagonistas dadas las próximas elecciones).
- El sector económico (Desempleo. Caída en la demanda interna. Controles de cambio y de precios. Desestímulo a la inversión).
- El sector financiero (**Interno**: fragilidad institucional del sector financiero y aumento creciente de la deuda interna. **Externo**: Deuda externa. Desconfianza de la banca comercial internacional. Conflictos con el F.M.I. y el B.M).

Las soluciones no contarán con recursos suficientes para repetir la política del «billetazo» como remedio. Ni se podrá continuar estirándo la arruga de todos los problemas, bajo el amparo de la figura presidencial y las buenas intenciones del Gobierno. Esa etapa ya concluyó.

¿Qué nos queda entonces?. Lo siguiente:

- Un análisis serio de las prioridades nacionales.
- Una definición pública de esas prioridades.
- Una asignación rígida de los pocos recursos a esas prioridades.
- Una discusión franca con todos los sectores y la ciudadanía en general sobre las asignaciones y las soluciones propuestas a mediano y largo plazo, para resolver los problemas de aquellas instituciones que no figuran -en lo inmediato- en los primeros puestos de las prioridades nacionales.
- Una visión a largo plazo, con un reacomodo de prioridades,

como probablemente se hará necesario (Este enfoque reconocería la diferencia que, para el establecimiento de prioridades, existe entre la búsqueda de soluciones a problemas inmediatos y la importancia de no permitir que esas medidas, a las que obliga la urgencia del momento, se conviertan en políticas de largo plazo).

- Cónsono con las prioridades, establecer un programa de acción que rompa con lo que tradicionalmente se ha hecho a la fecha, para no repetir las promesas incumplibles de siempre.

- Enterrar la discusión sobre las opciones míticas del neoliberalismo, el «Paquete» y el proteccionismo.

- Incorporar -en lo posible- a todos los ciudadanos como accionistas de nuestras empresas públicas, pre y post privatizaciones (Crear de verdad un capitalismo popular).

- Utilizar de inmediato los «recursos» dormidos de nuestro país, como verdaderos agentes de generación de riqueza inmediata y a largo plazo (petróleo, oro, aluminio, electricidad, etc) mediante la conversión de la propiedad improductiva del Estado en agente dinámico de cambio de la sociedad.

- Aprovechar el proceso de la Apertura Petrolera, como ya se ha sugerido, para incorporar como socios del proceso al mayor número de empresas nacionales posibles y a todos o a casi todos los venezolanos, mediante emisiones de certificados de participación en fondos especiales de inversión, creados con parte de la riqueza petrolera, **antes** de que ésta ingrese al tesoro central del Estado (fondo de pensiones, salud, educación).

- Buscar dos o tres buenos economistas e incorporarlos al Gabinete, aunque sea como asesores (con poder).

- Cambiar al Gabinete y buscar voluntarios dispuestos a participar en el proceso de modernización del país.

- Invitar a los partidos políticos a que cooperen o a que hagan oposición de verdad.

- Muchas cosas más, para lo cual invito a todos los venezolanos preocupados por el país a que le agreguen recomendaciones a esta lista.

Yo se -porque me lo han dicho- que el Gobierno y el sector político, dicen saber todo lo anterior y conocer las soluciones propuestas.

Lo que no entiendo es, ¿Porqué si lo saben, no hacen nada?.

¿Miedo al conflicto?. Si esa es la razón, mi percepción es que el verdadero miedo lo van a sentir cuando el gran conflicto, sin aviso previo, se haga presente.

Y ese si no tendrá solución institucional.

27 de junio 1995

EL NUEVO GABINETE

La Difícil Decisión (Protección vs Interés)

A las 10:00 a.m., Andrés Caldera entró al despacho presidencial. El Presidente apenas levantó los ojos de los papeles que reposaban en su escritorio, a los cuales miraba con -lo que a Andrés le pareció- un interés mal disimulado. «Quizás debería irme, con cualquier excusa y regresar» pensó, mientras sus piernas parecían no obedecer las ordenes recibidas de la corteza cerebral y continuaban su paso hacia el escritorio presidencial. Ya posicionado en frente del Presidente con el camino del regreso definitivamente cerrado, se le salieron los «buenos días» más como un rito que como un saludo. El Presidente levantó, ahora si, la mirada y sin decir nada le indicó la silla con los ojos. - «Esto está peor de lo que pensaba», le sugirió a Andrés la voz oculta que a muchos les anuncia algún desastre inminente. Ante el continuo silencio del Presidente, Andrés se refugió en un análisis estético del cuadro del Libertador que «adorna» la oficina presidencial. La «obra» no hizo sino incrementar su ya vieja convicción sobre la pobreza artística del autor y sobre la mala suerte de algunos prohombres que parecen haber sido condenados a ser protagonistas de los esfuerzos artísticos de la mediocridad. Miró a su padre, el Presidente, y recordó -sin razón aparente- algunas fotografías recientes que recogían en un segundo el gesto de una cara cansada y los sentimientos reales que jamás pudieron recoger los retratos del pasado, cuyo «producto» final era el resultado promedio de muchas horas de pose, y no la radiografía de una indiscreción fugaz del gesto, ante una situación dada.

El Presidente -con evidente desgano- se aprestó a iniciar una discusión que ya se hacía inaplazable. - «Revisemos los cambios que haremos en el Gabinete, a fin de que puedas salir cuanto antes a dirigir la campaña electoral de Convergencia. Tú

sabes que tu imagen en la calle va a hacer mucho para ayudarnos a ganar posiciones políticas importantes en diciembre». -«Por supuesto», replicó Andrés -sin mucha convicción- que yo haré lo que tú consideres más conveniente, aunque te repito preferiría quedarme en la Secretaría, donde te sería más útil». El Presidente, repasó las razones que tenía para tomar la decisión que lo dejaría prácticamente solo en el Gabinete. Las repasó y las repasó de nuevo y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos de autocontrol para no ceder a la comodidad de su conveniencia y dejar a Andrés en la Secretaría de la Presidencia. Allí había sido más que un ministro. Había sido un co-presidente, un confidente, un testigo de algunas debilidades y, en definitiva, una poco común combinación de hijo y de político sagaz, dedicado a la causa de preservar la imagen presidencial y darle la cara a los problemas delicados. Con la habilidad del que puede exhibir personalidad propia sin que ese gesto se vea como un intento de disminuir la imagen de aquel en nombre de quién se actúa. Pero ya el experimento había agotado su capacidad de ser eficiente, a menos que se estuviese dispuesto a sacrificar a la persona para estirar algo la indiscutible ventaja, para el Presidente, de que Andrés continuara en su posición. La pérdida de popularidad presidencial abría el camino fácil para que arreciaran los ataques a su gestión, a través del ministro de la Secretaría, a quien ya -en voz baja- se le atribuían poderes de decisión que definitivamente iban mucho más allá de sus responsabilidades formales. Del «abuso de autoridad» se podía fácilmente pasar a acusaciones más graves, las cuales -no por inciertas- dejarían de causarle al ministro daños casi irreparables, a una edad donde el futuro siempre se vería oscurecido por lo imborrable de ciertas sospechas.

- «Aquí traje la lista con algunas notas con mis comentarios» -dijo Andrés- ahora ya con voz fuerte y como adivinando la necesidad de interrumpir la secuencia mental del Presidente. Lo primero es cambiar a Escovar Salom» -continuó Andrés- quien resistió la tentación de usar el verbo «sacar» y pasarlo como

Embajador a Francia». - «Estoy de acuerdo en que salga de Interiores, pero no he decidido aún si lo paso a la Cancillería y envío a Burelli a Paris. De esa manera conservo su experiencia en el Gabinete», respondió Caldera. (Andrés pensó -sin decirlo- que esa experiencia era, precisamente, la que no quería cerca del Presidente, sobre todo cuando él ya no estuviera en Palacio. Como la discusión sobre el tema Escovar era ya vieja con el Presidente, Andrés le dijo con un gesto lo que sentía y continuó). - «Para reemplazar al Dr. Escovar, ya hemos acordado que sea Asdrúbal Aguiar». (Caldera asintió). El problema se nos presenta con la Gobernación de Caracas, donde tenemos que buscar a alguien de Convergencia, conocido y fuerte». - «Pudiera ser Egaña», sugirió Caldera. Andrés se debatió entre lo que podría ser un buen nombramiento y lo que él consideraba la necesidad de que Egaña se quedara en su posición actual desde donde podía ayudar más, en forma directa, al Presidente. Sin embargo, como también era posible que Alvarez Bajares pasara de la O.C.I., a la Secretaría de la Presidencia, en ese caso Egaña tendría que salir del Ministerio. La mera sugerencia presidencial le indicó a Andrés, que su ilustre padre ya se había paseado por esas mismas consideraciones y la proposición de Egaña para Gobernador de Caracas, de hecho significaba que el nombramiento en la Secretaría de la Presidencia de Alvarez Bajares estaba ya decidida.. - «Me parece bien -apuntó Andrés- sin resistir la tentación de agregar en cuyo caso pasaremos a Alvarez Bajares a la Secretaría». (El Presidente sonrió en silencio y -una vez más- aprobó sin decirlo, la astucia política de su hijo y la forma como casi le leía el pensamiento). - «Bien, dijo esta vez en voz alta el Presidente, ya tenemos resuelto el problema del M.R.I. la Gobernación de Caracas y la Secretaría. La Cancillería estará entre Burelli y Escovar y el que se vaya se irá a la Embajada en Francia. ¿Qué más tenemos por ahora?». Sonó el teléfono directo y el Presidente respondió, mientras Andrés revisaba sus notas.

El «Otro» (La Fe Ciega)

En otra reunión que se celebraba en Caracas, Juan José Caldera, sin disimular su molestia revisaba con algunos asesores, entre los cuales se encontraba Alvarez Bajares, la encuesta «Omnibus» de la empresa VeneConsultores, difundida en la prensa y presentada en un evento gerencial en Puerto La Cruz, dirigido por VenEconomía. «¿Cómo es posible? -se preguntaba Juan José, sin dirigirse a nadie en particular- que a esta basura le den espacio en la prensa». Alvarez Bajares se sintió aludido y miró en otra dirección. Juan José continuó como si nada - «¿Alguien ha visto alguna vez que la popularidad de un Presidente caiga casi 34 puntos en cuatro meses?. Y mucho menos se explica si el Presidente es Caldera, quien ha demostrado ser el gobernante más popular del país desde que comenzó la democracia. No hay sino que ver las demostraciones de apoyo y aprecio que le da el pueblo cada vez que sale a la calle. No hay duda que esa encuesta es parte de la campaña nacional en contra del Presidente y de Convergencia. Dirigida por los desadaptados de siempre que no quieren aceptar, ni el buen Gobierno de Caldera ni la popularidad y fuerza creciente de nuestro movimiento. ¿Porqué no se atreven a llenar al Poliedro como lo hicimos nosotros?. Porque saben que no va gente ni para llenarlo por la mitad. Lo importante continúo -casi sin respirar- es lo que haremos para neutralizar y desenmascarar a los farsantes. Por lo pronto creo que debemos encargar nuestra propia encuesta con una base de entrevistados mucho mayor que la de «Omnibus». Hay que descalificar a la empresa encuestadora que parece que ya se ha equivocado bastante en el pasado». Alvarez Bajares intervino, casi interrumpiendo a Juan José por primera vez. «No creo -dijo- que una guerra de encuestas nos convenga en estos momentos tan cercanos a las elecciones. Mi recomendación es dejar que se olvide la encuesta de «Omnibus» y convocar en todo el país a actos de masas, a los cuales les daremos gran difusión regional y nacional. Muchas fotos de demostraciones masivas de apoyo

popular, bien publicitadas, son mucho más efectivas para convencer a la gente de nuestra popularidad que diez encuestas. Acuérdense que la encuesta en Venezuela sigue siendo un instrumento de las élites. Las concentraciones populares reflejadas en los medios escritos, televisivos y de radio, son mucho más convincentes, para el grueso del electorado, que las cifras cuestionables de una encuesta. Más aun -continuó Alvarez Bajares- en lugar de promocionar encuestas, lo que debemos hacer es cuestionar y desacreditar a ése instrumento. Y la mejor manera de cuestionarlo es negándonos a promover encuesta alguna. Las que salgan y no nos favorezcan las descalificaremos. Las que nos favorezcan, las ignoraremos públicamente, aunque podremos filtrarlas sin mucho ruido». - «Estoy de acuerdo con los actos de masas» -respondió Juan José- pero todavía no estoy convencido con lo de las encuestas. Estoy seguro que la gente está con nosotros y no debemos permitir que encuestas amañadas mientan descaradamente». Alvarez Bajares -pensó en insistir- pero resolvió dejar las cosas así y apelar a la instancia presidencial o al mismo Andrés. «El problema -siguió pensando- es que Juan José tiene la fuerza de sus convicciones y puede ser una gran ayuda política, cuando sus convicciones coinciden con la realidad. Pero cuando sus convicciones apabullan a la realidad, entonces sus comentarios y sus estrategias pueden resultar en una fuerte carga política negativa. Además -continúo pensando- hay que apelar al Presidente porque a Juan José hay que ordenarle rumbos y eso no lo puede hacer sino Rafaél Caldera. Andrés no lo puede hacer, aunque si puede convencer al Presidente de que lo haga». Alvarez Bajares ya sabía la posibilidad de su transferencia a Miraflores y su mayor preocupación era como iba a entenderse con el coordinador de Convergencia. Aunque se reconfortó pensando que el problema de Andrés en la calle, compartiendo con Juan José estrategias electorales, era aún más delicado. Mientras tanto, Juan José decidió que era preferible volver a reunirse con los líderes de Convergencia, sin la presencia de

Alvarez Bajares, para decidir como acabar de una vez por toda con los ataques injustificados de interesados que se le hacían al Presidente y al Gobierno. Después de todo, el plan de Gobierno, era el plan del Presidente, era claro y coherente y había que defenderlo a como diera lugar.

El Diálogo Inconcluso (Mañana será otro día)

El Presidente colgó el teléfono y miró a Andrés, buscando continuar la conversación. - «Bien, entonces nos queda por resolver a quien ponemos en la O.C.I». - «Decide tú» rispotó Caldera, para mi, más importante es que discutamos un plan para reducir los ministerios en tres o cuatro por los momentos. Resolver el problema del ministro de Justicia para que Creixen se vaya también a la campaña. Ver que hacemos con Cordiplan y Fomento. ¿Diferimos o actuamos ya?. Educación Superior y Tecnología no funciona, y el Ministerio de la Familia es demasiado controversial para su relativa importancia. El Ministerio de la Juventud nos da más dolores de cabeza que soluciones, aunque a Pilarica siempre hay que usarla. A Educación y Salud me los dejas tranquilos para que se enfrenten a los conflictos con los gremios que vienen ya. Del Ministerio de la Defensa me encargo yo y con el de Energía y Minas no hay problemas y además, necesitamos continuidad para terminar de negociar la Apertura Petrolera. Con Pompeyo, podemos tener problemas, si el MAS se pone agresivo con nosotros o decide irse a la oposición. Pero no hay que descartar que a lo mejor se quede Pompeyo aun sin la presencia del MAS, lo cual sería ideal para nosotros. Hay que pensar seriamente en un reemplazo para Ambiente y Recursos Naturales asi como para Mindur y Transporte y Comunicaciones. El Gabinete de infraestructura necesita nuevas caras». El teléfono sonó de nuevo, el Presidente antes de tomarlo le dijo a Andrés «llévate esas ideas, agregales las tuyas y vente el lunes para resolver esto». Andrés salió algo más tranquilo de lo que entró. Con la excepción de su caso particular, todo lo demás había

salido como si él hubiese escrito el guión. Excepto que hasta ahora su influencia había estado más relacionada con la selección de las personas para integrar al Gabinete que con la selección de las políticas económicas y sociales del Estado. Esta ausencia era otra de las razones por las cuales le dolía salir de Miraflores. «Seguimos cambiando a los ministros y seguimos sin un plan real de Gobierno», pensó con angustia. «Por eso -siguió elucubrando- no tocamos el punto del Ministerio de Hacienda. Es la última esperanza que nos queda para aspirar a un proceso **evolutivo** de cambio. Si fracasa...»

Después de invocar a algunas imágenes apocalípticas, Andrés decidió pensar en otras cosas.

03 de agosto 1995

LA DES-ABSTENCION ELECTORAL

El entorno de la abstención (Ganan los mismos)

En varias oportunidades ha comentado el favor que le hace el electorado venezolano a los desprestigiados partidos políticos. En efecto, durante los períodos transcurridos entre elección y elección, bien sean estas regionales o nacionales, el electorado (los ciudadanos de este país) se da a la tarea de criticar -algunas veces con razón- las actuaciones de nuestros políticos profesionales, tanto en lo individual como en lo institucional. Sin embargo, o se cuadran con los criticados, o se quedan en sus casas. El resultado es que, pese a su mala imagen, los partidos políticos siguen colocando a sus miembros y simpatizantes en los centros de poder en Venezuela. Estos centros de poder, en un Petro-Estado como el nuestro,no están limitados a los tres poderes públicos tradicionales. En Venezuela, los centros de poder partidistas se extienden a todas las instituciones del país. Algo menos, hoy en día, en los sectores laborales y patronales, pero presentes allí con fuerza relativa y con más fuerza en las empresas del Estado, donde en Guayana, Convergencia acaba de hacer una verdadera «caída y mesa limpia» con la gerencia profesional de esas empresas. Algo que no se veía en Venezuela, desde los «gloriosos» días de la Revolución de Octubre.

Convergencia ha evolucionado de un grupo de pequeños partidos, más o menos exitosos y más o menos fracasados, aliados con personas más o menos independientes, en apoyo a un líder más o menos tradicional como Caldera, a una organización política que mueve autobuses al Poliedro. Reforma y aprueba estatutos en medio de aclamaciones colectivas, parece apoyar algunos actos visibles de corrupción (por lo menos no los condena). Le entra a sangre y fuego a la gerencia de las empresas de Guayana. Veta algunos nombramientos «meritocráticos» de

PDVSA y, en fin, parece seguir la estrategia populista y de abuso de poder que caracterizó a la A.D. de 1945 a 1948. La imagen de «algo distinto» que proyectó Convergencia ha pasado a ser algo bastante peor que el «más de lo mismo» a lo que nos tenía acostumbrado la evolución de todos los grupos políticos vigentes a partir de 1958. Este nuevo estilo de Convergencia, que en el fondo no es sino el más viejo estilo político de nuestra democracia, lo que hace es aumentar el desencanto del elector y estimularlo a que engrose la fila de los abstencionistas. Agreguémosle a eso, la posición de A.D. de navegar en las aguas de Convergencia y pegado a la popularidad -todavía relativamente elevada- del Presidente. La falta de definición de COPEI, partido al cual parece que se le perdió la brújula después de la derrota de Eduardo Fernández ante Oswaldo Alvarez Paz por la candidatura presidencial del partido. El MAS, de quien de verdad puede decirse que cambió su identidad por algunos escaños en el Congreso. La Causa R., que ha reivindicado, con sus acciones, la vieja sospecha de que «del dicho al hecho, hay mucho trecho» y no ha podido administrar, medianamente bien, su reciente éxito electoral.

Eso, en la relacionado con los actores directos en la próxima contienda electoral. En el ínterin, el Congreso nacional se tomó casi un año para nombrar a los miembros «independientes» del Consejo Supremo Electoral. El presidente de este organismo, se queja de no tener recursos suficientes para garantizar unas elecciones pulcras. El ex presidente del C.S.E., Carlos Delgado Chapellín -que de elecciones sabe bastante- declara que los circuitos electorales son una farsa. Las encuestas sugieren una abstención electoral de hasta el 80%, en algunas regiones. Y el electorado... bien gracias. Preparándose para no votar.

El nuevo enfoque (La mayoría está en su casa)

Supongamos un escenario donde -para no ser del todo tremendista- vota el 30% de los electores. Supongamos, además,

que quienes ganen los diferentes cargos a disputarse los ganen con el 30% de los votos consignados. Entonces, 30% del 30% (9%) significaría que -en el mejor de los casos- los ganadores asumirían nuestra «representación» con el 9% del voto del electorado potencial. Por supuesto que, aunque aritméticamente el triunfo con este exiguo voto sea inobjetable, la legitimidad de una representación con tan poca base de apoyo popular estará más que cuestionada. Y con razón.

De manera que la sociedad civil, cuestionadora de la eficiencia de nuestro sistema político, no sólo estará condenada a seguir siendo gobernada por los representantes de los partidos actuales, sino que además estará siendo gobernada por ciudadanos elegidos por menos del 10% del voto popular potencial. Gobernadores, alcaldes y concejales, seleccionados dentro de este escenario, no podrán gobernar a una pléyade de ciudadanos a las cuales no pueden pretender representar. Los abstencionistas por frustración, por desidia, o por comodidad, harán bien en sacar estas cuentas y mirarse en el espejo del panorama ante el cual se van a despertar un día de diciembre de este año. ¿Cómo hacer, entonces, para que la abstención triunfe, no ya como una estadística pasiva, sino con sus votos y participación activa en el proceso?.

Algunas recomendaciones al respecto:

- Lo más difícil será convencer a los grupos organizados de la sociedad civil a que se organicen también políticamente -aunque sea temporalmente- para elegir a sus representantes. Esto, es mucho más sencillo hacerlo dentro de las comunidades para las elecciones regionales. Recientemente he tenido la oportunidad de visitar algunas ciudades del interior, donde me he reunido con personalidades de las fuerzas vivas que podrían -con un mínimo esfuerzo- seleccionar candidatos, por lo menos a alcaldes y gobernadores, sin la mayor dificultad, si se propusieran hacer el esfuerzo. Estoy absolutamente convencido de dos cosas: Una,

la democracia verdaderamente representativa y legítima se construye de abajo hacia arriba y la otra, que los abstencionistas de nuestro país no se han dado cuenta ni de la fuerza potencial que tienen, ni de su poder de convocatoria, ni de su credibilidad en las comunidades donde trabajan y residen. En Valera, por no citar sino una ciudad en la cual estuve recientemente, los asistentes a un acto social que se celebró allí, podrían -de unirse- convocar y sacar de sus casas a los que no piensan votar, mediante el sencillo expediente de presentarle un candidato alcalde diferente a los que van a presentar los partidos políticos y que va a salir electo, sino se hace nada, con menos del 10% de los votos potenciales. Sirva esta nota de recordatorio a lo que allí hablamos y ojalá que sirva también de estímulo para despertar de su apatía a las cientas de comunidades nacionales que tienen en sus propias casas las cartas de triunfo para empezar a destruir este sistema perverso que hoy nos gobierna.

- Como los abstencionistas son la mayoría, con sólo salir a la calle, habrán «visitado» al 70% de las casas por visitar, ya que son las de ellos. Eso les da una ventaja irremontable ante los estrategas del «más de lo mismo».

- No hay que intentar conquistar parte del 30% de los que van a votar. Ellos irán por compromiso con los partidos políticos o porque son parte de esa minoría que aún cree en las promesas repetitivas del populismo. Promesas que, a estas alturas, son un insulto a la inteligencia colectiva. Esos votos, podrán obtenerse si se pliegan al 70% que va a votar por causas diferentes. Esos votos serán siempre bienvenidos, pero la estrategia electoral no va dirigida a ellos.

- La oferta electoral tiene que ser otra, totalmente diferente. Casi una estrategia antioferta. Hay que pasar del «yo te lo daré todo» al «yo no te prometo nada». «Si lo que pretendes es elegirme para después quedarte en tu casa y esperar los resultados de mi gestión, mejor es que no salgas de tu casa a votar». «Si estás dispuesto a participar en las soluciones, ya que por tu

indiferencia te convertiste en parte del problema, entonces, acompáñame en el voto y en la gestión». Cada comunidad tendrá sus propios problemas, una jerarquización de sus soluciones y una visión **realista** de lo que se puede hacer para el beneficio de todos. Pero hay que dejar de hablarle al electorado como si fueran atrasados mentales. Eso, empieza a ofender a los que todavía se molestan en escuchar. Esas explicaciones que se ofrecen para justificar lo injustificable y para explicar los fracasos, ya no tienen audiencia. Por eso, habrá 70%, o más de abstención. A menos que despertemos al poder dormido, presentando a candidatos dispuestos a desempeñar el papel de anti-héroes.

- En las comunidades, los recursos financieros necesarios para una campaña electoral eficiente, una vez desnudados de la corrupción tradicional, son modestas. Más que dinero, se requiere la colaboración del electorado, en la elaboración de pancartas y volantes. Donación de tiempo en las estaciones de radio. Organización de actos públicos, etc. Todo lo cual, no requiere de esos abusos financieros con los cuales terminan de ofender a los electores los candidatos de la ortodoxia política. En esa percepción de abuso de los recursos propios y oficiales, también está incursa Convergencia, partido que parece dispuesto a popularizar su presencia, cueste lo que cueste. La justificación parece ser «si los demás lo hicieron, porqué no he de hacerlo yo». La respuesta es, por supuesto, «porque ganastes las elecciones prometiendo no hacer lo que hacían los otros».

- Un aspecto difícil de cubrir en este nuevo esfuerzo político que se sugiere, es la selección del liderazgo. El problema más grave que tenemos como nación es haber destruido valores que son irremplazables para desarrollar un país moderno y democrático. En la percepción nacional todo aquel que sugiere cambios políticos, organización de nuevos grupos y un cambio en la estructura institucional del país es -por definición- alguien que está interesado en ser el líder de **ése** movimiento. Y **eso**, lo cuestiona y lo descalifica. Igual sucede en el mundo de las

estrategias comerciales e industriales del país. Si alguien recomienda algún cambio en las leyes que rigen la economía o las finanzas del país, debe ser porque está interesado en algún negocio que lo beneficiará en lo personal. Estos comentarios y actitudes deben ser respondidos, sin hipocresía. No hay nada pecaminoso en aspirar a ser líder político, o de grupos civiles, o de grupos comunitarios. Tampoco es pecado querer participar y tener éxito en los negocios. Hay que acabar con esa nefasta percepción populista de que todo el que aspire a ser líder es un oportunista y, todo el que aspire a ser rico es un ladrón en potencia. Esas percepciones explotadas por una mediocridad que sí no tiene escrúpulos en ser líderes por arribistas y ricos por delincuentes, ha alejado del liderazgo político y empresarial a personas con méritos incontestables para dirigir al país, y que se han dejado chantajear por una presunta opinión pública dirigida, precisamente, por aquellos a quienes sí se les podrá endilgar los epítetos que alejan a los mejores de la palestra pública. En Venezuela, los arribistas cuestionan al liderazgo potencial honesto y lo alejan del debate nacional, asqueados y temerosos de que los confundan con sus acusadores. De igual manera los corruptos se constituyen en rectores de la moral pública -entre otras razones- porque los que tienen fortuna sin pecado, no se atreven a pedirle cuenta y razón de su fortuna, a quienes no pueden explicarla, pero estos si le piden con impunidad y atrevimiento rendición de cuenta a los demás. Por eso, el país ya está llegando al punto de saturación y los indiferentes se organizarán para quitarle la máscara de corrupción a los abusadores del poder público. Lo que se requiere en Venezuela no es solamente que el Gobierno encarcele a los corruptos. Lo que se requiere es que los honestos, hasta hoy indiferentes del proceso político, cuestionen abiertamente a los seudo-honestos que todavía están mandando en la mayoría de nuestras instituciones. Lo que se necesita primero, es la sanción moral de una sociedad a los que abusan de ella y no continuar con los aplausos hipócritas que

todavía les damos a los que nos engañan y nos malgobiernan. Respetamos al poder, y eso está bien. Pero cuando el respeto sirve de excusa para condonar lo que se debe protestar, el respeto se vuelve temor. Y el temor se vuelve apatía, y la apatía nos lleva a pensar que no hay manera de cambiar la situación con nuestros esfuerzos y, esa conclusión nos lleva a quedarnos en nuestras casas en época electoral.

No le temamos pues, a que nos acusen de querer ser líderes, si así genuinamente lo deseamos. Ni que nos impidan anhelar ser ricos, si legítimamente lo podemos lograr. La mediocridad ha hecho que ocultemos nuestras honestas ambiciones. Es hora de sacarlas a la calle y exhibirlas con orgullo.

Conclusiones (El «lobo» anda suelto)

- Desde la casa no se ganan elecciones.
- Se requerirá nuevas presencias electorales y nuevas estrategias participativas para lograr el desarrollo armónico que requerimos.
- Los cambios hay que iniciarlos a nivel de comunidades. Por eso las elecciones de diciembre son importantísimas.
- Si no creamos nuevas opciones electorales, nos gobernarán personas elegidas por menos del 10% de los votos potencialmente posibles.
- La ambición honesta no es pecado. Hay que derrotar a la mediocridad que nos chantajea, acusando al futuro líder de querer beneficiarse por su esfuerzo y al futuro empresario de querer enriquecerse con sus acciones. Debemos estar dispuestos, como ciudadanos a administrar ambos deseos, si fuera el caso, con orgullo y no con el temor que nos han inculcado los usurpadores del éxito que debería ser el nuestro.

Todas las encuestas indican que la mayoría nacional no quiere un golpe de Estado y que prefiere la democracia como sistema de Gobierno. Pero la democracia cambia a sus líderes para responder a los deseos de los ciudadanos. Y los ciudadanos

expresan sus deseos por medio del voto, dentro de un sistema que les permite seleccionar a diferentes personas como candidatos a ser elegidos.

Si no queremos golpe de Estado y que no colapse el sistema. Si el sistema democrático se renueva y se sustenta por medio del voto. Si el sistema, además, nos permite seleccionar candidatos de diferentes orígenes sociales y políticos para que se disputen nuestros votos ¿cómo es, entonces, que nos negamos, tanto a buscar nuevos candidatos que nos satisfagan, así como acudir a votar por quien más nos atrae?. ¿Cómo es que no queremos golpe de Estado, pero nos quedamos en nuestras casas, esperando que el sistema colapse?.

Y cuando el sistema colapse... ¿entonces qué?.

¿Un plebiscito amenizado por la presencia de las bayonetas desenvainadas?.

¿La convicción de que las encuestas sin seguimiento a sus conclusiones no sirven para nada?.

¿Nunca es tarde para aprender?.

¡A veces sí!.

24 de agosto 1995

LA DES-ABSTENCION ELECTORAL (II)

En la edición dominical de Economía Hoy del 03 de septiembre de 1995, Carlos Raúl Hernández concluye un bien documentado artículo, sobre lo que él titula como las «Ociosidades Constituyentes» con la siguiente aseveración:

> «La filosofía de *"sería fácil derrotar a los partidos si los independientes salieran a votar por sus candidatos"* es una panacea ingenua. Producir el voto el día de las elecciones requiere recursos, habilidades y conocimientos concretos, producto de la experiencia y del trajín».

Comentar el pensamiento y las razones de tan apretada síntesis, no es tarea fácil. Sin embargo, sin pretender interpretar en toda su profundidad lo que Carlos Raúl Hernández pudiera abonar adicionalmente en apoyo de su tesis, me voy a permitir exponer algunas ideas al respecto, tomando la aseveración de Hernández como punto de partida, ojalá que para ambos, para desarrollar un tema que debería ser de interés prioritario para todos los venezolanos.

En la primera parte de este tema (ver página 299 de este libro) «La Des-Abstención Electoral», abordé la poca eficiencia de la abstención como forma de protesta, así como también la poca representatividad que tendrían gobernadores y alcaldes electos con menos del 10% del voto potencial. No cuestiono la **legitimidad** constitucional que tendrían dichos funcionarios, pero no hay duda de que aun siendo «legítimos» serían muy poco «representativos» de los electores que constituyen su ámbito geográfico de acción. Atenta contra la efectividad de un Gobierno, tanto su legitimidad, que puede ser cuestionada legalmente, o cuestionada abiertamente, si se tratara de un Gobierno de facto, así como su escasa «representatividad» dado el muy pequeño número de electores que habrían seleccionado

a los funcionarios. Aunque legalmente sus consecuencias sean las mismas, **no es lo mismo**, desde el punto de vista de su capacidad para poder ejercer a plenitud su función de Gobierno, un Gobierno electo por la mayoría de los electores potenciales, a un Gobierno electo por la mayoría de la minoría exigua de esos electores que votaron por él. No todos los éxitos y fracasos políticos se pueden medir por su apego o desapego a la Constitución y a las leyes. Como apunta el mismo Hernández se puede ser ilegítimo y popular o legítimo e impopular a la vez. Pero -por lo menos- en el comienzo de cualquier Gobierno, ser popular puede ser más importante que ser legítimo, aunque tarde o temprano la legitimidad empezará a ser más importante que los éxitos materiales (Chile). De igual manera, legitimidad sin éxito puede generar serios cuestionamientos de parte de los ciudadanos, no sólo al gobernante sino al mismo sistema. Si a esa situación le agregamos una débil representatividad, consecuencia de una elevada abstención electoral -entonces- la situación se tornará, tarde o temprano, casi insostenible para el gobernante de turno (Caldera). Mi conclusión es -por lo tanto- que representantividad y resultados positivos son, por lo menos a corto plazo, más importantes que las disposiciones constitucionales. Lo cual no significa que éstas se deban violar en la búsqueda de resultados. Lo que significa es que la sóla modificación de la Constitución, para adaptarla a la filosofía política del día, así sea vía una Asamblea Constituyente, no garantiza la creación de las condiciones mínimas que requiere un país para pasar del fracaso al éxito.

Lo anterior me lleva -de nuevo- a la cita de Hernández, hecha al comienzo de este artículo. Estoy en desacuerdo con él. A mi manera de ver, sería fácil derrotar a los partidos si los abstencionistas salieran a votar. Lo que le ha faltado a la sociedad civil es la voluntad de organizarse en grupos de activismo político. Todos los obstáculos para el desarrollo de opciones políticas que han creado los partidos tradicionales son superables, si hay

voluntad de hacerlo. No se requieren ni recursos extraordinarios, ni habilidades y conocimientos especiales, como sugiere Hernández. Tomemos como ejemplo las elecciones pasadas para Presidente de la República, diputados y senadores al Congreso Nacional y diputados a las Asambleas Legislativas. El proceso tenía los siguientes ingredientes a superar por cualquier grupo de electores que se quisiera formar para participar en dichas elecciones:

Inscripción en el Consejo Supremo Electoral. Pese a todas las desventajas y dificultades que se le impusieron a los pequeños grupos de electores que se quisieron inscribir, un gran número de ellos lo hizo, y aquí en el Distrito Federal y el Estado Miranda una federación electoral (F'94) -fundada por mi- llegó a reunir y a inscribir, con el esfuerzo de todos, hasta diez diferentes grupos de electores. Además de ayudar a la creación de grupos en sitios tan distantes como Mérida, Trujillo, Nueva Esparta y Sucre. De manera que crear grupos e inscribirse no es problema insoluble.

Tarjetón Electoral. No hay duda que la complejidad y tamaño de la papeleta electoral atentó algo contra las selección uninominal de los candidatos independientes que aparecieron dispersos y en la parte inferior del tarjetón. Sin embargo, si hubiera habido un verdadero interés y una participación masiva de aquellos que no votaron y de algunos que sí lo hicieron, pero se «entregaron» en el acto de votar, ante la primera dificultad, los independientes hubiesen sacado mucho más votos.

El Escrutinio. Los «robos» de votos se producen cuando no hay representación de los interesados en las mesas. Puedo dar fe de que en las mesas donde estuvo gente de los grupos del F'94 no hubo fraude. Donde no estuvieron pudo haber habido un conteo deshonesto. Una vez más, lo importante es la participación masiva de todos los ciudadanos en todo el proceso electoral.

Las Campañas. Los recursos materiales fueron escasos

para nuestros grupos de electores. No obstante, se llegó a quien tenía que llegársele. Lo que no se pudo fue despertar el interés de los electores lo suficiente como para que salieran de sus casas a votar o, de que si votaban, no lo hicieran rutinariamente y sin mucha meditación por el «tubo» de los partidos políticos. El elector de nuevo seleccionó la «comodidad» del voto. Si votaba por Caldera, casi siempre votaba **uninominalmente**, sin que le importara el candidato, por Convergencia. Era lo fácil.

Por lo tanto, los independientes perdimos, no por falta de recursos «ni de conocimientos concretos». Perdimos porque **todavía** no hemos sabido aprovechar esa contradicción que existe entre la percepción negativa que tienen los electores de los partidos políticos, y la forma pasiva de protestar (la abstención) o la forma cómoda de votar (por colores). Cuando los electores estén lo suficientemente indignados con el sistema, como para salir a la calle, podremos aspirar a derrotar a los partidos por la vía del voto. Ojalá que así sea y que no se salga a la calle en fecha diferente a la del día de votar, para intentar cambiar al Gobierno por «otras vías».

¿Qué pasa ahora? (Algo queda por salvar)

Por las razones que sean, y a lo mejor son las dadas por Hernández, para estas elecciones de diciembre la oferta electoral parece estar casi totalmente concentrada en candidatos presentados por los cinco partidos políticos que hoy se disputan el favor nacional. Sin embargo, ocurre un fenómeno positivo. En algunas circunscripciones electorales aparecen candidatos independientes propuestos por algún partido, y candidatos miembros de partidos que tienen características personales tan positivas que, hasta los que se quieren quedar en sus casas, pudieran votar por ellos. Hay casos como el de Angel Enrique Zambrano, uno de los pocos triunfadores en las últimas elecciones para alcaldes, sin apoyo partidista tradicional, quien ahora ha aceptado a ser apoyado por A.D. Esto pudiera obedecer a que

la agrupación que lo apoyó en Baruta, «Decisión Ciudadana», ha perdido popularidad y dirigentes, dándole píe a la creencia de que el «poder desgasta» y -por lo tanto- su candidatura para la re-elección sin el apoyo de una partido político ortodoxo y fuerte, no tendría opción de triunfo. O, que el partido A.D. ha visto en Angel Enrique a un triunfador potencial y le dió su apoyo. En todo caso, en esta nueva alianza deben haber habido transacciones importantes de tipo político que -sin duda- saldrán a la luz pública una vez que la campaña coja calor.

Caso diferente es el de Angel Zambrano (padre), quien ha ocupado gobernaciones como la del Zulia y Miranda, y ha sido diputado al Congreso Nacional, cuando las elecciones no eran uninominales y los gobernadores los nombraba el Presidente de la República. Ahora en una demostración de valor político, se atreve a lanzarse como independiente a la Gobernación del Estado Miranda, sin el apoyo de los partidos políticos tradicionales. Su éxito dependerá mucho de su campaña y de su habilidad para sacar de sus casas a los que no quieren votar. Como en todas las candidaturas electorales hay que esperar para pronosticar resultados.

En la elección donde si no hay que esperar por los resultados, es en la Alcaldía de Chacao, donde Irene Sáez le ha dado un mentís al dicho de que «el poder desgasta». Con el apoyo casi unánime de partidos y grupos de electores Irene repetirá en Chacao, sin problemas. Ojalá que la votación sea masiva, con poquísima abstención, para demostrar fehacientemente que cuando hay por quien votar, la gente vota. En el caso de Irene, la abstención podría producirse no por desencanto en el candidato, sino por la absoluta seguridad del triunfo que puede hacer pensar a muchos que no es necesario ir a votar. Irene debe focalizar su campaña en insistir en que la ciudadanía vote, para que haya una demostración inequívoca del apoyo popular que tiene su gestión. Aparte de las lecciones que ha dado Irene de la importancia que tienen para los electores las pequeñas, aunque importantes cosas,

que ella resuelve con exquisita creatividad, sería importante demostrarle al país que un buen candidato sí saca a la gente de sus casas.

En el Zulia, Fernando Chumaceiro, el exitoso alcalde de Maracaibo, se lanza ahora a la Gobernación como independiente por COPEI. Algo que demuestra que los partidos políticos pueden escoger buenos candidatos fuera de sus filas. Su éxito dependerá -también- del tipo de campaña que haga y su disposición de poner al descubierto -sin inhibiciones- las fuertes debilidades que tienen algunos de sus opositores.

Finalmente creo que es importante hacer un comentario sobre la Causa R. En las elecciones presidenciales pasadas, la Causa R. sacó un importantísimo número de parlamentarios, tanto por la vía de las listas partidistas como por la vía uninominal. Pero nadie se llamó a engaño. Los parlamentarios uninominales de la Causa R. fueron seleccionados por el voto «entubado» partidista y me atrevo asegurar que, por lo menos en el Distrito Federal y el Estado Miranda, muy pocos electores saben el nombre del parlamentario que eligieron «uninominalmente». Ultimamente la imagen de la Causa R., como organización política, se ha deteriorado bastante -precisamente- por el anonimato de muchos de sus parlamentarios y por haber demostrado fehacientemente que el crecimiento demasiado rápido puede ser tan peligroso para el éxito institucional como el estancamiento permanente. Ahora -en algunos casos- los buenos candidatos de la Causa R. -y los hay- tienden a «descausaerrerizarse» un poco, para sustituir con su propio prestigio la debilidad aparente que tendría la Causa R. como organización electoral en varias regiones del país. En este grupo de aspirantes se encuentra el talentoso Jorge Roig, candidato a la Alcaldía de Baruta, quien se ha hecho acompañar -en su apoyo- por un grupo independiente aparte, por supuesto, del apoyo formal de la Causa R. Jorge sabe que para ganar en Baruta tiene que ser menos Causa R. y más Jorge Roig. Otros que pudieran

inscribirse en esta tendencia son Clemente Scotto (si se aprovechara su talento y prestigio para postularlo a algún cargo) y Aristóbulo Isturiz, quien ha hecho una gestión loable en las zonas marginales de su municipio, pero cuya popularidad entre los habitantes de urbanizaciones de clase media -como La Florida, por ejemplo- no es muy alta. Aristóbulo tendrá que convencer a esta clase media, que tiene votos y recursos que, en su próxima gestión, se ocupará más de ella. Para eso, es probable que tenga también que «descausaerrerizarse» un poco. El otro candidato a la Causa R. en la zona central, es Pablo Medina. El sí no puede ni debe «descausaerrerizarse». Sería contranatura, y no le convendría. Genio y figura...

La conclusión es -pues- que si bien es cierto que se ha hecho muy poco para romper con las candidaturas partidistas en estas próximas elecciones regionales, no es menos cierto que -en algunos casos- hay candidatos que responden claramente -mejor que otros- a las aspiraciones de los electores. Los que piensan quedarse en sus casas deberán analizar con responsabilidad las diferentes candidaturas y salir a votar por la que les parezca mejor. El primer paso para acabar con la hegemonía partidista es salir a votar. Una vez que nos acostumbremos -de nuevo- entonces los independientes, podremos hacer lo que no hemos hecho hasta ahora: Seleccionar directamente a nuestros candidatos o, demostrarle a los partidos políticos que nuestros votos **sí** cuentan y así obligarlos a que, si van a seleccionar candidatos por nosotros, por lo menos seleccionen a los que mejor respondan a nuestros intereses.

No es pues, «recursos, experiencia y trajín» lo que se requiere para darle fuerza electoral a los independientes y miembros de partidos políticos, hoy abstencionistas. Lo que se requiere es que pasemos de la abstención a la acción participativa como forma de protesta. Ante la falta de cultura política de mucho de nuestros ciudadanos, parece que esta ausencia habrá que sustituirla por una reacción de ira, de no estar dispuestos a

soportar más los desmanes del Gobierno y de los partidos políticos: sus cómplices en el irrespeto a los intereses ciudadanos. En la medida en que las cosas empeoren para el ciudadano común, en esa misma medida el ciudadano empezará a rebelarse y a buscar la forma de participar en las decisiones de Estado para cambiar las cosas.

La ecuación es pues: A peor Gobierno sostenido, mayor posibilidad de que los ciudadanos busquen fórmulas directas -como el voto- para cambiar su situación.

Si eso es lo que necesitamos, el Gobierno actual va por el camino «correcto».

07 de septiembre 1995

LAS OPCIONES DEL FRACASO II

El 03 de marzo de 1994, un mes después de la toma de posesión del Presidente Caldera, publiqué un artículo, donde intenté -desde mi muy particular visión- crear algunos escenarios «políticos/económicos», dentro de los cuales se podría insertar a futuro el Gobierno recién inaugurado ("Las Opciones del Fracaso", **Ya Dios no es venezolano**. Caracas. 1995)

A fin de poder diseñar -**ahora**- un escenario optimista para el futuro de Venezuela, es importante recordar lo que escribí en el artículo mencionado (Citas parciales).

Escenario 1. El Castillo de Naipes (Más de lo mismo)

«El nombre se deriva de la falsa ilusión que tienen algunos analistas de que nuestro sistema político, económico y social, es recuperable, sin que ocurran cambios verdaderamente profundos en nuestra sociedad. «El Castillo de Naipes», da la impresión de solidez, pero puede desmoronarse como consecuencia de cualquier nuevo «vientecito» que lo azote». Este escenario apunta a la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas continúen quebrando. Aumenta el desempleo. El déficit obliga a la creación de dinero inorgánico. Aumenta la inflación. Los problemas sociales no tienen solución por falta de recursos de infraestructura para distribuir en forma eficiente lo poco que hay. Las universidades se paralizan. Aumentan las protestas populares. No se controla el hampa y la inseguridad continúa cobrando nuevas víctimas diariamente. Se paraliza el crecimiento económico. Cae la motivación de los empleados públicos al no cumplirséles la promesa de aumentar su salario. Aumenta la corrupción y -dentro de ese ambiente- se hace imposible incrementar la recaudación de los impuestos. Aumenta -por lo tanto- la evasión fiscal. La industria petrolera tiene que aportarle mayores recursos al fisco y se agudizan las tensiones entre la tecnocracia de P.D.V.S.A. y el Ministerio de Energía y Minas.

Renuncian varios ministros y el Presidente Caldera tiene enormes dificultades para reclutar personas dispuestas a servir en un gobierno que se ve agobiado por los problemas. Se agotan los recursos financieros para seguir auxiliando a la banca. Aumenta la intranquilidad y la desconfianza. En un desesperado intento por administrar la situación se imponen controles de cambio y de precios. Se elevan los aranceles de aduana de ciertos productos, lo cual produce disputas y dificultades con países vecinos y amigos, con los cuales se han hecho convenios de integración. La paciencia popular empieza a perderse y surgen manifestaciones, las cuales terminan casi siempre en violencia y saqueos. Así las cosas, este escenario, que por fuerza tiene que ser de transición, desemboca en uno de los dos sub-escenarios siguientes»:

(Creo que la descripción no pudo ser más coincidente con lo que sucedió y -por lo tanto- los sub-escenarios que se describen a continuación siguen siendo relevantes).

«El Reventón (El caos social)»

«Los eventos discutidos en el escenario de «El Castillo de Naipes», llevan a contínuos desórdenes sociales. Las Fuerzas Armadas tienen enorme reticencia en intervenir y convertirse en los «verdugos del pueblo». Se desatan saqueos y se crea un verdadero conflicto de clases, estimulado por activistas populares, antiguos guerrilleros y jóvenes de clase media que sienten que han sido defraudados por el sistema democrático y robados por los «beneficiados» del sistema».

«Algunos cuadros medios de las Fuerzas Armadas se suman a la protesta y el Alto Mando Militar intenta intervenir, cuando ya es tarde. Se dividen las Fuerzas Armadas y se desata una verdadera guerra civil. En este escenario es difícil prever las consecuencias finales. Las heridas de la lucha fratricida tardan mucho en cicatrizarse. Los odios y los deseos de revancha perduran en el tiempo. La destrucción violenta de un sistema, el cual -por mucho que se critique- no puede catalogarse de represivo, crea vacíos de poder y de liderazgo. La recuperación de este escenario tomará -por lo menos- dos generaciones y colocará definitivamente a Venezuela en la cola del desarrollo de América Latina».

«El largo adiós (La dictadura militar)»

«En este escenario el Alto Mando de las Fuerzas Armadas actúa rápidamente y reprime las manifestaciones populares, antes de que lleguen a los extremos incontrolables del sub-escenario de «El Reventón». Se establece un Gobierno Militar que -como siempre- buscará y logrará apoyo civil por parte de algunas personalidades. Los conflictos internos de las Fuerzas Armadas dificultarán la emergencia de un líder indiscutible dentro de su seno y, la lucha por el poder castrense, atrasará el diseño de una política coherente en materia económica y social. Un número importante de políticos y empresarios emprenderán la vía del exilio... El Gobierno militar tendrá enormes dificultades para pacificar el país. Renacerá la oposición clandestina, esta vez con acciones de terrorismo urbano. La respuesta será la represión, lo cual dificultará -aún más- el reconocimiento internacional al nuevo gobierno. Finalmente, después de un período caótico, comisiones de las Naciones Unidas y la emergencia de un liderazgo en las Fuerzas Armadas, lograrán una paz negociada y un período de transición, donde se establecerán las bases para un regreso a la democracia. El país quedará con graves heridas, pero probablemente su recuperación será mucho más rápida y menos traumática que en el sub-escenario de «El Reventón».

Escenario 2) «La sacudida institucional (La dictadura civil)»

«El Presidente de la República, **cuanto antes** convoca a los partidos políticos y a las instituciones de poder de la sociedad civil y pide (exige) poderes extraordinarios para gobernar «por decreto» por un tiempo determinado. Durante ese período se suspenderán las actividades del Congreso Nacional y algunas garantías constitucionales. Las Fuerzas Armadas, ante la disyuntiva de tener que intervenir -a corto plazo- en forma represiva para mantener el orden público, que ya empieza a deteriorarse, o a tomar por la fuerza el poder, deciden apoyar al Presidente de la República en su solicitud. Por lo menos uno de los tres grandes partidos de la oposición, aprueba la medida. Caldera convoca entonces a un Gobierno de entendimiento nacional, en el cual son llamados, y están dispuestos a colaborar, los mejores... No todo es siempre

> armonía y -probablemente- no se produzca un «milagro» de recuperación económica. Pero la ausencia de presiones partidistas y la profesionalización del gabinete, tenderán a la elaboración de un presupuesto nacional sincero, a una reducción de la inflación y del déficit fiscal, mediante la toma de medidas urgentes a tiempo y -a veces- desagradables y no populares».

Hasta aquí lo escrito por mi el 03 de marzo de 1994. Veamos ahora los escenarios del futuro:

Un escenario para el optimismo

No hay duda alguna que mi escenario del «Castillo de Naipes», se cumplió casi al pie de la letra. La pregunta es, ahora, ¿Cúal será el próximo escenario de este Gobierno?. ¿Cómo evitar que las consecuencias negativas de este escenario desemboquen en el sub-escenario de «El Reventón» o en el de la «Dictadura Militar»?.

El otro escenario descrito por mi «La Sacudida Institucional» (La Dictadura Civil) era -en su momento- una opción al del «Castillo de Naipes» («Más de lo mismo»), pero al materializarse éste, ya la «Sacudida Institucional» («La Dictadura Civil»), aunque no totalmente descartado, tendría graves problemas para su implantación. La pérdida de popularidad del Gobierno -tanto pública como política- dificulta la posibilidad de que la sociedad acepte -**ahora**- el escenario de «Dictadura Civil». Sin embargo, en ese escenario hay elementos recuperables para la creación de un escenario diferente que pueda traer resultados positivos. En otras palabras, la misma «Sacudida Institucional» pero -esta vez- sin «Dictadura Civil».

Escenario 3) La Sacudida Institucional II (La Nueva Apertura)

Este escenario supone que no habrá recuperación de nuestra economía, ni salida a la crisis actual sin una apertura verdadera del Gobierno a la participación activa y contestataria de la

sociedad civil, de los partidos políticos y de las instituciones nacionales. (Nótese que se habla de participación activa y contestataria. No se habla de consenso, ni de convocatorias a Miraflores de grupos que no representan a nadie). El Ejecutivo amplía la base de sus estructuras de poder con representantes de la nueva sociedad civil y el Congreso Nacional, a fin de evitar su disolución y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (de dudoso resultado), incorpora a sus diferentes comisiones a algunas voces que se quedaron fuera del Congreso, en las últimas elecciones, pero que tienen mucho que aportar a las soluciones necesarias. No se trata de reformas **formales** a la manera de operar del Congreso. Se trata de una apertura voluntaria para mejorar su eficiencia. Ampliar el espectro de la participación ciudadana y protegerse de la muy real posibilidad de que los ausentes busquen otras medidas de expresión y participación («El Reventón» y/o «La Dictadura Militar»).

Sobre un escenario parecido dije también en 1994, lo siguiente:

> «Al incorporar a la nueva sociedad civil al mecanismo de decisiones, el Gobierno -entonces- tiene que aceptar la imposibilidad de evitar el conflicto interinstitucional, entre las viejas y las nuevas fuerzas sociales. Su rol (el del Gobierno), será entonces crear las condiciones para un consenso -entre los protagonistas- sobre el establecimiento de las reglas de juego del conflicto. La diferencia entre una democracia en camino a la madurez, y esta fragilidad artificial que tenemos hoy es -precisamente- que la primera permite el debate y el conflicto ideológico y de poder institucional, sin que se produzca el caos social y sin que minorías organizadas creen inestabilidades políticas, mediante la ejecución de actos condenados por la sociedades civilizadas (encapuchados, saqueadores, marchas no autorizadas, paros y «lockout» fuera de la Ley, etc). Hay que acabar con el concepto de que todo desacuerdo es el principio del caos y que todas las decisiones difíciles se tienen que tomar por consenso. El consenso tiene que ser de forma: «Cómo se administra el desacuerdo» y no

de fondo: «Todos tenemos que pensar igual». La misma esencia de la democracia: Gobierno por la mayoría, supone que hay una minoría que no comparte todas las visiones de la mayoría, pero que respeta el hecho de que representan a los más. Por su parte, la mayoría oye y también respeta a la «otra» opinión, aunque no necesariamente ejecute sus deseos».

Bajo el escenario de «La Nueva Apertura» ya no hay tiempo para el gradualismo. Hay que entrar por el «aro» de las condiciones negociadas con el F.M.I. para modernizar la economía: Reducir el déficit fiscal. Tasas de interés positivas. Devaluación. Reforma fiscal. Aumento de la gasolina. Aumento de las tarifas de los servicios públicos. Reestructuración y flexibilización del presupuesto. Inversiones en obras de infraestructura, sanidad y educación. Liberación de precios. Privatización de las empresas del Estado. Aumento de la Productividad del sector privado. Creación de un sistema social moderno con compensaciones adecuadas para el desempleo. Creación de fondos de pensiones. Revisión a fondo del sistema de prestaciones sociales.

Nada en esta lista y en sus omisiones, tales como el control de cambio, la reforma del Estado, la reforma de la Ley de los partidos políticos y la reforma de la Ley del sufragio -entre otras- es novedoso o desconocido. El Gobierno reconoce que no se podrá tener éxito, sin un plan coherente integral que recoja y maneje a todas -o casi todas- estas variables. Diseña y establece el **Plan** y, poco a poco, se convence de que ha encontrado el camino para salir de la crisis.

Este es -pues- un escenario de éxito potencial para un Gobierno que ha fracasado, al actuar dentro del escenario de «El Castillo de Naipes» («Más de lo mismo»). A diferencia del escenario de la «Dictadura Civil», éste escenario incorpora a los «dolientes» al mecanismo de decisiones.

Los pasos a transitar son los siguientes:

- El Presidente se dirige a la Nación y expone:

a) La gravedad de la crisis sin eufemismos. Cuantificando esa gravedad en términos sencillos. Cuánto se debe. Cuánto le ingresa al país. Cuánto es el déficit fiscal. Cuántas las reservas internacionales reales.

b) Reconoce públicamente la imposibilidad de seguir aplicando una política económica que, pese a sus mejores intenciones, ha sido demostrablemente ineficaz (Esto se puede maquillar un poco, alegando el impacto brutalmente negativo que tuvo en la economía la crisis del sistema financiero. Pero - al final- dígase como se diga, hay que anunciar **ahora** la necesidad de desarrollar una política económica diferente).

c) Convoca a las instituciones de poder y a los partidos políticos a que se incorporen a la discusión de un nuevo programa económico, cuyo borrador preparará el Gobierno.

d) Fija un plazo de 30 días para concluir esta discusión, la cual se tendrá con quienes asistan. Anuncia -además- que el plan que se apruebe será el que más le convenga al país y que podrá no ser del agrado de algunas instituciones -aunque éstas de buena fe- participen en la discusión.

e) Anuncia la reestructuración total del Gabinete -también en 30 días- para poder reflejar en su futura composición la discusiones que se hayan tenido.

Anuncia la reestructuración del Poder Ejecutivo y la reducción de los ministerios, entre otras acciones.

g) Incluye en la agenda de puntos a discutir la reestructuración del presupuesto y las medidas más expeditas para reducir el gasto público. Nada es dogmático. Todo está abierto a la discusión. Desde la privatización de P.D.V.S.A. hasta las contribuciones del Estado a la Iglesia.

- Ante este mensaje la sociedad civil y los partidos políticos responden al llamado. Se crean mecanismos verdaderos de consulta. Se le concede al Ejecutivo algunas facultades para tomar decisiones de urgencia que deberán luego ser ratificadas por el Congreso Nacional, de ser esto necesario.

- El pueblo acepta -aunque a veces a regañadientes- la imposición de estas nuevas medidas que -indudablemente- en el muy corto plazo le serán visiblemente desfavorables y aumentarán la intensidad de su sacrificio. Sin embargo, el apoyo que le da al Gobierno el sector político y las instituciones de poder, permiten a estas últimas actuar como catalizadores del descontento y evitar que éste se convierta en manifestaciones sociales incontrolables.

- Después de varios meses, empiezan a notarse los beneficios de la nueva política y aumenta de nuevo la credibilidad, no ya del Gobierno -exclusivamente- sino de un sistema político/social que logra la recuperación del país, por la vía de la participación activa de sus ciudadanos en el establecimiento de las medidas necesarias.

Las grandes dudas que surgen sobre la viabilidad de este Escenario, son las mismas que tuve sobre el escenario de la «Dictadura Civil». Ellas fueron:

1) Si el Presidente está dispuesto a hacer la convocatoria institucional cuanto antes.

2) Si nuestras instituciones y la sociedad civil están dispuestas a tomar este riesgo y, si de verdad, están convencidas de la necesidad de prestar la colaboración aquí sugerida, como una salida a la crisis.

3) Si los «mejores» estarán a dispuestos a colaborar con un régimen como el descrito.

4) Si después de establecido el nuevo sistema, el Presidente y los «mejores» tendrán el talento y el aliento de largo plazo necesario, para implantar los cambios institucionales requeridos.

5) Si la ciudadanía -ya cansada de promesas- estará dispuesta a concederle una nueva oportunidad a un gobierno que -aunque diferente- pudiera parecerle el mismo.

Si estas dificultades no se pueden subsanar y si el Presidente no entiende que este escenario positivo no aparecerá por generación espontánea, ni podrá ser desarrollado apoyado por su exclusivo grupo de conocidos, entonces me atengo a los

escenarios del «Caos Social» y la «Dictadura Militar», como fuertes posiblidades. Tengo en abono de mis predicciones, el haber acertado con el escenario del «Más de lo mismo».

Aunque **eso**, no me haga feliz.

P.D.: Para seguir con el optimismo. Cabe también la posibilidad de que el Presidente y el Gobierno no hagan lo aquí sugerido. Pero -obligados por la circunstancias negativas de la crisis- se vean forzados a tomar las medidas de modernización de la economía mencionadas en el último escenario descrito («La Nueva Apertura»). En el nuevo escenario, no habrá plan coherente. Las medidas se tomarán a regañadientes y siempre se buscará a culpables, para cargarles el peso del nuevo sacrificio. Así las cosas, el resultado no será, ni tan ordenado, ni tan exitoso, como en el escenario de la «Nueva Apertura». Sin embargo, será mejor que el escenario de «Más de lo mismo» y pudiera no desembocar ni en el «Caos Social», ni en la «Dictadura Militar». En este nuevo escenario -aquí esbozado- que podría describirse como «La Modernización a Juro», el Gobierno concluirá su período sin que colapse el país y -lo más triste para él- sin darse cuenta que habrá sembrado las semillas del cambio que harán posible que el próximo Gobierno encuentre un país, donde ya se habrán hecho reformas importantes (fiscales y presupuestarias). Privatizaciones. Flexibilización de controles. Devaluaciones. Tasas de interés positivas. Inflación aun de dos dígitos, pero inferior al 40%, etc.

Sólo cuando el **próximo** Gobierno incorpore todas estas acciones ya tomadas, en un plan coherente y exitoso, será que el -para entonces- gobierno anterior, comprenderá su error y sentirá la necesidad de salir a la calle y decirle a los ciudadanos: ¿»porqué aplauden al nuevo Gobierno, si todos los cambios los hicimos nosotros»?.

¡Lo dirán!.

Pero, en ese momento, ya nadie los querrá oír.

05 de octubre 1995

LAS SIN RAZONES DEL GOLPE II

El 27 de febrero de 1993, publiqué un artículo titulado «Post Data del Golpe» (Publicado en mi libro **"La Angustia Institucional. De la Constitución al Sable".** Caracas, **1995)** En el hacía algunas consideraciones, cuyo verdadero y único mensaje era que un golpe militar no puede nunca justificarse. Analicé -entonces- las presuntas razones que se daban para «justificar» el Golpe del 4-F'92. Entonces -como ahora- las razones son sin razones. Vale la pena -sin embargo- recordar a algunas de ellas para que sea más fácil descalificarlas. También publiqué -antes del Golpe del 4-F- otro artículo titulado «Las Sin Razones del Golpe» (El Universal, 05-12-91). En él analizaba las excusas que podría tener el sector militar para intentar un Golpe de Estado. Tanto en uno como en otro caso, ni la sociedad civil, ni los partidos políticos, ni el sector militar pueden presentar argumentos que justifiquen una interrupción por la fuerza del sistema democrático. Por lo tanto, me adelanto a establecer que la primera conclusión derivada de los argumentos dados en esos dos artículos es que, quien intenta explicar un Golpe de Estado ya está en el camino de justificarlo.

Las Sin Razones del Golpe.05/12/91

Las notas entre comillas indicarán el texto original. Las notas entre paréntesis indicarán los comentarios de hoy.

«Las razones que podría esgrimir el sector militar para intentar un Golpe de Estado son las siguientes:

La inflación y el deterioro del nivel de vida. Lo cual ha afectado duramente a la clase media. Esa es la clase a la cual pertenecen los oficiales «medios», los cuales han sido duramente golpeados en sus condiciones de vida. Tenientes, Capitanes y hasta Mayores, tienen un nivel de vida no cónsono con el poder

potencial que detentan. Algo parecido, guardando las distancias, sucedía en 1945. La diferencia mayor está, en la calidad del liderazgo de las Fuerzas Armadas, donde en 1945 aún quedaban Generales «choperos», improvisados en sospechosos campos de batalla y que carecían de la instrucción y conocimientos de nuestra actual alta oficialidad...» «Pero, a pesar de la cultura del liderazgo, uno no puede menos que sospechar que hay mucho descontento guardado en los inventarios emocionales de nuestros oficiales medios»

(El tiempo me dio la razón y a escasos dos meses de haber escrito lo anterior, hubo la primera intentona de sublevación militar el 04 de febrero de 1992).

«Los ataques sostenidos a la honestidad de nuestras Fuerzas Armadas. Las sospechas de corrupción a altos niveles de la oficialidad. Pero -lo más grave- es la sospecha que la corrupción es un acto hecho con la complicidad del poder político. En este sentido, oficiales de alto nivel, así como también los de nivel medio, pudieran contemplar con preocupación la muy real posibilidad de que **toda** la institución militar corre la misma suerte que parece estar corriendo la institución política. Es decir, la pérdida de credibilidad ciudadana en sus verdaderas intenciones. Las diferencias entre uno y otro sector pudieran ser básicamente dos: 1) La corrupción militar podría no estar tan avanzada en su institución, como la corrupción política está en la suya. 2) Los militares no contaminados tienen la fuerza institucional (en este contexto no hay eufemismo. Fuerza quiere decir fuerza), que no tienen los dirigentes honestos de las instituciones políticas para imponer o inspirar cambios en la conducta política del país».

(Esta sección puede mantenerse sin cambio y casi sin comentarios. Si acaso valdría la pena mencionar que la sospecha de corrupción en los altos niveles de la oficialidad ha sido reiterada).

«El *Guardián* de lo Corrupto. Abundando en lo anterior,

sería lógico suponer también que, aunque la institución militar tuviera su importante dosis de corrupción, no quisiera seguir siendo el *Guardián* de un sistema político de Gobierno, que exhibe obscenamente sus debilidades, que se niega a cambiar, que piensa que es impune a toda acción correctiva, **incluyendo a la militar**».

(Al comienzo del Gobierno del Dr. Caldera se pensó que dada la conocida honestidad y probidad del Primer Mandatario, la sociedad en general tomaría como ejemplo la conducta del Presidente y la corrupción disminuiría en nuestra sociedad. Es lamentable que no haya sido así, lo cual tiende a demostrar que la corrupción -como fenómeno de conducta- está muy arraigada en nuestra sociedad y permeabiliza todos los estratos de la misma. Se necesita -pues- más que un buen ejemplo para erradicarla).

«Las arbitrariedades que el poder político/civil ha cometido con las promociones del sector militar. Habiendo «despartidizado de boca» a las Fuerzas Armadas, el poder político se dio la vuelta sin el menor rubor y empezó a calificar a los Coroneles como adecos y copeyanos, a fin de decidir sobre sus promociones. Hay evidencias suficientes como para comprobar que, tanto en las promociones así como en su negación, se han cometido injusticias institucionales graves. Pero, si bien es cierto, que algún celestinaje militar haya aceptado lo inaceptable, no es menos cierto que hay heridas profundas en el sistema meritocrático militar». (Me atengo a lo dicho en este comentario).

«Quién ¿está subordinado a quién?. La última consideración en cuanto a la institución militar se refiere, está relacionada con su percepción del poder político/civil. No puede quedar la menor duda que, pese a la retórica formal, la institución militar no está **completamente** subordinada al poder civil. ¡No lo está! y lo sabe, tanto el poder político como el poder militar...»

«Más aun, para mi siempre ha sido sospechoso de inseguridad, la forma como el Gobierno Civil nuestro aprovecha cualquier celebración de efemerides patrias, para **reiterar** la

confianza que tiene el Gobierno en la vocación democrática de las Fuerzas Armadas. Nunca he oído esas «seguridades» reiteradas por gobiernos civiles en países donde no existe el oculto temor de que -a lo mejor- la subordinación militar al poder civil no es tan «subordinada» como parece sugerir la retórica oficial» (De nuevo, no siento la necesidad de añadirle nada a lo ya dicho por mi en el pasado. En América Latina la subordinación militar al poder civil no es un hecho incuestionable. Casi todos los años, se celebran dos o tres foros en nuestra región -y fuera de ella- para estudiar el fenómeno del militarismo en nuestro continente. Por eso, en nuestros países siguen habiendo transacciones políticos/militares que difícilmente podrían concretarse en otras sociedades cuyos poderes internos están mejor equibrados).

«**El tiempo que falta para que se produzca un cambio de Gobierno.** Algunas instituciones y personas estarán siempre más que dispuestas a tolerar como la mejor opción a un Gobierno constitucional hasta el final de su período, por muy inepto que sea. Pero -para muchos- una cosa es esperar unos meses y otra cosa es esperar dos años largos. Más aun, independientemente de la voluntad de esperar, estará presente en la mente de muchos la excusa del tiempo a transcurrir. El deterioro que sufrirá el país. La creciente marginalidad. Los peligros de otra explosión social. Todas las posibilidades de que ello ocurra, estarán en proporción directa el tiempo que falta para un cambio de Gobierno. En otras palabras, la institución militar, que debemos suponer no quiere dar un Golpe, pudiera encontrar en el deterioro constante y a largo plazo de la sociedad, una razón para vencer su reticencia. O una excusa para tomar acción, si **eso** es lo que íntimamente desea. En todo caso, el largo tiempo que falta para un cambio de Gobierno, es un elemento de por si desestabilizador. Tanto en la mente de quienes tienen la fuerza como en la mente de los que sufren las negativas consecuencias de la presunta ineptitud gubernamental».

(En nuestras actuales circunstancias esto sigue siendo una

preocupación válida. Ahora como ayer, al Gobierno le falta un tiempo considerable para terminar su mandato. Pero, no hay que olvidar que, el mejor Gobierno que nos podemos dar de aquí hasta el final del período constitucional, es el Gobierno que tenemos. No hay otra opción a considerar).

«La aparente indiferencia de la sociedad civil. Hablar y hablar de un Golpe Militar -en alguna forma- es una manera de llamar al lobo. En el ámbito formal de las comunicaciones se busca el rescate de la imagen de Pérez-Jiménez como un tirano que «hizo mucho por el país». Además de algunos comentarios sueltos, y otros no tan sueltos, sobre la imposibilidad de gobernar democráticamente a un país como Venezuela y la necesidad de «legalidad y orden» que recuerda un poco al «Gendarme Necesario» de Vallenilla. En el ámbito informal de la comunicación -boca a boca- las conversaciones recuerdan a los años 45 y 48, cuando la población anunciaba la fecha del Golpe. Cuando los supermercados vaciaban sus estantes. Cuando los liceos y las universidades se cerraban. Cuando las amas de casa «guardaban» los niños por unos días, para evitarles cualquier «peligro». Cuando los líderes universitarios daban discursos incendiarios que -según ellos- cambiarían la cara del país. Y cuando todos nos sentábamos disciplinadamente con un radio al lado, esperando con angustia la primera transmisión de música sacra, a la cual le seguiría -sin duda- el primer boletín de la Junta Militar. La cual -por cierto- por lo general incluía a uno o varios civiles»

(De nuevo este párrafo de 1991, describe con bastante claridad la situación que vivimos hoy. Ahora a la posibilidad -difundida irresponsablemente por muchos- de un Golpe Militar, se le agrega con diligencia digna de mejor causas, presuntas enfermedades del Presidente de la República que dada su algo avanzada edad, pudieran constituirse en causas de inhabilitación o muerte).

«Post Data del Golpe. 27/02/92».

(En este artículo analicé las razones y justificaciones por medio de las cuales muchas personas, con entusiasmo no disimulado, «explicaban» las razones que pudieran haber provocado el lamentable intento de Golpe Militar del 4-F'92).

«La culpa es del Gobierno».

a) **«Por su Paquete Económico**. Si bien es cierto que el Paquete Económico ha empobrecido a los más pobres, los niveles de pobreza crítica ya eran alarmantes antes del Paquete. Más aun, la economía del país estaba desarrollada a base de engaños, subsidios y ventajas temporales derivadas de la teoría de que se puede construir una economía global sana, sobre los ingresos temporales e **incontrolables** del único bien exportable (El petróleo). Esta especie ignoraba -por supuesto- «El Mal Holandés», resultado de la monoproducción de un bien competitivo a nivel internacional, que rompe y disminuye toda posibilidad de diversificación económica»

(De todas las equivocaciones estratégicas en el campo político y económico que ha cometido este Gobierno, la peor ha sido la de aupar aún más, la conclusión de que la culpa de todos los males del país, la tenía el Paquete de Pérez. Ahora que tiene que regresar en gran medida a ese Paquete, se verá en grandes dificultades para explicar ese giro de 180 grados en su política oficial).

b) **«Por tolerar y practicar la corrupción»** (No hay duda que hubo graves actos de corrupción en el Gobierno anterior. Pero la corrupción tampoco la inventó ese Gobierno. Corrupción hubo en los Gobiernos de Herrera Campins y Lusinchi. Por lo tanto, nadie debe justificar un Golpe de Estado basado en esta perniciosa practica de nuestra sociedad -que como ya hemos dicho- abarca a todos sus estratos. Más aun, este Gobierno no se ha escapado tampoco de ese flagelo).

«Los Partidos Políticos. La invasión institucional y el abuso de poder de los partidos políticos no fue una característica que

nació bajo el Gobierno anterior. Es más, esta característica es quizás una de las pocas cuyo origen moderno puede remontarse a la Revolución de Octubre de 1945. Por lo menos, una de las consecuencias de esa Revolución fue -precisamente- la emergencia de los partidos políticos como interventores de las instituciones democráticas en formación, así como la subordinación institucional a los lineamientos partidistas».

«**Los Medios de Comunicación**. Se crítica la tendencia de destacar lo negativo de nuestro entorno, callando de paso, lo positivo de nuestra sociedad y los logros de nuestros gobiernos. De nuevo hay que insistir en lo antiguo de este problema, si es que se puede dignificar con la calificación de «problema» esta excusa obvia para justificar la ineficiencia gubernamental. La ausencia de resultados. La angustia del fracaso. Aquí, en esta «explicación», reside uno de los aspectos más inaceptables de cualquier excusa. Según esta increíble teoría, quien denuncia lo corrupto, la incapacidad y los errores, es el culpable de las consecuencias de la denuncia. Es -como muchas veces lo he dicho- poner en las espaldas del denunciante el dilema de escoger entre: a) Denunciar a los culpables pase lo que pase. b) Callarse. Porque denunciar puede resultar en un costo personal o nacional, fuera de proporción en sus consecuencias con lo denunciado... No hay nada más asfixiante que el circulo vicioso resultante del falso dilema que nos obliga a escoger entre acciones en función de la honestidad sin excepciones y la honestidad prostituida parcialmente por la excusa de la protección a un interés global indefinido, pero que pesa mucho a la hora de fijar posición pública. Personal o institucional».

«**El Fondo Monetario Internacional**. Esta acusación es la más absurda de todas. Es más, es la que nos define como a los hipócritas de nuestra Era. Es la que nos pone en la falsa situación de no mirar a nuestros propios errores, porque tenemos la fácil salida de culpar a otros. El F.M.I., no puede ser responsable por 38 años de mala administración de nuestros enormes recursos.

No puede ser responsable de nuestra corrupción. No puede ser responsable de nuestra deuda externa y de nuestra injusta distribución de la riqueza. Ni de nuestra pobreza crítica. Ni de nuestra desnutrición infantil. Ni del mal funcionamiento de los servicios públicos. Ni de nuestro atraso educativo y nuestra corrupción y mala administración de nuestro sistema de salud... Y -ahora- el F.M.I., condiciona su ayuda financiera a la búsqueda de una formula para solucionar nuestros propios fracasos, lo cual puede resultar en medicina equivocada. Pero, no nos olvidemos que la medicina nuestra fracasó hace tiempo. Uno de nuestros más graves obstáculos para llegar a un desarrollo y crecimiento armónico, es la tendencia de culpar a alguien externo de todos nuestros males. Es lo que llamé hace tiempo: «El Efecto Houdini». Un escape de la realidad. Un esfuerzo por romper las leyes inflexibles de lo obvio. Como si inventando excusas y con malabarismos de explicación, pudiéramos borrar lo ya hecho por nosotros mismos. En el balance de la responsabilidad, lo único no transferible es la culpa» (Creánlo o no lo crean esto fue escrito y publicado en 1992).

Como podrá apreciarse de las citas anteriores y de las fechas de ambos artículos, entre uno y otro, transcurrieron apenas dos meses y una semana y de la publicación de ambos artículos han transcurrido más de tres años. Como tenemos como país mala memoria creí prudente recordar que en una democracia nunca hay razones para un Golpe. Que éste no se puede dar sin el consenso de las Fuerzas Armadas. Que es hora de que esta fuerza se subordine totalmente a la sociedad civil. En este contexto, es importante continuar explorando la posibilidad de nombrar a un civil como ministro de la Defensa. Pero esta subordinación no puede venir exclusivamente por un cambio de mentalidad del sector militar. Tiene que venir -también- de un cambio de mentalidad de las instituciones de la sociedad civil. Mientras sectores de nuestra sociedad piensen en la posibilidad de un Golpe Militar, como un instrumento para corregir los defectos de la

democracia. Mientras se busquen justificaciones para las asonadas militares, como se le buscó a la insurgencia del 4-F y del 28-N'92. Mientras se dignifique y justifique lo que no tiene cabida dentro de un sistema democrático. Mientras algunas de nuestras universidades pretendan convertir en héroes populares a los que -por la fuerza- pretendieron convertirse en Gobierno (El Chavismo en la UCV). Mientras muchos de nuestros intelectuales presten su talento y su pluma para «explicarle» al pueblo las razones para justificar las asonadas del 92. Mientras indultemos -casi de inmediato- a los que se burlaron de la Constitución y de las leyes. Mientras que violadores de la seguridad del Estado de Derecho, se utilicen ahora como protagonistas de slogans electorales, para ofrecerle al pueblo una presunta tranquilidad personal porque «este hombre si sabe de seguridad» (Caso Arias Cárdenas en la campaña para Gobernador del Zulia). Mientras que los venezolanos se dediquen a inventar y propagar rumores de Golpe por teléfono a sus amigos. Mientras que los medios de comunicación se hagan eco de esta posibilidad. Mientras -en fin- que en la mente de **un** venezolano persista la idea de que un Golpe Militar es posible... ésta será posible y hasta probable.

Pero «probable» y «posible» no son sinónimos de «justificable». Si algún consenso nacional se requiere en este país, es aquel que deberíamos obtener en relación a una condena total a toda acción que -de una u otra forma- puede considerarse como de apoyo activo o pasivo a un Golpe Militar.

No creo que sea un secreto para nadie, mis constantes críticas a este Gobierno. Pero defenderé siempre el derecho que tiene el Presidente Caldera de concluir su período presidencial, sin que tenga que preocuparse por la posibilidad de que se interrumpa su gestión por actos de fuerza. Vengan de donde vengan. Aunque se disfracen de buenas intenciones. No pueden haber buenas intenciones en los actos de fuerza que buscan interrumpir el período, dentro del cual tienen derecho a gobernar quienes fueron electos por voluntad popular. Así a muchos no

les guste su gobierno.

Lo que tienen que hacer los decepcionados es salir a votar cuando se celebren elecciones y no quedarse en sus casas rumiando descontento o conspirando en busca del poder por la vía del atajo.

Ahora que estamos en una nueva búsqueda de la modernización de nuestra sociedad, debemos entender que uno de los signos más evidente de atraso político y social, es pensar que un Gobierno que nos dimos por voluntad popular mayoritaria pueda ser sustituido por un sector de la sociedad, por el solo hecho de que ese sector tenga el uso de las armas que nos pertenecen a todos. Armas, que les dimos para que nos defendieran como Nación y que no pueden ser utilizadas, por decisión inconsulta de quienes le deben subordinación al Gobierno Civil legítimamente constituido.

Es hora de que nuestras Fuerzas Armadas así lo entiendan.

Pero también es hora de que así lo entiendan **todos** los demás.

26 de octubre 1995

SI VIVIERA ALLI, VOTARIA POR...

«Es muy fácil ensalzar a los hombres por el valor de sus convicciones. Ojalá yo pudiera enseñarles a los tristes jóvenes de esta generación el valor de sus confusiones».

John Cicardi

En repetidas ocasiones, solo y bien acompañado, he insistido en la necesidad de combatir la abstención y convencer a los electores sobre la conveniencia de escoger, entre los candidatos presentados en sus respectivas regiones, a quien les parezca la mejor de todas las ofertas electorales. Casi me atrevo a decir «el menos malo», anticipándome a varias de las razones más trajinadas por los abstencionistas: «Es que ninguno me merece confianza». «Todos son iguales». «Prometen mucho y después no cumplen». Etc... ¡Pues no!. No son iguales los candidatos. Y si el problema es que «prometen y no cumplen» entonces, quizás hay que escoger al que prometa menos. Como buenos ciudadanos ya bastante golpeados por las inconsecuencias políticas del pasado y del presente, deberíamos tener una idea bien concreta sobre lo que es posible hacer en nuestras regiones y lo que, sensatamente, no puede corregirse en un corto período de tres años. Hay pues, que votar selectivamente por las ofertas **posibles**. Otra razón que se esgrime para no votar es la de que la abstención es una forma legítima de protestar. No lo niego. Pero pienso que castigar a quien lo ha hecho mal, dándole el voto a otro, es una forma mucho más efectiva de protesta. No conozco casos, de sistemas de gobiernos democráticos que se hayan sustituido, mediante una estrategia que deje a los potenciales electores en sus casas. En cambio se de múltiples casos, sobre todo en Venezuela, donde los gobiernos se han cambiado mediante el voto. Que **eso**, no haya servido de nada, porque al fin y al cabo, todos son «más de

lo mismo», probablemente también sea verdad. Pero la raíz de **ese** mal está -**precisamente**- en la forma poco educada como siempre hemos votado. Primero, utilizando colores para seleccionar anónimamente a quienes nos gobernarían. Después, mediante un sistema uninominal que, en su complejidad y ventajismo para el *status-quo*, ha resultado en una ausencia -casi total- de personas independientes escogidas por votación popular para labores de Gobierno, tanto a nivel nacional como regional. Aun la presunta independencia de Rafael Caldera, no fue sino una buena excusa para que fuera electo, por una precaria mayoría dentro de una precaria presencia electoral. Ahora, los apóstoles de la abstención, pretenden convencernos de las bondades de su recomendación, pidiéndonos que el domingo 03 de diciembre, nos quedemos plácidamente en nuestras casas, mientras el país se derrumba alrededor nuestro, cuando no nos cae directamente encima. De nuevo, la respuesta debe ser un rotundo ¡**NO**! a esa proposición. ¿Cómo es posible que ante nuestros fracasos para seleccionar una buena oferta electoral -primero- por votar como ignorantes (Colores) -y ahora- por dejarnos manipular por el espejismo de una uninominalidad tramposa (pendejos) caigamos en la abstención como solución?. Esa sería la tercera manera de dejarnos engañar por los defensores del «más de lo mismo» político. Primero fuimos engañados y entusiasmados con el señuelo del derecho popular al voto (la primera manera). Luego fuimos timados por la falsa uninominalidad (la segunda manera) y ahora pretenden estafarnos -de nuevo- con la quimera de la abstención (la tercera manera). ¿Cuántas diferentes maneras para el engaño vamos a tolerar, antes de reaccionar positiva y exitosamente de la única manera posible: actuando?. Hay básicamente dos maneras de actuar: 1) La que hemos sugerido: Ir a los comicios de diciembre masivamente y seleccionar al gobernador, al alcalde, a los concejales y a las Juntas Parroquiales que nos parezcan las mejores y hasta -como ya se ha dicho- las menos malas. Una

presencia masiva en los comicios, le daría a los partidos políticos la señal de que la ciudadanía sí se interesa por el futuro político del país y -más importante aun- por quienes los van a gobernar. Si del cuidadoso análisis de las opciones, saliera una selección «cruzada» (gobernadores, alcaldes y concejales de diferentes grupos políticos) se daría también, una fuerte impresión de que el candidato cuenta tanto o más que el partido o grupo electoral que lo postuló. Entonces, en las próximas elecciones, podrían ocurrir dos cosas: O que los partidos políticos seleccionaran mejor y de una base más amplia de ciudadanos a sus candidatos o, que la ciudadanía se organizara en grupos políticos ad-hoc, para las elecciones regionales y escogiera a sus propios candidatos. Esto sería factible y de fácil ejecución para las elecciones de alcaldes, concejales y Juntas Parroquiales. Pero lo importante, no son solamente estas posibilidades, importantes como son. Lo valioso de este enfoque es la percepción que se llevarían los partidos sobre la factibilidad de que un pueblo interesado en su futuro Gobierno, dada su presencia masiva en los comicios, pudiera fácilmente dar el próximo paso: Crear -como ya hemos dicho- nuevas opciones de organizaciones políticas si los partidos tradicionales no les proponen candidatos que los satisfagan electoralmente. Esta opción de votar cumple -pues- el doble propósito de que el ciudadano se haga presente para seleccionar al candidato que más le guste (o que menos le disguste) y dé -además- una demostración visible de compromiso con los procesos políticos que lo afectan. Ese mismo ciudadano que -hasta ahora- ha podido ser gobernado en contra de sus intereses comunitarios e individuales por personas de una condición que solamente podría perpetuarse por la ausencia de interés de una población, que aún no ha querido demostrar su fuerza. Esta ausencia ha permitido que el poder esté en el sitio equivocado. En los cenáculos partidistas. En la mediocridad de la selección de los candidatos y no en los ciudadanos, que es donde indelegablemente debe estar. Se puede delegar el poder

de representarnos. Pero no se puede delegar el poder de pensar y decidir por nosotros sobre lo que nos conviene o no. 2) La otra opción es la de la abstención. La que le permitirá a las organizaciones políticas seguir pensando que el ciego entusiasmo anterior que generó el engaño y que permitió florecer -en su momento- a partidos como A.D., Copei y U.R.D., ha sido sustituido ahora por la abulia y el desencanto. En cualquier caso, el resultado es el mismo. En el caso del entusiasmo ciego nos llevaron a votar como al ganado que corre mujiendo feliz al matadero. En el caso de la abulia, ya ni nos llevan al matadero. Nos «benefician» sin que salgamos de nuestras casas. Nuestro estamento político tradicional ha encontrado la manera perfecta de sobrevivir. Primero nos puso la fiesta y tomó el poder por aclamación. Ahora nos pone el velorio y sigue en el poder por ausencia nuestra. Que velorio más triste es éste, en el cual la agotada -aunque omnipresente dirigencia política- ha enterrado nuestras esperanzas por una vida mejor a fuerza de convencernos de que, pese a sus mejores «esfuerzos», este país no es gobernable en forma eficiente. Que nadie -en su momento- es responsable. Que toda la «culpa» la tienen siempre quienes ya no están en el poder. Y, mientras tanto, nosotros en la casa, rumiando frustración. Esperando el milagro que un ineficiente, caprichoso y soberbio gobierno no podrá producir.

«Ser candidato es como cortejar. Se dicen muchas cosas que después se desearía no haber dicho».

Anónimo

Yo no pretendo conocer a todos los candidatos a gobernadores y alcaldes. Pero si yo viviera allí... votaría por Jorge Roig para alcalde de Baruta y por Aristóbulo Isturiz para alcalde del Municipio Libertador. Y no son veleidades «causa-erreristas». Para mi son los mejores candidatos para esas posiciones. En el Zulia -por ejemplo- no votaría jamás por Arias Cárdenas (Causa

R), por la muy sencilla razón de que no se debe premiar con el voto a quien hace apenas tres años, nos retrotrajo a lo que creíamos etapas históricas superadas cuando, abusando de unas armas que no eran de su propiedad, pretendió interrumpir -por la fuerza- a un sistema de gobierno democrático. Además de lo anterior, para mi no son perdonables -con o sin indulto- los Chávez y los Arias Cárdenas, a quienes les debemos no pocas de las calamidades que hemos soportado hasta ahora, y las que nos faltan, por haber interrumpido un proceso de modernización del país que -de haber continuado- aun imperfecto como era, hubiera representado para Venezuela un salto a la ruta que conduce al primer mundo. Nos hubiéramos evitado este atascado camino de tierra que transitamos hoy, en viaje hacia el pasado. En el Zulia -mi Estado- si viviera allí, votaría por Fernando Chumaceiro, independiente postulado por Copei. En Anzóategui, escogería a Guillermo Alvarez Bajares, con todo y ser de Convergencia. Y en Yaracuy, por Eduardo Lapi, ex-copeyano, ahora apoyado por Convergencia y el MAS. Hasta aquí llegan mis entusiasmos «Convergentes». En Monagas votaría por P. Aristimuño, presentado por Copei y el MÁS. En Bolívar por Victor Moreno de la Causa R., porque representa la continuidad de un buen Gobierno de Andrés Velázquez y porque me disgusta la «cayapa» política que siempre le hacen los partidos tradicionales a Velázquez en época electoral. En Carabobo votaría por Henrique Salas, porque lo conozco y me parece un joven inteligente y preparado. Aunque se pudiera notar un toque de nepotismo en la selección, estoy dispuesto a darle una oportunidad de «continuismo» a la dinastía Salas: **Una sola**. En Falcón votaría por José Curiel, quien sigue siendo un buen administrador. Para concluir con mi selección, en Mérida votaría por William Dávila de A.D. quien, a pesar de ser muy controversial, no lo ha hecho mal donde ha estado antes. Me abstengo de opinar sobre los demás estados, por cuanto no conozco bien a los postulados, pero reitero mi llamado a todos

sus habitantes para que seleccionen el 3 de diciembre a los candidatos de su preferencia.

Es la primera vez, en toda mi ya larga carrera profesional, que me atrevo a mencionar en público a candidatos políticos de mi preferencia. Pero pienso que si he llamado a combatir la abstención, debo dar una demostración visible de mi compromiso.

Vivo en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda y -por supuesto- tengo mis preferencias por quienes voy a votar allí. Como el voto es secreto, respetaré esa cualidad del sufragio. Sin embargo, no voy a dejar de mencionar, ni siquiera por escrúpulo de confidencialidad, que -a mi manera de ver- la Dra. Sonia Sgambatti, sería una concejal de lujo para el Municipio El Hatillo (para cualquier Municipio).

«Si logras mantenerte asustado todo el tiempo, pronto verás que esta crisis no te preocupa en lo absoluto».

Evan Esar.

A muchos podría sorprender que, pese a mis críticas constantes a este Gobierno y a ciertos negativos comportamientos del partido Convergencia, haya recomendando a algunos candidatos presentados por esa agrupación política. Aclaro. En primer lugar pienso que las cualidades personales, tanto en las Gobernaciones como en las Alcaldías y en los Concejos Municipales, pueden imponerse con alguna facilidad a las «obligaciones» partidistas. El compromiso de estos candidatos con el elector es mucho más directo y visible que -por ejemplo- en el caso de instituciones políticas nacionales, tales como la Presidencia de la República y el Congreso Nacional. En ese sentido pienso que un Alvarez Bajares y un Eduardo Lapi, pese al apoyo recibido por el partido de Gobierno, tienen la entereza moral y el valor político para ser sus propios hombres. Creo que podrán resistir esas llamadas a un apoyo incondicional al Gobierno hechas, justo antes de las elecciones y con muy poca

visión y tacto político, por el Coordinador Nacional de Convergencia, el Dr. J.J. Caldera. Dado el récord negativo de la Presidencia de la República y sus oficinas, de la mayoría de los ministros del Gabinete Ejecutivo y de la fracción parlamentaria de Convergencia, a buen seguro que jamás daría mi voto por ninguno de éllos que aspirara a posiciones públicas, elegidas por voluntad popular. Es más, difícilmente daría mi voto para posiciones en instituciones de carácter nacional a candidatos propuestos por Convergencia, salvo que éstos hubieran dado demostraciones evidentes de poder resistir la presión centralizante y dictatorial, con la cual la dirigencia de esa agrupación pretende imponer su criterio. No solamente a todos sus militantes, lo cual de por sí ya es bastante criticable, sino a todos los ciudadanos de Venezuela, lo cual es totalmente inaceptable.

Para concluir quisiera recordar un viejo dicho: «El poder es algo engañoso. Primero se usa, luego se abusa y finalmente se pierde».

Ojalá que los que hoy lo detentan, cuando lo pierdan, ello ocurra por la vía del voto.

Esta, es la razón final para que los electores no se queden dormidos en sus casas el 3 de diciembre. Los puede despertar la misma **música sacra** que -no hace mucho tiempo- precedía al anuncio de **«cambios»** en el Gobierno.

Usted la reconocerá.

Aunque no la haya oído antes.

P.D.: Unos estudiantes universitarios, dirigentes del «Proyecto Baruta», me han llamado la atención sobre dos comentarios periodísticos, relacionados con declaraciones atribuidas a dirigentes del partido Copei. Una es de Donald Ramírez, publicada en El Globo del domingo 19/11/95, en la cual éste le gira instrucciones a la maquinaria electoral de Copei, en el sentido de que «cuiden los votos verdes» en las próximas elecciones del 3 de diciembre. Creo que todo partido político

responsable debe cuidar no sólo sus votos «verdes», sino también la pureza global del proceso. En ese sentido hay que cuidar **todos** los votos, no importa el color que tengan. Esta posición se hace más importante dada la otra información periodística aparecida en la leída columna de mi buen amigo, Luis Erasmo Pérez Miraval, quien informa que en Baruta «Copei ha dado la orden de ganar a toda costa, para demostrarle a Gloria Capriles que ella no es imprescindible... etc». Por favor, doctores Luis Herrera y Donald Ramírez, «ganar a toda costa» es una instrucción bien peligrosa, si es que así hubiera sido dada.

Los partidos políticos tienen que saber ganar y saber perder dentro de un proceso electoral, cuya transparencia depende de éllos.

23 de noviembre 195

CARTA A RAFAEL CALDERA

Estimado Presidente:

Lo cortés no quita lo valiente y a pesar de algunas cosas duras que me siento en la obligación de decirle, usted, dentro de mis afectos políticos sigue siendo "mi estimado Presidente". Una leve distancia por debajo de "mi querido Presidente", donde quisiera estar, pero bien por encima de "Presidente" a secas y a kilómetros de distancias de muchos y variados adjetivos con los cuales la angustia y la frustración de algunos, podrían anteceder, como calificativos negativos, a la palabra "Presidente". Pero ese no es mi estilo, como mucho menos lo es, aplicarle otros calificativos para mi impensables, que definitivamente se apartan de la buena educación que no puede estar ausente en epístolas dirigidas a un Primer Mandatario. Sobre todo a uno que llegó, por segunda vez, al poder precedido de una bien merecida fama de hombre culto, honesto y trabajador. Pero, he aquí, que sus virtudes históricas empiezan a desvanecerse en un presente signado por las actuaciones de un Gobierno, presidido por usted, que día a día da demostraciones, no sólo de una ineficiencia inexplicable, sino de algo más incomprensible todavía. Usted empieza a dar la percepción de actuar como si no le preocupara el destino del país. Como si no aceptara el derecho de todos los ciudadanos a ser críticos de sus actuaciones. Usted empieza ya a desconocer la existencia de un equilibrio de poderes en el sistema democrático. Usted ha tratado desconsideramente al Congreso al inventarle un nuevo ministerio a Carlos Walter, destituído **constitucionalmente** como ministro de Sanidad y Asistencia Social por el Parlamento. Usted podrá decir que tiene también **constitucionalmente** el derecho de nombrarlo en otro ministerio. Pero usted sabe que "eso no es así". Ni ese, es el verdadero problema. No caeré en la provocación de discutir las acciones de algunos adultos, para quienes parece ser más

importante "desquitarse" que dar lecciones de comprensión y de respeto. Y ésas son, precisamente, las virtudes que le empiezan ha faltar a un hombre inteligente y culto como usted. No se llame a engaño Presidente, su conducta actual lo pone a usted en el muy real peligro de que la historia revise de inmediato el positivo juicio que sobre su talento tuvo hasta ahora. No se pueden cometer tantos errores, ni se puede actuar constantemente con la actitud del que nunca se equivoca. Ni se puede estar buscando enemigos donde sólo hay diferencias de criterio... y continuar siendo tomado como inteligente. Pero, que cambie el juicio colectivo sobre su talento, es lo menos malo que le puede pasar. Lo peor será que lo sigan creyendo inteligente, pero que sin embargo, actúa como actúa porque sus prejuicios y su terquedad, no le permiten hacer las cosas que sabe que hay que hacer, ni tomar las decisiones que sabe que hay que tomar.

¿Reconoce usted acaso que su control de cambio fue un fracaso y que aparecerá en los anales de los eventos extraños de Ripley, como uno de los pocos, -por no decir el único- que en menos de dos años después de haber sido implantado, entrega unas reservas monetarias internacionales menores de las que tenía el país, antes de la imposición de ese control?. Y no fue, como usted dice pero no debe creer, porque le faltó severidad al control. Lo que le faltó fue buen juicio al imponerlo. Buen juicio para administrarlo y buen juicio -ahora- para derogarlo. ¿Cómo puede usted tolerar que sus ministros discutan a diario en público, cómo y cuándo se eliminará el control de cambio, sin haber todavía decidido, justamente, sobre el cómo y el cuándo?. ¿Cómo puede usted presumir que todavía preside un Gobierno "para los pobres", cuando el suyo no sólo no ha hecho nada para los pobres que encontró, sino que ha creado unos cuantos más?. Por allí ya se dice cínicamente, que para usted gobernar para los pobres, significa gobernar para el mayor número de pobres posible. ¿Cómo personaliza usted los valores éticos de la sociedad, nombrando a un Comisionado Anti-Corrupción, como si a ese

flagelo no hubiera que combatirlo en todos los frentes, en todos los sectores y por todos nosotros?. ¿Cómo permite usted, que en un país empobrecido se diera ese grotesco espectáculo de su aclamación en el Poliedro?. ¿Cómo permite usted, que continuén en el Gobierno personas acusadas abiertamente de corrupción, algunas de las cuales ya tenían antecedentes no muy santos cuando fueron nombrados?. ¿Cómo acepta usted, sin comentarios, el caso del Banco Andino, cuándo tuvo tanto que decir sobre otros bancos y banqueros en similares circunstancias?. ¿Cómo permite usted que la agrupación política Convergencia, de nuevo cuño, actué con el mismo ventajismo y las mismas malas y anticuadas costumbres de la A.D. de 1945?. ¿Cómo nos lleva al F.M.I., en las peores circunstancias para el país y pretende, a través de su ministro de Hacienda, estar haciéndole un favor a esa institución al acudir a élla, a la vez que quiera hacernos creer que las condiciones de cualquier próximo financiamiento las impondrá Venezuela?. ¿Es qué usted cree que en Venezuela no hay quién sepa lo que es un préstamo "Stand By" a diferencia de otras modalidades de financiamiento que otorga el Fondo y que exigen condiciones mucho más específicas y duras, en cuánto a la manera de administrar a un país, antes de firmar el primer cheque?.

Usted en forma expresa, o sin saberlo (ambas situaciones son graves), nos está llenando todos los días de un falso optimismo. Usted ofreció y continúa ofreciendo lo incumplible, bajo su filosofía de Gobierno. Los únicos que parecen no estar preocupados por la gravedad de la crisis que nos aqueja son usted, sus ministros, el grupo político Convergencia y algunos dirigentes del MAS. No se engañe. El partido A.D., sabe perfectamente donde está parado. Copei, no está tan seguro, pero tampoco está tan ausente de la realidad como alguna gente cree. La Causa R., apostará al fracaso de su Gobierno, haga usted lo que haga. El MAS, de seguir el Gobierno por la ruta desastrosa por donde transita ahora, lo dejará solo y perderá, la

medalla de mejor Boy Scout de Venezuela, que penosamente se estaba ganando. Convergencia, esa colcha de retazos a quien solamente unen las puntadas frágiles del hilo de la conveniencia, se descoserá más temprano que tarde para que sus parches busquen, como siempre, refugio en otra parte.

Pero graves como son las consideraciones anteriores, lo más grave, lo que más nos preocupa y hasta molesta a los venezolanos, son sus ausencias. No físicas. No son sus viajes los que nos enojan, son sus ausencias de las soluciones de los problemas las que nos preocupan. ¿Cómo es posible que en un país de "opinadores", la opinión suya no se conozca?. ¿Cómo es que un hombre que se sabe inteligente, no hable sino de generalidades?. ¿Cómo es que contra la avalancha de críticas severas y muy específicas, sobre aspectos muy concretos de nuestro desastre nacional, usted no tenga sino adjetivos descalificadores para los legítimamente angustiados?. ¿Cómo es que usted aplica una mentalidad tercermundista, que no parece la suya, al concepto del "Gran Complot"?. ¿La Gran Confabulación?. ¿La conjura externa?. ¿La conspiración interna?. ¿Hasta cuándo insultará nuestra inteligencia, buscando culpables lejos, cuándo los tiene tan cerca?. ¿Se acuerda usted del soldado a quién enviaron a que buscara al enemigo, y regreso diciendo "hemos encontrado al enemigo y somos nosotros"?. Allí, en su entorno, en la cercanía de sus hombres de confianza y en la mentira de las evaluaciones sociales, económicas y políticas que le presentan sus allegados, es donde encontrará las razones de su fracaso. En su capricho en mantener a su lado a los demostrablemente incompetentes. En su pretensión de inhabilitar económica y políticamente a sus opositores. En su insensata porfía de mantenerse sordo y ciego ante el ruído angustiante de lo que está a la vista.

¿En qué piensa usted, Sr. Presidente, todas las noches antes de que el sueño lo tome por asalto?. Antes de entrar a esa zona inconsciente del descanso nocturno, ¿tiene usted algún momento

de reflexión sobre lo hecho y lo no hecho durante el día?. ¿Piensa, en algún momento, antes de dormirse en que quizás cometió algún error?. ¿O solamente repasa con satisfacción las amables, cordiales y enaltecedoras frases que le dirige su entorno?. ¿Se deja usted engañar por el enorme deseo de hacer las cosas bien, de forma tal que no puede ver equivocaciones en ninguna de sus decisiones?. ¿Le molestan sus indecisiones, sus marchas y contramarchas?. ¿No piensa nunca que tantos tropezones, pueden ser las consecuencias de transitar, **a juro**, por el camino equivocado?. ¿Será usted capaz, alguna vez, de hacer un acto de contrición aunque sea en privado?. Sería muy edificante para todos nosotros si de vez en cuando reconociera que sus opositores pudieran tener razón en algo de lo que dicen. En sus consejos sobre política económica. En sus predicciones sobre los fracasos anunciados de muchas de sus decisiones. Sobre lo incumplible de muchas de sus promesas. Sobre la necesidad de **conocer** la verdad, para después repetirla ante los ciudadanos. Sobre la imposibilidad de hacerle bien a los pobres, empobreciendo al país. Sobre su aversión al sector privado que somos, Sr. Presidente, **todos** los que no estamos directamente al servicio del Estado. Sector privado, son los pobres también Sr. Presidente. Son los gremios. Son los sindicatos. Son las asociaciones de vecinos. La mayoría de las fundaciones de interés social. Son los nuevos grupos de la sociedad civil emergente. Son los de "Queremos Elegir". Los de "Pro-calidad de Vida". Los grupos teatrales y musicales. Los Ateneos. Las empresas nacionales. Somos todos privados y venezolanos. Lo del Estado es muy pequeño. Lo nacional somos nosotros. Los que lo elegimos y hoy sufrimos por eso. Su entorno y el Gobierno representan muy poco ante la magnitud de lo que representamos los demás. A quienes usted se debe. Al 60% de pobres, pero también al otro 40% que lucha por no engrosar a los que usted pretende, sin éxito, proteger. A los que crean riqueza con su trabajo. A los que se resisten a que su Gobierno los nivele por el rasante bajo de la mediocridad. No se olvide que los que

le hacen oposición, son también venezolanos, pobres y **casi** ricos. Porque **verdaderamente** ricos deben quedar muy pocos. Pídale cifras a sus ministerios sociales que bastantes tiene, por cierto, sobre la pobreza, la desnutrición infantil y el desempleo. Dígale a ese muy buen ministro que es Antonio Luis Cárdenas, que le converse sobre el "fraude educativo". No el viejo. El que subsiste hoy, corregido y ampliado. Pídale al responsable por el bienestar de la pequeña y mediana industria, que le cuente sobre las empresas que han quebrado durante su Gobierno. Los puestos de trabajo que se han perdido. La capacidad ociosa de nuestras plantas industriales. Hable con la gente, sin filtros palaciegos. No se deje abrumar por los aplausos de los oportunistas. Asista, o mande a un familiar, a un acto público. Corridas de toros. Conciertos. Presentaciones teatrales. Dígale que acompañen al Presidente de Hidrocapital, en sus visitas a los barrios. Someta a la prueba ácida de su presencia a su presunta popularidad y la de su entorno y haga su propia evaluación.

Si después de haber rectificado en mucho de lo mencionado aquí y algo más, el país no despega, ni sale de la crisis, empiece de nuevo y ni siquiera piense en renunciar. No somos un país hecho para improvisar liderazgos, ni mucho menos para reemplazar Presidentes por vías diferentes a la de la sucesión ordenada y rutinaria. Los resultados de nuestra reciente excepción a esta norma, nos deben haber ilustrado sobre esta realidad. Más aun, usted, Sr. Presidente, nos debe a todos los ciudadanos un esfuerzo sostenido por cinco años. No por dos, ni por tres, ni por cuatro. "Ni un día más, ni un día menos", como solía decir Rómulo Betancourt, quién supo rectificar muchas veces, y cuya figura política, a no dudarlo, enaltecerá la historia.

Piense en su futuro y en el de todos nosotros. Haga un balance honesto de su gestión y transite una nueva vía, y cree un nuevo entorno. Porque de continuar su incomprensible viaje hacía el fracaso, encontrará ante el vacio de su ausencia en la solución de los problemas, cada día más venezolanos que también le harán

el vacio de no estar dispuestos a colaborar con su Gobierno. Es más, sospecho que sus enroques ministeriales, se deben en mucho, a la dificultad de encontrar ayuda nueva y diferente.

Recuerde usted que cuando hay demasiadas ausencias, hacen aparición ciertas presencias de "fuerza" que usted ha vivido y sufrido en el pasado. No las invoque por ausente. Tampoco las invoque por el capricho de no rectificar a tiempo.

Y tiempo, es lo que ya no nos queda... Ni a usted ni a nosotros.

Reciba usted, las consideraciones de mi aprecio personal.

30 de noviembre 1995

LAS ELECCIONES 1995
LAS VACACIONES DE ACCION DEMOCRATICA

En un delicioso artículo sobre las elecciones recientes y los partidos políticos (El Globo, 10/12/95), Luis Herrera Campins comenta la fuerte devoción de poder de Acción Democrática para concluir diciendo que el «partido del pueblo», hasta cuando vive en la oposición sin poder visible, considera que está «de vacaciones», listo para el regreso. La verdad es que yo nunca he considerado a A.D. «de vacaciones», ni en sus peores momentos. El partido siempre ha encontrado la forma de ejercer el poder aunque sea indirectamente como ahora, a través del Presidente de la República. O abiertamente, a través del Congreso como en el primer gobierno de Caldera. O con negociaciones tras de bastidores como en el gobierno del propio Herrera. Pero no hay duda que hay mucho de acierto en la feliz metáfora que define a A.D., como lo que verdaderamente es: Un partido político que considera a sus ausencias formales del poder como a unas vacaciones para descansar, meditar y fortalecerse para el regreso. Visto así, estas elecciones podrían considerarse como el fin de las vacaciones adecas y un fuerte estirón de sus considerables músculos políticos, como un abre boca a lo que intentarán hacer en 1998: La reconquista del poder central, representado por la Presidencia de la República.

Pasemos ahora al proceso electoral, recien finalizado.

A las elecciones regionales de diciembre de 1995, hay que analizarlas desde el punto de vista del proceso en sí, para luego pasar a un intento de interpretación de sus resultados.

El Proceso (La Corrupción Desatada)

Pena y vergüenza muy propia -sin nada de ajena- debemos sentir los venezolanos, testigos de un proceso vergonzoso por

la ausencia de los electores, por la conducta exhibida por la mayoría de los protagonistas, por los vicios del sistema, por los mensajes equívocos, y por la caprichosa interpretación que de sus resultados han hecho sus supuestos beneficiarios: Los partidos políticos.

Por mucho que respetados analistas electorales pretendan justificar el abstencionismo electoral de estas recientes elecciones regionales, los comentarios no pasan de ser unas explicaciones más o menos racionales que no pueden dignificarse con el calificativo de justificación. A mi -personalmente- me importa muy poco el argumento de que la abstención es un acto lícito de protesta. Será todo lo lícito que se quiera en términos legales, pero como un acto de conciencia cívica, de moral y de responsabilidad colectiva, la ausencia ciudadana del acto electoral del domingo 3 de diciembre de 1995, es un abandono injustificable. No se construye un país con la ausencia de los ciudadanos de los procesos críticos que los afectan directamente. La abstención electoral es condenable en cualquier sociedad, pero es más fácil explicarla en aquellas sociedades, donde hay satisfacción más o menos general con el sistema de Gobierno y la presencia ciudadana en las urnas no es vista por muchos como indispensable para mantener al sistema. En nuestro caso de insatisfacción general es imperdonable que los ciudadanos se queden en sus casas, esperando que «otros» les arreglen sus problemas. Había que ir a votar por la opción que más nos gustara o, en el peor de los casos, por la que menos nos disgustara y si ninguna de esas opciones satisfacía al elector, era preferible votar nulo. Muchos piensan que «nulo» debería ser una opción fomal para el elector. Puede que eso sea conveniente, pero -de todas maneras- aun sin esta alternativa explícita se puede votar nulo, bien escribiendo la palabra «nulo» o marcando una cruz a lo largo y ancho del tarjetón. De esa manera el elector habrá votado en forma que no deja lugar a dudas y que no puede confundirse con los votos anulados por error. (Aunque al final se cuenten los

nulos «verdaderos» con los errores). Esto sí daría una idea bien concreta de que no satisface a los electores ninguna de las opciones sometidas a su consideración, a la vez que demostraría que el ciudadano sí está dispuesto a hacer acto de presencia en la contienda electoral. Esos votos así depositados sí se podrían contar como los de aquellos completamente desafectos e insatisfechos con el sistema. La abstención, en su comodidad visible, en su débil excusa de ausencia, puede interpretarse y atribuirse a muchas razones que van desde la irresponsabilidad hasta la flojera y el desinterés real de algunos ciudadanos en todo el proceso (Ibsen Martínez. Dixet). Pasando, muy rápidamente por una posible, aunque no comprobada insatisfacción con los candidatos. Personalmente pienso que para que la protesta prospere hay que hacerla lo suficientemente visible como para que se note y lo suficientemente ruidosa como para que se escuche. No creo en protestas a control remoto, en un siglo cuyos años finales se caracterizan, precisamente, por las comunicaciones sencillas y accesibles. La conclusión es -pues- que la abstención electoral no le trasmite a nadie un mensaje claro, lo cual es un pecado mortal en nuestra época.

Pena ajena -ahora sí- dió ver a los representantes de los diferentes partidos políticos en un acto de analfabetismo cívico, proclamarse vencedores a los escasos minutos de haberse cerrado las urnas. Ese día, al sumar los estados que se atribuían los diferentes representantes políticos, aprendí que Venezuela tiene 32 Estados y no los 22 que aparecen en nuestra geografía oficial. Me enteré también que el analfabetismo político no es exclusividad ni de los grandes partidos, ni de los viejos dirigentes. En el Táchira, Walter Marquéz denunció fraude sin que empezarán a contar los votos y Juan José Caldera le informó a la ciudadanía de los sólidos éxitos de Convergencia y de los fracasos de aquellos partidos opuestos al Gobierno. Por cierto que -para muchos- en su última aseveración Caldera tenía razón, si se considera a A.D. como partido de Gobierno. Sólo que los adecos

no lo ven así y su conducta en el año 1996 lo va a demostrar. Para mi, que he sido director de dos medios de comunicación escrita, mal informar con la deliberada intención de confundir al lector o al oyente, es un acto de corrupción.

Pero el proceso tiene también otros defectos, el mayor de los cuales es el sistema electoral mismo. Hay que cuestionarlo en su integridad. Desde la composición del Consejo Supremo Electoral y las Juntas Electorales Regionales, hasta el sistema de escrutinios, pasando por la uninominalidad, la creación de circuitos electorales como los existentes y la falta de civismo del elector venezolano, quien no reacciona en forma airada de protesta general ante los contínuos fraudes que cometen las organizaciones políticas. Fraude que los partidos ni siquiera tienen la discreción de ocultar, sino que mediante acusaciones mútuas lo proclaman a los cuatro vientos, siempre en cabeza de otros. Bajo este sistema y con la gente involucrada, en Venezuela no podrá haber nunca unas elecciones cerradas, cuyo candidato derrotado no sienta, con razón o sin ella (probablemente con razón) que el ganador le escamoteó los votos decisivos. En esto no cabe duda que la mayor responsabilidad recae sobre Acción Democrática, como el partido con la maquinaria nacional electoral mejor aceitada. La que fue capaz de «reubicar» a electores en diferentes circunscripciones para alterar el equilibrio electoral verdadero de algunas comunidades. La que tiene más testigos en las mesas y personas mejor entrenadas en la elaboración de las actas finales. Todo ese talento no debería ser utilizado para el fraude. Debería ser empleado para garantizar la pureza de los resultados. No es así, por la visión cínica que tienen los partidos políticos y hasta la mayor parte de la sociedad venezolana, sobre lo que son acciones correctas e incorrectas. Los otros partidos se quejan del fraude adeco casi con envidia, por no tener capacidad organizacional para hacer lo mismo con igual «eficiencia». En Venezuela las organizaciones políticas no critican el fraude electoral. Solo protestan cuando se sienten

víctimas de ese proceso, el cual también aprovechan fraudolentamente donde y cuando tienen el poder de hacerlo. Más aun, muchas de las alianzas políticas electorales se construyen porque «tal o cual partido me puede cuidar los votos y hasta darme algunos adicionales». Con esa visión ambígua sobre la moral y la ética ¿Cómo puede entonces confiarse en autoridades electorales constituídas por las mismas organizaciones que estimulan al fraude?. Hay que acabar con el Consejo Supremo Electoral y sustituirlo por los tribunales (por mucha corrupción tribunalicia que exista en el país, no se puede comparar con la corrupción electoral en toda sus manifestaciones: fraude, desinformación, incompetencia, partidización y alcahuetería ciudadana).

Tal como sugiere Jesús Torrealba en un excelente artículo, publicado en El Globo del 09/12/95, los testigos electorales podrían seleccionarse en cada mesa, por sorteo de los inscritos para votar en esa mesa. Al propio sistema hay que revisarlo también, para asegurarse que a nivel regional los Grupos de Electores tengan facilidades para presentar a sus candidatos y no haya que descansar totalmente en los partidos políticos para ejercer las opciones electorales. El sistema uninominal hay que revisarlo, a fin de contrastarlo con las posibles ventajas que podría ofrecer un sistema nominal de listas abiertas, como ha propuesto el MAS en el pasado. Hoy en día, pese a que en la práctica pudiera existir, en las palabras de Anibal Latuff (El Globo, 09/12/95), cierta «buhonería electoral», los grupos, no apoyados por alguna organización política tradicional, tienen muy pocas oportunidades de triunfo.

Este proceso electoral nos enseñó algunas otras cosas: 1) Que en una economía de la pobreza, los pobres están muy ocupados buscando como superar su situación, para ir a votar. Sin embargo son, probablemente, los que más acuden a las urnas todavía, porque son los más susceptibles a creer en las promesas incumplibles y porque las maquinarias partidistas los «ayudan»

en sus zonas regionales para que vayan a votar. 2) Que la mayoría de la clase media, que ya pasó a ser pobre, no vota porque es más culta políticamente que la clase marginal tradicional y no cree en promesas electorales. Tampoco se deja llevar «arreada» a los centros electorales (Eso no justifica -como ya hemos dicho- su ausencia del proceso). 3) Que el sistema electoral no responde a las necesidades de un país, ansioso de entrar a la modernidad política, económica y social y que ya no acepta el ventajismo electoral de los partidos políticos, su corrupción, sus mentiras, sus testaferros incrustados en las autoridades electorales, su gatopardismo y el insulto a la inteligencia ciudadana que representa todo el proceso. 4) Por último y -lo más importante- porque el modelo político que inauguró la Revolución de Octubre de 1945, se agotó irremisiblemente. Se agotaron sus representantes colectivos. Se agotó su último esfuerzo por sobrevivir con el fracaso del Gobierno del último patriarca del sistema quien fue llamado, como otrora fueran llamados Páez (Conservador) y Guzmán Blanco (Liberal), para salvar a sistemas también muribundos. Fracasaron. Como fracasará este intento de dejar las cosas como están. No se puede. No se tolerará y se enterrará a la vieja Venezuela muy pronto. Por las buenas o por las malas. Por la violencia se enterraron nuestros sistemas anteriores. Los todavía líderes sobrevivientes de este sistema, no deben olvidarse de las lecciones de la historia.

P.D.: El sábado 02/12/95, pude constatar una clara demostración de la bajeza a la cual pueden descender los grupos políticos, en su afán de ganar las elecciones, mediante la descalificación de los candidatos de otros partidos y de las personas que los apoyan. Ese día violando la Ley que prohibía la propaganda electoral en esa fecha y con una ausencia de ética y moral «algunos» pusieron a circular un volante con mi foto y un título a grandes letras que decía «Lea esta Carta», en clara alusión

a la «otra» que incluyo en este libro, (Carta a Rafael Caldera, página 343).

El volante alegaba que:

1) Yo apoyaba a Jorge Roig. **Cierto**.

2) Que lo apoyaba en mi condición de Vicepresidente del Hotel Tamanaco. **Falso.**

3) Que en las elecciones municipales anteriores, apoyé a Angel Enrique Zambrano. **Falso.** Aunque siempre le he tenido y le tengo un gran aprecio personal.

4) Que el Hotel Tamanaco no paga impuestos municipales. **Falso.** No sólo paga, sino que -a no dudarlo- es probablemente el mayor contribuyente del Municipio.

5) El resto del contenido son aseveraciones tendenciosas en contra de Jorge Roig, a las cuales no les daré publicidad por no ser yo el afectado. Jorge -sin duda- sabrá que hacer y decir al respecto.

A diferencia del deleznable volante, mi carta al Presidente iba firmada. Los hombres cuando quieren decir algo deben hacerlo de frente, con valentía y no esconderse detrás del anonimato para inventar falsedades.

Pero -como ya he dicho- para hacer **eso** hay que ser **hombre.**

14 de diciembre 1995

LAS VACACIONES DE ACCION DEMOCRATICA (II)

La semana pasada comentamos el proceso electoral. En esta segunda y última parte del artículo analizaremos los resultados electorales y sus protagonistas.

Los resultados (La interpretación presuntuosa)

Como todos los partidos se han atribuido buenos resultados electorales es -entonces- importante para cualquier observador externo como yo, no tener que preocuparse por la posibilidad de herir suceptibilidades con sus comentarios, ya que el juicio importante: el propio, ha sido ya pasado por los protagonistas del último proceso electoral. Para mi -sin embargo- la cosa no es tan color de rosa para algunos. Empecemos entonces por analizar los resultados, en función de las personas.

Los grandes triunfadores. Por supuesto que triunfadores fueron todos los candidatos que ganaron, pero debo seleccionar a algunos como los más sobresalientes:

Fernando Salas Feo. El Chamo del Año. Por haber sabido superar la ausencia de apoyo político de su partido natural, Copei. Por haber mostrado y presentado una imagen fresca e inteligente y por, a pesar de la ayuda innegable de su ilustre padre, el Gobernador saliente Henrique Salas Romer, haber demostrado personalidad propia sin buscar apoyo excesivo en la relación familiar. Siempre habrá algo de nepotismo en el acto sucesoral, pero es un nepotismo mucho más positivo que al que nos han acostumbrado otras familias «políticas».

Antonio Ledezma. En términos exclusivamente políticos fue el gran triunfador de este proceso. Que un candidato de A.D., gane las elecciones en el Municipio Libertador no es poca cosa. Que las gane Ledezma, quien no es precisamente el gran favorito

de las actuales autoridades adecas, es una hazaña merecedora de los mayores elogios. Hay además que admirar y respetar su valentía política al jugarse su futuro en una aventura, cuya decisión no estaba del todo clara ni era, para muchos (yo incluído), totalmente predecible. Ledezma sale muy fortalecido del proceso y una buena gestión suya como Alcalde, lo acercará más y más a la candidatura presidencial de A.D. Lo cual es -indudablemente- su meta.

William Dávila. Por haber ganado la Gobernación del Estado Mérida en competencia con la memoria del Gobernador saliente, Rondón Nucete, quien cumplió una excelente gestión administrativa y cultural, por lo cual puede salir con la frente en alto pese a la derrota de su apadrinado. Las causas de este fracaso habrá que buscarlas en circunstancias ajenas a cualquier evaluación negativa del período como Gobernador de Rondón Nucete.

Irene Sáez. Aunque su reelección se daba por descontada, el hecho de haber recibido más del 90% de los votos depositados en el Municipio Chacao, la convierten en la candidatura más exitosa, en cuanto a la magnitud de su victoria, en toda la historia de la democracia venezolana.

Los Grandes Derrotados. Aristóbulo Isturiz, por haber perdido unas cerradas elecciones, donde el favor popular no fue totalmente volcado en su candidatura. Por haber perdido para la Causa R., un reducto político importantísimo, y porque, de cualquier análisis imparcial que se haga de su gestión, habría que concluir que posiblemente se equivocó en la forma de presentar sus logros y hasta en la cronología de su aplicación. Pero el fondo de lo hecho por Aristóbulo en el Municipio Libertador será aprovechado por Ledezma para construir sobre eso, en beneficio de los habitantes de la zona. Por cierto que en la forma y en el fondo Aristóbulo fue caballero hasta el final, al reconocer a tiempo la victoria de Ledezma y no provocar -como pudo hacerlo- manifestaciones populares peligrosas en la ciudad

capital.

Virgilio Avila. Porque su prestigio dentro y fuera de A.D., sus actuaciones anteriores y su peso político nacional, amén de ser un reconocible hijo de Nueva Esparta, lo convertían en un candidato muy fuerte ante un Fucho Tovar -derrotado ya- en dos elecciones anteriores. Por cierto que Fucho es otro de los grandes triunfadores de estas elecciones.

Victor Moreno. De no haber sido porque su derrota es más atribuible a la testarudez de la Causa R., al seleccionarlo como candidato por encima de un triunfador nato como Clemente Scotto, Moreno hubiera sido el gran derrotado de estas elecciones. Pero -como ya hemos visto- existen circunstancias atenuantes en su derrota. Sin embargo, tendrá que cargar con el enorme peso negativo que significó haber perdido, para la Causa R., al Estado Bolívar, hasta ahora su buque insignia. Además, parafraseando a los sajones, haber perdido con A.D., es agregarle insulto a la injuria.

Los Partidos (Las Cuentas Verdaderas)

Los Triunfadores. A.D. Sería mezquino negarle a Acción Democrática el triunfo obtenido en estas elecciones. Con las sólas victorias de Caracas y el Estado Bolívar, sería suficiente para proclamar su triunfo en este proceso. Por supuesto que la victoria de uno es la debilidad de otro(s) pero -sin eufemismos- A.D. volvió a demostrar que sigue siendo el dueño de más del 30% (promedio) de los votos que se depositan en el país, en cualquier elección. Con ese caudal asegurado, A.D. nunca ha salido del todo mal en elección alguna. Ni siquiera en el último proceso nacional y en las penúltimas elecciones regionales, donde muchos se apresuraron a enterrar al partido del pueblo. A.D., vuelve a demostrar que su fuerte electoral es estar en la oposición, aunque se identifique con el Gobierno. Esa habilidad admirada por Petkoff, de presentar como posibilidades ciertas, aun las más pronosticadas derrotas y esa eficiencia en aceitar, sin clemencia

ni remordimiento a esa vigorosa maquinaria que configuran sus activistas, llevan a A.D. a no ser nunca totalmente derrotada. Ni aun cuando no sale tan bien del proceso. En este caso salió «muy bien», pero «muy bien» y pierden el tiempo quienes intenten racionalizar lo contrario.

El MAS, aunque desde luego lejos de A.D., en sus triunfos. El MAS sin embargo, puede vanagloriarse de haber mantenido en estas elecciones sus fuerzas regionales intactas (excepto en el Zulia) y hasta de haberles agregado una pequeña cuota adicional. Todo ello logrado en su desacostumbrada posición de partido aliado al Gobierno (llamarlo partido de Gobierno sería una mentira semántica) y a pesar de sus incómodas alianzas electorales con Convergencia y su lealtad pública hacía un Gobierno que lo ha hecho casi todo mal. Teodoro, no obstante, parece que va a empezar a «cobrar» sus apoyos (ver su artículo de fecha 08/12/95, en el Diario El Universal). El MAS -pues- tiene muchos méritos al haber aprendido a consolidar su prestigio sin estar en la oposición. Podríamos decir que ya es un partido «flexible». Solo el tiempo dirá si eso es bueno o malo.

Los derrotados.

Copei. El único partido que -hasta ahora- sabe dividirse y perder a sus mejores hombres, sin conocer la derrota es A.D. Aun la pérdida de las elecciones presidenciales por Gonzalo Barrios, ante Rafael Caldera, no puede tildarse de derrota. Por el contrario, le dió la oportunidad al partido de refortalecerse en la oposición bajo la inspiración, a control remoto, de Rómulo Betancourt, el mejor administrador de la derrota que ha conocido el país. En esta ocasión Copei no pudo superar el trauma de perder a Caldera, convertido ahora, en un triunfador presidencial. Además de la «transferencia» de algunos de sus hombres sobresalientes hacía Convergencia. Más aun, Copei sigue sin encontrar el rumbo. Sus líderes talentosos como pocos, en lo individual, no han encontrado la coherencia necesaria en sus esfuerzos colectivos para lograr recuperar las ya viejas glorias

del partido. En efecto, no hay partido político en Venezuela que tenga dentro de sus filas una vieja guardia, como la que constituyen Luis Herrera Campins y Pedro Pablo Aguilar, y una generación intermedia como la de Eduardo Fernández, Oswaldo Alvarez Paz y Humberto Calderón Berti. Hombre a hombre. Talento a talento, a esos cinco distinguidos políticos, viejos y menos viejos, no los «tocan» generacionalmente los miembros de ningún otro partido en Venezuela. Y sin embargo...

Copei pierde por varias razones. Porque no ha querido ser el partido de oposición nacional que ha debido ser, y le dejó ese rol a la Causa R., partido que es como la educación en Venezuela: Relativamente exitoso en lo cuantitativo pero bastante pobre en lo cualitativo. Copei escogió -por lo general- a candidatos endebles. Hizo alianzas desastrosas. Dejó escapar a buenos candidatos como Eduardo Lapi y Fernando Salas Feo, ambos triunfadores. Mostró indecisión en fijar posición ante los problemas del país. Eligió autoridades nacionales bastantes mediocres (excepción hecha de Luis Herrera Campins). No ha sabido aprovechar el talento y el trabajo de dos parlamentarios de postín como Gustavo Tarre Briceño y Ramón Guillermo Aveledo. La derrota injustificable de estas elecciones no debe ser disminuida con explicaciones caritativas. Por el contrario, Copei debe mirarle la cara a este fracaso de frente y en forma agresiva fijar su política interna y su posición ante el país. Sin eufemismos y sin consideraciones para nadie. Quien no aprende de la derrota, nunca sabrá administrar la victoria y sería muy triste que los excelentes hombres, todavía jóvenes de Copei, por falta de compromiso institucional vieran pasar, rumbo al cementerio, sus oportunidades de dirigir al país.

La Causa R. Derrotada en Guayana por A.D., lo cual constituye un verdadero desastre para ese partido. Perdida la Alcaldía de Caracas y con sólo un muy apretado triunfo en el Zulia, con un candidato que no se ve causaerrerista y con un pasado reciente de golpista que algunos no podemos olvidar

todavía, la Causa R., tiene ante sí dos caminos. Ambos claros. Uno, el de la vieja retórica revolucionaria y trasnochada de los años 60. La de los activistas «guapos», que exhiben revólveres, hablan a gritos y no entregan la Alcaldía del Municipio Libertador, si no le dan el triunfo en Bolívar, Zulia y Táchira. Pues bien, esos triunfos no se los puede dar sino la justicia formal o la repetición de las elecciones, si fuera el caso. Pero ese camino los llevaría -inevitablemente- a su desaparición institucional. Ese joven liderazgo con viejas ideas y viejo lenguaje, no tiene ya cabida en Venezuela. Es un anacronismo que sólo se reproduce en ese partido y en algunos rincones de la U.C.V. El otro camino es el que pudieran iluminar los gestos corteses y valientes de Aristóbulo Isturiz y Jorge Roig, al reconocer sus derrotas. El camino de la búsqueda de una organización política diferente, con dirigentes modernos. Que traten de llenar los espacios que le han dejado los otros partidos políticos: la clase media, los profesionales y la marginalidad. La periferia regional del centralismo «a juro». El lenguaje moderno. El reconocimiento de sus propios valores humanos. Sacrificar a Clemente Scotto, fue una necedad. Una torpeza política que pagará bien cara esa institución. La Causa R., tiene tres años para transitar el camino de su conveniencia o el de su fracaso definitivo. Si este resultado electoral no le ha tocado un fuerte campanazo de alarma, ni le ha prendido la luz roja del peligro inminente, entonces la Causa R., se irá por el viejo camino del fracaso, sin regreso posible.

Convergencia. No se puede hablar del fracaso de una organización hecha con los retazos de viejos fracasos políticos. Con una retórica mucha más antigua que la ya vieja de la Causa R. Con un liderazgo congelado en el tiempo y reverencias familiares, muy encomiables en sus virtudes morales, pero altamente ineficientes en el combate político. Convergencia es una ficción. No existe. Ni existió jamás. Acaso pudo haber sido lo que Teodoro sugirió que ha debido ser en su artículo ya citado: «En dos platos: Convergencia no cuajó como partido político.

Caldera cometió un error al intentar transformar en organización política permanente lo que nunca debió ser más que una agrupación electoral circunstancial, con un cometido obvio en 1993, pero insostenible más allá...» No me gusta re-inventar los epitafios que ya han sido escritos magistralmente.

Conclusiones

Un nuevo desastre en nuestro ya largo calvario de fracasos electorales. Un campanazo más para alertar al viejo y agotado sistema, sobre la conveniencia de la hora del retiro.

¿Oirán el campanazo los destinatarios del mensaje?.

Probablemente NO. Y eso, es la peligrosa lección de este proceso.

21 de diciembre 1995

LOS PREMIOS CRISIS 1995

«La prosperidad social significa: · Gente feliz, ciudadanos libres y una gran nación».

Victor Hugo

Estos premios fueron inventados por mí en el año 1991. En su momento establecí las bases que -hasta ahora- no requieren de modificaciones. Las bases y su racionalización fueron y son las siguientes: Los premios han sido creados con el exclusivo propósito de premiar a aquellas instituciones, sectores o personas de la vida nacional que, como el nombre del premio lo indica, están en crisis. Y esa crisis, de alguna manera, afecta el buen desempeño productivo del país.

En el caso de las instituciones muchas veces se premia su habilidad para mantener una crisis en su propio beneficio (El Gobierno Central). O de administrar dignamente, a pesar de la crisis (La Alcaldía de Chacao). Otras veces se premian situaciones circunstanciales que afectan el rendimiento de las partes. En el caso de las personas se premia su éxito para triunfar a pesar de la crisis y de darnos a todos luces de esperanza, dentro de lo oscuro de la crisis (Nuestros éxitos deportivos, Galarraga y Vizquel en beisbol). El premio no representa, ni aprobación ni improbación. Pretende ser objetivo y reconocer los éxitos y las motivaciones que -a veces- compensan por los presuntos fracasos. A veces -también- pretende distinguir entre el fracaso real y el inducido por estrategias que persiguen perpetuar alguna ineficiencia para beneficio personal e institucional.

La Galeria Vitalicia (El Inventario de la Vergüenza)

En 1993, creamos La Galeria vitalicia de los Premios Crisis, para que se exhiban aquellos problemas que no parecen tener

solución en el corto plazo. Más aun, aquellos que parecen tener lugar permanente asegurado en cualquier inventario de nuestra crisis.

Para abrir La Galeria le dimos entrada -en 1992- a la educación, la salud y la clase media. En 1993, ingresó a La Galería, la inseguridad personal. Este año incluiremos en La Galería a la institución política que parece no tener arreglo. La que, desde los ya lejanos años de López Contreras y Medina, parece no saber -o poder- ejercer sus obligaciones con un mínimo de eficiencia, un mínimo de tolerancia y un mínimo de respeto por lo que piensan, sufren y necesitan los ciudadanos. Ejemplo son: El Gobierno de Betancourt por haber iniciado un régimen de consensos políticos que, aunque no se repitió en la forma, de hecho creó en el fondo y -hasta ahora- una política de complicidades imperdonables, como un estilo de administrar las presuntas diferencias partidistas. El Gobierno de Leoni, por haber consolidado la política de las complicidades partidistas iniciada por Betancourt. Caldera (I), por no haber aprovechado a un país -ya de hecho, casi pacificado- para iniciar los procesos de cambios políticos que todos esperaban de su Gobierno. Por adaptarse y terminar de consolidar un sistema, donde el sector político partidista invadiría a todas las instituciones nacionales, sin las razones de emergencia invocadas por Betancourt y con una clara convicción del rol determinantemente influyente del Estado. Pérez (I), por haber desarrollado la noción del Petro-Estado y con los inmensos recursos del petróleo, crear una sociedad -ya de hecho- preparada a ser sumisa, totalmente dependiente del Gobierno y por haber establecido la práctica de arreglar los problemas a billetazos. Herrera Campins, por haber desaprovechado la mejor oportunidad de Venezuela para enderezar el ritmo de la locura desarrollista, iniciado por Pérez. Por haber endeudado criminalmente al país en época de abundancia, y no habernos enseñado -cuando todas las condiciones estaban dadas- que los países no se construyen con

dinero, sino con trabajo, educación y valores morales. Lusinchi, por haber iniciado un estilo de Gobierno, que en lo visible de algunas situaciones, constituía un desafío a la sociedad. Por haber creado a Recadi y permitir que, a través de su mala administración, se convirtiera en el símbolo más claro de la corrupción nacional. Por haber dejado al país en ruinas y por creer que al estirar la arruga de las no soluciones, podía mantener la popularidad, con la cual una sociedad ciega lo premió, hasta después de su salida del Gobierno. Pérez (II), porque a pesar de haber iniciado una reforma económica que -sin duda- apuntaba en la dirección correcta, se negó a buscarle piso político a sus esfuerzos y, por un exceso de confianza en sí mismo, abrió el camino para su enjuciamiento, con las negativas consecuencias que esa interrupción constitucional de su Gobierno le produjeron al país. Caldera (II), porque -sin necesidad- creó una crisis nacional que ya no es solamente económica, sino también política y social. Porque dejó de hacer lo podía haber hecho, utilizando la palanca de su popularidad y su merecida fama de hombre honrado. Porque se empeñó en administrar al país con los criterios de la década de los 60, totalmente descartados por todas las sociedades de hoy. Porque, con el país desmoronándose a su alrededor, sus equivocadas e inamovibles creencias, le impiden entender las realidades. Con razón Diego Bautista Urbaneja, dijo alguna vez que el Presidente Pérez no quería acordarse de su primer Gobierno y el Presidente Caldera no podía olvidarse de su primer Gobierno.

Por todas las razones anteriores y muchas más, en el año de 1995, ingresa al Salón Vitalicio de los Premios Crisis, los Gobiernos de la democracia venezolana (Desde 1959 a la fecha).

Primer Premio Crisis (1995)
El Gobierno Nacional (El Optimismo Irresponsable)

Teodoro Petkoff nos ha recordado en forma reiterada la naturaleza ciclíca que tiene el agotamiento de nuestros sistemas

políticos y la testarudez de las élites que ejercen el poder, en no reconocer el principio del fin. Algunas, ni siquiera perciben el fin del fin. Las coincidencias que, al intentar el cambio, en las manifestaciones de violencia han tenido nuestros procesos políticos. La emergencia de nuevos liderazgos que a veces barren por completo de la historia futura del país, a las personas y a las instituciones reconocidas -hasta entonces- como los prototipos del poder. El empeño de los modelos socio/políticos agotados en intentar defender su permanencia, llevando de nuevo al poder a sus líderes más conocidos y antiguos. Sucedió con el Partido Conservador y Páez. Con el Partido Liberal y Guzman Blanco. Con Gómez se rompe el molde al morirse éste en su cama, pero las fuerzas del cambio hacen explosión en 1945, y rompen la pretensión de continuidad de un modelo que quizás pudo, pero no quiso, renovarse a tiempo. Ahora, el sistema que inauguró A.D., y los militares jóvenes en 1945, ha envejecido también y para alargar su vida, echó mano al último patriarca que quedaba como símbolo de su filosofía. La gran pregunta es -entonces- si por una vez en nuestra historia el viejo liderazgo tendrá la capacidad de entender la obsolescencia que representa la continua vigencia de sus ideas en una sociedad diferente a la que lo apoyo en el pasado. Por lo visto hasta ahora, por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho y por su terquedad en mantenerse en el pasado (ni siquiera en un pasado reciente, sino en un pasado que ya hasta el mismo modelo había superado), este Gobierno no parece tener la menor posibilidad de presidir un proceso evolutivo, ni muchísimo menos, hacer un esfuerzo suficiente como para abrirle paso a una ruta hacía la modernidad. Nuestras expectativas más optimistas para el futuro se basan -exclusivamente- en la posibilidad de que se pueda diferir el cambio inevitable por tres años más, sin que las medidas equivocadas del Gobierno para administrar la crisis produzcan la violencia que acompañó al derrocamiento de los antiguos partidos Conservador y Liberal.

Por no saber leer las lecciones de la historia. Por empeñarse

en regresar la sociedad a cánones sociales, económicos y políticos ya superados. Por confundir respeto con popularidad y aprobación. Por imponer un estilo caudillista y resucitar un culto a la personalidad ya no tolerada por sociedad alguna. Por obligarnos a esperar unos años más por la modernización del país e imponernos -de paso- un alto costo individual e institucional para satisfacer al capricho. Por hacernos repetir en 1996, el duro costo de un ajuste económico que ya creíamos haber pagado definitivamente en 1989. Por conducirnos con promesas incumplibles por el camino de la frustración y tener que adaptarnos a un nuevo fracaso. Por obligarnos a revisar la imagen tan positiva que teníamos de nuestro actual Presidente. Por haber destruido la última ilusión que tenía el sistema. Por lo mucho que hemos perdido y por lo poco que nos queda, le concedemos al Gobierno Nacional el Primer Premio Crisis 1995.

Segundo Premio Crisis (1995)
Los Exitos Deportivos (El Esfuerzo sin Frustración)

Los concursos de belleza y las prácticas deportivas nos han deparado a los venezolanos muchas satisfacciones en el pasado. Este año fue particularmente rico en renovarnos el orgullo de ser venezolano y de haber podido leer en medios de comunicación extranjera, cosas muy positivas sobre -por lo menos- algunos de los nacidos en nuestro país. Para muchos, los éxitos de Andrés Galarraga y Omar Vizquel en el Beisbol, no tendrán el valor de un Premio Nobel en Literatura o alguna disciplina científica. Sin embargo, aun esta aseveración es debatible. Triunfamos en lo que mejor hacemos. Si eso es así, entonces no son de extrañar nuestros éxitos en la práctica del deporte, donde ilustres predecesores a los premiados de hoy, han paseado su condición de venezolanos por los mejores campos deportivos del mundo. Uno puede recordar con la elegencia de un lance de Vizquel, la difícil facilidad de los dos Aparicios, padre e hijo. Y Andrés Galarraga, a los ya mayores, seguramente les recordará los

batazos del «muchachote de Barlovento», Vidal López. Por primera vez, en esta temporada, el Gran Gato vió cumplido su deseo de empujar más de cien carreras en una temporada, mientras que Vizquel repetió su hazaña del año anterior y se alzó con el Guante de Oro, que se le otorga no a quien haya cometido menos errores, sino a quien lo haya hecho mejor. Que no es lo mismo. Muchos de nuestros hombres públicos que se pasan la vida sin tomar decisiones, por el temor a equivocarse, podrían aprender mucho de los procesos para medir la excelencia que establecen algunos deportes. Son variados, pero lo que nunca se premia es el no hacer nada. Pero no es solamente en el campo deportivo, donde se lucen nuestros premiados. Los he oído a ambos, cuando han sido entrevistados por la televisión de los Estados Unidos, responder en correcto inglés, con una coherencia expresiva, que bien quisieran tener mucho de nuestros supuestamente cultos ciudadanos.

Porque han tenido como meta la excelencia en la profesión que practican. Porque nos han dado razones para sentirnos orgullosos, en momentos cuando más falta nos hace. Porque nos han demostrado que son buenos ciudadanos. Porque son buen ejemplo, para la juventud y para muchos adultos que piensan que se puede ser exitoso sin esfuerzo. Porque ellos, Galarraga y Vizquel, nos han permitido la satisfacción de poder soñar despiertos con los éxitos que anhelamos para nuestros ciudadanos y porque nos permiten despertar del sueño y no sentirnos frustrados por la realidad. Por éso, y por mucho más, le otorgamos el Segundo Premio Crisis de 1995 a nuestros queridos deportistas, Andrés Galarraga y Omar Vizquel.

Tercer Premio Crisis (1995)
La Alcaldía de Chacao (La Solidez de la Constancia)

En la historia de los Premios Crisis nadie había repetido por dos años consecutivos. La razón es muy sencilla, se premia a una persona o a una institución, por las virtudes o defectos

demostrados durante un año. Premiado ésto, lo normal es que el próximo año se considere su actuación, como suficientemente premiada el año anterior. Y -después de todo- ¿de qué vale, en qué se destaca o qué importancia tiene seguir haciendo, bien o mal, lo mismo.? La Alcaldesa de Chacao nos ha demostrado que la constancia en hacer las cosas bien sí es importante. Sobre todo en un país, donde hacer las cosas a medias es, como la eyaculación precoz, un constante acto inconcluso. Pero aun los exitosos, por lo general en Venezuela, se cansan de hacer las cosas bien. Esto lo hemos podido constatar en forma casi rutinaria en los últimos años, al tener que condenar las actuaciones de mucha gente exitosa en el pasado. No es pues -solamente- tener talento lo que nos hace triunfar. Es querer y saberlo aplicar de manera contínua. Sin interrupciones. Sin cansancio.

Por haberse hecho merecedora a que se puedan repetir ahora (1995), las razones por las cuales se le concedió el Tercer Premio Crisis en 1994: «Por ser una de las pocas instituciones, donde se «ve» y se disfruta el dinero gastado. Por haber disminuido, sensiblemente, la corrupción oficial. Por ponerle cara amistosa al servidor público. Por cumplir, estrictamente, con sus deberes y obligaciones y haber entendido la misión y los objetivos de su institución (algo «raro» en nuestro país). Por haberle dado a los ciudadanos un atisbo de la Venezuela posible. Por saber sobrevivir, dentro de la crisis, por sus propios medios, con sus propios recursos, y por su propio talento colectivo». Y ahora, en 1995, le agregamos: Por haber consolidado su excelencia administrativa. Por no haber permitido que el ejercicio del poder la corrompiera, la desgastara o la hiciera menos dedicada a sus tareas. Por haberle enseñado a nuestras comunidades que «Si se puede» ser exitoso, aun rodeados por el caos y la indiferencia. Por demostrarle a los venezolanos que los esfuerzos honrados no se pierden y que un nuevo liderazgo está al alcance de nuestras manos... Hoy como ayer, con muchisimo orgullo se le concede a la Alcaldía de Chacao, en la persona de la alcaldesa, la honorable

Srta. Irene Sáez y sus colaboradores, el Tercer Premio Crisis 1995.

Cuarto Premio Crisis (1995)
El Ridículo del Año (El Juicio a la Apertura Petrolera de la U.C.V)

Todos los años amanezco el 1ero. de enero con la optimista convicción de que «ahora sí» se terminó para siempre ese lenguaje obsoleto y trasnochado de una vieja izquierda que utilizó a los «clichés», supuestamente ideológicos, para reemplazar la falta de talento y de cultura para afianzar argumentos con palabras que no eran sino la simple expresión de una pobreza idiomática abismal.

Tiempo hacía que no sufría una pena ajena tan profunda, como la que sentí al leer dos comunicados de algunos profesores de la Universidad Central de Venezuela, sobre la Apertura Petrolera. Pena y dolor, porque a diferencia de muchos, siempre he sentido un profundo respeto por la Universidad Central. Por el esfuerzo que algunos de sus profesores y dirigentes hacen, para no dejarse vencer por la mediocridad del entorno nacional. Porque - a veces- sin recursos y sin estímulos visibles, la U.C.V. ha hecho esfuerzos notables por ayudar a renovar la educación en nuestro país. Lamentablemente el documento que recoge algunas conclusiones sobre la Apertura Petrolera, no refleja, ni de lejos, esos esfuerzos de muchos ucevistas por mantenerse al día. Es más, el lenguaje empleado y los conceptos emitidos ya hubieran sido obsoletos en la decada de los 60. Esa hermosa época, donde a muchos se nos hizo difícil, separar lo emotivo de lo aparentemente lógico, y donde lo «cursi», muchas veces nutrió a lo revolucionario. Pero hasta la vieja poesía de la expresión estuvo ausente del remitido que me ocupa. Nada del fervor revolucionario que intentaba crear utopías para desarrollar a una sociedad más justa. Muchas de las palabras atractivas de antes,

hoy suenan estrepitosamente fuera de lugar. Pero, aun así, se puede tolerar de vez en cuando un recuerdo cariñosamente nostálgico de épocas recientes. Hasta un atrevimiento linguistico, fuera de lugar, pudiera celebrarse como un tributo a un pasado, donde todos nos creímos un poco los rescatadores de la virtud, aunque enterráramos, para siempre, en el proceso, unas cuantas buenas costumbres. Pero he aquí, que nuestra máxima casa de estudio, con superficialidad, con expresiones totalmente fuera de lugar en la academia, con seudo-conclusiones basadas en observaciones ligeras y datos falsos, con expresiones que estoy seguro no se repiten, ni en Vietnam del Norte ni en China (en Rusia, por supuesto que no), con errores conceptuales sobre lo que es nacionalización y des-nacionalización. Con un criterio selectivo sobre las bondades del Estado, a quien se le atribuye la condición de ser el único propietario de lo nacional. (No se considera nacional, sino lo que pertenece al Estado...etc). La pobreza expresiva y argumental del documento de los profesores universitarios no se presta a un debate serio sobre su contenido. Mucho menos a que se dignifique con el calificativo de universitario. Estoy seguro que hay que tener mucho cuidado con las descalificaciones. Pero, instituciones de la importancia de la Universidad Central de Venezuela, tienen que tener también, muchísimo cuidado en diferenciar lo que son las posiciones de algunos profesores e invitados a un foro, y lo que es una posición institucional de la Universidad. Ese pobrísimo documento no puede pretender representar al pensamiento institucional universitario y las autoridades de la U.C.V. no han debido atreverse a presumir que su contenido representaba un juicio «oficial» de esa institución.

Por cuanto el documento «Juicio a la Apertura Petrolera», no responde a la profundidad de un pensamiento universitario. Porque sus consideraciones y conclusiones mueven a risa amarga, en perfecta sintonía con la definición que del adjetivo «ridículo» hace el diccionario de la Real Academia Española: «Lo que por

su rareza o extravangancia, mueve o puede mover a risa». Por todo lo anterior, y por las expresiones de su contenido, con cuyas citas no quiero retrotraer a los lectores a posiciones ideológicas ya superadas y que nunca fueron tan mal defendidas. Por eso, y por lo risible de su tesis, se le concede el premio El Ridículo del Año, Cuarto Premio Crisis 1995, al Documento que recoge las conclusiones del «Juicio a la Apertura Petrolera», celebrado en la U.C.V.

Menciones Honoríficas 1995
Teodoro Petkoff (El «Boy Scoutt» del año)

Por su lealtad al Presidente Caldera. Por su inmodificable optimismo en pensar que el sistema puede ser salvado por este Gobierno. Por poner en serio peligro a la percepción que sobre esa capacidad de análisis tienen muchos, y correr este peligro convencido como está de que no se le han agotado al Gobierno las oportunidades de hacer las cosas bien. Por estar «siempre listo», para compartir responsabilidades por lo que ha sucedido en este país, hasta ahora... Aunque los verdaderos responsables no lo hayan consultado siempre.

Los Programas Económicos del Gobierno (La Ficción del Año)

Por ofrecer lo incumplible. Por mal definir lo posible. Por pretender convocar a los ausentes. Por determinista. Por simular lo inexistente. Por confundir lo abstracto con lo concreto. Por manipular al tiempo. Por aplicarle a la ciencia económica «El Realismo Mágico» de la literatura. Porque una recopilación de los Programas no podría jamás calificarse como una expresión seria de un Gobierno de «Verdad».

Conclusiones.

Este año, como en 1993, el Premio final y global, se le concede a todos aquellos que no supieron cargar con su parte alícuota de la crisis y que todavía esperan que «otros» y las circunstancias providenciales, se la resuelvan.

07 de diciembre 1995

1996: LA BOLA DE CRISTAL

En el año 1995, el Gobierno siguió caminando la trocha construida a fuerza de caprichos y errores desde 1994. Como sabe todo buen "baqueano" de tanto andar, las trochas se convierten en caminos para tránsito de multitudes, simplemente porque "están allí". Los caminos que asi construye la improvisación pueden -a veces- exhibirse como verdaderas y eficientes vialidades ante los que transitan, sin preguntarse si no habrá la posiblidad de construir vías más cortas y mejor diseñadas. Lo cual de por sí ya es muy criticable. Pero cuando los autores materiales del espejismo se convencen ellos mismos, de las bondades de su propio engaño -entonces- lo meramente criticable se vuelve totalmente inaceptable y los usuarios tienen que rebelarse ante lo que construyó la ineficiencia .

En el año de 1995 los venezolanos fuimos víctimas del proceso anterior y -por lo tanto- en los albores de 1996 hay que mirar hacia atrás, con pena propia y ajena, y calificar al año que se muere como el de "El Autoengaño".

No fuimos engañados por otros. Nos dejamos encandilar por el brillo de una esperanza que no debería haber durado lo que duró. A sabiendas de que las cosas iban mal, nos empeñamos en buscarle explicaciones variadas (sencillas y complejas), a lo que era claramente ineficaz. Ineficacia apuntalada por el capricho del Gobierno de "saberse" el dueño de la verdad y pretender ser el legítimo protector de unos pobres que cada día fueron más (los nuevos pobres en lo cuantitativo y los que ya lo eran en lo cualitativo). Aún con las duras realidades del fracaso mirándole la cara, el Gobierno pretendió continuar haciendo lo imposible: Prolongar el autoengaño hasta después del 3 de diciembre de 1995, a fin de hacer un buen papel en las elecciones regionales y poder exhibir ese triunfo potencial como una prueba de ser el depositario del favor popular. Pero el autoengaño ciudadano se

terminó antes de que se agotara el autoengaño oficial y este desfase produjo los resultados electorales ya conocidos por todos. Aun así, cierto entorno presidencial ha buscado la manera de adaptar los negativos resultados comiciales a una teoría triunfalista. Para ello, lo único que se requiere es interpretar el innegable triunfo de A.D., como un triunfo del Gobierno, ya que el partido del pueblo no le hizo oposición frontal al régimen y -por el contrario- le dió apoyo durante el año 1995. En cambio Copei y la Causa R., opositores más o menos visibles del Gobierno, salieron mal esta vez. Hay -por supuesto- respuestas a esa interesada tesis, pero lo importante es saber que el Gobierno que gobierna(¿?) tiene que haber recibido el mensaje de rechazo popular a su ineficiencia y se apresta ahora a hacer las cosas de diferente manera. Sobre esta admitida frágil premisa descansan nuestras predicciones para el año 1996.

Los Problemas de Largo Plazo (Siguen, siguen, siguen...)

No es por llover sobre mojado, pero la educación, la salud y la inseguridad personal, no solamente no han hecho progresos visibles, sino que han empeorado dentro de lo que ya era una situación dramática. Hay -sin embargo- algunos rayitos de luz que nos pueden dar alguna esperanza para que el año 1996, marque el principio de la recuperación de estos problemas que -sabido es- no son solucionables a corto plazo. En materia de educación, si el ministro Cárdenas logra superar -aunque sea en parte- los parámetros de ineficiencia irresponsable que le imponen los gremios magisteriales, podría desarrollar algunos programas modernizantes de la educación básica, como complemento a los ya iniciados en Estados como Mérida, Falcón, Bolívar y Apure/ Nueva Esparta. No todos van por el mismo camino, pero todos apuntan a la misma dirección de excelencia. El ministro Cárdenas tiene tres años para poner en marcha una fuerte e indetenible reforma educativa, a nivel de la instrucción básica y pre-escolar. Sus esfuerzos, acompañados por los de los nuevos gobernadores,

alcaldes y grupos privados, si se lograran cohesionar, pudieran resultar, para Venezuela, en la explosión educativa más importante de la segunda mitad de este siglo. Para ello, el ministro debe demostrar, además de sus reconocidas virtudes como educador, un poco de tolerancia y una disposición a apoyar a otras iniciativas que, sin ayuda oficial, intentan colaborar con el esfuerzo de modernizar el sistema educativo nacional. La presencia de nuevos alcaldes y gobernadores, que han entendido el problema educativo y las ventajas que cierta descentralización del esfuerzo pudieran producir, nos hacen ser optimistas al respecto. Como optimistas somos, en que -por lo menos- en algunas regiones del país las autoridades regionales harán un esfuerzo especial por combatir la inseguridad personal, creando cuerpos policiales regionales confiables y atacando, con programas de educación y capacitación para el trabajo, a la raíz del problema: Hambre. Miseria. Infancia abandonada. Ausencia de Capacitación laboral y Pérdida de valores cívicos e individuales, como lo son el respeto al derecho y la propiedad ajena. El respeto a las Leyes. El reconocimiento de los valores del trabajo y el ahorro, y la importancia de una verdadera integración del grupo familiar. Donde no abrigo muchas esperanzas es en el mejoramiento del sector salud. Los esfuerzos del ministro Walter, muchos de ellos en la dirección correcta, se vieron interrumpidos por su destitución por el Congreso Nacional, por razones más políticas que profesionales. Sin embargo, fue una decisión constitucional y como tal ha debido ser acatada, sin buscarle a Walter un nuevo regreso al Gabinete, mediante una acción presidencial, que en cualquier país donde se respeten las atribuciones de los poderes públicos, hubiera producido una crisis política severa. Pero el sector anda en la búsqueda de un líder capaz de aunar esfuerzos nacionales, regionales e individuales para romper con ese círculo de ineficiencia y corrupción, donde están encerradas nuestras instituciones públicas de salud.

Otro sector abandonado en Venezuela es el de la clase media. Las medidas por venir, por lo menos en el año 1996, la golpearán con gran fuerza y producirán, en la composición social de Venezuela, graves desequilibrios, tanto en la riqueza/pobreza relativa de los diferentes estratos, así como también en el número de personas que ingresarán a las clases más empobrecidas del país. El problema de la marginalidad es gravísimo en Venezuela, pero ya ha estado con nosotros por muchos años y dentro de su muy depauperada situación actual las nuevas medidas económicas si vienen acompañadas de efectivas medidas sociales, que puedan mitigar en forma inmediata su situación actual, pudieran evitar explosiones sociales anárquicas. La clase media es diferente. Más culta. Acostumbrada por muchos años a niveles de vida excelente. Ha ido empobreciéndose paulatinamente durante los últimos años. **Esa** clase, profesional, técnica y preparada para el trabajo, que se abstuvo de votar en el proceso electoral recien concluído, es la que es capaz de generar grandes protestas y grandes convulsiones sociales, con o sin un liderazgo reconocido. Si **esa** clase toma la calle, en Venezuela puede suceder cualquier cosa. Desde una muy cruenta guerra civil hasta un golpe militar pasivo o sangriento. No hay límites para las explosiones que una clase media desbordada puede producir en un país como el nuestro, sin liderazgo institucional que pueda llamar a la cordura y sin liderazgo político que pueda imponer el orden. El año 1996 será crítico para la democracia en Venezuela y la clase media tendrá un papel protagónico en cualquiera de los escenarios político/sociales previsibles... y en los imprevisibles también... y **eso** es lo que asusta.

Los Problemas de Corto Plazo (Ya no hay arruga)

Durante 1995, el Congreso Nacional continuó su política de 1994 de serle "útil" al Poder Ejecutivo. No con tanta subordinación como en 1994, pero sin haber convertido en un obstáculo para la marcha del Gobierno. Casi me atrevo a decir

que el Gobierno no "marchó" a pesar de la buena disposición del Congreso Nacional. Esta situación puede cambiar en 1996 por varias razones fundamentales:

1) Porque año que pase es año que nos acerca más a las elecciones presidenciales (1998), y los "partidos pacientes", como A.D., van a querer diferenciarse más y más de un Gobierno que, ahora que empieza a hacer las cosas que tiene que hacer y que debería haber hecho desde su inauguración, es cuando rápidamente va a saber lo que es perder apoyo popular.

2) Porque el resultado electoral para Convergencia ha sido leído por todos los partidos políticos incluyendo al MAS, su aliado en casi todos los estados, como una demostración de que los electores no están de acuerdo con las políticas oficiales en lo general y con la gestión presidencial en lo particular.

3) Que Copei, pese a que continúa siendo, en número de votos obtenidos, el segundo partido político del país, no podrá disfrazar ni esconder el hecho cierto de esta debacle electoral. Tendrá que endurecer sus actividades de oposición y diferenciarse más y más de Convergencia, de Caldera y de la gestión del Gobierno, corriendo el riesgo que su fuerte oposición venga -precisamente- en el momento cuando el Gobierno empieza a tomar algunas de la medidas que tiene que tomar pero que, por impopulares muchas de ellas, se prestan a que puedan ser combatidas, tanto en la forma como en el fondo.

4) Porque el MAS, ya no estará dispuesto a seguir siendo el aliado pasivo del Gobierno. El que comparte responsabilidades por los fracasos, pero no se le da la oportunidad de participar en la toma de las decisiones trascendentes. El **costo** de mantener al MAS como partido que apoya formalmente al Gobierno ha subido mucho a raíz de los resultados electorales. También ha subido, en forma geométrica, el costo de mantener a A.D. en una oposición "comprensiva y tolerante".

Uno de los aspectos que este Gobierno tendrá que modificar si quiere contar con algún piso político para el cambio, es esa inclinación a actuar sólo, confiando exclusivamente en el criterio y la intuición presidencial. Abrir el juego, será lo más difícil para Caldera... pero lo hará. El MAS, será ahora mucho más consultado que antes y esto pudiera convertirse para el partido naranja en un arma de doble filo. Ahora sí será visto como partido de Gobierno.

A.D., no tiene problemas de ese tipo. Ya Alfaro se adelantó a decir que jamás será cogobierno. Pero todos sabemos que éllos si serán consultados aunque seguirán gozando de una imagen de "oposición responsable". Lo que solo comprobará la vieja conseja de que "Como A.D. no hay" ...siempre que esté en la oposición.

Todo lo anterior, combinado con una Causa R. todavía confusa por sus resultados electorales, sobre todo en el Estado Bolívar, tenderá a complicar un poco las relaciones del Congreso con el Gobierno.

Será -pues- un año muy difícil para el Gobierno este año de 1996. Tendrá que capitular en mucho de los aspectos que sustentaban su discurso político. Por mucho que lo disimule perderá bastante "cara" en el esfuerzo y -además- tendrá que administrar una de esas paradojas políticas que confunden a algunos intelectuales que piensan que el mundo se mueve por la lógica que establece que ciertas causas producen ciertos efectos.

Caldera ha recibido no pocas críticas de los partidos políticos representados en el Congreso, incluyendo a su aliado el MAS, por no hacer muchas de las cosas que dejó de hacer y no tomar a tiempo las decisiones que debería haber tomado. Ahora, el Gobierno, hará muchas de esas cosas, pero en el camino encontrará en el Congreso una oposición mucho más fuerte que cuando no hizo lo que le pidieron que hiciera, los que hoy se le van a oponer, precisamente, por **eso**. Solo que ahora, como ya hemos visto, no será por **eso.**

Las Medidas a Tomar (El brebaje amargo de la equivocación)

Ya no hay tiempo para mirar atrás, ni buscar solaz en lo que pudo ser. Tampoco es tiempo de sacar las cuentas para cobrar los errores. Si el Gobierno está dispuesto a tomar ahora muchas de las medidas económicas y sociales necesarias y lo sabe hacer, no como el que se toma un purgante, sino como el que convierte la crisis en una nueva oportunidad, entonces el país sabrá responder y apurar el trago amargo de un segundo ajuste para corregir la crisis (el primero fue en 1989). Lo importante será el acuerdo con el F.M.I. Tal como se ven las cosas hoy, se podría firmar una Carta de Intención durante el primer semestre de 1996. Si los negociadores venezolanos apuran el paso y sacan de la discusión ciertas ambiciones obstaculizadoras, el acuerdo se firmará en el primer trimestre. Los obstáculos serán basicamente dos: 1) El aumento del precio de la gasolina. El F.M.I. podría hasta hacer una concesión en este rubro, sujeto siempre a una promesa que a más tardar en julio de 1996, se produciría dicho aumento. Pero eso solamente sería posible -sin costo para el país- si éste fuese el único obstáculo en el camino y **todo lo demás** estuviera acordado con el F.M.I. No es ese el caso y Venezuela corre el riesgo de que, por insistir en el capricho, se tenga que sacrificar algo de lo trascendente. 2) Lo trascendente, sacrificable y además difícil de "cuadrar" serán los montos que se destinarán a aliviar los problemas sociales existentes y los que se agravarán por las medidas económicas a tomar.

No hay duda que hay que mitigar el sacrificio de los más pobres. Pero para lograr eso hay que fortalecer todo nuestro sistema de seguridad social, atacando de frente a instituciones como el Seguro Social Obligatorio. Los sistemas de pensiones. El régimen de prestaciones sociales y la compensación por desempleo. Nada de lo anterior se improvisa, pero el Gobierno tendrá que entrar en compromisos irrevocables con el F.M.I. y

con el país, si pretende ayudar de verdad a los sectores más empobrecidos. Tiene que entender -también- que las necesidades básicas de los ciudadanos no se satisfacen con retórica hueca, teorías fracasadas y promesas incumplibles.

Basado en lo endeble de todo lo anterior, mis pronósticos para 1996, son los siguientes:

- El Gobierno firmará con el Fondo Monetario Internacional una Carta de Intención antes de julio de 1996.

- No se aumentará el precio de la gasolina durante el primer trimestre de 1996. Se esperará a que estén instalados surtidores de gas para ofrecer alternativas más baratas a los usuarios. Esto es encomiable pero, no es ni de lejos, la primera prioridad a la cual se le deberían dirigir los mayores esfuerzos oficiales.

- Los programas sociales, como resultado de la demora en las negociaciones, por insistir en no subir el precio de la gasolina, se atrasarán en su implantación. En todo caso, no habrá recursos suficientes para que sean realmente efectivos, ni sistemas de distribución que superen abiertamente a los ya existentes y que sabemos son ineficientes. Se elevará, mientras tanto, el salario mínimo y el Gobierno tendrá que resistir presiones del sector sindical y de algún sector político que le exigirán decretar aumentos de sueldo a los empleados públicos y privados. Al final no habrá decreto. Sin embargo, se aumentarán los ya considerables bonos que reciben los trabajadores (complementario, alimentación, transporte) ante la protesta del sector empresarial.

- No se solucionará, ni de lejos, el problema del Seguro Social Obligatorio. Los jubilados seguirán teniendo dificultades para cobrar sus pensiones y los desempleados tardarán mucho en recibir el pago Compensatorio.

- Se discutirá mucho sobre las prestaciones sociales y los cambios necesarios en el sistema para evitar el efecto retroactivo de los aumentos salariales. Algo se avanzará pero, sería casi un milagro si se lograra implantar durante 1996, un sistema alterno.

Las significativas modificaciones legales necesarias para cambiar el sistema actual requerirán de un entendimiento político entre los partidos, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y entre el sector empresarial y el sector sindical. Eso no se producirá, en la profundidad necesaria, durante el año 1996.

- El Gobierno hará un esfuerzo por revisar el Presupuesto Nacional. Disminuirá en algo el gasto público. Reestructurará y reducirá los ministerios y eliminará muchos de los aportes presupuestarios a fundaciones y organizaciones regionales.

- La inflación continuará siendo un problema durante el año 1996, pero en noviembre se empezará a notar una clara tendencia a su reducción.

- Las privatizaciones continuarán en forma lenta y finalizará el año 1996, sin que se hayan privatizado ni Planta Centro ni las empresas de Guayana. Algo se adelantará, pero las complejidades de ambos procesos y una actitud nacional que no favorece la aceleración de estas decisiones, impedirán el éxito del esfuerzo. No obstante, se venderá la participación del Estado en la C.A.N.T.V. y Viasa, y se privatizarán algunas empresas menores del Estado (Hoteles, etc).

- La Apertura Petrolera seguirá su cause normal. Habrá suficientes ofertas de parte de las empresas multinacionales. El Capital Nacional seguirá ausente del proceso en forma importante. La petroquímica, a través de Pequiven y el Ministerio de Energía y Minas, presentará un programa ambicioso de apertura a la inversión privada que será bien recibido, tanto por el mundo político como por el sector empresarial.

- Los servicios públicos prestados por el Estado se acercarán más y más a su colapso total por falta de recursos financieros. El caso del suministro de agua, en la región capital, pudiera entrar en crisis y los alcaldes metropolitanos tendrán que intentar, rápidamente, buscarle opciones de propiedad y de operación a los sistemas de producción y distribución del agua que puedan reemplazar, con mayor eficiencia, a los mecanismos

estatales actuales que ya no resisten un año más.

- El Gobierno continuará debatiéndose entre su inclinación natural de mantener los controles de precios y de cambio y la necesidad de una liberación y apertura real de la economía. Pero eso, durará poco. Ya para el segundo semestre de 1996, las maquinaciones para simular liberación, manteniendo controles, habrán agotado su fervor populista y sus presuntas ventajas políticas. El discurso oficial y los hechos coincidirán por primera vez, y el Gobierno contará -entonces- con el apoyo de sectores del país que verán en el efecto demostración, un mensaje creíble. Estos apoyos le servirán al Gobierno para neutralizar la oposición política frontal de los partidos Copei y Causa R. y la más suave -aunque no menos peligrosa- de A.D. El MAS continuará apoyando al Gobierno.

- El Seniat seguirá su ruta exitosa en la búsqueda de reducir la evasión fiscal.

- El Impuesto al Débito Bancario será implantado de nuevo y continuará probablemente hasta fines de 1997. La Ley del Impuesto a las Ventas, se modificará para modernizar al sistema actual y llevar hasta el consumidor final el pago de este impuesto. Las Leyes tributarias y de carácter social que se requieren para darle marco legal al programa de ajustes de la economía, deberán ser aprobadas en el primer trimestre de 1996. En las transacciones políticas que se requerirán, para lograr estas aprobaciones en el Congreso Nacional, se verán -por primera vez- las nuevas posiciones ante el Gobierno que tomarán -a futuro- los partidos políticos representados en el Parlamento.

- El Presidente, antes de firmar la Carta con el F.M.I., anunciará un cambio de Gabinete. Probablemente, como ya se ha dicho, con una reducción en el número de ministerios. No obstante, en esta vuelta no se verán tampoco muchas caras nuevas. La verdadera re-estructuración del Gobierno, se hará en el segundo semestre de 1996. Algunos destacados profesionales, aceptarán -entonces- participar en el Gobierno.

Conclusiones (La historia se repite. Una vez más)

Al igual que el año pasado, no me queda sino repetir las conclusiones incluídas en mi artículo del 29/12/93 (La Bola de Cristal) cuando antes de la toma de posesión de Caldera dije: (Entre comillas el texto original 1993 y entre parentesis los comentarios de hoy).

"El año 1994 (1995 después y 1996 ahora), será dificil para todos los sectores del país. Solamente un liderazgo fuerte y justo podrá capear el temporal en forma permanente".

- "El nuevo liderazgo tiene que sobreponerse a su imagen de pasividez tediosa, y transformarse en un liderazgo dinámico, agresivo y sorpresivo, tanto en su voluntad de acción, asi como en la forma de esbozar y resolver los problemas" (Menos caprichoso y menos temeroso de abandonar posiciones históricas).

- "La política comunicacional, la coherencia en la acción y la imagen presidencial, creada por su disposición al cambio inmediato, podrían ser los factores del éxito" (Estos requisitos no se han dado aun. Pero hay tiempo todavía).

- "La tendencia al excesivo análisis, las contradicciones entre las posiciones de los ministros y cierto dogmatismo que atentará contra lo que debe ser un Estado moderno, podrían ser los factores negativos para el éxito" (¡Así fue!. Por dos años. En 1996, deberá ser distinto).

- "En todo caso, el país se debate entre un despertar de la ciudadanía que lleva a reclamar un buen Gobierno y a ser impaciente con cualquier retardo en el comienzo de la solución de sus problemas, y el temor de ejercer demasiada presión sobre el Gobierno, lo cual podría conducir a una explosición social y hasta a una interrupción del sistema democrático" (El temor a ejercer "demasiada presión sobre el Gobierno" se desvanece poco a poco. El Presidente deberá entender **eso** y actuar con la premura

del caso).

- "Si el Gobierno de Caldera tiene disposición para la acción inmediata y no le teme a ciertos enfrentamientos institucionales, tendrá éxito en su gestión. Pero si piensa, que esta crisis se puede solucionar bajo una visión de "Más de lo mismo", mediante la busqueda del consenso institucional, el tiempo lo arrollará y los problemas y las soluciones se le escaparán de las manos" (Las lecciones de estos dos años deberían ser suficientes, como para que el Presidente intente otras estrategias).

- "El Presidente Caldera deberá pasar de haber sido el pacificador, en su primer Gobierno, a un buen administrador del conflicto en ésta, su segunda oportunidad. Pero, para eso, deberá entender que ya no es, ni le conviene ser, el Caldera de los años 60. Aceptar eso -sería ya- un importante primer paso... ¡Que no admite demora!".

¡Amén!. No tengo nada más que agregarle a lo dicho en el año 1993, excepto que:

Ojalá que, en el año 1996, el Gobierno aprenda de sus errores y con una nueva política nos depare a todos un... FELIZ AÑO.

28 de diciembre 1995

INSTITUCIONES

LA NACIONALIZACION DE LA EDUCACION

LA NACIONALIZACION DE LA EDUCACION

Las recientes declaraciones del ministro de Educación, Prof. Antonio Luis Cárdenas, han tenido receptividad variada, casi siempre positiva, sobre todo de aquellos que se tomaron la molestia de leer tanto el Capitulo V del IX Plan de la Nación: «**Transformación de la Educación y el Conocimiento**», así como una versión original del Ministerio de Educación, que debe haber servido de base para la elaboración del Capitulo V del IX Plan de la Nación -ya mencionado- y que, a su vez, se titula «**Plan de Acción, que el Ministerio de Educación presenta al país para superar, con el aporte de todos, nuestra gravísima crisis educativa**». Quienes no se han leído este documento, que sospecho son los más del grupo de críticos espontáneos, han concentrado sus comentarios, en los titulares de los medios de comunicación que recogieron una frase del ministro , que aparece en el Capitulo II del Plan de Acción y que lee textualmente: «La educación venezolana ha devenido en un gigantesco fraude...» y con esa *cultura de crucigrama* que practican muchos seudo-intelectuales, la frase del ministro se convirtió en el centro de todos los comentarios, sin que lo sustantivo de su proposición tuviera mucha difusión en nuestros medios, salvo, el seguimiento que le hizo Marcel Granier, en su programa Primer Plano, al entrevistar al propio ministro y al Rector de la Universidad Católica, el Padre Luis Ugalde. Otros articulistas, como Ramón Piñango y Trino Márquez han tratado el tema con seriedad. Hay además, un delicioso articulo de José Ignacio Cabrujas, donde con su gracia característica propone que se cierre al Ministerio de Educación y se le entregue a Fe y Alegría la responsabilidad educativa del país, desde el Pre-Escolar hasta la Educación Media, amén de mostrar su preocupación porque se inscriban escolares en nuestro sistema de educación, ya que se corre el real peligro de que se gradúen de bachilleres.

Y **eso**, dada la pobreza de nuestra educación, es altamente peligroso. Leonardo Carvajal, que no parece entender de humor cuando de educación se trata, *redimensionó* la proposición Cabrujas, en lo relacionado con Fe y Alegría y sugirió que no buscáramos «fórmulas mágicas» para salvar a la educación, ya que se requerirá, entre otras cosas, un apoyo coordenado de muchos sectores para rehabilitar nuestra educación. ¡Amén!. Carvajal, además, se alarma bastante ante la posibilidad de que cierta ideología intente sacar al Estado, no sólo de la economía sino también de la educación y alega que la tesis del ministro Cárdenas busca «la recuperación de la educación oficial». No creo que **esa** sea la tesis del ministro Cárdenas aunque, por supuesto, no deje de añorar los tiempos cuando la educación oficial estaba a la vanguardia de la educación nacional. Pero, para que no sea sólo la opinión de Cárdenas la que comentaremos, queremos también referirnos a un excelente trabajo sobre educación, «**Dinámicas de Transformación en la Educación Venezolana**» que consta de dos partes, la primera de ellas, a la cual nos referiremos en detalle más adelante, está relacionada con la educación Pre-escolar, Básica, fue escrita por Gabriela Bronfenmajer, Ramón Casanova y Rita Pucci, investigadores del Cendes/UCV. En la sección 5 de su trabajo, al evaluar los diferentes proyectos de reforma educativa, dicen lo siguiente:

> «El examen de los proyectos de reforma alimentados por los distintos grupos de opinión, sectores y gremios, indica que, más que consenso lo que se viene dando son estrategias competitivas que pugnan alrededor del control de decisiones de política educativa, en un contexto de debilidad del papel político del Estado, con roles planificadores limitados en su legitimidad y fuertemente penetrados por grupos de opinión que traslucen realmente el estado del debate entre sectores técnicos, gremiales y burocráticos, afiliados a tradiciones e ideologías educativas diferentes. Unos, postulando la responsabilidad del Estado en provisión de servicios, asumiendo que el problema es de recursos para alcanzar metas

de crecimiento. Otros, considerando agotado el estilo educativo y alentando un nuevo modelo, basado en la descentralización. En estos dos marcos de enfoque generales, se encuadran más o menos el resto, tanto los que postulan la economía de mercado con el énfasis en el retraimiento del Estado y en la privatización y, los otros con proyectos de una educación popular con fuertes componentes movilizadores y comunitarios».

Quizás yo lea más de lo que los autores quisieron sugerir en la parte final de la cita, donde se contrastan dos «marcos de enfoque generales», pero pareciera que el «retraimiento del Estado» y la «privatización» fuesen estrategias que atentarían contra proyectos de «una educación popular con fuertes componentes movilizadores y comunitarios». Si mi percepción es la correcta, la historia reciente de nuestra educación no parece sustentar ese criterio. Por una parte, la educación estatificada - con un gigantesco Ministerio centralizador- ha descuidado, precisamente a la educación popular, y son los sectores agrarios y más pobres de nuestra sociedad los más abandonados del sistema. Más aun, una organización privada como Fe y Alegría, aunque subsidiada por el Estado, ha logrado penetrar con sus escuelas a barrios y sectores poblacionales, donde ni siquiera los agentes del orden público pueden llegar. De manera que mi primer comentario, tanto sobre lo dicho por Carvajal, en cuanto a la «recuperación de la educación oficial», como a lo sugerido en el trabajo, ya comentado de la Prof. Bronfenmajer, se relaciona con una discusión sobre el concepto de lo que es **nacional/ público** y lo que es del Estado. Adam Smith, sugirió alguna vez que el verdadero problema no estaba en establecer diferencia entre lo **público** y lo **privado**. Lo importante a establecer era la diferencia entre lo público y lo que es del Estado. Lo **público** es lo que es de todos y, por lo tanto, no debe ser propiedad del Estado. Así, por ejemplo, los yacimientos petroleros son un bien público, y el Estado debe normar su explotación. Pero lo que no debe es considerarlo como de **su** propiedad, porque eso le permite

tomar decisiones sobre su utilización sin que los venezolanos se sientan de verdad propietarios del recurso. Con algo de licencia poética, podríamos decir que la educación es también un problema propiedad de todos los venezolanos. En otras palabras, es un problema **nacional**. Al ser un problema nacional, que es como creo yo, que lo vislumbra tanto el Prof. Cárdenas como el Padre Ugalde, no se puede -entonces- reducir a un problema de la exclusiva competencia del Estado, porque eso sería caer en la trampa conceptual petrolera, donde se ha establecido que para que un recurso sea **nacional** tiene que ser de la propiedad del Estado. No debería ser así, ni en el petróleo, ni mucho menos en la educación. Para mi todas las escuelas que están en Venezuela y que imparten educación, son **nacionales**, así pertenezcan unas al Estado y otras al sector privado. Por lo tanto, lo que hay que rescatar no es la educación oficial, como sugiere Carvajal. Lo que hay que rescatar es el acto educativo **nacional**, ya que éste en su globalidad es el que está en crisis, independientemente de cual sector construya los locales escolares y pague los salarios de los maestros. Visto así, el problema educativo no es cuestión del retraimiento del Estado, ni de privatización, ni de educación popular, como un acto exclusivo del Estado. Es como ya se ha dicho, un problema nacional y lo nacional, repito, no es solamente lo que es propiedad o potestativo del Estado.

Lo Cualitativo en la Educación (Se hace más de lo que se cree)

A continuación veremos, en forma muy resumida la dimensión estadística del problema educativo, los diferentes esfuerzos que múltiples sectores están realizando en el país y la importancia que tiene la búsqueda de una solución entre esos muchos actores para lograr el deseado cambio educativo. Para ello revisaremos la importante información, contenida en el magnifico trabajo de la Prof. Bronfenmajer (1993).

Algunos datos estadísticos:

La Educación Pre-Escolar.

- En diez (10) años (1982-1992), su matrícula ha aumentado sólo en 30% (de 499 mil a 674 mil niños).
- El 84% de las matrículas las cubre el sector oficial.
- Sólo el 52% de los niños de 5 años de edad y sólo un 40% de los niños de 4 años de edad acuden al Pre-Escolar.
- Las 3/4 partes de los niños entre 3 y 6 años que asisten al Pre-Escolar están concentrados en las áreas urbanas y en sectores de ingresos medios y altos.
- 60% de los niños de familias rurales no ingresan al Pre-Escolar.
- 50% de las familias urbanas pobres no ingresan al Pre-Escolar (Todo lo cual desvirtúa la especie de que el Estado se ocupa de proveerle educación a los sectores más pobres del país).

La Educación Básica.

- Para 1992 habían 4 millones de alumnos en la Educación Básica (Probablemente el sector más «poblado» del país).
- Cerca del 95% de los niños en edad escolar ingresan a la Educación Básica.
- Existe un alto nivel de deserción antes de completar los 9 años de la Educación Básica y aproximadamente un 50% no llega al 6to. año (Grado).
- El 50% de nuestros jóvenes y adultos han cursado menos de 6 años de Educación Básica y en la población rural esta cifra llega a un 78%.

Educación Media Diversificada y Profesional.

- En los últimos 10 años la matrícula global ha aumentado en solo 60 mil alumnos (El sector privado ha absorbido prácticamente la mitad).
- Sólo 35% de los candidatos potenciales ingresan a este nivel educativo. Las causas probables son: alta deserción en el ciclo de Educación Básica. Poca oferta educativa media en los sectores rurales. Incorporación temprana de los jóvenes al mercado de trabajo. En lo cualitativo hace falta una mejor

definición de los objetivos de este ciclo educativo, que parece no encontrar su propósito entre ser: 1) Un complemento de la Educación Básica. 2) Un curso preparatorio para ingresar a la universidad. 3) Una educación para el trabajo. Para muchos los cursos actuales no llenan ninguno de los propósitos mencionados.

Los que se van.

- Repitientes. En promedio 12% de los alumnos repiten algún año del ciclo básico. Esto representó en 1991, 469.650 alumnos. El índice de repitencia para el 1er. y 7mo. año es alarmante: 18% y 16% respectivamente.

- Deserción. A partir del 6to. grado los índices de deserción tienden a subir del 21% promedio al 24% en el 7mo. grado y de 15% al 16% en el 9no. grado (1981-1991).

El Patrón del Gasto.

- Hay una tendencia a la reducción de la inversión en educación. El gasto público en educación en 1990, representó las 2/3 partes de lo que se le asignó en 1980. La mayor proporción del gasto anual es dedicado al pago del personal (99% en la Educación Básica). Esto puede deberse a una insuficiencia presupuestaria que no alcanza sino para cubrir los gastos de personal, o a una excesiva burocratización de los cuadros magisteriales.

Innovaciones Efectuadas.

Contrario a la percepción popular de que no se ha hecho nada en educación, si se han efectuado reformas y esfuerzos importantes. Entre ellos:

- Reforma al curriculum educativo.
- Modificaciones a la enseñanza profesional.
- Capacitación docente.
- Educación popular.
- Mejoramiento en la enseñanza de la ciencia.
- Mejor planificación de las políticas educativas.
- Introducción de nuevas tecnologías instruccionales.
- Cierta regionalización administrativa.

Sin embargo, dentro de todas estas experiencias lo que se ha descubierto es una falta grave de apoyo institucional, sobre todo, en lo que supone pasar del diseño de las experiencias (el qué) a su puesta en practica y extensión en una escala significativa (el cómo).

Se han hecho algunas innovaciones de tipo social, a fin de lograr un aumento en la cobertura del Pre-Escolar. Otros programas han estado orientados para aumentar la eficacia de la reforma de la Educación Básica y los problemas de calidad educativa. Estos proyectos están orientados en la dirección correcta, aun cuando no han logrado resultados enteramente positivos, ya que de acuerdo con una opinión, bastante generalizada dentro del sector educativo, existen graves problemas de implantación. No obstante, establecen un sentido de dirección que está en sintonía con algunas de las proposiciones del ministro Cárdenas, en especial, con aquellas relacionadas con el logro de una mayor participación comunitaria que preste en su conjunto una atención principal al papel del maestro.

Por otra parte, se han hecho investigaciones con relación a una propuesta para mejorar las escuelas venezolanas. Las experiencias probadas y evaluadas de la red escolar Fe y Alegría. Innovaciones en tecnologías de gestión, entre ellas, el Proyecto Modelo de Gestión (Geseduca-Oreace/Unesco). Proyecto de un sistema de medición de la calidad. Se han desarrollado algunas estrategias para la descentralización de la administración de la educación como: el Proyecto de Desarrollo de la Capacidades Gerenciales del Estado (Copre/PNUD). Un Proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación. Otras iniciativas importantes extra-escolares se han realizado en apoyo al aprendizaje, tales como el Plan de Participación Sociocultural (Ministerio de la Familia). Programa del Club de Estudiantes Tutores y Centros Comunitarios de Aprendizaje. En cuanto a Educación para el Trabajo, existen Proyectos de Capacitación y Empleo Juvenil (Ministerio de la Familia e INCE). Sin embargo,

pese a todos los esfuerzos aquí esquematizados, una de las conclusiones de las autoras, del trabajo aquí comentado, apunta a lo siguiente:

> «Ahora bien, como conclusión más general, debemos insistir en que, desde la perspectiva de su impacto, lo que resalta del comportamiento en las innovaciones es que no logran sobrepasar la fase de implantación, tal vez por falta de capacidad de los promotores en la gestión y negociación de proyectos, manteniendo un impacto limitado, mayoritariamente en la fase del Proyecto Piloto. Por otra parte, tratándose de programas costosos no se preveen fuentes financieras alternas para su masificación y, son por ello mismo, muy vulnerables a la reducción del presupuesto público».

Es contra este telón de fondo que el ministro Cárdenas esboza su Plan y su llamado a la colaboración general. Punto éste especialmente álgido dado que, de acuerdo a casi todos los estudios realizados, el problema mayor es la falta de poder consolidar los esfuerzos que se inician y lograr que se traduzcan en resultados concretos.

El Plan Cárdenas.

El Plan de Acción presentado por el ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, aporta una serie de propuestas que apuntan a una seria y profunda evaluación de lo que representa la educación en Venezuela. Entre ellas:

- **El Fin de la Educación**. Tradicionalmente la escolarización se ha visto como una vía de ascenso social, en la cual se «prepara para la vida», se «prepara para el trabajo». Postergando al educando en sus potencialidades de realización durante un largo período de años. Esta larga infancia presupone que no se es apto para la vida en tanto no se obtenga una certificación para ello (diploma, título, etc).

En el Plan del Ministerio de Educación se enuncia que «la educación es una experiencia de vida y es también el primer

trabajo que deben desarrollar las nuevas generaciones, el trabajo del propio cultivo, de la propia capacitación realizada en un ambiente social. Concebida así, la educación es una tarea permanente a lo largo de la vida de las personas».

El costo, tanto social como económico que representa la educación para la nación venezolana, por ser la institución que posee más ciudadanos que cualquier otra, no puede seguir sustentando la producción de individuos postergados, tanto social como éticamente. En la medida que la escuela se convierte en un eje de referencia, en el cual se aprendan cosas importantes y significativas para el alumno, en esa medida se generarán cambios en el perfil del educando.

- Flexibilización y Actualización de los Curriculas.

Esto con el fin de «garantizar la pertinencia educativa con las demandas que se le hacen a la educación; a una mayor apertura y articulación de la educación con otra fuente de generación y transmisión de conocimientos». «No se tratará en lo sucesivo de adaptar la vida escolar a los programas sino de adaptar los programas a la realidad de cada escuela».

La educación es un proceso continuo para enseñar a pensar y a tener curiosidad para aprender las nuevas verdades. Por lo tanto, la flexibilización curricular permitirá que maestros y alumnos aprendan en el aula las innovaciones y cambios antes de que la novedad se formalice en un programa educativo. Algo así, como la dinámica de las palabras que tienen vigencia y son aceptadas por su uso antes de que la Real Academia de la Lengua las sancione formalmente.

- Diversificación de las Fuentes de Conocimiento.

Los textos escolares no deben ser el único referente de conocimiento, estos «deben ser entendidos no como una camisa de fuerza sino como una guía para la actuación del docente». Buscar estimular diversas «agencias de producción de conocimiento»: «Los centros promotores de innovación, las empresas y los usuarios, los circuitos de divulgación de

información, los medios culturales y comunicacionales, la comunidad y la familia». Es más, quien se haya tomado la molestia de revisar los textos escolares «aprobados» por el Ministerio de Educación, podrán darse cuenta, sin mucho trabajo, de la pobreza intelectual y de la falta de método que la mayoría de ellos reflejan en sus páginas. Por lo tanto, si dada la dinámica del cambio que caracteriza a nuestra sociedad moderna, es muy difícil que un buen texto se mantenga actualizado por mucho tiempo, no es difícil suponer el daño que le hacen a las generaciones estudiosas los malos textos que hoy parecen ser la norma de nuestra enseñanza formal. Además, la enseñanza que se apoya exclusivamente en los textos no pasa de ser un esfuerzo acartonado y cómodo para evitar una abierta discusión sobre temas controversiales en el aula.

- Calidad educativa y transformación de las prácticas pedagógicas.

Entre muchas, vale la pena señalar las siguientes:

- Modificación de la rutina escolar, en el sentido de estimular a aprender y aprender en forma autónoma (Curiosidad de investigación).

- Enseñar a pensar y a decidir éticamente. En este sentido, promover una nueva cultura que valorice lo nacional, defienda la conservación del ambiente, eduque para la salud, eleve la autoimagen, forme consumidores inteligentes y desarrolle actitudes de convivencia, colaboración, participación y respeto mútuo. En pocas palabras que enseñe a ser un buen ciudadano.

- Dignificación de la función docente.

Formación permanente para el docente para mantenerse al día con los cambios, no solamente en el contenido de la ciencia y de la tecnología, entre otras, sino para mantenerse al día sobre los cambios evolutivos de nuestra sociedad.

- Creación de Centros Regionales de Apoyo al Maestro.

Aun cuando no estamos muy seguros como se implementarán estos centros de información, estamos

convencidos de que la ausencia de estos centros y la falta de actualización de los docentes es una de las grandes fallas para una eficiente implementación de la Educación Básica. En el pasado la Educación Básica supuso cambios educativos sin establecer como se iban a educar a los maestros para el cambio. Se dictaminó el cambio de arriba hacia abajo. Los maestros se sintieron como unos convidados de piedra dentro del proceso de cambio. Esto no puede seguir así, y siendo la educación parte del proceso evolutivo de la sociedad, debe integrarse a la filosofía que mantiene que los grandes cambios sociales y políticos se hacen de abajo hacia arriba. De los pequeños grupos y de las pequeñas comunidades hacia los grandes centros del poder.

- **Remuneración**: Mejoras salariales, estímulos salariales que guarden proporción con la calidad de su desempeño profesional. Privilegiando, por supuesto, la actividad del aula. Esto es sumamente importante entenderlo. La evaluación del acto educativo para el docente no puede tener los mismos parámetros que tiene el trabajo de un obrero, medido y cuantificado en un tabulador de sueldos. La homologación de la remuneración del docente es una de las perversiones más negativas que existen en el mundo intelectual. El pretender medir la capacidad, la inteligencia, la habilidad pedagógica, el contenido del mensaje, por una tabla rasa igualitaria en su nivelación por lo bajo, es parte de la causa que estemos produciendo una generación desactualizada en sus conocimientos. En este sentido, creemos que deben desarrollarse instrumentos que le permitan a los maestros evaluar su propio desempeño en el aula en actividades tales como: Tiempo que le dedican a cumplir el ritualismo escolar: disciplina, llamado de atención, pasar la lista de asistencia, revisión de tareas, dictados, etc. Tiempo que le dedican a la investigación escolar, a la promoción del trabajo en grupo. Análisis de los materiales de apoyo que utiliza. Fuente de indagación de información. Tiempo que habla el maestro en el aula y tiempo que se le dedica a la participación de los alumnos.

Esto último es sumamente importante, por cuanto una medición de esta naturaleza le dirá al propio maestro cuanto de autocrático tiene su labor pedagógica y cuanto de estímulo participativo tiene su presencia y su actitud. La subordinación. La falta de interés en participar en las grandes decisiones nacionales. La ausencia de una capacidad de reclamar los derechos, tienen -hasta cierto punto- su origen en la situación de subordinación total, a la cual se someten la mayoría de nuestros alumnos en sus horas de clases con un maestro que solamente viene a transmitir su verdad y a no oír las reacciones que ante esa verdad tienen sus alumnos. Quien no estimula en el aula el derecho a la réplica, está construyendo, a lo mejor sin saberlo, un país de eunucos y de subordinados, incapaces de cuestionar a la autoridad formal.

- Promoción de los Proyectos Pedagógicos del Plan.

Se busca autonomía para adaptar el cambio educativo al entorno y la circunstancia de cada escuela y la incorporación de la comunidad al cambio educativo.

- Cubrir las necesidades regionales.

Rehabilitar la infraestructura de los planteles y dotarlos con los recursos adicionales adecuados. Se debe buscar la mayor independencia de estos planteles y del rol del director, convirtiéndolo en un coordinador de la gestión pedagógica y en un buen administrador de los recursos materiales, para que pueda, entre otras cosas, seleccionar a su personal docente y adquirir los materiales escolares al mejor precio posible y de la mejor calidad, de acuerdo a su buen criterio.

Conclusiones (Un Mapa de retazos)

El programa educativo del Prof. Cárdenas, tiene suficientes antecedentes positivos y formales en forma de estudios, de análisis y de innovaciones propuestas, y algunas de ellas ya puestas en marcha, como para poder nutrirse de mucho de lo que ya se ha hecho, para consolidar su Plan. Sin embargo, le queda por delante lo más difícil. Lo que el análisis de la Prof. Bronfenmajer señalaba.

La aparente incapacidad que tienen nuestras instituciones para poder rematar las buenas ideas y convertirlas en acciones positivas y concretas que de verdad solucionen nuestros problemas. Los educativos y muchos otros, añadiría yo. Si sobre algo en Venezuela se requiere una discusión nacional, es en el enfoque educativo. Nótese que digo discusión y no consenso. Si se logra un consenso mejor. Pero de no lograrse, no se le debe temer al conflicto, con quien haya que tenerlo, si esa fuera la única forma de lograr el establecimiento del sistema educativo que necesitamos. Por ello, me parece inútil, ocioso y poco productivo el establecer una discusión entre educación estatal y educación privada. Diferencia que como señalé al principio de este trabajo, no debe existir. Todos los esfuerzos que se hagan, por todas las instituciones del país, para mejorar la educación, serán esfuerzos **nacionales**. Y, repito, se debe entender que lo nacional, no es patrimonio exclusivo de un esfuerzo del Estado. Para poder convocar a un esfuerzo nacional lo primero que hay que eliminar son las parcelas mentales que dividen artificialmente al país entre los buenos y los malos. Los productivos y los improductivos. Los marginales y los ricos. Lo del Estado y lo privado. En materia educativa, esas divisiones no pueden subsistir y el Estado no tiene porque luchar por mantener su presunta hegemonía sobre el acto de educar. Lo que tiene es que luchar por aumentar la participación de todos en mejorar la educación. Bien está que si el Estado, además de ser el coordinador y rector del sector, quisiera mantenerse operativo en el acto educativo, en el sentido de administrar directamente sus propios centros docentes, busque que ellos sean centros de excelencia. Como lo fueron en el pasado muchos de sus liceos y escuelas. Ello no quiere decir, como han dicho algunos, que se intente regresar a lo que se era antes. No creo que el ministro Cárdenas quiera reproducir, exactamente, al Liceo Andrés Bello o al Liceo Luis Razetti del pasado. Lo que si quiere es rescatar el prestigio y la excelencia que esos liceos tuvieron en su época.

En el fondo, la proposición Cárdenas lo que busca es, precisamente, reclutar en el esfuerzo educativo a toda la nación. En eso no podemos ser mezquinos con él. Debemos prestarle total apoyo y darle una respuesta positiva a esa llamada. Si nos limitamos a comentar el Programa Cárdenas por algunas frases felices o menos felices, por algunas ausencias o por algunos excesos, estaremos solamente buscando la excusa para no participar.

Celebro el coraje y la dedicación del ministro Cárdenas y, espero que el gesto educador que contiene su proposición no sea «canibalizado» por los practicantes del oscurantismo, antes de que sus ideas se pongan en marcha.

Para que eso no suceda, el Prof. Cárdenas necesita ayuda. De ahora en adelante, la verdadera habilidad de Cárdenas, estará en saber donde buscar esa ayuda.

No será muy difícil. Es cuestión de tocar muchas puertas y no dejarse amilanar porque alguna de ellas se cierre peligrosamente cerca de sus narices. Esos indiferentes no son los peligrosos. Los peligrosos son los que ya están dentro del sistema... desayudándolo.

¡A buen entendedor...!

09 de marzo de 1995

EL «PRESS CLUB» EN COLOMBIA.
UNA NOCHE EN CARTAGENA

La Salida (La Vía Difícil).

Nelson Bocaranda que tenía todos los pasajes del grupo que iba a Cartagena, llegó tarde al aeropuerto. Felizmente el gerente de Avianca estaba presente y había hecho los arreglos preliminares del pre-chequeo. ¡Gracias!. De todas manera, con Nelson -que al fin apareció con los pasajes- y doce miembros más del «Press Club» (Club de la Prensa) de Venezuela, salimos raudos a las 8:00 a.m. a Cartagena por la vía larga de Bogotá. Que es algo así como ir de Caracas a Maracaibo, vía San Cristóbal. Luego de una larga espera en Bogotá, por el avión que nos llevaría a nuestro «destino final» y, una escala en Medellín, llegamos a Cartagena a las 4:00 p.m. (las 5:00 p.m. hora Caracas), donde nos esperaba Gabriel García Márquez, un grupo de periodistas colombianos y una mesa puesta, la cual solidariamente mantuvo sus copas y manteles desde la 1:00 p.m., hora en la cual se esperaba nuestro arribo. Dado que en cada trecho del vuelo - y fueron tres- por corto que fuera, nos dieron de comer, no era precisamente nuestra primera prioridad la bien servida mesa.

Después de abrazos y explicaciones, llegamos a la conclusión de que era preferible convertir el almuerzo en cena, y pasar directamente a la discusión del tema que nos llevó a Cartagena.

La Reunión con los Periodistas (De Colega a Colega)

En una reunión del «Press Club», celebrada el 09 de marzo en Caracas -con almuerzo- en la cual se esperaba recibir al nuevo, para entonces, ministro de Hacienda, este se excusó y el Club sesionó en familia. De los temas allí conversados uno fue, el

tratamiento noticioso que habían recibido los recientes lamentables y dolorosos acontecimientos en la frontera colombo-venezolana y, muy específicamente, en territorio nacional (Cararabo). Surgió entonces, la idea sobre la conveniencia de que una delegación del «Press Club» visitara a la hermana República de Colombia, a fin de reunirse con un grupo de periodistas de allá, para establecer vínculos personales que permitieran y facilitaran la comprensión de los puntos de vista de cada quien. Para ello se estableció, como objetivo, lo que podría describirse así: «Recalcar nuestros deseos mútuos de evitar cualquier posibilidad de un conflicto grave entre nuestros países». Para ello deberíamos: «Utilizar de manera óptima los instrumentos comunicacionales de ambos países para que, por negligencia, inocencia o apatía, estos no sean utilizados por los enemigos de la paz para lograr sus propósitos belicistas».

Armados de esas buenas intenciones y comunicadas éstas a los periodistas colombianos, gracias a las gestiones de Nelson Bocaranda y Soledad Mendoza, se pudo contactar a Gabriel García Márquez, quien dirige un Taller de Periodismo en el Centro Cultural Español de Cartagena y quien se comprometió a coordinar el evento y hacerlo posible. No creo que existan muchas dudas sobre la amistad que le profesa García Márquez a nuestro país, y su activa participación en este reciente diálogo, no es, sino un ejemplo más de esa amistad.

Comenzó la reunión -como ya hemos dicho- después de las 4:00 de la tarde, y el «proceso» pasó por las cuatro etapas características de toda reunión entre casi desconocidos que pretenden discutir temas delicados para ambas partes. Las etapas son y fueron:

1) **El «Efecto Houdini», es decir, el escapismo**. Discutir temas que pueden ser interesantes pero que realmente evaden la discusión del tema central. En este caso, la conversación giró alrededor del «Press Club de Caracas». ¿Cómo está conformado?. ¿Cuáles son sus propósitos?. ¿Tiene o no estatutos?. ¿Cuáles

son sus mecanismos de selección de la membrecía?. Etc. Como tácitamente todos nos sentimos cómodos con el «desvío» , la discusión sirvió para romper el hielo.

2) **Entrarle al «tema», con cuidado de no herir posibles susceptibilidades de la otra parte**. En nuestro caso, esta etapa fue relativamente breve. Se habló de la amistad entre nuestros países. «No existe animosidad en Venezuela en contra de los colombianos, ni tampoco, animosidad en Colombia en contra de los venezolanos». «Tenemos muchos intereses comunes». «No hay que confundir reacciones derivadas de acciones específicas con el sentimiento de amistad, arraigado en ambas naciones». Etc.

3) **El análisis serio y el desahogo**. Esta, por supuesto, fue la etapa más importante, donde se pusieron de manifiesto las diferentes percepciones que pudieran existir entre ambos países sobre el mismo problema y hasta sobre los mismos hechos. No hubo recriminaciones, pero si, un esfuerzo por explicar por qué pueden existir diferentes intensidades para calificar la gravedad de ciertos hechos específicos por parte de dos sociedades que tienen distintos entornos y por ende, diferentes términos de referencia para medir la relativa importancia de ciertos hechos. Algunos de estos temas los trataremos en las conclusiones, pero hay dos que merecen un comentario de inmediato. Uno tiene que ver con la visión con la cual ambos países analizan sus problemas fronterizos. El otro se relaciona con la coherencia con la cual los medios de información colombianos tratan los problemas internacionales de su país. Sobre la frontera no hay la menor duda que para Venezuela la zona es de alto interés, tanto por las inversiones del sector privado que existen allí, así como por la importancia militar que le da nuestro Gobierno. Por su parte, militarizar la frontera para el Gobierno Colombiano significa un cambio de política y gastos importantes para atender una zona que, desde hace tiempo, es «tierra de nadie» y que, a no ser por las relaciones con Venezuela, tiene poco interés

productivo para Colombia (Salvo, por supuesto, algunos puestos claves fronterizos, como Cúcuta). Ahora que, de hecho, le estamos exigiendo a Colombia que ponga orden en su frontera y que resuelva **su** problema, no nos olvidemos que complacernos, significa -ni más ni menos- movilizar importantes recursos bélicos hacia nuestra frontera. **Eso** puede poner algo nerviosos a nuestros sectores políticos y militares. De manera que, a pesar de que «oí» alguna satisfacción en ciertos círculos colombianos, ante el hecho de que **ahora** podían intentar solucionar **militarmente** su problema con la guerrilla, en la frontera con Venezuela, y enviar soldados y equipos a esa zona sin que Venezuela interpretara el acto como una estrategia para una futura agresión, yo no estaría muy seguro de eso. Pienso que hay una paradoja en todo esto: Queremos que Colombia ataque a las guerrillas colombianas que molestan a los habitantes del lado venezolano, pero no nos sentimos muy cómodos con un despliegue de tropas y armamento colombiano en nuestra frontera común.

En lo relacionado con la política de los medios de comunicación en Colombia, varias cosas quedaron claras: a) Hay una mayor identificación de los periodistas con los medios de comunicación en los cuales trabajan, posiblemente debido a una mayor participación de los dueños en el acto periodístico (La familia Santos, por ejemplo.) y a una visión más institucional de los medios. b) Existe un enfoque comunicacional que, por lo general, coincide con la política oficial en materia de Relaciones Exteriores, que puede deberse a: I) Una convicción general de que en disputas internacionales hay que apoyar la posición formal del país. II) Confianza en la capacidad profesional y sentimientos nacionalistas, bien administrados, de la Cancillería. III) La existencia de sistemas semiformales de comunicación entre el Gobierno y los medios que además funcionan -en gran parte- debido a la buena relación que existe entre los dueños de los medios y los periodistas. (Ver punto «a»). Por contraste, en Venezuela, casi podríamos decir, que la situación de los medios

de comunicación, es casi el retrato en negativo de lo que sucede en Colombia. Por lo tanto, es mucho más difícil tener coherencia comunicacional en materia alguna, así sea de naturaleza delicada, como lo es -sin duda- el problema fronterizo con Colombia. Además, en Venezuela no existen verdaderos interlocutores que puedan tomar decisiones firmes y definitivas sobre política informativa. Ni los dueños de los medios. Ni los periodistas. Hay mucha dispersión entre los actores y pocos deseos de ser vistos como los «controladores de la información» (Los dueños) o como los «subordinados del hecho informativo» (Los periodistas). En todo caso, no pretendo un análisis exhaustivo sobre la materia, aunque sí, arrojar alguna pequeña luz sobre el acto informativo en ambos países.

4) ¡**Y ahora qué**!. Esta es la parte de la reunión que se dedica a hacer recomendaciones, habiendo finalizado la etapa de análisis y desahogo. Que en nuestro caso, dada las limitaciones del tiempo, creo que no cubrió todos los aspectos que ha debido cubrir. Aunque, como verán en las conclusiones, algo se adelantó para ser esta una primera reunión que, además, no pretendía agotar el problema, ni mucho menos solucionarlo. Lo que se buscaba, y creo que se logró, era establecer un puente entre los profesionales de la comunicación de ambos países para que se entendieran mejor las posiciones y percepciones, algunas veces diferentes de ambas partes.

La Reunión con el Presidente (¡Gato Negro!. ¡Gato Negro!).

En el «Press Club» se acostumbra al recibir al invitado externo, en nuestros almuerzos mensuales, alertarlo sobre el derecho que tiene de decir cosas que después no serán citadas por los periodistas presentes. La regla consiste en que el invitado califique sus declaraciones «no aptas para el consumo masivo» como de «Gato Negro». Nelson Bocaranda le entregó al Presidente de la República de Colombia, al ministro de la Defensa, al Canciller y al asesor comunicacional del Presidente un tazón

de porcelana con el dibujo de un «Gato Negro» para que, como diría una amigo mío, «se fuera enterando».

Eso fue al día siguiente de la reunión con los periodistas, a las 9:00 a.m., durante un desayuno que el Presidente y su comitiva tuvo a bien ofrecernos.

Como introducción se me pidió que hiciera un resumen de la reunión del día anterior con los periodistas colombianos, el cual con alguna ayuda de Nelson Bocaranda, hice más o menos en los siguientes términos:

1) **Ha habido cambios en los factores de equilibrio que caracterizaban las relaciones Colombo-Venezolanas**. En efecto, la crisis económica de Venezuela ha causado ciertos desequilibrios, tanto en las relaciones económicas como en las relaciones políticas entre los dos países. La perdida del valor adquisitivo del bolívar ha revertido un tanto la dirección de los bienes transables en nuestra frontera y en el comercio más regular. Más aun, ha cambiado la dirección de los flujos financieros. De ser dueños de bancos en Colombia, hemos pasado a tener bancos colombianos dueños de importantes bancos en Venezuela. La percepción que de nosotros se tenía en Colombia ha cambiado. Ya no somos el país más rico de Sur América. Ni siquiera del Caribe. El cambio de percepción produce también cambios de actitud. Un abogado muy distinguido me decía hace tres días, al comentarle mi viaje a Cartagena, que él no pudo evitar sentir una pequeña «molestia», quizás irracional, al enterarse de que el Banco Ganadero de Colombia compraría la mayoría accionaria del Banco Unión. No fue así que se percibió por años nuestra relación con Colombia. Quienes compraban éramos nosotros. Y todo eso, a pesar de que se nutra de algunas abstracciones, no hay duda de que influye un poco, sobre nuestra actitud hacia los colombianos y, por lo tanto, tiene por fuerza que influir también en nuestras relaciones formales con ese país. Aunque aquí es justo decir que, hasta ahora, los Gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia han tomado posiciones públicas que tienden

a evitar una «masificación» del conflicto.

2) **El tiempo ha fortalecido a la guerrilla colombiana en esa «tierra de nadie», que son sus fronteras con Venezuela**. Ahora, no conforme con «controlar» su cuota parte de territorio colombiano, pretenden aterrorizar aún más al lado venezolano yendo más allá de lo que habían ido en el pasado, cuando se limitaban a secuestrar ganaderos y a otros desmanes. Lo que hace al hecho de Cararabo sumamente preocupante, es que si bien la horrible matanza puede no haber obedecido a un deseo consciente de enturbiar las relaciones entre Colombia y Venezuela, el hecho cierto es que **ahora** las guerrillas ya se han dado cuenta que tienen un instrumento sumamente efectivo y peligroso para provocar conflictos serios entre ambos países. Eso les da un poder colosal de chantaje.

3) **El Narcotráfico**. Sin duda que, como en el caso de las guerrillas, la droga ha aumentado su capacidad de penetración en Venezuela y elevado la importancia de nuestro país como centro de distribución. Peor aun, ha encontrado cómplices importantes para sus actividades, no sólo en lo individual, sino también en lo institucional y, una de sus consecuencias, como es el lavado de dinero, ha distorsionado, en más de una ocasión, a nuestro mercado inmobiliario y hasta industrial. Eso tampoco ayuda.

4) **La Integración Económica**. Esto debe verse como un factor positivo que puede establecer vinculaciones importantes entre los dos pueblos. Más aun, la gran integración se está haciendo entre los sectores privados de ambos países, es decir, en forma supragobierno, lo cual ayuda -sin duda- a neutralizar los problemas que se pudieran presentar a nivel oficial. Sin embargo, de acuerdo a algunos observadores, la integración sirve también para que se filtren, a través de las fronteras, problemas de uno y otro país, que en ausencia de esta integración, no se conocerían sino en el país de origen.

5) **Otros**. Se menciona también como aspecto importante

para Venezuela el robo de vehículos y su transferencia a Colombia, donde parece que, en algunos casos, existe cierta complacencia oficial para con las organizaciones irregulares que se dedican a este «negocio».Respuesta: El Gobierno Colombiano ha tomado algunas medidas efectivas, pero no hay que olvidarse que para que los autos salgan de Venezuela, tienen que ser robados allá primero, y después pasar la frontera, presumiblemente, ante la vista gorda de las autoridades fronterizas de Venezuela.

Después en la reunión se habló de Larry Tovar (Ya lo reportó la prensa local). De reforzar la frontera. De las deportaciones de colombianos por parte de Venezuela. De las comunicaciones directas y frecuentes entre el Presidente Caldera y el Presidente Samper. De los «enemigos» comunes. De Chávez. Del mal ejemplo y del anacronismo de la guerra entre Ecuador y Perú. Del peligro de que en nuestros países algunos entes se dejen llevar por la tentación de buscar «espacios» diferentes a los problemas del día (Por ejemplo, un conflicto Colombia-Venezuela), para oxigenar sus propias causas políticas. Se concluyó en que hay que hacer un esfuerzo serio para administrar las raíces del problema y no sólo sus aspectos visibles, a fin de evitar que se «mantengan los puentes y se erosionen sus bases».

Para finalizar esta crónica de las dos reuniones, antes de entrar en las conclusiones, dejo como «chismes» inocentes (quizás no tanto) estos comentarios que se escucharon:

- Caracas es la capital del Caribe.
- Hay más anticolombianismo en Venezuela que antivenezolanismo en Colombia.
- Los medios de comunicación colombianos son más importantes que el Gobierno para establecer política exterior.
- Venezuela le exige visa a los colombianos porque el Gobierno de Colombia se lo ha solicitado así a nuestro Gobierno, a fin de controlar y conocer sobre la salida de colombianos de su país.

- La corrupción generalizada en Venezuela, ha sido el cómplice mayor, no sólo en los robos de vehículos, sino también en el contrabando de extracción, el narcotráfico y, en algunos casos, hasta en actos de complicidad con las guerrillas (secuestros).

- El Gobierno de Colombia no tiene mucho interés en emplear recursos humanos y financieros en la frontera con Venezuela y si envía tropas y equipos militares a la zona, será con el fin de que sea la misma opinión pública y oficial de nuestro país, la que le reclame su presencia armada en nuestra frontera. (Luego retirará sus tropas y despues «más de lo mismo»).

- No habrá guerra entre nuestros países. Colombia ya perdio la guerrra con Venezuela en el incidente de la Fragata Caldas.

Conclusiones y Recomendaciones (Lo Positivo de la Comprensión)

Sin mayores comentarios, sigue una lista de lo que aprendimos y de lo que recomendamos como resultado de nuestra visita a Cartagena. (Ademas de lo que ya se nos filtró en la crónica de nuestras reuniones).

- La violencia en su manifestacion trágica de Cararabo, tiene mucho menos impacto emocional en la opinión pública de Colombia que en la de Venezuela. Y esto no es consecuencia exclusiva de que los muertos sean venezolanos. Para el ciudadano colombiano 7 muertos en Venezuela, por sus guerrillas, no tienen la dimensión trágica que tienen 20 o 30 muertos diarios en su país. Ni el impacto colectivizante de los actos de barbarie cotidianos que cometen esas mismas guerrillas en territorio colombiano. No es fácil entenderlo cuando uno es doliente de las víctimas. Pero las sociedades se insensibilizan ante la violencia. Hasta nosotros -de vez en cuando- nos reconfortamos cuando en Caracas, las muertes por actos de violencia, en un fin de semana, se reducen a 20 víctimas o menos.

- La frontera Colombo-Venezolana tiene menos importancia estratégica, comercial y militar para Colombia que para Venezuela. (Este punto ya fue comentado en nuestro texto).

- Hay una diferencia importante en las relaciones entre el Gobierno, los dueños de los medios de comunicación y los periodistas, entre Venezuela y Colombia. (Ya comentado).

- Los problemas que afectan las relaciones entre nuestros países no se prestan a soluciones de corto plazo y, por lo tanto, hay que aprender a administrarlos racionalmente para poder vivir con ellos, sin permitir que su importancia pase a ser mayor que los intereses mútuos que nos acercan.

- Como países y como sociedades, a pesar de nuestra vecindad geográfica y de nuestra historia común, no nos conocemos bien.

- Se debe establecer un mecanismo comunicacional entre los profesionales de la información de Colombia y Venezuela que permita:

1) Llamarse por teléfono y comparar notas sobre las noticias alarmantes que afecten a las relaciones entre nuestros países.

2) Evaluar la importancia que pudiera tener el origen o la fuente de la noticia, midiendo la credibilidad de quien la produce.

3) Identificar problemas de interés mútuo, a fin de que sean sometidos a trabajos de investigación periodística por parte de ambos países, que resulten en grandes reportajes binacionales, investigados, escritos y firmados por periodistas de Colombia y Venezuela.

- Promover una visita de periodistas de ambos países a la frontera colombo-venezolana, a fin de poder observar «en el sitio» y de «lado y lado» las importantes diferencias de percepción sobre los problemas comunes que pudieran tener los habitantes de esa zona.

Por último, algunas consideraciones adicionales y una terrible pregunta final.

Las consideraciones. El acercamiento entre los miembros

del «Press Club de Venezuela» y periodistas de Colombia, no debe producir frustración entre los asistentes a la reunión de Cartagena, si no «sucede» nada de inmediato. Lo importante fue el proceso comunicacional. El acercamiento y el camino que se abrió para que el ejercicio de un periodismo responsable pudiera ser apuntalado por la visión y la opinión de los profesionales de la noticia de ambos países. Que las más altas autoridades de Colombia se interesaran por el evento, tanto mejor. El «Press Club de Venezuela», se reunirá, con nuestro Canciller y él recibirá los mismos insumos que recibieron las autoridades colombianas. Por supuesto, con el mismo «Gato Negro».

La pregunta terrible es: ¿Cómo reaccionarían los medios de comunicación de ambos países, ante una repetición del hecho de Cararabo?. ¿Cuántos sentimientos negativos se dispararían entre nuestros dos países?. ¿Hasta que punto el conocer las circunstancias, las percepciones y las posiciones respectivas de ambos países sobre los problemas fronterizos, pudiera resultar en un tratamiento menos emocional de la noticia?.

Quisiera creer que, aunque el viaje a Cartagena no sea la panacea que arregle nuestras diferencias como países, pudiera servir, por lo menos, para evitar que se publiquen noticias con detonantes emocionales excesivos y con tintes de nacionalismo irresponsable, que provoquen un intercambio de cañonazos.

Y en el propósito de conservar la paz, un cañonazo menos, es importante.

06 de abril 1995

C.A.P. EN EL «PRESS CLUB»

El 23 de Agosto el Press Club invitó a C.A.P. a que se reuniera con sus miembros en un almuerzo a celebrarse en La Ahumada. En sus palabras de introducción, Alvaro Benavides, Presidente del Club, aclaró que el ex Presidente era nuestro huésped, así la reunión se celebrara en su casa. El tono ligero de las palabras de Alvaro sentó la tónica de la reunión, la cual salvo uno o dos comentarios «fuertes» fue totalmente abierta y sin restricción alguna, ni en las preguntas, ni en las respuestas. Tanto fue así que el «Gato Negro», figura detrás de la cual pueden escudarse los invitados al Club para hacer comentarios no aptos para su publicación, brilló -casi totalmente- por su ausencia.

Varios aspectos interesantes caracterizaron a la reunión, más allá de lo que se dijo.

Lo primero que hay que destacar fue una ausencia **casi** total de agresividad en el gesto y en la participación de los asistentes. En algún momento al tratar de explicarme esta actitud, me debatí entre: 1) Atribuirla a una percepción colectiva de que Pérez ya pasó de culpable a inocente. 2) Darle a Pérez el mismo tratamiento respetuoso que caracterizó -hasta hace muy poco- el tratamiento de los medios de comunicación hacía Caldera. 3) Cortesía elemental hacía un personaje público en situación difícil, al cual se visita en su lugar de reclusión. Miré a las caras presentes y descarté de inmediato la opción 3. No había definitivamente inhibiciones por cortesía. No había tampoco -en mi visión- un intento consciente de tratar a C.A.P. con las mismas manos de seda con las cuales se ha tratado a Caldera. La interacción pública con uno y con el otro, seguirá siendo siempre distinta, y a C.A.P. le dirán a perpetuidad lo que nunca le dirán a Caldera. Cuestión de historia y de estilo. Además, cada uno de ellos estará satisfecho: Caldera con el respeto que restringe la apertura comunicacional y C.A.P. con el atrevimiento que lleva a

cuestionamientos más allá de unas comunicaciones «normales». Queda pues la opción 1 como la verdadera razón para la cordialidad. Más aun y más allá de un acto consciente de absolución a Pérez por parte de la opinión pública, lo que existe es casi la convicción de que saldrá libre y que una vez más se habrá recuperado de una mala racha para volver a la palestra pública. En apoyo de esa convicción está la situación económica y social del país, hoy más deteriorada que cuando gobernaba C.A.P. Lo paradójico de lo anterior es que Caldera es el gran protagonista, tanto de la caída como del posible renacimiento de C.A.P. Los hechos del 4-F, aprovechados políticamente por Caldera para destacar y darle preminencia a la honestidad como virtud fundamental de Gobierno, acabaron con la presidencia de C.A.P., a quien se acusó -precisamente- de la anti-virtud de la corrupción. Ahora, ante el evidente fracaso de la honestidad sin competencia, como sistema de gobierno, y ante la certeza popular de que existe corrupción pública aun bajo el gobierno de un Presidente honesto, los presuntos «pecados» de C.A.P. se diluyen bastante y se empieza a tener de nuevo memoria de algunos de sus éxitos y sobre todo de sus indudables esfuerzos por modernizar -por lo menos- a la economía del país. Lo que empieza a estar en el ambiente no es tanto la convicción sobre la inocencia o culpabilidad de C.A.P. en el caso específico del cual se le acusa. Lo que ya está en el ambiente, es la revisión consciente de algunas de las medidas económicas incluídas en el «Paquete» de C.A.P., las cuales a la luz de los fracasos de este Gobierno en su pretensión de abandonarlas, empiezan ahora a percibirse como posiblemente exitosas y necesarias para salir de la crisis actual. En otras palabras, algunos aciertos del Gobierno de C.A.P. lo están rescatando como político sagaz, en la memoria de muchos, y eso empieza a ser más importante que el resultado de un juicio que parece haber sido olvidado por la mayoría.

Dicho esto, me acojo al precepto de todo comentarista que se respete, el cual me obliga a aceptar plena responsabilidad por

esta interpretación del *ambiente* de la reunión y a liberar a los asistentes de toda participación consciente o inconsciente en mis conclusiones.

Las preguntas (C.A.P. sigue siendo... C.A.P)

- **Sobre el papel de los medios de comunicación**. En haber coadyugado a llevarlo a su situación actual, C.A.P. primero los absuelve, después admite que fueron duros con él, pero prefiere la libertad de expresión a la censura. Lo ocurrido con El Nacional y otros periódicos que fueron impedidos de publicar algunos artículos en los días siguientes al 4-F, lo califica de lamentable, pero necesario ante la incertidumbre sobre el autocontrol que pudieran ejercer los periodistas. Agrega que la discrecionalidad del Gobierno en ciertas decisiones afecta la libertad de expresión (Recadi. Junta de Administración Cambiaria, etc.), por eso C.A.P. prefiere un gobierno sin controles. Agrega que hay -por supuesto- una revolución mundial de las comunicaciones y no podemos escapar a ellas. Cualquier esfuerzo de internalizar nuestras opiniones y cerrarnos a la globalización de los puntos de vista de otros, está condenado al fracaso. Preocupa algo, que lo medios de comunicación hayan pasado -bajo el Gobierno de Caldera- de un cuestionamiento constante a su gestión de Gobierno, a una casi pasividad y tolerancia con el Gobierno del Presidente Caldera. Aunque admite que ya se empieza a abandonar esa línea de conducta.

- **Las empresas básicas**. Deben permanecer bajo el control del Estado, aunque se permita la participación en éllas del capital privado (razón tenía Rómulo, «adeco es adeco hasta que se muera»). C.A.P. comentó que él era como una «Osterizer» que «batía» muchos conceptos a la vez. Por lo menos, en materia de modernización económica y reforma del Estado su aseveración es muy descriptiva y apta.

- **La democracia**. Hoy es frágil por la debilidad de sus instituciones. Hay que modernizar al Estado (Creo que el error

mayor de C.A.P. en su segundo Gobierno fue -precisamente- intentar modernizar la economía sin reformar al Estado. Por lo que ha dicho sobre las empresas básicas, parece reincidente en su afán de mantener al Petro-Estado).

- **Sobre las relaciones de Fujimori y el Presidente Caldera**. « Por primera vez, Caldera va a visitar a un profesor».

- **Sobre la Constituyente**. «No estoy de acuerdo». El estado actual de nuestro estamento político. El descrédito de los partidos y la alta abstención electoral conspiran en contra de la posibilidad de elegir a una Asamblea Constituyente, verdaderamente representativa de los deseos nacionales. Lo más probable es que se apoderen de élla ciertos activistas indeseables y terminemos con una Asamblea peor que el Congreso Nacional (estoy de acuerdo con C.A.P., aunque no dejo de reconocer que la salida Constituyente podría ser una opción democrática si se agudiza la crisis nacional).

- «**El sector militar en Venezuela está completamente subordinado al poder civil**» (No estoy de acuerdo. De ser así, no se hubiesen producido los intentos de golpes militares recientes. Ni habría habido indulto para los sediciosos. Ni se estuviera hablando continuamente de una «salida» militar a la crisis. Ni nuestros gobernantes, ni nuestros oficiales sentirían la necesidad de reiterar continuamente el compromiso del sector militar con la democracia. Ni tuviéramos como ministro de la Defensa a un militar activo. Aclaro -además- que no se trata de un problema venezolano. Es **el** problema de América Latina, como se evidencia de la cantidad de foros que se celebran en la región para debatir **esa** situación).

- **Sobre el Gobierno de Caldera**. Pese a lo mal que lo está haciendo es importante que Caldera termine su período constitucional. Cualquier interrupción de su Gobierno sería desastroso para la democracia. No hay opciones inmediatas por la vía democrática mejores que la continuidad de este Gobierno. (¡Amén!).

- **Sobre su salida del Gobierno**. «Yo no me fui, ni del Gobierno ni de Venezuela. Encaré mi situación y di la cara. Tampoco dije: Después de mi el Diluvio» (algunos creemos que -por lo menos- lo pensó. Mi conclusión es que no ha habido diluvio, pero ha llovido bastante).

«Llueve pero escampa» ha sido siempre la filosofía de Pérez.

Por lo que se respira en el ambiente nacional y por su forma de actuar, parece que Pérez cree que pronto podrá guardar de nuevo el paraguas y mirar al sol.

Si eso sucediera, ojalá que su nueva «resurrección política» no provoque otro aguacero.

P.D.: Las dos preguntas difíciles fueron:

1) **P**: ¿Qué piensa usted de la acusación que se le hace de tener cuentas mancomunadas en el exterior con la Sra. Cecilia Matos?.

R: Nunca he tenido cuentas mancumunadas en el exterior, sólo una pequeña cuenta de ahorros, hace algunos años, que no pasó de US$35.000.

2) **P:** ¿Piensa usted que está en capacidad de liderizar una nueva y joven corriente de opinión, que nos lleve a la modernización de la sociedad venezolana?.

R: Yo no aspiro a ser de nuevo Presidente de la República. Ya no hay tiempo para eso. Pero si creo poder contribuir en el proceso de cambio que requiere el país.

31 de agosto 1995

CUBA EN LA MIRA

El Diálogo Interamericano, constituido para la discusión de los problemas del Hemisferio Occidental, sin fines de lucro, con sede en Washington, donde participan personalidades del mundo de la política y de la economía, tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de casi todos los países de América Latina, ha publicado recientemente un informe sobre Cuba.

El informe fue preparado después de un viaje a Cuba (15 al 18/06/95), por un «Grupo Especial sobre Cuba» (Task-Force on Cuba), seleccionado dentro de los miembros del Diálogo.

Como miembro que soy, tanto del Diálogo como del «Grupo Especial sobre Cuba», creo muy relevante que se conozcan algunas de las recomendaciones incluídas en el informe final.

Simplemente como telón de fondo es -quizás- conveniente aclarar que el «Grupo Especial sobre Cuba» en dos ocasiones -desde 1991- estuvo listo para visitar a Cuba, lo cual no fue posible, porque el Gobierno Cubano canceló ambos viaje a última hora. Esto puede haberse debido a que el Diálogo no estaba dispuesto a visitar a Cuba a menos que se le concediese a los miembros del «Grupo Especial sobre Cuba» plena libertad para movilizarse dentro de la Isla y entrevistarse con todas las instituciones existentes y con personalidades de grupos opositores al Gobierno de Castro.

En el viaje, aquí reseñado, no hubo restricciones de ningún tipo y el «Grupo Especial sobre Cuba» pudo entrevistarse con activistas pertenecientes al Grupo de Defensores de los Derechos Humanos y opositores políticos del Gobierno de Cuba.

Como parte de lo anecdótico, Castro se negó a recibir al «Grupo», aparentemente molesto por unas declaraciones públicas, muy críticas de Fidel y de su Gobierno, dadas en plena Habana por Oscar Arias, miembro del «Grupo Especial sobre

Cuba».

Más allá de lo anecdótico, el informe del Diálogo tiene consideraciones muy interesantes. Entre ellas:

Recomendaciones al Gobierno de Cuba.

- Los aspectos internos de Cuba relacionados con sus sistemas económicos y políticos, deben ser decididos por el pueblo cubano.

- Cuba no será aceptada como miembro pleno de la Comunidad Hemisférica, hasta que sus ciudadanos vivan libremente en una democracia pluralista.

- Se sugieren elecciones libres. La libertad de los presos políticos. La presencia de observadores internacionales en los procesos electorales de la Isla y el compromiso de los Estados Unidos de respetar el resultado de los comicios.

Se le recomienda además al Gobierno Cubano que adopte las medidas necesarias para participar en las instituciones financieras internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Recomendaciones a la Organización de Estados Americanos y al Banco Interamericano de Desarrollo.

- Continuar con las consultas y discusiones entre los gobiernos del Hemisferio y el Gobierno Cubano, a fin de promover la democratización de Cuba y su eventual reincorporación a la O.E.A.

- La reincorporación de Cuba a la O.E.A. no será posible hasta que exista un gobierno democrático pluralista en la Isla.

Recomendaciones al Gobierno de los Estados Unidos.

- Reducir la hostilidad en las relaciones de los Estados Unidos con Cuba.

- Reiterar que los Estados Unidos no tiene la menor intención de invadir a Cuba.

- Informar al Gobierno Cubano, con suficiente antelación, sobre ejercicios militares que se vayan a realizar cerca de la Isla.

- Darle prioridad a los esfuerzos humanitarios sobre las

consideraciones políticas. Levantar unilateralmente el embargo sobre el envío de alimentos y medicinas a Cuba.

- Eliminar los obstáculos para que ciudadanos norteamericanos visiten a Cuba.

- Estimular intercambios culturales, académicos y humanitarios y, autorizar el uso de becas para financiar estos intercambios.

- Establecer correo directo con la Isla.

- Permitir viajes aéreos regulares a Cuba.

- Permitir el establecimiento en Washington de una oficina de prensa latina a cambio de que se permita la presencia de oficinas de prensa de los Estados Unidos en la Habana.

- Modificar las leyes de inmigración de los Estados Unidos para que los cubanos sean tratados en la misma forma como se trata a los ciudadanos de otros países.

- Demostrar voluntad para negociar arreglos específicos con Cuba, como por ejemplo, la lucha contra las drogas y la inspección de plantas nucleares en Cuba y en el Suroeste de los Estados Unidos.

- Cooperar en asuntos ambientales y de protección de ciertas especies de aves y peces.

- Se recomienda fuertemente la NO aprobación de la Ley Helms-Burton que, por sus características punitivas, representa un paso en la dirección equivocada si se pretende administrar mejor las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.

El Diálogo se opone a los intentos de los Estados Unidos de presionar a otros países en su libre determinación para establecer políticas con relación a Cuba. Sin embargo, el Diálogo favorece la continuación del embargo norteamericano con ciertas restricciones -ya señaladas- y para que sea usado como un instrumento de negociación. El objetivo sería continuar ejerciendo presión sobre Cuba, mediante el Diálogo, para que tome las medidas necesarias para democratizar su sistema político y modernizar su economía. La tesis es, continuar el embargo como

un instrumento para negociación y no como un acto de retaliación pasiva que, con su sola presencia, pretende obligar al Gobierno Cubano a que entre en un proceso de cambio como resultado exclusivamente de un acto de presión económica. Una situación de crisis permanente para Cuba, no es una solución aceptable y, por lo tanto, presionar para crear esa situación no es tampoco aceptable. El embargo puede ser levantado progresivamente, como consecuencia de negociaciones que produzcan algunas aperturas por parte del Gobierno de Cuba.

El Diálogo recomienda una reconsideración de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, a través de la creación de una comisión bipartidista.

El Diálogo en definitiva reta al Gobierno de los Estados Unidos a que reconsidere sus políticas hacia Cuba. Reta a Cuba a que llame a elecciones libres. Reta a los Gobiernos de América Latina a que se unan para garantizar las comunicaciones libres con Cuba y a establecer políticas humanitarias que disminuyan el sufrimiento de los cubanos.

Como podrá apreciarse, las recomendaciones del Diálogo pasan de lo rutinario (democracia para Cuba) a lo atrevido (acuerdo de aperturas específicas entre los Estados Unidos y Cuba. Libertad para viajar a Cuba. No aprobación de legislaciones punitivas en el Senado Norteamericano. Eliminación del embargo gradualmente y su utilización como instrumento de negociación).

Se abre, además, una agenda para un análisis objetivo de la situación actual de Cuba. Sin Muro de Berlín. Sin presencia y poder soviético. Sin peligros de agresiones bélicas. No hay razones para que nadie mire a Cuba como al enemigo. Hay que mirarla como una sociedad diferente, enclavada en un Hemisferio que busca para crecer y desarrollarse coherencias políticas y económicas. Si los Estados Unidos y Cuba entienden que el nuevo Diálogo propuesto no tiene como fin el triunfo o la derrota de una posición, se pudiera - quizás- llegar a un arreglo pacífico, donde cada una de las partes se acomode un poco a las

condiciones mínimas necesarias de cambio para establecer una relación amistosa.

Si, por el contrario, se mantiene la fuerza relativa de las partes como único arbitro de la relación, entonces, sólo el tiempo cambiará a las circunstancias y no habrá más remedio que seguir esperando que la crisis y el antagonismo desaparezcan por la muerte natural de sus actores. Institucionales e individuales.

Mientras tanto, preparar el terreno para el velorio no es, tampoco, una mala táctica.

En mi opinión, no sólo no es una mala táctica, sino quizás sea la mejor de todas. En efecto, aun cuando no hay ya mucha discusión sobre las ventajas que tiene el sistema democrático capitalista, sobre los otros sistemas de gobierno, no está del todo claro que ese sistema sea el más apropiado para presidir de inmediato sobre procesos político/sociales que buscan la transición de gobiernos absolutistas y centralistas a gobiernos democráticos. El caso de Rusia, ilustra el punto, donde un cambio sin gradualismo de su viejo sistema de gobierno le ha superimpuesto de inmediato a la sociedad todos los vicios de un sistema capitalista sin que, por ahora, se vean sus indudables virtudes. En Chile, por el contrario, la sustitución de Pinochet - con Pinochet muy presente- ha permitido una transición gradual de la dictadura a la democracia. Parece entonces que, en estos cambios drásticos de sistemas políticos, el gradualismo en la transición pudiera ser una fórmula eficaz. En el caso de Cuba, a pesar de estar de acuerdo en general con el sentido de dirección de las recomendaciones del Diálogo, soy de los que no creen que Fidel Castro va a dar el «paso final» hacía la democracia, mediante una convocatoria a elecciones libres. Si tengo razón, entonces el mejor escenario para Cuba es aquel donde tenga lugar una sucesión de cambios «menores» en el sistema político y económico de la Isla que la acerquen, sin llegar al paso final necesario, al establecimiento de un sistema democrático. Luego, en el velorio de Fidel, se pueden preparar los pasos finales de la

transición, sin llegar ni a excesos de retaliación por parte de sus enemigos políticos, ni a un desorden civil incontenible por la brusquedad de un cambio político en una sociedad, que sin las acciones sugeridas, no estaría preparada -de inmediato- para una apertura democrática total.

En resumen, si en vida de Fidel, no se puede aspirar a que se implante un sistema democrático pluralista, entonces, será importante para la futura estabilidad social de Cuba que el Gobierno de Castro continúe abriendo la economía a la inversión extranjera y a la sociedad civil y que, dentro de sus limitaciones, haga algo también por permitir ciertas libertades políticas.

Si algunas de las recomendaciones más importantes del Diálogo se convirtieran en compromisos para la acción, estoy seguro que cuando llegara el momento de hacer la transición política y económica de Cuba, la distancia a recorrer entre la dictadura y la democracia se habría acortado considerablemente.

Y **eso**, tiene ventajas indudables.

28 de septiembre 1995

Indice Analítico

A

A.D 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 235, 242, 271, 276, 300, 310, 311, 338, 339, 345, 351, 353, 359, 360, 361, 362, 363, 370, 380, 383, 384, 388
Abstención 78, 140, 185, 278, 300, 301, 303, 307, 308, 310, 311, 313, 335, 336, 338, 340, 352, 353, 422
Adams, Robin 93, 97, 99
Aguiar, Asdrúbal 293
Aguilar, Pedro Pablo 363
Alaska 30, 32, 146
Albornoz, Orlando 219, 222, 225
Alvarez Paz, Oswaldo 233, 300, 363
Añez Fonseca, Ciro 235
Apertura Petrolera 1, 13, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 67, 69, 70, 96, 97, 98, 99, 103, 106, 107, 108, 117, 125, 127, 149, 150, 166, 188, 189, 223, 224, 227, 228, 230, 238, 239, 249, 280, 288, 296, 374, 375, 376, 387
Argentina 75, 114, 117, 278
Arias Cárdenas, Francisco 333
Aristóbulo Isturiz 364
Arrieta, Erwin 93
Artículo 5to (Ley de Hidrocarburos) 7, 8, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 189
Asamblea Constituyente 145, 164, 166, 238, 242, 243, 319, 422
Asociaciones de Riesgo Compartido 17, 18, 20, 32
Aveledo, Ramón Guillermo 363

B

Banco Central de Venezuela 119, 136, 137, 153, 194
Baptista, Asdrúbal 237, 240
Barrios, Gonzalo 362
Bauxilum 85
Benavides La Greca, Alvaro 419
Betancourt, Rómulo 348, 362
Blanco, Carlos 181, 182, 183, 184

Bocaranda, Nelson 407, 408, 411, 412
Bolivia 19, 29, 32, 146
Brando, Jesús 57
Bremmer, John 73
Bronfenmajer, Gabriela 394
Buchi, Hernan 147, 148

C

C.T.V 101, 240, 267, 268, 283
C.V.G 30, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
Cabrujas, José Ignacio 393
Caldera, Andrés 291
Caldera, Juan José 294, 353
Caldera, Rafael 336, 357, 362
Calderón Berti, Humberto 233, 363
Cámara Venezolana del Petróleo 227, 229
Camdessus, Michael 111, 112, 113, 115, 116, 118
CANTV 96, 135
Capital Nacional 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 67, 227, 228, 239, 387
Carbonorca 85
Cárdenas, Antonio Luis 220, 348, 393, 400
Carvajal, Leonardo 394
Casanova, Ramón 394
Casas González, Antonio 136
Causa R 162, 164, 165, 167, 170, 242, 300, 312, 313, 338, 339, 345, 360, 361, 363, 364, 380, 384, 388
Cendes 394
Chevron 229
Chile 117, 147, 148, 266, 308, 429
China 266, 375
Chumaceiro, Fernando 312, 339
Cisneros, Imelda 161
Colombia 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Colomina, Martha 195
Contraloría General de la República 254, 261, 263, 264
Convergencia 190, 242, 276, 291, 293, 294, 295, 299, 300, 303, 310, 339, 340, 341, 345, 346, 353, 362, 364, 383
COPEI 164, 166, 167, 169, 231, 232, 233, 235, 242, 276, 300, 312, 338, 339, 341, 342, 345, 359, 362, 363, 380, 383, 388

COPRE 182, 183
Coronel, Gustavo 82, 255
Corrales, Werner 133, 134, 278
Corrupción 29, 61, 64, 115, 127, 128, 131, 132, 147, 156, 157, 159, 174, 188, 189, 192, 199, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 214, 215, 217, 225, 255, 257, 259, 268, 270, 299, 303, 304, 315, 326, 327, 330, 332, 344, 345, 351, 354, 355, 356, 369, 373, 381, 415, 420
Creole 24, 227
Cuba 425, 426, 427
Curiel, José 339

D

Dávila, William 339, 360
Diálogo Interamericano 425

E

Electricidad de Caracas 62, 96, 106
Estado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 395, 396, 405, 421, 422
Estados Unidos 15, 17, 73, 75, 94, 107, 117, 193, 228, 372, 425, 426, 427, 428
Estatificación 25, 44, 65, 69
Estatismo 3, 70, 148
Exxon 229

F

Fe y Alegría 220, 221, 393, 394, 395, 399
Fedecámaras 240, 245, 248, 267, 268, 283
Fedepetrol 283
Fernández, Eduardo 230, 300, 363
Fogade 114, 127, 135, 148, 194, 254
Fondo Monetario Internacional 123, 153, 161, 331, 386, 426
Francia 15, 293

G

Galarraga, Andrés 371, 372
García Márquez, Gabriel 407, 408
Gasto Público 124, 145, 169, 223, 249, 259, 321, 387, 398
Giusti, Luis 166

Gómez, Emeterio 219
Gran Distribuidor 21, 28, 75, 149, 224, 246, 247, 267
Gruber, Alfredo 82, 253

H

Hausmann, Ricardo 161
Hernández, Carlos Raúl 307
Hotel Hilton 96
Hotel Tamanaco 96, 357

I

Isturiz, Aristóbulo 313, 338, 360

K

Kinsley, Michael 266

L

Lander, Thomas 212
Lapi, Eduardo 339, 340, 363
Ledezma, Antonio 359
Leoni, Raúl 368
Ley Helms-Burton 427
López Contreras, Eleazar 219, 368

M

Mabro, Robert 203
Mal Holandés 248, 330
Márquez, Trino 393
Martínez Bayó 18
Martínez, Ibsen 353
MAS 57, 58, 164, 167, 170, 236, 237, 296, 300, 339, 345, 355, 362, 383, 384, 388
Matos Azócar, Raúl 112, 186, 237
Maza Zavala, Domingo 156
Medina, Pablo 313
Mendoza, Soledad 408
México 114, 117, 278
Mieres, Francisco 166

Milton, Thomas 13
Minerven 86
Mito Juan 4, 24, 25
Mobil 229
Moleiro, Moisés 275
Mommer, Bernard 21
Monaldi, Francisco 19, 149
Moreno León, José Ignacio 233
Moreno, Victor 339, 361

N

Nación 7, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 56, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 98, 149, 168, 187, 222, 236, 261, 320, 334, 393
Nacional 5, 7, 8, 19, 20, 37, 39, 40, 41, 394, 395, 396, 402, 405
Nacionalización 18, 24, 375
Nacionalización petrolera 25
Naim, Moisés 161
Noonan, John T. Jr 204
North, Douglas 73, 146

O

Oberto, Rudecindo 195, 196

P

Partidos Políticos 64, 74, 78, 130, 139, 140, 141, 145, 164, 165, 167, 168, 169, 184, 185, 240, 243, 268, 269, 288, 299, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 319, 320, 321, 325, 330, 331, 337, 342, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 364, 383, 384, 388
PDVSA 55, 99, 125, 136, 166, 300
Peñaloza, Humberto 18
Pérez, Carlos Andrés 182, 241
Petkoff, Teodoro 171, 369, 376
Petro-Estado 17, 21, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 45, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 77, 79, 107, 144, 150, 224, 246, 247, 248, 249, 250, 261, 267, 268, 272, 275, 276, 277, 278, 280, 299, 368, 422
Piñango, Ramón 393
Polar 62, 96
Poletto, Alberto 235
Press Club 407, 408, 411, 417, 419

Privado 3, 7, 11, 14, 15, 16, 25, 32, 35, 62, 87, 97, 99, 100, 101, 106, 107, 118, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 147, 152, 168, 220, 222, 254, 320, 347, 395, 396, 397, 405, 409, 421
Privatización 21, 62, 68, 69, 80, 81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 150, 151, 167, 200, 235, 238, 249, 257, 321, 395, 396
Pro-Calidad de Vida 139
Público 11, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 35, 42, 43, 62, 87, 91, 107, 108, 118, 123, 141, 148, 150, 186, 215, 237, 253, 254, 395
Pucci, Rita 394

Q

Queremos Elegir 139, 347

R

Ramírez, Donald 341, 342
Regalía 29, 34, 44, 66, 68, 69, 100, 107, 125, 150, 246
Renta 4, 15, 26, 43, 64, 149, 186, 246, 248, 249, 267, 280
Rentabilidad 87, 94, 248
Rentista 16, 248, 267
Rodríguez, Miguel 161
Roig, Jorge 312, 338, 357, 364
Roosen, Gustavo 187, 220

S

Sáez, Irene 311, 360, 374
Sagún, José 18
Salas Feo, Fernando 359, 363
Salas Romer, Henrique 359
Scotto, Clemente 313, 361, 364
Seniat 112, 124, 280, 388
Sgambatti, Sonia 340
Shell 24, 107, 227, 229
Sidor 85, 107
Sistema Democrático 163, 225, 266, 271, 272, 273, 275, 277, 286, 306, 316, 325, 333, 343, 389, 429, 430
Sivensa 96, 107
Smith, Adam 11, 44, 107, 395
Stone, Oliver 211

T

Tarre Briceño, Gustavo 233, 363
Travers, Peter 211
Tudela, Rafael 18

U

UCV 333, 394
Ugalde, Luis 393
Unión Soviética 77, 78
Urbaneja, Diego Bautista 369
Uverito 86

V

Velásquez, Andrés 106
Venalum 85
VenEconomía 294
Vizquel, Omar 371, 372
Volker, Paul 228

W

Wilhem, Samuel 155

Y

Yacimiento 15, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 35, 40, 43, 44, 65, 69, 103, 106, 107, 108, 224, 229, 395

Z

Zambrano, Angel 311
Zambrano, Angel Enrique 310, 357

ESTE EJEMPLAR SE TERMINO DE IMPRIMIR
EN LOS TALLERES DE EDITORIAL TEXTO
AV. EL CORTIJO, QTA. MARISA, Nº 4
LOS ROSALES - CARACAS - VENEZUELA

"Desde el primer borrador que conoció el Congreso Nacional, se hizo evidente que la Apertura parcialmente privatizadora de PDVSA no era para el capital nacional. En sus diferentes claúsulas el convenio propuesto se refería constantemente a las "Casas Matrices" de los licitantes potenciales. No era pues a González & Compañía a quién se refería esas líneas del convenio, ni tampoco y mucho menos se estaba preparando el terreno para una nueva y popular "Mito Juan".

REQUIEM PARA UN PROCESO
El Universal, 06 Junio de 1995.

"Usted empieza a dar la percepción como si no le preocupara el destino del país... Usted empieza ya a desconocer la existencia de un equilibrio de poderes en el sistema democrático... No se llame a engaño Presidente, su conducta actual lo pone a usted en el muy real peligro de que la historia revise de inmediato el positivo juicio que tuvo sobre su talento hasta ahora... Pero que cambie el juicio colectivo sobre su talento es lo menos malo que le puede pasar. Lo peor será que lo sigan creyendo inteligente, pero que sin embargo, actua como actua porque sus prejuicios y su terquedad no le permiten hacer las cosas que sabe que hay que hacer, ni tomar las decisiones que sabe que hay que tomar..."

"CARTA A RAFAEL CALDERA"
El Universal, 30 de Noviembre de 1995.